



HISTORIA CONSTITUCIONAL
DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

TOMO CUARTO

1810 — UN SIGLO DE INSTITUCIONES — 1910



HISTORIA CONSTITUCIONAL
DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

POR
LUIS V. VARELA

EDICIÓN PARTICULAR DEL AUTOR

*Se levanta en la faz de la tierra
Una nueva gloriosa nación,*

Vicente Lopez

(Marcha Patriótica—1812)

TOMO CUARTO
APÉNDICES.— DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS



LA PLATA
TALLER DE IMPRESIONES OFICIALES

1910

INDICE DEL TOMO IV



INDICE DEL TOMO IV

APÉNDICES

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS

	<i>Páginas: —</i>
1. Manifiesto del Virrey Cisneros.....	3
2. El Virrey Cisneros da cuenta al Soberano de la Revolución del 25 de Mayo de 1810	6
3. Acta capitular del 21 de Mayo	19
4. Acta del Congreso general de 22 de Mayo	25
5. Acta del día 23 de Mayo	54
6. Acta del día 24 de Mayo	59
Acta de instalación de la Primera Junta	63
7. Acta del día 25 de Mayo	65
Primera Junta—25 de Mayo	72
Acta del día 25 de Mayo	73
8. Acta de instalación de la Junta Provisoria Gubernativa	77
9. Acta del juramento prestado á la Junta	79
10. Circular de Baltazar Hidalgo de Cisneros comunicando su abdi- cación y recomendando el envío de Diputados á la Junta	82
11. Intimación de obediencia á las nuevas autoridades	83
Citación para prestar juramento á la Junta	84
12. Circular comunicando la instalación de la Junta	85
13. Plan de operaciones que el Gobierno Provisional de las Provin- cias Unidas del Río de la Plata debe poner en práctica para consolidar la grande obra de nuestra libertad é independencia.	89
Acta del Acuerdo celebrado por el Superior Gobierno	101
14. Medidas para la conservación del orden público	103
15. Integración de la Real Audiencia	105
16. Derechos de esportación sobre frutos del país	106
Reglamentando la introducción y estracción de efectos	107
17. Reglamento para el ejercicio de la autoridad de la Junta	109

18. Instrucciones que deberá observar el Comandante General de la expedición de auxilio á las provincias interiores.....	110
Instrucciones reservadas para la expedición á las Provincias interiores al mando del Coronel Don Francisco Ocampo	111
Facultades de la Junta de Comisión que pasa al Interior	112
19. El Paraguay aplaza el reconocimiento de la Junta	114
20. El Paraguay se niega á reconocer la Junta	115
21. Proclama y reglamentación de la milicia	117
22. Ruptura de las hostilidades con Montevideo	119
23. Se niega el reconocimiento al Consejo de Regencia establecido en España	127
24. El documento que correspondía á este número, ha sido suprimido por hallarse intercalado en el texto	127
25. Suprimiendo los honores que se hacían al Presidente de la Junta	128
26. Acta del 18 de Diciembre de 1810	133
27. Creación de Juntas Provinciales	137
28. Reglamento sobre la libertad de imprenta	141
Decreto aprobando el reglamento que antecede	143
Decreto sobre libertad de imprenta	143
29. Creación del Triunvirato Ejecutivo	146
30. Reglamento fijando las atribuciones, prerrogativas y deberes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial	147
31. Revocando las confinaciones decretadas en 5 y 6 de Abril.....	152
32. Convención entre las Exmas. Juntas Gubernativas de Buenos Aires y del Paraguay.....	153
33. Tratado de pacificación entre la Junta de Buenos Aires y el Exmo. señor Virrey Don Francisco Xavier Elío.....	156
34. Estatuto provisional del Gobierno Superior de las Provincias Unidas del Río de la Plata, á nombre del Señor Don Fernando VII	159
35. Fijando el número de miembros de la Asamblea	164
36. Reglamento que da forma á la Asamblea Provisional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, anunciada en el estatuto del Gobierno, de 23 de Noviembre de 1811.....	166
37. Adiciones al Reglamento de la Asamblea	171
38. Disposiciones generales sobre seguridad individual	172
39. Señalando los colores de la escarapela nacional.....	174
40. Diputados á la Asamblea General	175
41. Disolución de la Asamblea	177
42. Creación del Gobierno Intendencia de Buenos Aires.....	179
43. Armisticio celebrado el 26 de Mayo entre el Exmo. Gobierno Superior Provisional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y el Teniente Coronel Don Juan Rademaker, enviado al efecto por S. A. R. el Príncipe Regente de Portugal	183

44. Libertad del negro denunciante de la conspiración del 1º de Julio.	185
45. Fiestas celebrando el descubrimiento de la conjuración de Alzaga.	186
46. Creación de un gobierno provisorio.....	187
47. Separación temporal de varios Capitulares	190
48. Convocación para las elecciones de diputados á la Asamblea General.....	192
49. Decreto instalando la Asamblea	198
50. Reglamento sobre la inviolabilidad de los Diputados.....	200
51. Estatuto dado al Supremo Poder Ejecutivo	202
52. Proyecto de Constitución para las Provincias del Rio de la Plata, formado por la Comisión especial nombrada en 4 de Diciembre de 1812.....	204
53. Declarando libres á todos los que nacieren después de instalada la Asamblea.....	209
54. Medidas represivas para con los españoles europeos.....	210
55. Nota del Poder Ejecutivo pidiendo la reforma del personal del Gobierno	212
56. Reformas del estatuto provisorio del Supremo Gobierno	214
57. Prescribiendo que sean pasados por las armas todos los individuos que ataquen al gobierno, los que divulguen ó inventen noticias falsas, los que promueban la desertión ó seduzcan á los soldados, los que formen conspiraciones y finalmente, los que, conociendo su existencia, no las delaten	217
58. Acta por la cual el Exmo. Cabildo reasume la autoridad soberana	219
Disposiciones relativas á la creación de un gobierno provisional. Nombramiento del General Don José Rondeau, como director del Estado y del Coronel Don Ignacio Alvarez Thomas, como suplente	222
59. Estatuto provisional para la dirección y administración del Estado, formado por la Junta de Observación nuevamente establecida en Buenos Aires, á 5 de Mayo de 1815	224
60. Disposiciones para el enrolamiento y penas para sus infractores.	255
61. Nombrando al señor D. Francisco Antonio de Escalada Director interino del Estado, en reemplazo del señor D. Ignacio Alvarez, y anunciando una nueva convocatoria del pueblo.....	257
62. El Gobierno de las Provincias Unidas protesta contra el edicto del General Lecor, de 15 de Febrero de 1817, y adopta las medidas que considera necesarias en tal emergencia	259
63. Mandando grabar una lámina conmemorativa de las batallas de Chacabuco y Maypo y declarando heroicos defensores de la Nación á los que tomaron parte en ellas	264
64. Reglamento Provisorio sancionado por el Soberano Congreso de las Provincias Unidas de Sud-América, para la dirección y	

administración del Estado, mandado observar entretanto se publica la Constitución	266
65. Armisticio con las tropas de Santa Fe.....	300
Nombrando los Comisionados de que habla el armisticio de 12 de Abril de 1819.....	301
66. Creación de la Universidad de Buenos Aires	303
67. Constitución de las Provincias Unidas de Sud-América sancionada y mandada publicar por el Soberano Congreso General Constituyente	305
Constitución de las Provincias Unidas de Sud-América.....	323
68. Facultad al Poder Ejecutivo y suspensión de las sesiones del Congreso	340
69. Medidas de defensa para la capital	341
70. Disolución del Soberano Congreso Nacional	343
El Cabildo reasume el mando de la Provincia	344
71. Armisticio celebrado por el General D. Miguel Estanislao Soler con los Gobernadores de Santa Fe y Entre Ríos	346
72. Convención entre las Provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.....	347
73. Circulares á los Cabildos, transcriptas á los Gobernadores Intendentes y sus Tenientes	350
74. Erección en Provincia federal del territorio de Santiago del Estero	353
75. Tratado de paz entre Santa Fe y Buenos Aires.....	358
76. Sobre reunión del Congreso General	360
77. Los miembros del Congreso General reunidos en Córdoba solicitan el pronto envío de Diputados por parte de las Provincias que aún no los han mandado	364
78. Arreglo de las desavenencias entre Tucumán y Santiago del Estero	367
79. Armisticio firmado por los Jefes de Salta y del Ejército realista.	369
80. Reconocimiento por la Junta, á indicación del Gobierno de S. M. F. del principio de que es subversivo de todo derecho, el intento de destruir las constituciones y gobiernos no emanados de la voluntad espontánea de aquellos que, por privilegios, se juzgan exclusivamente autorizados para hacer ó dejar de hacer justicia á los pueblos; y autorización al Gobierno de las Provincias Unidas para aliarse al de Portugal á los efectos del sostén de dicho principio.....	372
81. Convención preliminar de paz entre los Gobiernos de S. M. C. y de las Provincias Unidas.....	374
82. Facultando al Gobierno para invitar á los pueblos de la Unión á proceder á la elección de los representantes al Congreso Nacional, y disposiciones relativas á dicha elección	377

83. Voto de cada una de las Provincias Unidas para la designación del punto de reunión del Congreso Nacional.....	378
84. Condición política de la Provincia de Buenos Aires, hasta tanto que no se promulgue la Constitución Nacional, y derecho de la misma para aceptar ó rechazar esta última.....	379
85. Ratificación por el Congreso del pacto con que se ligaron las Provincias Unidas, al sacudir el yugo de la dominación española. — Medidas preliminares de reorganización nacional.....	380
Nota	382



APÉNDICES

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS



Manifiesto del Virrey Cisneros

El Virrey de Buenos Aires, etc., etc., á los leales y generosos pueblos del Virreinato de Buenos Aires:—Acabo de participaros las noticias últimamente conducidas por una fragata mercante inglesa, que habiendo salido de Gibraltar, arribó á Montevideo el 13 del corriente. Ellas son demasiado sensibles y desagradables al filial amor que profesais á la madre patria, por quien habeis hecho tan generosos sacrificios. Pero ¿qué ventajas produciría su ocultación, si al cabo ha de ser preciso que apureis toda la amargura que debe produciros su inescusable conocimiento? Por otra parte, es de mi obligación manifestaros el peligroso estado de la metrópoli, de toda la monarquía, para que instruidos de los sucesos, redobleis los estímulos más vivos de vuestra lealtad y de vuestra constancia contra los reveses de una fortuna adversa, empeñada, por decirlo así, en probar sus quilates.—Sabed que la dicha de un tirano, ó más bien, la astucia con que ha sabido sembrar el desorden, la desunión y la desconfianza de los pueblos con la legítima autoridad reconocida por ellos, ha logrado forzar el paso de la Sierra, tan justamente creída el antemural de las Andalucías, y derramándose sus tropas por aquellas fértiles provincias, como un torrente que todo lo arrastra, han llegado hasta las inmediaciones de la real isla de León, con el objeto de apoderarse de la importante plaza de Cádiz y del Gobierno Soberano que en ella ha encontrado su refugio: pero sabed también que si la España ha experimentado tan sensibles desastres, aún está muy distante de abatirse al extremo de rendir su cerviz á los tiranos, ni reconocer en el trono de sus monarcas á los que, según sus leyes fundamentales, no deben ocuparlo; sabed que sin arredrarla la grandeza de los peligros ni la reiteración de sus desgracias, aún empuña las armas que juró emplear en defensa de su libertad ó de

su venganza; sabed, en fin, que provincias enteras, pueblos numerosos, y ejércitos que cada día se levantan entre sus ruinas, sostienen cada vez con mayor empeño la causa de nuestro adorado soberano el señor Don Fernando Séptimo. Pero aunque estas esperanzas no están distantes de la esfera de lo posible, ni es estraña en la vicisitud de las cosas humanas una mutación repentina á la que especialmente están sujetos los sucesos de la guerra, no creais que mi ánimo es calmar vuestros temores ni adormecerlos con ideas lisonjeras. ¿A qué fin me empeñaría en disimular los riesgos á que está espuesta la monarquía, si ellos mismos deben concurrir á engrandecer vuestro espíritu, ó para prevenirlos en tiempo ó para vengar los ultrajes de la metrópoli? Mi intención, pues, es hablaros hoy con la franqueza debida á mi carácter y al vuestro, y deciros en el lenguaje propio del candor y de la sinceridad, cuales son mis pensamientos y cuales espero que serán los vuestros; suponed que la España, más desgraciada que en el siglo VIII, está destinada por los inescrutables juicios de la divina Providencia á perder su libertad y su independencia; suponed más: que llegaran á extinguirse hasta las últimas reliquias de aquel valor heróico, que quebrantando las cadenas de setecientos años de esclavitud, la sacó con mayor esplendor á ser la envidia de las naciones, y representar el papel glorioso que ahora perdiera por su confianza ó su desgracia. ¿Podrán los tiranos lisonjearse de haber esclavizado á toda la nación? ¡Qué insensatos si llegaran á concebir un plan tan desvariado! Esto sería desconocer, aún más que la enorme distancia que los separa, la lealtad innata, el valor y la constancia que os ha distinguido siempre. Nó, no llegarán á mandar las playas que el Ser Supremo, por un efecto de su inmensa liberalidad, destinó para que dentro de ellas, y en la extensión de tan vastos continentes, se conservase la libertad y la independencia de la monarquía española: sabrán á su costa, que vosotros conservareis intacto el sagrado depósito de la soberanía para restituirlo al desgraciado monarca que hoy oprime su tiranía, ó á los ramos de su augusta prosapia, cuando los llamen las leyes de la sucesión: sabrán que entre tanto vosotros, animados de tan fieles sentimientos, sostendreis esta sagrada causa contra todos los conatos de la ambición y de la astucia que hoy parece triunfar de la madre patria; y, en fin, que en la América Española subsiste y subsistirá siempre el trono glorioso de los esclarecidos reyes católicos á quienes debió su descubrimiento y población, para que lo ocupen sus legítimos

sucesores. Tales son los sentimientos inalterables de que, con la mayor complacencia mía, os veo animados, ahora resta que, con la franqueza de mi carácter, os manifieste los míos. Encargado por la Autoridad Suprema de conservar intactos y tranquilos estos dominios, he dedicado á tan justo y tan interesante objeto todos mis desvelos y fatigas. Nada he omitido de cuanto he creído conducente al desempeño de tan elevada confianza; vosotros sois testigos de que no me dispensó una alabanza á la que no tenga justos y conocidos derechos: pero ni estos, ni la general benevolencia que os debo, y á que siempre viviré agradecido, me dispensan del deber que me he impuesto de que en el desgraciado caso de una total pérdida de la Península, y falta del Supremo Gobierno, no tomará esta Superioridad determinación alguna que no sea previamente acordada en unión de todas las representaciones de esta Capital, á que posteriormente se reúnan las de sus Provincias dependientes, entre tanto que de acuerdo con los demás virreinos se establece una representación de la soberanía del señor Don Fernando Séptimo. Y yo os añado, con toda la ingenuidad que profeso, que lejos de apetecer el mando, vereis entonces como toda mi ambición se ciñe á la gloria de pelear entre vosotros por los sagrados derechos de nuestro adorado monarca, por la libertad é independencia de toda dominación extranjera de estos sus dominios, y por vuestra propia defensa, si alguno la perturba. Después de una manifestación tan ingenua, nada más me resta que decir, sino lo que considero indispensable á la conservación de vuestra felicidad y de toda la monarquía. Vivid unidos, respetad el orden, y huid como áspides los más venenosos, de aquellos genios inquietos y malignos que procuran inspirar celos y desconfianzas recíprocas contra los que os gobiernan; aprended de los terribles ejemplos que nos presenta la historia de estos últimos tiempos y aun de los que han conducido á nuestra metrópoli al borde de un precipicio: la malicia ha refinado sus artificios de un modo tal, que apenas hay cautelas suficientes para librarse de los lazos que tiende á los pueblos incautos y sencillos. Todo lo que os dejo dicho, aprovechao si quereis ser felices, de los consejos de vuestro jefe, quien os lo franquea con el amor más tierno y paternal. — Buenos Aires, 18 de Mayo de 1810. — Baltasar Hidalgo de Cisneros ».

(Registro Oficial de la República Argentina, Tomo I, 1810-1821, página 1, — Publicación Oficial — Editado por la Imprenta La República en 1879).

2

**El Virrey Cisneros da cuenta al Soberano de la Revolución
del 25 de Mayo de 1810**

Veinte y dos de Junio de mil ochocientos diez. Señor: Vuestra Majestad sabe el peligroso estado en que hallé á Buenos Aires, y á todo este Virreinato, cuando tomé las riendas del Gobierno. Dos terribles partidos en la Capital, con ocasión del suceso del 1 de Enero del año pasado de 1809, un tumulto popular en la ciudad de la Plata, que invadió al Presidente de aquella Real Audiencia, que lo depuso, que lo arrestó y que atropelló los respetos de las leyes y de este Superior Gobierno. Una sedición todavía de mayor gravedad en la ciudad de La Paz, que atacó igualmente á la autoridad de su Gobernador, que profanó la dignidad de su Reverendo Obispo, que robó las acciones de la Real Hacienda, que terminó con la opresión de las personas y saqueo de los bienes de su vecindario; estas eran las agitaciones en que hallé casi convulso todo el distrito del Virreinato de Buenos Aires. Sin embargo, la prontitud de mis providencias, con el auxilio de los buenos Gefes subalternos, consiguió la restitución del orden, sofocando paulatinamente los resentimientos y personalidades en esta Capital que ya habian trascendido al orden público, y propagándose al interior de las provincias; apaciguando por medio del comisionado don Vicente Nieto y tropa que llevó á su cargo, el fermento de la ciudad de la Plata, con la captura de los facciosos; y estinguendo por medio del comisionado, don José M. de Goyeneche y tropas que trajo del Virreinato de Lima, el alboroto de la Paz, con el pronto castigo de los principales autores. Ya habia conseguido restablecer la quietud pública, aunque no desvanecer del todo las murmuraciones, la censura del gobierno, las especies sediciosas, la diversidad de opiniones sobre la suerte de España, los presentimientos de independencia, siempre lisonjeros al vulgo de los pueblos, y otros males políticos que habian originado en este Virreinato el estado de la España y los notables sucesos anteriores á mi mando. Pero en este estado se presentó de repente una nueva tormenta que llenará de desconuelo el Real ánimo

de V. M., así como ha derramado la copa de amargura en el mío y en todos los buenos vasallos que tiene V. M. en estas distancias. La seducción de unos y la debilidad de otros han sido su única causa: el pretexto ha sido la supuesta pérdida de España, y el objeto la independencia. Es el caso que llegaron á Montevideo dos buques ingleses procedentes de Gibraltar con gacetas de su nación y también con diarios y proclamas impresas de Cadiz, que contenían la conspiración sucedida en Sevilla contra la Suprema Junta Central, la disolución de ese Gobierno y creación de Vuestro Supremo Consejo de Regencia, la entrada de los franceses en las Andalucías hasta la costa de Cadiz; y aunque el Gobernador de Montevideo, en fuerza de mis especiales encargos, me remitió con reserva las que pudo recoger de uno de dichos buques, no fué posible evitar que circulasen muy luego las gacetas inglesas que divulgaron los particulares. Los sediciosos secretos que desde el mando de mi antecesor habían formado designios de sustraer esta América de la dominación española, que han ido ganando prosélitos y que á cada noticia poco favorable de la suerte de nuestras armas en España, han ido robusteciendo su partido, aprovecharon esta coyuntura para desplegar sus proyectos: y en menos de dos días conocí el fermento, la conmoción y la inquietud de los facciosos, sin que se me ocultasen sus criminales intentos. En la estrechez de circunstancias tan urgentes y críticas, publiqué la proclama que acompaño bajo el número 1º, como el más prudente medio de consolar á los buenos, de calmar la inquietud de los ilusos, de desengañar á los seducidos y de quitar todo pretexto á los malvados: pero ella no produjo en los últimos el efecto deseado: la obra estaba meditada y resuelta. El día 20 de Mayo del corriente año se presentó en mi habitación el Alcalde ordinario de primer voto Juan José Lezica, y me informó de la conmoción que se notaba en parte del pueblo, y de las repetidas instancias con que este Cabildo había sido requerido, por diversos sujetos, para tratar sobre la incertidumbre de la suerte de las Américas, en el caso, que ya se creía llegado, de haberse perdido la España y caducado su gobierno, añadiéndome que, aunque el Cabildo había repulsado con la posible firmeza unas tales pretensiones, le habían repuesto que de no verificarlo el Ayuntamiento, lo haría por sí solo el pueblo, llamándose pueblo la facción de inquietos. En vano opuse las consideraciones de que las noticias no eran oficiales, de que aun cuando lo fuesen, no era verdad que la España estuviese

perdida; que teníamos muchas Provincias libres, que ya teníamos un Gobierno supremo en Regencia, y sobre todo, los pueblos de la América estaban seguros bajo el Gobierno y protección de sus Virreyes, quienes cuando sucediese una absoluta desgracia unirían su autoridad con la representación de sus Provincias, para instalar un gobierno cual conviniese en las circunstancias; en vano, digo, le ofrecí estas reflexiones; porque aunque el Alcalde y el Cabildo estaban persuadidos de ellas, me convencián con ingenuidad del incremento que ya había tomado esta solicitud y del próximo riesgo de un tumulto. Para evitarlo, y dar lugar á los recursos y expedientes de frustrarlo, convine con dicho Alcalde en que una materia tan ardua se tratase, por lo menos, en Junta General del vecindario sensato, para saber el sincero voto del pueblo. Y despedido así, llamé sin demora á todos los comandantes y mayores de los cuerpos militares de esta guarnición. Congregados que fueron, les hice presente el peligroso estado del pueblo, y el desarreglo de sus intempestivas pretensiones: les recordé las reiteradas protestas y juramentos con que me habían ofrecido defender la autoridad y sostener el orden público; y los exhorté á poner en ejercicio su fidelidad en servicio de V. M. y de la Patria. Pero tomando la voz don Cornelio de Saavedra, Comandante del Cuerpo Urbano de Patricios, que habló por todos, frustró mis esperanzas: se esplicó con tibieza: me manifestó su inclinación á la novedad, y me hizo conocer perfectamente que si no eran los comandantes los autores de semejante división y agitaciones, estaban por lo menos de conformidad y acuerdo con los facciosos. Concluída así esta conferencia, debilitada mi autoridad, sin el respeto de la fuerza, engreídos con esto los sediciosos, no divisaba ya un recurso eficaz, ni aun aparente á desbaratar el ruinoso proyecto, y tuve que resignarme á esperar el resultado del congreso del vecindario, librando el éxito al voto de los buenos. El día siguiente 21 de Mayo, me pasó el Cabildo un oficio cuya copia es la del número 2, con la circunstancia de haberme exigido su diputación prontísima respuesta, sin darme más lugar que el muy preciso para responder: y habiéndole contestado con el número 3, procedió á la Junta General, convocando por esquelas á quinientos vecinos, de los cuales solamente asistieron doscientos, por las causas que abajo expresaré. El 22 fué el día destinado á la celebración de la Junta, y el día en que desplegó la malicia todo género de intrigas, prestigios y maquinaciones, para llevar á cabo tan depravados designios. Había yo or-

denado que se apostase para este acto una compañía en cada boca calle de las de la plaza, á fin de que no se dejase entrar en ella ni subir á las casas capitulares, persona alguna que no fuese de las citadas: pero la tropa y los oficiales eran del partido, hacían lo que sus comandantes les prevenían secretamente y esto les prevenían lo que les ordenaba la facción, negaban el paso á la plaza á los vecinos honrados y la franqueaban á los de la confabulación, tenían algunos oficiales copias de esquila de convite sin nombre, y con ellos conducían á las casas de Ayuntamiento sujetos no citados por el Cabildo ó porque los conocían de la parcialidad ó porque los ganaban con dinero; así es que en una ciudad de más de tres mil vecinos de distinción y nombre, solamente concurrieron doscientos, de estos muchos pulperos, algunos urbanos, y otros hijos de familia, y los más ignorantes y sin las menores nociones para discutir un asunto de la mayor gravedad. Entre tanto yo ya estaba en un arresto honrado, porque mi guardia era de la tropa del mismo partido: estaba prevenida de asegurar mis movimientos, y aun tenía las llaves de las entradas principales del Real Fuerte. Todas estas maquinaciones, las amenazas de los oficiales y soldados del Cuerpo de Saavedra, un considerable número de incógnitos que envueltos en sus capotes y armados de pistolas y sables paseaban en torno de la plaza, arredrando al vecindario que temiendo los insultos, la burla y aun la violencia, rehusó asistir á pesar de las citaciones del Cabildo. Verificóse la Junta en esta forma en las casas del Ayuntamiento, dando principio por haber propuesto el Síndico Procurador de la ciudad la cuestión de si se consideraba ó no haber caducado el gobierno supremo de España. Prestó su voto el M. R. Obispo de esta Diócesis Don Benito Lue, fiel servidor de V. M., pero á pesar de su recta intención, dió al expresarlo ocasión á la suspicacia del Doctor Juan José Castelli, principal interesado en la novedad, para que al rebatirle varias proposiciones viniese á fijar el punto que deseaba, cual era el de examinar si debía yo cesar en el Gobierno Superior y reasumirlo el Cabildo. Siguió el General D. Pascual Ruíz Huidobro, que, más atento á su ambición que al servicio de V. M., y contando con que, despuesto el legítimo Virrey, recaería en él el mando como oficial de mayor graduación, dijo abiertamente que debía yo ser separado del Gobierno Superior por haber caducado en España la representación Soberana que me nombró, que debía el Cabildo reasumirlo y y depositarlo en otra persona de confianza, y al concluir

recibió el débil aplauso de que le victoreasen, y dijese alabanzas tanto los partidarios que asistían al Congreso, como las gentes que con estudio habían introducido á la plaza, la cual esperaba la resolución y era avisada con ciertas señales que le daban las facciones desde la galería del Cabildo, para que aclamase los votos más favorables, así por intimidar á los buenos españoles como por imponer al Congreso, con el nombre de pueblo que se daba á un pequeño número de gentes. Continuó la votación en todo este desorden: á los que sufragaban en favor de la autoridad se les insultaba con descaro y escarnio; á los que opinaban en contra se les aplaudía, no obstante los apercimientos serios del Cabildo. Se obligó á prestar los votos en público, sin embargo de haber solicitado mucho la votación secreta, por manera que observando los hombres de bien una formal coacción, tomaron muchos el partido de retirarse oculta-mente á sus casas sin emitir sus votos. Permaneció la Junta por todo aquel día y la mayor parte de la noche: y entretanto todo este gran Pueblo, absorto á vista de tan enormes escesos, temeroso de la violencia y acobardado de los males que se pronosticaba, no hacía más que murmurar secretamente. Ocultos los vecinos en sus casas, contraídos los artesanos á sus talleres, lóbregas las calles, en nada se pensaba menos que en ingerirse é incorporarse á tan inicuas pretensiones, especialmente cuando bajo el pretexto de fidelidad, de patriotismo y de entera unión entre americanos y europeos, se descubrían sin disimulo los designios de independencia y de odio á los buenos vasallos de V. M. Al otro día 23 de Mayo, me avisó el Cabildo el resultado de la votación del Congreso, que por pluralidad de votos había resuelto mi cesación y la reasunción del Gobierno en el mismo Ayuntamiento, que en desempeño de la confianza del pueblo, lo depositara en una Junta compuesta de cuatro vocales, de la cual debía yo ser el Presidente con el mando de las armas, y con todos los honores y sueldos de mi empleo, en los términos que aparece de la copia número 4. Pedí también tiempo para resolver, atenta la gravedad de la materia; y se me negó por la diputación del Cabildo, que me expuso la necesidad en que estaba de no retirarse sin mi contestación é informar de ella al pueblo que la esperaba. No trepidé en conformarme, ya porque no me quedaba otro partido contra la viva fuerza, y ya porque mi separación anunciaba mil desgracias á este honrado vecindario, mil desórdenes á las Provincias interiores, y un manifiesto riesgo de anarquía y tal vez enajenación de este

Virreinato, al paso que mi intervención á la cabeza del gobierno podía evitar todos estos desastres: así lo contesté en oficio cuya copia es la del número 5, y en la tarde del día siguiente 24 fui llamado y me presenté en la Sala del Ayuntamiento, en donde me fué entregado el bastón nuevamente por el Alcalde de primer voto, y se me recibió un nuevo juramento en los términos de estilo, en cuya ceremonia y con el juramento de los cuatro vocales asociados, que fueron Don Cornelio Saavedra, Comandante del Cuerpo de Patriotas, el Doctor D. José Sola, Cura de una Parroquia de esta Capital, el Doctor D. Juan José Castelli, abogado, y Don José Santos de Inchaurregui, se concluyó este acto, se publicó por bando el nuevo Gobierno, y me retiré con los vocales asociados á mi habitación en el Real Fuerte. En aquella misma noche al celebrarse la primera sesión ó acta del gobierno, se me informó por algunos de los vocales, que alguna parte del pueblo, no estaba satisfecha con que yo obtuviere el mando de las armas, que pedía mi absoluta separación, y que todavía permanecía en el peligro de conmoción, como que en el cuartel de Patricios gritaban descaradamente algunos oficiales y paisanos, y esto era lo que llamaban Pueblo, cuando es absoluta y notoria verdad que la masa general del pueblo, incluso todos los empleados y Tribunales de esta Capital rebosaban de alegría, como si hubiesen salido del más apurado conflicto, al verme otra vez á la frente del Gobierno, manifestándose este contento en la iluminación de la ciudad y en los cumplidos que recibí de todas las corporaciones, magistrados y vecinos. Yo no consentí que el gobierno de las armas se entregase, como se solicitaba, al Teniente Coronel de Milicias Urbanas Don Cornelio Saavedra, arrebatándose de las manos de un General que en todo tiempo las había conservado y defendido con honor y á quien V. M. las había confiado como á su Virrey y Capitán General de estas Provincias, y antes de condescender con semejante pretensión, convine con todos los Vocales en renunciar los empleos y que el Cabildo proveyese de Gobierno. Así lo hicimos en oficio cuya copia testimoniada solicité y no se me ha concedido, á que nos contestó el Cabildo denegándose á admitir nuestra renuncia, en atención á que estando ya en nuestras manos el Gobierno Superior, teníamos toda la autoridad bastante para hacernos obedecer y respetar. Pero por lo que á mí tocaba, mi autoridad era precaria y aparente, y la de los asociados estaba también pendiente de la voluntad de los Comandantes, quienes en la misma noche anduvieron por sus

respectivos cuarteles, juntando á viva diligencia firmas de sus oficiales, sargentos y cabos, para pedir con este aparato mi separación á nombre del pueblo. Con efecto, aunque varios oficiales resistieron prestar su firma, la arrancaron á los más y con un considerable número de suscripciones, introdujeron en aquella misma noche su solicitud al Cabildo, inspirando al mismo tiempo á los Capitulares nuevos motivos de temor con diferentes amenazas. En la mañana del día 25, obligado á oír el Cabildo esta nueva solicitud, se juntó en su Sala, no á deliberar, sino á condescender con cuanto demandaban los revoltosos que agolpados con armas á las puertas del Ayuntamiento voceaban, intentaban entrarse á la Sala Capitular y exigían prontísima resolución sobre el seguro de que tenían las tropas de su parte. Puesto el Cabildo en tan estrecho apuro, me envié una diputación verbal con dos regidores y el Escribano del Cuerpo, requiriéndome á que hiciese absoluta dimisión del Gobierno, sin traba ni restricción alguna, porque de otra suerte no respondía de mi vida, ni de la tranquilidad pública: convine en la dimisión, presente el Asesor General del Virreinato, como lo estuvo á todos los actos anteriores, pero exijí que el Escribano sentase mis formales protestas de la violencia y fuerza que padecía; mas me replicaron los diputados, que de ninguna manera estampase protesta alguna, porque se hallaban en la necesidad de imponer á los pretendientes de mi llana contestación y que estaban puestos en el conflicto más arriesgado. Tuve por fin que ceder á esta escandalosa violencia, contentándome con el testimonio y certificado que la diputación ofreció darme de este lance con fe de Escribano y que he pedido al Cabildo con testimonio de todo el expediente, el cual pondré en las Reales manos de V. M. cuando se me franquee. Representado nuevamente el Gobierno en el Cabildo, con cuya representación querían los facciosos autorizar sus desórdenes, y viéndose el cuerpo Municipal en igual estado de coacción que yo, no hizo más que prestar su aprobación á la solicitud del partido, cuyos caudillos le designaron por escrito los sujetos que debían componer la Junta de Gobierno y así la creó el Ayuntamiento (según aparece en el impreso número 6). Publicóse nuevo Bando avisando al pueblo esta tercera novedad, y quedó así establecido el actual Gobierno Superior de las Provincias del Río de la Plata, compuesto del Presidente, que lo es el Teniente Coronel de Milicias Don Cornelio Saavedra, seis Vocales que son el Coronel de Milicias Provinciales Don Miguel Azcuénaga, Don Manuel Belgrano

Pérez, Secretario del Consulado, Don Juan José Castelli, abogado particular, el Presbítero Don Manuel Alberti, Párrroco de San Nicolás, Don Pedro Matheu y Don Juan Larrrea, mercaderes, y por Secretarios, los abogados Don Mariano Moreno y Don Juan José Passo. La primer diligencia de la Junta ha sido circular á las Provincias y Ciudades del Virreinato la noticia de su instalación, ordenándoles que á la mayor brevedad nombren diputados para el Congreso General que debe hacerse en esta Capital con el fin de establecer un Gobierno Superior y representación de la Soberanía de Vuestra Real Persona, mientras dure su detención en poder de sus enemigos. A este intento me obligaron á circular un oficio, en que con arte y disimulo, exhorté solamente á los pueblos á la tranquilidad y unión, dándoles á entender perfectamente mi situación compelida, como aparece de las copias 7 y 8. Ha dispuesto también la Junta, mandar una expedición de mil hombres, que se apresta á salir á fines del presente mes para las Provincias interiores del Virreinato, con el pretexto de auxiliar la libertad de los pueblos para la elección de sus diputados, pero con el verdadero objeto de imponerles terror y violentarlos á conformarse en todo con sus designios. Y como las principales ciudades cabezas de Provincia, tienen en el día alguna tropa de guarnición, es muy de temer el rompimiento de una guerra civil ó la conmoción de todo el Virreinato. En los días 26 y 27 de Mayo exigió la nueva Junta un solemne y público juramento de reconocimiento y obediencia, á todos los Tribunales, cuerpos de empleados y tropas, el cual se verificó en la Sala del Ayuntamiento, habiéndolo prestado con las mas serias protestas el Decano de la Real Audien- cia, el Alcalde Ordinario de Primer voto por el Cabildo, y un Contador de Cuentas por el Tribunal de estas: y sin embargo de tan pública resistencia, de las limitaciones y restricciones con que los magistrados y empleados juraron en aquel acto, y de no haber asistido más pueblo en la plaza principal que la tropa y un cortísimo número de plebe llevada de la curiosidad, la Junta ha pintado esta función en sus papeles públicos, como la más solemne y consagrada por la aclamación del pueblo, según se deja ver en la Gazeta impresa número 9, debiendo notar de paso V. M. que también se ha publicado este periódico con el nombre de «Gazeta de Buenos Aires», para ir de este modo adquiriéndose la Junta ó usurpando los derechos ó por lo menos el aparato y esterioridades de Suprema. Y efectivamente, ella ha empezado las funciones de su Gobierno ejer-

citando actos de verdadera soberanía que solo son reservados á la Suprema Potestad de V. M. -- Retiró de su empleo al Asesor General de este Virreinato, Don Juan de Almagro, con mil pesos de sueldo. Ha librado á los Comandantes de estos Cuerpos voluntarios de Milicias Urbanas, despachos de Coroneles de Ejércitos con tratamientos y sueldos de tales; dió á su Presidente Don Cornelio de Saavedra el tratamiento de excelencia, y ha hecho á sus vocales asignación de sueldos. Ha entablado el sistema de terrorismo para con todos los hombres de bien que manifiestan su adhesión al Gobierno legítimo, que sienten en favor del Consejo de Regencia de V. M., que publican noticias favorables de España, que opinan contra su ilegalidad y que murmuran de sus providencias, y el sistema de indulgencia con todos los sediciosos ó partidarios de la independencia; por eso es que á virtud de secretas denuncias, arresta por momentos á varios vecinos, apercibe á otros, destierra, como acaba de hacerlo con tres religiosos del Convento de San Francisco, y á muchos ha prohibido salir de esta Capital á los pueblos de su destino ó residencia, por temor de que instruyan ó informen la realidad de los sucesos; al paso que los que en el Cabildo insultaron y vejaron al Reverendo Obispo y á otros vecinos honrados, han sido aplaudidos: los que publican por las calles su libertad del yugo de la España no son apercibidos; los que han venido prófugos por cómplices en la insurrección de La Plata, han sido bien recibidos, como el cirujano Don Manuel Corcuera; los atentadores contra la seguridad personal del vecindario permanecen impunes, como acaba de suceder con una patrulla de 35 hombres armados, que á las once de la noche del presente mes, buscaron al Fiscal del Crimen Don Antonio Caspe, á nombre del Presidente de la Junta, y sorprendiéndolo insidiosamente lo echaron por tierra á sablazos, lo hubieron de matar y rompieron las ventanas de su casa, sin otro motivo que haber publicado la Junta en su Gazeta, los firmes oficios con que la Real Audiencia, á solicitud de los Fiscales, le requirió el reconocimiento de Vuestro Supremo Consejo de Regencia, en el modo que se manifiesta por el impreso número 10. Con el objeto de seducir á los pueblos, han enviado emisarios á Montevideo, á la Provincia del Paraguay y á la de Córdoba, y han circulado proclamas y cartas de oficio á nombre de la Junta á distintos sujetos particulares de los de más influjo y nombre que residen en las ciudades interiores, se han recogido por orden de la Junta todas las armas del vecindario; al mismo tiempo que los

prosélitos del nuevo Gobierno andan todos armados, imponiendo terror y continua inquietud. En todos los actos públicos concernientes á la instalación y reconocimiento de la Junta han sido llevados por vía de mayor solemnidad los oficiales ingleses que aquí existen, y el día del juramento correspondieron los buques de estos y aun los de los ingleses particulares, á las salvas de la plaza; siendo también muy de extrañar, que sin noticias y seguramente contra las instrucciones de su Corte, hayan aprobado públicamente este trastorno y hasta facilitado embarcaciones á la Junta para el envío de sus comisionados, que según dicen se dirigen á Londres. El Presidente habita en el Real Fuerte, de donde me obligó á trasladarme á una casa particular: tiene la misma guardia y recibe los mismos honores que un Virrey: este numeroso pueblo está oprimido: yo le haría una injusticia si no asegurase á V. M. de su lealtad y verdadero patriotismo: ha sido sorprendido por la fuerza y solo busca un momento favorable para sacudirse de una tan inesperada é inaudita violencia: nunca he sido más obsequiado y respetado del vecindario que cuando me veo despojado del mando, y es que su fidelidad respeta en mí la verdadera representación de V. M., al mismo tiempo que detesta por modos bien notorios, la autoridad de la Junta. Esta no cesa de publicar en sus papeles la confianza que inerece al pueblo: al mismo tiempo que en su conducta y providencias manifiesta sus recelos, su desconfianza y sus temores, doblando cada noche centinelas, destacando partidas, desmontando cañones de las baterías y tomando otras medidas; porque espera y con fundamento, que una capital de sesenta mil almas, de un numeroso vecindario honrado y fiel, no es fácil que tolere por mucho tiempo la depresión de la autoridad legítima, la violencia de las leyes y la opresión de las personas, y sobre todo el manifiesto riesgo de una general conmoción del Reino.

Ya habrían levantado la cerviz, porque el número de los facciosos es tan corto, que apenas alcanzará á unas trescientas personas, con ocho ó diez caudillos que llevan la dirección del proyecto; pero como hasta el día cuentan con las fuerzas de las armas que están con ellos, he aconsejado y persuadido cuanto me ha sido posible al vecindario, á que no aventure un paso que por ahora no tendría más éxito que desgracias y desastres. He dicho por ahora, porque un edificio colosal levantado sobre cimientos de barro se desploma por sí mismo: los autores de una tan loca empresa, inconsecuentes consigo mismos, no dan un paso

que no sea el instrumento de su ruina: ya en los cuerpos militares hay muchos quejosos y desengañados y el pueblo está altamente irritado. Montevideo ha contestado á la Junta que por universal aclamación ha reconocido en el Consejo de Regencia la representación Soberana del señor don Fernando VII, con cuyo motivo se ha puesto en estado de defensa, se han armado sus vecinos, se han dispuesto sus tropas, y creo que están en disposición de intimar á esta Junta su disolución y mi restitución al mando: la ciudad de Córdoba se sabe que en Junta de sus principales magistrados y vecinos, ha resuelto reconocer á Vuestro Supremo Consejo de Regencia, que ha alistado tropas y se prepara para resistir las pretensiones de este Gobierno, y que ha despachado por expreso cartas de oficio á las ciudades interiores, previniéndoles á que se precavan y no sean sorprendidas por los engañosos partes de la Junta; habiendo contribuido á tan importantes providencias de dicha ciudad de Córdoba, el celo y fidelidad de su gobernador don Juan Gutiérrez de la Concha, del General don Santiago Liniers, que no ha tenido embarazo en escribir, tanto al Presidente de esta Junta, como á varios particulares y oficiales de estas tropas, reprobando su conducta, con entereza y acrimonia, y el del Coronel del Ejército don Santiago de Allende, vecino y natural de Córdoba. Otro tanto se espera que harán las otras Provincias interiores, cuyos jefes son á toda prueba buenos servidores de V. M. Esto que no esperaban los facciosos les ha obligado á suspender la expedición proyectada, así porque ya temen ser atacados por aquellos fieles pueblos, así como desconfían de las tropas destinadas, que públicamente amenazan, cuando menos la desunión. De manera que yo solo aguardo la llegada del barco que conduce la correspondencia de esa Península y debe traer las órdenes de oficio acerca del establecimiento del Consejo de Regencia de V. M., el cual, según la noticia comunicada por el bergantín llamado el «Nuevo Filipino», que llegó á Montevideo y debió salir de Cadiz el 30 de Marzo, y debe llegar muy breve, para ver si se reconoce y jura el Supremo Consejo de Regencia de España é Indias, y en caso contrario, como ya lo anuncia en sus papeles citados, pedir se me permita salir de este pueblo, cuyo gobierno no es conforme con el de la Nación; pero si aun esto se me niega, me trasladaré fugando á cualquier costa ó á Montevideo, ó á Córdoba, desde donde exhortaré á las demás Provincias del Virreinato, tomaré cuantas providencias me sean posibles para restituir el orden y sujetar á los

facciosos á la debida obediencia de V. M., pues si no he salido hasta el día, ha sido porque se vigila nuevamente incesantemente sobre mí, se observan mis pasos, la localidad de esta ciudad no me ha dado arbitrios, y no he considerado seguro ningún pueblo hasta ver su opinión decidida acerca de los designios de esta Junta. Y esto mismo me ha impedido el haber participado á V. M. estos extraordinarios sucesos, lo que ejecuto aprovechando la ocasión segura del paso á esa del Intendente que fué de Lima don Juan José Gálvez, que informará á V. M. como testigo que todo lo ha presenciado. He concluido la sincera relación de los acaecimientos desde el día 20 de Mayo hasta la fecha. Por ella conocerá V. M. que aún con el intento de derribar mi autoridad para realizar sus designios, no han podido tomar asunto ni ocasión de mi conducta gubernativa; antes por el contrario, han publicado la pureza, la sinceridad y la rectitud de mis procedimientos, según lo acredita el documento impreso número 11. Confieso á V. M. que equivoqué mi anterior concepto que había fundado en las repetidas seguridades que me tenían hechas los Comandantes, especialmente Saavedra, así de palabra como en escrito que conservo, de que sostendrían mi autoridad hasta el último extremo, como lo habían ejecutado con mi antecesor; pero la conspiración contra éste por los europeos en 1º de Enero de 1809, con igual solicitud de formar el Gobierno en Junta; el ejemplo tolerado con el Marqués de Sobremonte, y lo que es más, el concepto que formaron de la total pérdida de esa Metrópoli, de donde, por consecuencia, no podrían esperar premios ni temer castigos, es lo que los decidió á un tan escandaloso atentado, cuyo objeto es el de una absoluta independencia de estas Américas; y los medios, la violencia, la seducción, la usurpación de los derechos de las provincias interiores, sin cuyo consentimiento se han erigido en gobernadores, suyos seis particulares al auxilio de la fuerza de las armas, y otras mil iniquidades, que por lo menos han de producir necesariamente desórdenes, conmociones populares, trastornos, partidos y dispendio de Vuestra Real Hacienda, con cuyas consideraciones creo indispensable la necesidad en que se halla V. M. de remitir sin pérdida de momento, por lo menos dos mil hombres de tropa, con buenos y probados oficiales, que impongan el respeto y restablezcan la subordinación, pues con esta providencia y con el desengaño de la Corte de Londres, con cuya protección han contado estos miserables é inexpertos facciosos, se mediarán todos los males, y quedarán asegurados estos do-

minios de V. M., que de otra manera peligran y están próximamente expuestos á ser la presa de la ambición, ó á ser víctimas de su misma disolución. Dios guarde la Católica y Real Persona de V. M., muchos y felices años, con aumento de mayores Reinos y Señoríos, como la cristianidad ha menester.—Buenos Aires, á 22 de Junio de 1810.—Señor: — *Ines Gastambide de Cisneros*. En este momento que son las siete y media de la noche, acaban de llevarse á mi marido al Fuerte, con engaño, y de allí lo han embarcado, ignorando su destino; lo que pongo en noticia de V. M., y por tanto firmo este parte. Buenos Aires, fecha ut supra.

(*Historia de Belgrano*, por Bartolomé Mitre.)

3

Acta capitular del 21 de Mayo

En la muy noble y muy Leal Ciudad de la Santísima Trinidad, Puerto de Santa María de Buenos Aires, á veinte y uno de Mayo de mil ochocientos diez: estando juntos y congregados en la Sala de sus acuerdos á tratar lo conveniente á la República, los señores del Excelentísimo Ayuntamiento, á saber: D. Juan José de Lezica y D. Martín Gregorio Yaniz, Alcaldes ordinarios de primero y segundo voto; y Regidores Don Manuel Mansilla, Alguacil mayor, D. Manuel José de Ocampo, D. Juan de Llano, D. Jaime Nadal y Guarda, D. Andrés Domínguez, D. Tomás Manuel de Anchorena y D. Santiago Gutiérrez, con asistencia del caballero Síndico Procurador General Doctor D. Julián de Leiva; hicieron presente el señor Alcalde de primer voto y el caballero Síndico, que algunos de los Comandantes de los cuerpos de esta guarnición y varios individuos particulares, habían ocurrido á manifestarles que este pueblo leal y patriota, sabedor de los funestos acontecimientos de la península, por los impresos publicados en esta ciudad con permiso del Superior Gobierno, vacila sobre su actual situación y sobre su suerte futura; y que el deseo de que sea la más conforme á su felicidad y al objeto inalterable de conservar íntegros estos dominios bajo la dominación del señor Fernando VII, le hace zozobrar en un conjunto de ideas difíciles de combinar, y que si no se llegan á fijar cuanto antes, pueden causar la más lastimosa fermentación. Todo lo cual hacían presente á este Exmo. Cabildo, en virtud de haberlo así ofrecido á dichos comandantes é individuos particulares, para que se resuelva lo más acertado y conveniente en un asunto que, por su gravedad y circunstancias exige las mayores atenciones: agregando el señor Alcalde de primer voto que ayer mismo, á la hora del mediodía, se había explicado con el Exmo señor Virrey sobre el particular, y significándole que, sin embargo de haber insistido los Comandantes y particulares, de que para el efecto se hiciese de acuerdo el día de ayer, se había podido suspenderlo hasta hoy; que Su Excelencia

le había prevenido pasase á verle el caballero Síndico para tratar sobre la materia, y este manifestó haberlo realizado y propuesto á S. E. se le pediría permiso por el Exmo. Ayuntamiento para celebrar un Cabildo abierto ó Congreso general, en que se oyese al pueblo y tomasen providencias, convidando por esquelas á la parte principal y más sana de él. Que habiendo indicado este arbitrio á la presencia del señor Fiscal de lo Civil, don Manuel Genaro Villota, y del capitán de fragata, don Juan de Bargas, había instado al mismo tiempo en que se meditase y propusiese cualquiera otro, que desde luego estaba pronto á proponerlo y promoverlo en el Ayuntamiento: que no se había meditado otro alguno, y solo si conformándose S. E. con el propuesto por el exponente. En este estado, agolpó un número considerable de gentes á la plaza mayor, explicando á voces el mismo concepto que habían manifestado el señor Alcalde de primer voto y el caballero Síndico: Y los Señores, persuadidos de la necesidad que hay de poner prontas precauciones á los males que se anuncian; convencidos de que deben tomarse providencias con la mayor brevedad, por el hecho mismo de haber agolpado la gente á la plaza expresando á voces sus deseos, y afianzados en la exposición del señor Alcalde y del caballero Síndico, acordaron se pase oficio en el acto al Exmo. Señor Virrey, suplicándole se digne conceder á este Cabildo, permiso franco para convocar, por medio de esquelas, la principal y más sana parte del vecindario, á fin de que, en un Congreso Público, exprese la voluntad del pueblo; y acordar en vista de ello las medidas más oportunas para evitar tanta desgracia y asegurar nuestra suerte futura. Que al propio tiempo se sirva disponer que en el día del Congreso se ponga una reforzada guarnición en las avenidas ó bocacalles de las plazas, para que contenga todo tumulto, y solo se permita entrar en ella á los que con la esquila de convocación acrediten haber sido llamados. Se formó el oficio en los términos siguientes:—OFICIO Á SU EXCELENCIA:—Excelentísimo señor: Sabedor el pueblo de los funestos acaecimientos de nuestra Península, por los impresos publicados en esta ciudad de orden de V. E., y animado de su innata lealtad á nuestro soberano y de los sentimientos patrióticos con que siempre se ha distinguido, vacila sobre su suerte futura; y el deseo de que sea la más conforme á su felicidad y al objeto inalterable de conservar íntegros estos dominios bajo la dominación del señor don Fernando Séptimo, le hace zozobrar en un conjunto de ideas difíciles de

combinar, y que si no se llegan á fijar cuanto antes, pueden causar la más lastimosa fermentación. Este Ayuntamiento, que vela por su prosperidad y se interesa en gran manera por la unión, el orden y la tranquilidad, lo hace presente á V. E., y para evitar los desastres de una convulsión popular, desea tener de V. E. un permiso franco para convocar, por medio de esquelas, la principal y más sana parte de este vecindario y que en un Congreso Público exprese la voluntad del pueblo, y acuerde las medidas más oportunas para evitar toda desgracia, y asegurar nuestra suerte venidera. Sirviéndose V. E. disponer que en el día del Congreso se ponga una reforzada guarnición en todas las avenidas ó bocacalles de la plaza, para que contenga todo tumulto y que solo permita entrar en ella á los que con la esquila de convocación acrediten haber sido llamados. Dios guarde á V. E. muchos años.—Sala Capitular de Buenos Aires, 21 de Mayo de 1810.—Exmo. Señor: Juan José Lezica—Martín Gregorio Yaniz—Manuel Mansilla—Manuel José de Ocampo—Juan de Llano—Jaime Nadal y Guarda—Andrés Domínguez—Tomás Manuel de Anchorena—Santiago Gutiérrez—Dr. Tomás de Leiva—Exmo. Señor Virrey don Baltazar Hidalgo de Cisneros.» Y los Señores mandaron se ponga en limpio y se pase en el momento, por medio de una diputación, que deberá componerse de los señores D. Manuel José de Ocampo y D. Andrés Domínguez, á quienes encargaron muy eficazmente obtuviesen de S. E. pronta contestación, por la cualidad del caso y sus circunstancias: quedando abierto el acuerdo hasta que regresasen.—Volvieron los señores Diputados y dieron cuenta de que habiendo manifestado al Exmo. Señor Virrey el objeto de la diputación y entregádole el oficio, había respondido S. E. que el asunto era delicado y necesitaba meditación: que sin embargo había entrado en su despacho y entregádolos al cabo de un buen rato la contestación, que era la misma que ponían en manos del Exmo. Cabildo.—La cual se leyó y es del tenor siguiente:—

CONTESTACIÓN DE SU EXCELENCIA:—Excelentísimo señor:—Acabo de recibir el oficio de V. E. de esta fecha, ahora que son las diez de la mañana, por medio de sus dos Diputados, á efecto de ponerlo en mis manos, y enterado de su contesto, estoy desde luego pronto á acordar á V. E., como lo ejecuto, el permiso que solicita para el fin y con las condiciones que me indica en su citado: mediante lo que, luego que V. E. me participe el día en que ha de celebrarse el Congreso que se ha propuesto, dispondré que se

aposten las partidas que V. E. solicita en las avenidas ó boca calles de la Plaza, con los fines de evitar, según corresponde al mejor servicio de S. M. y tranquilidad pública de esta ciudad, cualquier tumulto ó conmoción que pudiera ocurrir; como igualmente para que sólo permitan entrar en ella á los vecinos de distinción, que por medio de la esquila de convocación acrediten en debida forma haber sido llamados por V. E. al efecto; y espero del discernimiento constante y acreditada fidelidad de V. E., é interés que siempre ha manifestado por el bien público de esta ciudad, que como su representante, esforzará todo el celo que le caracteriza y distingue, á fin de que nada se ejecute ni acuerde que no sea en obsequio del mejor servicio de nuestro amado soberano, el señor Don Fernando VII, integridad de estos sus dominios y completa obediencia al Supremo Gobierno Nacional que lo representa durante su cautividad: —pues que, como V. E. sabe bien, es la monarquía una é indivisible, y por lo tanto debe obrarse con arreglo á nuestras leyes, y en su caso, con conocimiento ó acuerdo de todas las partes que las constituyen, aun en la hipótesis arbitraria de que la España se hubiese perdido enteramente y faltase en ella el Gobierno Supremo representativo, nuestro legítimo Soberano. —Dios guarde á V. E. muchos años. —Buenos Aires, 21 de Mayo de 1810. —Baltazar Hidalgo de Cisneros. —Excelentísimo Cabildo, Justicia y Regimiento de esta ciudad. —Y enterados los Señores, acordaron que el señor D. Andrés Domínguez pase en el acto á solicitar del Comandante de Patricios, D. Cornelio de Saavedra, á nombre de este Cabildo, el que se apesone en la Sala, á fin de encargarle que aplique su celo á evitar todo tumulto y conservar el orden y la tranquilidad pública. En este estado, y habiendo salido el señor Diputado, se oyeron nuevas voces del pueblo, reducidas á que se presentase en los balcones el caballero Síndico: quien, después de haberse repetido aquellas voces en varias ocasiones, se presentó en efecto, y el pueblo en grito le significó que quería saber lo que se había contestado á la Diputación del Exmo. Cabildo. El caballero Síndico les hizo entender que S. E. había prestado conformidad en todo á las solicitudes del Ayuntamiento, y que este se hallaba trabajando por el bien y la felicidad pública: que era de necesidad forzosa el que todos se retirasen á sus casas para no perturbar la tranquilidad y el sosiego: que se aquietasen, pues que el Exmo. Cabildo no omitiría medio de cuantos estimase conducentes al mayor bien. Clamaron entonces de nuevo que lo que

se quería era la deposición del Exmo. Señor Virrey; y habiendo el caballero Síndico tratado de persuadirlos, esforzando más y más las insinuaciones que anteriormente tenía hechas, se retiró á la Sala. En cuyo acto compareció Don Cornelio Saavedra, y los Señores suplicaron encarecidamente pusiese en planta, sin la menor demora, los medios todos de su prudencia y celo para hacer que se retirase de la plaza aquella gente, y que velase con los demás Comandantes sobre el orden público, quietud y sosiego del vecindario, á fin de precaver toda conmoción y evitar cualquier novedad y desgracia que pudiera experimentarse en circunstancias tan arriesgadas, hasta tanto se resolvía lo más conveniente al bien público.—D. Cornelio Saavedra ofreció que nada se omitiría de su parte y de la de los demás Comandantes, al indicado fin, saliendo por garante de la seguridad pública. Se despidió, y significando al pueblo que el Exmo. Cabildo meditaba, trataba y acordaba cuanto creía conducente á la felicidad del país, consiguió que la gente toda se retirase de la plaza. Y los señores determinaron se celebrase el Cabildo abierto ó Congreso general, el día de mañana 22, á las nueve de ella, y que al efecto se convide por esquila á la parte principal y más sana del pueblo. Se formó la esquila, que es del tenor siguiente:—ESQUILA:—El Exmo. Cabildo convoca á usted para que se sirva asistir precisamente mañana, 22 del corriente á las 9, sin etiqueta alguna y en clase de vecino, al Cabildo abierto que con avenencia del Exmo. Señor Virrey ha acordado celebrar, debiendo manifestar esta esquila á las tropas que guarnezcan las avenidas de esta Plaza, para que se le permita pasar libremente.—Señor Don.....» Y mandaron se imprima en el día y se reparta sin pérdida de instantes, arreglándose lista de los individuos, en la que deberán ser comprendidos el Reverendo Obispo, el Exmo. Señor Don Pascual Ruíz Huidobro, Señores de la Real Audiencia y del Tribunal de Cuentas, Ministros de Real Hacienda y Jefes de Oficinas, Cabildo Eclesiástico, Curas y Prelados de las Religiones, Real Consulado, Comandantes, Jefes y algunos oficiales de los cuerpos de esta guarnición, Alcaldes de barrios y vecinos, Catedráticos y profesores de derecho: compartiéndose por barrios los encargados de distribuir las esquelas; y ordenaron por último se disponga proclama enérgica, con la cual haya de darse principio á la sesión del día de mañana. Y con esto se concluyó el acuerdo, que firmaron los Señores, de que doy fe.—JUAN JOSÉ LEZICA — MARTÍN GREGORIO YANIZ — MANUEL MAN-

SILLA — MANUEL JOSÉ DE OCAMPO — JUAN DE LLANO —
JAIME NADAL Y GUARDA — ANDRÉS DOMÍNGUEZ — TOMÁS
MANUEL DE ANCHORENA — SANTIAGO GUTIÉRREZ — DOC-
TOR JULIÁN DE LEIVA — Licenciado Don JUSTO JOSÉ NÚ-
ÑEZ, Escribano Público y de Cabildo.

(*Registro Oficial de la República Argentina — Tomo 1 (1810-1821)*
página 2 — Publicación Oficial — Imprenta La República —
Año 1870.)

4

Acta del Congreso general de 22 de Mayo

En la muy Noble y muy Leal Ciudad de la Santísima Trinidad, Puerto de Santa María de Buenos Aires, á veinte y dos dias del mes de Mayo del año mil ochocientos diez, habiéndose situado en la galería principal de las casas capitulares los señores que componen este Exmo. Ayuntamiento, para presidir el Congreso General á que se convocó por esquelas ayer 21 del corriente, en virtud de la facultad que para el efecto concedió el Exmo. Señor Virrey Don Baltazar Hidalgo de Cisneros, por oficio de la misma fecha; á saber: los señores D. Juan José de Lezica y D. Martin Gregorio Yaniz, Alcaldes de primero y segundo voto; y Rejidores D. Manuel Mansilla, Alguacil mayor, Don Manuel José de Ocampo, D. Juan de Llano, Don Jaime Nadal y Guarda, Don Andrés Dominguez, Juez diputado de Policía, Don Tomás Manuel de Anchorena, Defensor General de pobres y Fiel Ejecutor, y Don Santiago Gutierrez, Defensor General de menores; con asistencia del caballero Síndico Procurador General, Dr. Don Julián de Leiva; y concurrido para este acto, en virtud de la citada convocatoria; á saber: el Ilmo. Sr. Dr. Don Benito de Luc y Riega; el Exmo. Señor Don Pascual Ruiz Huidobro, Teniente General; el señor D. Manuel José de Reyes, Oidor de esta Real Audiencia; el señor D. Diego de la Vega, Contador Mayor Decano del Real Tribunal de cuentas; el señor Don Pedro Viguera, Tesorero de esta Real Audiencia; el señor D. Juan Andrés de Arroyo, Contador del Real Tribunal de cuentas; el señor Brigadier Don Bernardo Le-coq, sub - inspector y Director general del Real Cuerpo de Ingenieros; el señor D. Joaquín Mosquera, Coronel retirado del mismo Real cuerpo; el señor Don Eujenio Balbastro, vecino y de este comercio; el señor Don Joaquín Madariaga, de este vecindario y comercio; el señor D. José Maria Balbastro, capitán de milicias regladas de caballería; el señor Don José Cerra y Valle, alcalde del barrio número 3, cuartel segundo; el señor Don Ventura de Haedo, Alcalde del barrio número 8, en el mismo cuartel; el señor Don An-

tonio Luciano Ballesteros; el señor Don Manuel Antonio Bas; el Sr. D. Francisco Xavier Riglos; el Sr. D. Román Ramón Díaz; el Sr. Don Feliciano Antonio Chiclana; el Sr. Don Hipólito Vieytes; el señor Don Juan José Viamonte, Capitán graduado del Regimiento Fijo de Infantería y Sargento Mayor de los batallones primero y segundo de Patricios; el Sr. D. Nicolás Peña, oficial de Blandengues de estas fronteras; el Sr. D. Juan José Rocha, Escribano Público y del número; el Sr. Teniente Coronel urbano, D. Juan Antonio Pereyra, Capitán de Granaderos del segundo batallón de Patricios; el Señor D. Esteban Romero, Teniente Coronel urbano y Comandante del mismo batallón; el señor D. Juan Ramón Balcarce, Sargento Mayor del batallón de Granaderos de Fernando VII; el señor D. Simón Rejas, de este vecindario y comercio; el Sr. D. Cornelio Saavedra, Teniente Coronel y Comandante del primer batallón de Patricios; el Sr. D. Cristóbal de Aguirre, vecino y de este comercio; el Sr. D. Pedro Andrés García, Teniente Coronel y Comandante del batallón de Infantería núm. 4; el Sr. D. Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, Teniente Coronel y Comandante del batallón de Infantería núm. 3; el Sr. D. Manuel Andrés de Pinedo y Arroyo, vecino y de este comercio; el Sr. D. Manuel Luzuriaga, de este vecindario; el Sr. D. Martín de Ochoteco, Capitán graduado del ejército; el Sr. D. Ulpiano Barreda; el Sr. D. Antonio Ortiz de Alcalde; el Sr. D. Juan Canaveris; el Sr. D. Hilario Ramos; el Sr. Don Justo Pastor Linch, Contador de la Real Aduana y actualmente su administrador interino; el Sr. D. Manuel José de Lavalle, Director de la Real Renta de Tabacos; el Sr. D. Miguel de Irigoyen, caballero del orden de Alcántara y Teniente Coronel de Caballería; el Sr. D. Vicente Capdevilla, Contador interino de la Real Renta de Tabacos; el Sr. D. Diego Herrera, Teniente Coronel urbano; el Sr. Dr. D. Gregorio Tagle, abogado de esta Real Audiencia; el Sr. Coronel Don Agustín de Pinedo, Sargento Mayor del regimiento de dragones; el Sr. Teniente Coronel Don Mariano Larrazábal, Capitán del mismo; el Sr. D. Martín de Arandía; el Sr. Teniente Coronel urbano D. Rodrigo Muñoz y Rábago; el Sr. D. Francisco de la Peña y Fernández, vecino y de este Comercio; el Sr. Capitán de Milicias Don Antonio Villamil; el Sr. Dr. D. Agustín Fabre, profesor en medicina; el señor Ministro honorario de la Real Hacienda, Don Joaquín Belgrano; el Sr. Don Joaquín Molina Torre, vecino y de este comercio; el Sr. Jacinto de Castro, de este comercio y vecindario; el Sr.

Mariano Echaburu, Escribano Público y del número; el Sr. D. Ildefonso Ramos; el Sr. Coronel D. Francisco Javier Pizarro, Capitán Comandante del Real Cuerpo de Artillería; el Sr. D. José María Cabrer, Coronel del ejército y sargento mayor de esta Plaza; el Sr. Teniente Coronel urbano D. Miguel Gerónimo Garmendia; el Sr. D. José Soriberi, Contador de retasas; el señor D. José Lupiri, Sargento Mayor del batallón de castas; el Sr. D. Felipe Castilla, Capitán de milicias regladas de caballería; el Sr. Antonio Ruiz, Alcalde del barrio núm. 11 cuartel quinto; el Sr. D. José Botello, alcalde del barrio núm. 16 cuartel cuarto; el Sr. Fermín de Tocornal, Alcalde del barrio núm. 20, cuartel quinto; el señor Capitán urbano D. Francisco Mansilla, Ayudante Mayor interino de esta Plaza; el Sr. D. Francisco de Prieto y Quevedo, vecino y de este comercio; el Sr. Teniente Coronel del Ejército, D. Alonso Quesada, Sargento Mayor de las milicias representadas de infantería; el Sr. Don Vicente Carballo y Goyeneche, capitán del regimiento de Dragones; el Sr. Martínez de Hoz, de este comercio y vecindario; el Sr. José Barrera, oficial primero de la Secretaría de Gobierno y Guerra del Virreinato; el Sr. Alférez de Fragata Don Martín Thompson, capitán de este puerto; el Sr. Capitán Graduado D. Gregorio Belgrano, Ayudante Mayor de esta Plaza; el Sr. Teniente Coronel urbano D. Fernando Díaz, Capitán de Granaderos del batallón núm. 4; el Sr. Ambrosio Lezica, de este comercio; el Sr. Esteban Fernández, Capitán de Blandengues de esta frontera; el Sr. D. José María Morell y Pérez, vecino y de este comercio; el Sr. Juan Bautista de Elorriaga, de este comercio y vecindario; el Sr. José Pastor Lezica, vecino y del comercio; el Sr. Juan Nepomuceno de Sola, cura rector de la parroquia de Monserrat; el Sr. D. Juan Bautista Castro, vecino y de este comercio; el Sr. D. José Francisco Vidal, Capitán de milicias de infantería; el Sr. D. Saturnino Alvarez, Tesorero del Real Consulado; el Sr. D. Agustín Pío de Elía, abogado de esta Real Audiencia; el Sr. D. Miguel Escuti, vecino y del comercio; el Sr. D. Pedro de Arteaga, oficial segundo de la Secretaría de Gobierno y Guerra del Virreinato; el Sr. D. José María de las Carreras, vecino y del comercio; el señor D. Francisco Antonio de Letamendi, de este comercio y vecindario; el Sr. D. José Moll, Alcalde de la Hermandad de la Banda del Sud en esta Capital; el Sr. D. Sebastián de Torres, vecino y de este comercio; el Sr. D. José María Calderón, vista de la Real Aduana; el Sr. D. José Riera, vecino y del comercio; el Sr. D. Raimundo Real, Alcalde del

barrio número 19, cuartel quinto; el Sr. D. Domingo López, de este vecindario; el Sr. D. José Nadal y Campo, Alcalde del barrio número 14, cuartel cuarto; el Sr. D. Pablo Villarino, de este vecindario; el Sr. D. Toribio Miers, vecino y del comercio; el Sr. D. Angel Sánchez Picado, Alcalde del barrio número 2, cuartel segundo; el Sr. D. Juan Antonio Rodríguez, vecino y de este comercio; el señor D. José Leiva, abogado de esta Real Audiencia; el Sr. Coronel Don Miguel Azcuénaga, Comandante de milicias; el señor D. Basilio Torrecilla, Alcalde la Hermandad de la Banda del Norte de esta Capital; el señor D. Ruperto Albarelllos, de este vecindario y comercio; el Sr. D. Juan Bautista Ituarte; el Sr. D. Manuel Martínez, vecino y del comercio; el Sr. D. Francisco Antonio Escalada, Consul Moderno del Real Tribunal del Consulado; el Sr. D. Floro Zamudio y Chavarria, Teniente Coronel urbano y Capitán del Escuadrón de Húsares del Rey; el Sr. D. Hermenegildo Aguirre; el Sr. D. Tomás Lezica, de este comercio; el Sr. Teniente Coronel D. Bautista Bustú, Sargento Mayor del batallón 3; el Sr. José León Dominguez, Capitán con grado de Teniente Coronel de los granaderos del mismo batallón; el Rev. Padre Maestro Fray Ignacio Grela, de la orden de Predicadores; el señor D. Florencio Terrada, Teniente Coronel y Comandante del batallón de Granaderos de Fernando VII; el Sr. Dr. Cosme Argerich, profesor de medicina; el Sr. Licenciado D. Justo García y Valdés, profesor en la misma facultad; el Sr. D. Martín Rodríguez, Teniente Coronel y Comandante del Escuadrón de Húsares del Rey; el Sr. D. Miguel Saenz, Capitán del mismo; el Sr. D. Jerónimo Lasala; el Sr. D. Felipe de Arana; el Sr. D. Pedro Capdevila, de este comercio; el Sr. D. Matías Iriyoyen, Alférez de Navío de la Real Armada; el señor Ignacio de Rezabal, vecino y de este comercio; el Sr. D. Manuel de Velazco, Oidor de esta Real Audiencia; el Sr. D. Antonio Pirán, Prior del Real Tribunal del Consulado; el Sr. D. José Merello, Teniente Coronel y Comandante del batallón núm. 5; el Sr. Joaquín de la Iglesia, de este vecindario; el señor D. Francisco Tomás de Anzotegui, Oidor Decano de esta Real Audiencia; el señor Teniente Coronel Don Bernabé San Martín, Sargento Mayor del batallón de artillería La Unión; el Sr. Dr. Don Manuel Belgrano, abogado de los Reales Consejos y Secretario del Real Tribunal del Consulado; el Sr. Coronel urbano Don Gerardo Esteve y Llac, Comandante del batallón de artillería La Unión; el Sr. Don Juan José Castelli, abogado de esta Real Audien-

cia; el Sr. Dr. D. Alejo Castex, abogado de esta Real Audiencia y Teniente Coronel urbano; el Sr. Nicolás Vedia, Teniente del Regimiento de Infantería; el Sr. D. Juan Pedro Aguirre, Teniente Coronel urbano; el Sr. Rev. Padre Juan Pedro Santibáñez; el Rev. Fray Pedro Cortinas, guardián del Convento de la Observancia; el Rev. Padre Prefecto del Convento Bethelémico, Fray José Vicente de San Nicolás; el Sr. D. Juan Fernández de Molina; el Sr. D. Francisco Marzana, Capitán con grado de Teniente Coronel del batallón 5; el Sr. Don Antonio José Escalada, Canciller de la Real Audiencia; el señor D. Bernardino Rivadavia; el Sr. Don Francisco Planes, catedrático de los Reales estudios; el señor D. Julián Segundo de Agüero, cura Rector más antiguo del Sagrario de la Catedral; el Sr. Dr. D. Nicolás Calvo, cura Rector de la Parroquia de la Concepción; el Sr. Dr. D. Domingo Belgrano, canónigo de esta Santa Iglesia Catedral; el Sr. Dr. D. Melchor Fernández, dignidad de Chantre de la misma santa Iglesia; el Sr. Dr. D. Florencio Ramírez, dignidad de maestro escuela de la misma; el Sr. Doctor D. Antonio Saenz, secretario del muy venerable cabildo Eclesiástico; el Sr. D. Tomás José Boizo, Escribano público y del número; el Sr. Juan de la Helguera, vecino y de este comercio; el Sr. D. Juan Ignacio de Ezcurra, de este comercio y vecindario; el Sr. Manuel del Cerro Saenz, administrador en los ramos de policía; el Sr. Teniente Coronel urbano D. Agustín de Orta y Azamor, sargento mayor del batallón 5; el Sr. Don Juan Ignacio Terrada, Teniente Coronel urbano; el Sr. Francisco de Neira y Avellano, vecino y de este comercio; el Sr. D. José Agustín Lizau, vecino y del comercio; el Sr. D. José Hernández, vecino y del comercio; el Sr. D. Benito de Iglesias, vecino y del comercio; el Sr. D. Juan Almagro de la Torre, Oidor Honorario de la Real Audiencia de Charcas y asesor general de este Virreinato; el Sr. Manuel Genaro Villota, Fiscal de lo Civil y Real Hacienda y Honorario del Consejo de Indias; el Sr. Juan Ramos, Teniente Coronel urbano; el Sr. Felipe Cardoso, ídem; el Sr. D. Francisco Pasos, de este vecindario; el Sr. D. Lorenzo Machado, alcalde del barrio núm. 18, cuartel quinto; el Sr. D. José Antonio de Etchenaguzía, ídem del barrio núm. 7, cuartel primero; el Sr. D. José Antonio Lagos, de este vecindario; el Sr. Juan Cornet y Prat; el Sr. D. Ramón de Oromí, Contador Mayor del Real Tribunal de Cuentas; el Sr. D. José Amat, Alcalde del barrio núm. 17, cuartel cuarto; el Sr. Dr. D. Manuel Obligado, vecino y del comercio; el Sr. Dr. Mariano Moreno,

abogado y relator interino de esta Real Audiencia; el señor D. Nicolás del Campo, contador de Cuadrante; el Sr. D. José Agustín Aguirre, de este comercio; el señor D. Andrés de Lezica, idem; el señor D. Manuel Barquín, de este vecindario; el Sr. D. Pedro Baliño, de este vecindario y comercio; el Sr. D. Domingo López; el Sr. D. Pedro Cerviño, Teniente Coronel urbano; el Sr. Licenciado D. Vicente López; el señor Licenciado D. Bernardo Nogué, profesor en cirugía; el Sr. D. Francisco Xavier Macela, Alcalde del barrio núm. 1, cuartel segundo; el Sr. D. Manuel Ruíz Obregón, idem del núm. 10, cuartel tercero; el Sr. D. Francisco Dozal, del vecindario y comercio; el Sr. Coronel urbano Don José Forneguera; El Rev. Pad. Dr. Juan Manuel Torres, Provincial del Convento de la Merced; el Rev. Pad. Juan Manuel Aparicio, Comendador del mismo; el Sr. Dr. D. Juan Francisco Seguí, abogado de esta Real Audiencia; el Sr. Don Pedro de Usua, vecino y de este comercio; el Sr. Dr. D. Luis Jose Chorroarin, Rector del Real Colegio de San Carlos; el Sr. D. Domingo Matheu, de este comercio; el Sr. Dr. D. Juan José Paso, abogado de esta Real Audiencia; el Sr. D. Francisco Antonio Herrero, vecino y de este comercio; el Sr. D. Domingo Achaval. idem; el Sr. D. José Martínez Escobar, idem; el Sr. Dr. D. Simón de Cossio, abogado de esta Real Audiencia; el Sr. D. Ildefonso Passo, vecino y del comercio; el Sr. Dr. D. Joaquín Campana, abogado de esta Real Audiencia; el Sr. Dr. D. José Darraqueira, idem; el Rev. Padre Fray Ramón Alvarez, Provincial de San Francisco; el Sr. Dr. Don Pascual Silva Braga, Presbítero; el Reverendo Padre Fray Manuel Albariño, Prior de Santo Domingo; el Sr. D. José Laguna, Capitán de Fragata de la Real Armada; el Sr. D. Francisco Antonio de Beláustegui, vecino y de este comercio; el Sr. D. José Antonio Capdevilla, idem; el Sr. D. Marcelino Calleja Saenz, Escribano de Cámara de la Real Audiencia; el Sr. D. Gerardo Bosch, vecino y del comercio; el Sr. D. Bonifacio Zapiola, abogado de esta Real Audiencia; el Sr. Dr. D. Domingo Viola, Presbítero; el Sr. Dr. D. Mariano Irigoyen, abogado de esta Real Audiencia; el Sr. D. Norberto Quirno, vecino y del comercio; el Sr. Dr. D. Vicente Atanasio Echavarría, abogado de esta Real Audiencia; el Sr. D. José María Riera, vecino y del comercio; el Sr. D. Pedro Martínez Fernández, idem; el Sr. Dr. D. Bernardo de la Colina, Presbítero; el Sr. Teniente Coronel urbano, D. Francisco Pico, capitán de granaderos del primer batallón de Patrios; el Sr. D. Juan Antonio Zelaya, vecino y del comercio;

el Sr. D. José Martín Zuloetas, idem; el Sr. D. Olaguer Reinal, idem; el Sr. Dr. D. Dámaso Fonseca, cura Rector más antiguo de la Concepción: el Sr. Dr. D. Pantaleón Rivarola, Presbítero; el Sr. Dr. D. Joaquín Riera, abogado de la Real Audiencia; el Sr. Dr. D. Manuel Alberti, Cura Rector de San Nicolás; el Sr. D. Miguel Gómez, de este vecindario; el Sr. D. José León Planchón, Presbítero; el Sr. Dr. D. Juan León Ferragut, capellán del regimiento de Dragones; el Sr. Brigadier Don José Ignacio de la Quintana, Coronel de dicho regimiento; el Sr. Capitán D. Pedro Durán, sargento mayor interino del regimiento fijo; el Sr. D. Félix Casamayor, Ministro General de Real Hacienda; el Sr. D. Francisco Orduña, Brigadier y sub-Inspector del Real Cuerpo de Artillería; el Sr. D. Juan Bautista Otamendi, vecino y de este comercio; el Sr. D. Ambrosio Pinedo, Capitán de Dragones; el Sr. Dr. D. Vicente Montes Carballo, Presbítero; el Sr. Dr. D. Ramón Vieytes, idem; el Sr. D. Valeriano Barrera, de este vecindario; el Sr. Don Juan Francisco Marcheses, idem; el Sr. D. Antonio Ramírez, idem; el Sr. D. Enrique Ballesteros, idem; el Sr. Dr. D. Matías Patrón, abogado; el Sr. D. Antonio Luis Berutti; el Sr. D. Agustín Donado; el Sr. Teniente Coronel urbano, D. Manuel Pinto; el señor D. Mariano Conde, de este vecindario; el Sr. D. Pedro Valerio Albaño, idem; el Sr. D. Domingo French, idem; el Sr. D. Vicente Dupui, idem; el Sr. D. Mariano Orma, idem; el Sr. D. Buenaventura de Arzac, idem; el Sr. D. Andrés de Aldao, idem; el Sr. D. Juan Ramón Urien, idem. — Se empezó la acta, leyéndose en públicas y altas voces por mi el Actuario, y en virtud de mandato del Exmo. Ayuntamiento, así el discurso que había dispuesto el mismo Exmo. Cabildo para la apertura de esta sesión, como el oficio con que solicitó el superior permiso para la formación del Congreso General, y el pasado en contestación por el Exmo. Señor Virrey, dando la facultad para ejecutarlo, siendo el tenor de todo, el siguiente:— «Fiel y generoso pueblo de Buenos Aires! Las últimas noticias de los desgraciados sucesos de nuestra metrópoli, comunicadas al público de orden de este superior gobierno, han contristado sobremanera vuestro ánimo, y os han hecho dudar de vuestra situación actual y de vuestra suerte futura:— Agitados de un conjunto de ideas que os han sugerido vuestra lealtad y patriotismo, habeis esperado con ansia el momento de combinarlas, para evitar toda división; y vuestros representantes, que velan constantemente sobre vuestra prosperidad, y que desean con el mayor ardor conservar

el orden y la integridad de estos dominios bajo la dominación del señor Don Fernando VII, han obtenido del Exmo. Señor Virrey, permiso franco para reuniros en un Congreso. Ya estais congregados: hablad con toda libertad, pero con la dignidad que os es propia, haciendo ver que ereis un pueblo sabio, noble, dócil y generoso. Vuestro principal objeto debe ser precaver toda división, radicar la confianza entre el súbdito y el magistrado, afianzar vuestra unión recíproca y la de todas las demás provincias, y dejar expeditas vuestras relaciones con los virreynatos del continente. Evitad toda innovación ó mudanza, pues generalmente son peligrosas y expuestas á división. No olvidéis que teneis casi á la vista un vecino que acecha vuestra libertad, y que no perderá ninguna ocasión, en medio del menor desorden. Tened por cierto que no podreis, por ahora, subsistir sin la unión de las provincias interiores del reino, y que vuestras deliberaciones serán frustradas si no nacen de la ley, ó del consentimiento general de todos aquellos pueblos. Así, pues, meditad bien sobre vuestra situación actual, no sea que el remedio, para precaver los males que temeis, acelere vuestra destrucción. Huid siempre de tocar en cualquier extremo, que nunca deja de ser peligroso. Despreciad medidas estreptosas ó violentas, y siguiendo un camino medio, abrazad aquel que sea más sencillo y más adecuado para conciliar, con nuestra actual seguridad, y la de nuestra suerte futura, el espíritu de la ley y el respeto á los magistrados.» — OFICIO DEL EXMO. CABILDO AL SEÑOR VIRREY: — EXMO. SEÑOR: — Sabedor el pueblo de los funestos acaecimientos de nuestra península, por los impresos publicados en esta ciudad de orden de V. E. y animado de su innata lealtad á nuestro soberano y de los sentimientos patrióticos con que siempre se ha distinguido, vacila sobre su suerte futura; y el deseo de que sea la más conforme á su felicidad y al objeto inalterable de conservar íntegros estos dominios, bajo la dominación del Señor Don Fernando VII, le hace zozobrar en un conjunto de ideas difíciles de combinar, y que si no se llegan á fijar cuanto antes, pueden causar la más lastimosa fermentación. Este Ayuntamiento, que vela sobre su prosperidad, y se interesa en gran manera por la unión, el orden y la tranquilidad, lo hace presente á V. E., para evitar los desastres de una convulsión popular, y desea tener de V. E. un permiso franco para convocar, por medio de esquelas, la principal y más sana parte de este vecindario, y en un Congreso público exprese la voluntad del pueblo y acuerde, las medidas más oportunas para evitar toda desgracia y

asegurar nuestra suerte venidera. Sirviéndose V. E. disponer que en el día del Congreso se ponga una reforzada guardación en todas las avenidas ó bocacalles de la Plaza, para que contenga todo tumulto y que sólo permita entrar en ella á los que con la csquela de convocación acrediten haber sido llamados:—Dios guarde á V. E. muchos años.—Sala Capitular de Buenos Aires, 21 de Mayo de 1810.—Juan José Lezica —Martín Gregorio Yaniz — Manuel José de Ocampo — Juan de Llano — Manuel Mansilla — Jaime Nadal y Guarda — Andrés Domínguez — Tomás Manuel de Anchorena — Santiago Gutiérrez — Dr. Julián de Leiva.—Exmo. Señor Virrey Don Baltazar Hidalgo de Cisneros.—CONTESTACIÓN:—Exmo. Señor:—Acabo de recibir el oficio de V. E. de esta fecha, ahora que son las diez de la mañana, por medio de sus dos diputados, á efecto de ponerlo en mis manos, y enterado de su contexto, estoy desde luego pronto á acordar á V. E. como lo ejecuto, el permiso que solicita, para el fin y con las condiciones que me indica en su citado: mediante lo que, luego que V. E. me participe el día en que ha de celebrarse el Congreso que se ha propuesto, dispondré que se aposten las partidas que V. E. solicita, en las avenidas de las bocas calles de las plaza, con el fin de evitar, según corresponde al mejor servicio de S. M. y tranquilidad pública de esta ciudad, cualquier tumulto ó conmoción que pudiera ocurrir; como igualmente para que solo permitan entrar en ella á los vecinos de distinción, que por medio de la esquela de convocación acrediten en debida forma haber sido llamados por V. E. al efecto. Y espero del discernimiento constante y acreditada fidelidad de V. E., é interés que siempre ha manifestado por el bien público de esta ciudad, que como su Representante, esforzará todo el celo que lo caracteriza y distingue, á fin de que nada se ejecute ni acuerde que no sea en obsequio del mejor servicio de nuestro amado soberano el señor D. Fernando VII, integridad de estos sus dominios y su completa obediencia al Supremo Gobierno Nacional que lo represente durante su cautividad. Pues que, como V. E. sabe bien, es la monarquía una é indivisible, y por lo tanto debe obrarse con arreglo á nuestras leyes, y en su caso, con conocimiento y acuerdo de todas las partes que la constituyen, aun en la hipótesis arbitraria de que la España se hubiese perdido enteramente y faltase en ella el gobierno supremo representativo de nuestro legítimo Soberano.—Dios Guarde á V. E. muchos años.—Buenos Aires, 21 de Mayo de 1810 —Baltazar Hidalgo de Cisneros—Exmo. Cabildo, justicia

y regimiento de esta ciudad.» Después de leído todo, y en circunstancias de deber procederse á la votación por los señores del Congreso, se promovieron largas discusiones que hacían de suma duración el acto. En cuyo estado, y para abreviar y simplificar este en lo posible, atendida la multitud de votantes, estrechez del tiempo y espectación en que se hallaba el pueblo, se adoptó unánimemente el sistema de fijar una proposición para absolverla respectivamente. Y acordada la siguiente, á saber: «si se ha de subrogar otra autoridad á la superior que obtiene el Exmo. Señor Virrey, dependiente de la metrópoli, salvando esta; ó independiente, siendo del todo subyugada», fué desaprobada y pedido que se procediese á otra proposición más suscita. Y publicada esta, que era reducida á «si la autoridad soberana ha caducado en la Península ó se halla en incierto», con la calidad de que los señores vocales deberían entrar al acuerdo, á poner su voto en secreto, fué igualmente desatendida y se pidió que la votación fuese pública; por lo que se sentó el siguiente, á saber:—«Si se ha de subrogar otra autoridad á la superior que obtiene el Exmo. Señor Virrey, dependiente de la soberana que se ejerza legítimamente á nombre del Sr. D. Fernando VII y en quién?; y habiendo sido generalmente aprobada, se resolvió por los señores del Exmo Ayuntamiento que los señores vocales entrasen á la Sala de acuerdos á poner su voto cada uno de por sí; y que rubricándolo solamente, por simplificar el acto en lo posible, lo publicase después el escribano:—Y en su virtud se procedió á la votación, en el orden y forma siguiente:—Por el Ilustrísimo señor Obispo, se dijo:—Que mediante las noticias de la disolución de la Junta Central, en quien residía la soberanía, infunde bastante probabilidad para dudar de su existencia; consultando la satisfacción del pueblo y la mayor seguridad presente y futura de estos dominios por su legítimo soberano el señor D. Fernando VII, es de dictamen que el Exmo. Señor Virrey continúe en el ejercicio de sus funciones, sin más novedad que la de ser asociado para ellas del señor Regente y del señor Oidor de la Real Audiencia, Don Manuel de Velasco: lo cual se entienda provisionalmente por ahora y hasta ulteriores noticias, sin perder de vista proporcionar aquellos medios que correspondan, para que permanezca expedita la comunicación con las ciudades interiores del reino, con arreglo á la proclama del Exmo. Cabildo.—Por el Exmo. Señor Don Pascual Ruiz Huidobro, se dijo:—Que debía cesar la autoridad del Exmo Señor Virrey y reasumirla el Exmo. Cabildo como re-

presentante del pueblo, para ejercerla interin forme un gobierno provisorio dependiente de la legítima representación que haya en la Península, de nuestro augusto y amado Monarca, el Sr. D. Fernando VII; juntando esta opinión en los datos que de palabra ha manifestado al Exmo. Cabildo. — Por el señor Oidor D. Manuel José de Reyes, se dijo: — Que no encuentra motivo, por ahora, para la subrogación, pero que en caso de que la pluralidad de este ilustre Congreso, juzgue que lo hay, pueden nombrarse de adjuntos, para el despacho del Gobierno al Exmo. Señor Virrey, los señores Alcalde ordinario de primer voto y Procurador Sindico General de Ciudad. — Por el señor Don Diego de la Vega, contador mayor Decano, se dijo: — Que reproduce el anterior voto del señor D. Manuel José de Reyes, con solo la diferencia de que los adjuntos al Exmo. Señor Virrey sean de la elección del Exmo. Cabildo. — Por el señor D. Pedro Viguera, Tesorero de la Real Aduana, se dijo: — Que subsistia el Exmo. Señor Virrey en la misma autoridad que le ha conferido y puesto á su cargo el señor Rey D. Fernando VII, y á su nombre la Junta Central; y que en caso de haber lugar á la subrogación á pluralidad de votos, sea en el Brigadier señor D. Bernardo de Velasco. — Por el señor D. Juan Andrés de Arroyo, Contador Mayor, se dijo: — Que reproduce el voto del señor D. Diego de la Vega. — Por el señor D. Bernardo Lecoq, se dijo: — Que reproducía el voto del Exmo. Señor D. Pascual Ruíz Huidobro. — Por el señor Coronel D. Joaquín Mosqueira, se dijo: — Que reproduce el voto del Exmo. Señor D. Pascual Ruíz Huidobro. — Por el señor D. Eugenio Balbastro, se dijo: — Que reproduce el voto del Exmo. Señor D. Pascual Ruíz Huidobro. — Por el Sr. D. Joaquín de Madariaga, se dijo: — Que igualmente reproduce el voto del Exmo. Señor Don Pascual Ruíz Huidobro. — Por el Sr. D. José María Balbastro, se dijo: — Que se conformaba con el voto del Teniente General, el Exmo. Señor D. Pascual Ruíz Huidobro. — Por el señor D. José Serras y Valle, se dijo: — Que igualmente se conforma con el voto del Exmo. Señor D. Pascual Ruíz Huidobro. — Por el señor D. Manuel Ventura de Haedo, se dijo: — Que se conformaba con el voto del Exmo. Señor D. Pascual Ruíz Huidobro. — Por el señor D. Antonio Luciano Ballesteros, se dijo: — Que se conformaba con el voto del Exmo. Señor D. Pascual Ruíz Huidobro. — Por el señor D. Manuel Antonio Bazo, se dijo: — Que reproduce el voto del Exmo. Señor D. Pascual Ruíz Huidobro. — Por el señor D. Francisco Xavier de

Riglos, se dijo:—Que se conformaba con el parecer del mismo Exmo. Señor D. Pascual Ruíz Huidobro.—Por el señor D. Ramón Díaz, se dijo:—Que siga el Exmo Virrey y que en el caso de que por mayoría de votos resulte haber caducado el Superior Gobierno siga asociado el Exmo. Cabildo.—Por el señor Don Feliciano A. Chiclana, se dijo:—Que reproduce el voto del señor D. Pascual Ruíz Huidobro, añadiendo que el señor Síndico Procurador General tenga voto decisivo en los negocios.—Por el señor D. Hipólito Vieytes, se dijo:—Que se conforma con el voto anterior del señor Chiclana.—Por el señor D. Nicolás Peña, se dijo:—Que se conforma con el voto del señor Doctor Feliciano Antonio Chiclana.—Por el señor Juan José de Rocha, se dijo:—Que se conforma con el voto del mismo.—Por el señor Don Juan Antonio Pereyra, se dijo:—Que se conforma igualmente con el voto del mismo.—Por el señor Don Esteban Romero, se dijo:—Que reproduce el voto del Exmo. Señor Don Pascual Ruíz Huidobro.—Por el señor D. Juan de Almagro, se dijo:—Que no habiéndose recibido por ahora documento alguno oficial que asegure la pérdida total de España, es de parecer que no nos hallamos aún en el caso de causar novedad alguna; pero que en el caso de que la pluralidad determine que debe hacerse novedad á fin de alejar todo motivo de recelo y desconfianza, se asocien al gobierno aquellas personas de mayor probidad que tuviese por conveniente.—Por el señor Francisco Orduña, se dijo:—Que por no estar perdida la España y porque no se han convocado las demás Provincias, es de parecer que siga el Exmo Señor Virrey en el mando.—Por el señor Ramón Balcarce, se dijo:—Que se conforma con el voto del señor Doctor Don Feliciano Antonio Chiclana.—Por el señor D. Simón de Rojas, se dijo:—Que es de parecer debe existir la autoridad superior en el Exmo. Virrey y que en el caso de que á pluralidad de votos deba cesar en el mando se establezca una junta de vecinos para el gobierno, nombrada por el Exmo. Cabildo.—Por el señor Comandante Don Cornelio Saavedra, se dijo:—Que consultando la salud del pueblo y en atención á las actuales circunstancias, debe subrogarse el mando superior, que obtenía el Exmo. Señor Virrey, en el Exmo. Cabildo de esta Capital, interin se forma la corporación ó Junta que debe ejercerlo, cuya formación debe ser en el modo y forma que se estime por el Cabildo y no quede duda de que el pueblo es el que confiere la autoridad ó mando. Por el señor Comandante D. Pedro Andrés García, se dijo que considerando

la suprema ley y la salud del pueblo y habiendo advertido y aun tocado por sí mismo la efervescencia y acaloramiento de él con motivo de las ocurrencias de la metrópoli, y para que varíe el gobierno que es á lo que aspira, cree de absoluta necesidad que así se realice antes que tocar desgraciados extremos; como los que se persuade habría, si aun no se resolviese así en la resolución de esta ilustre Junta. Lo repite, por los conocimientos que en los días de antes de ayer, ayer y anoche ha tocado por sí mismo y tranquilizado los ánimos de los que con instancia en el pueblo así lo piden: en cuyo caso opina que recaiga en el Exmo. Cabildo por ahora y mientras se resuelva la manera ó forma de Gobierno que haya de constituirse para la seguridad de la soberanía del señor Fernando VII, en cuyo supuesto si puede, pide, también, que al señor Síndico Procurador se le habilite con voto decisivo en este Exmo. Cuerpo.— Por el señor Francisco Antonio Ortiz de Ocampo se dijo: —que reproduce el dictamen del señor D. Cornelio Saavedra en todas sus partes, añadiendo que tenga voto decisivo el señor Síndico Procurador General. — Por el señor Don Andrés de Pinedo y Arroyo se dijo: Que reproduce el voto del señor Don Pedro Andrés García. -- Por el señor don Manuel de Luzuriaga se dijo:—Que reproduce el mismo voto.— Por el señor Don Manuel de Ochoteco, se dijo:—Que conociendo el genio de los habitantes de las provincias interiores y á objeto de evitar la separación de ellas de esta capital y otros sucesos lastimosos, es su parecer siga el Exmo. Señor Virrey, acompañado del Alcalde de primer voto y del señor Dr. Julián de Leiva. — Por el señor D. Ulpiano Barreda, se dijo:—Que se conforma con el voto del señor Cornelio de Saavedra en todas sus partes.— Por el señor D. Juan Canaveris se dijo:—que reproduce el voto del señor Feliciano A. Chiclana. — Por el señor Hilario Ramos se dijo:—que se conforma con el voto del señor Comandante don Cornelio Saavedra.— Por el señor Don Justo Pascual Linch, se dijo:—que se conforma con el voto del señor Don Manuel José de Reyes.— Por el señor Don Manuel de Laval se dijo:—que igualmente se conformaba con el mismo voto. — Por el señor Don Miguel de Irigoyen se dijo:—que se conforma con el voto del señor Don Cornelio Saavedra, agregando que deba tener voto decisivo el señor Síndico Procurador.— Por el señor Don Vicente Capdevilla se dijo:—que se conforma con el voto del señor Manuel José de Reyes. — Por el señor Don Diego de Herrera, se dijo: —que reproduce el voto

del señor Cornelio Saavedra, con el aditamento de que tenga voto decisivo el señor Síndico Procurador General.—Por el Doctor Gregorio Tagle se dijo:—que reproduce el voto del señor Cornelio Saavedra, con el mismo aditamento.—Por el señor Agustín Pinedo se dijo:—que se conforma con el mismo voto y aditamento de que lo tenga decisivo el señor Síndico Procurador.—Por el señor Don Mariano Larrazabal se dijo:—Que igualmente se conforma con el voto del señor Don Cornelio Saavedra y que precisamente tenga voto decisivo el señor Síndico Procurador.—Por el señor Martín de Arandía, se dijo:—que reproduce el dictamen del señor Cornelio Saavedra, teniendo voto decisivo el señor Síndico Procurador.—Por el señor Don Ignacio de la Quintana se dijo:—Que interesado en el mejor servicio de Dios, del Rey, del honor y tranquilidad del país, reproduce el voto del señor Don Manuel José de Ochoteco.—Por el señor Don Rodrigo Rábago, se dijo:—Que reproduce en todas sus partes el voto del señor don Pedro Andrés García.—Por el señor Fiscal de lo Civil, Don Manuel Genaro Villota se dijo: Que se conforma con el voto del señor Manuel José de Reyes.—Por el señor Doctor Don Domingo Belgrano, se dijo:—Que se conforma con el voto del señor Cornelio Saavedra debiendo tener voto decisivo el señor Síndico Procurador y precisamente para establecer junta á la mayor brevedad.—Por el señor Doctor Don Andrés Florencio Ramírez, se dijo:—Que reproduce el voto que acaba de leerse.—Por el señor Don Melchor Fernández se dijo:—Que cree que este pueblo se halla en estado de disponer libremente de la autoridad; que por defecto ó caducidad de la Junta á quien había jurado obediencia, ha recaído en él en la parte que le corresponde, y que en caso de subrogarse sea en el Exmo. Ayuntamiento mientras se establece el modo y forma de gobierno.—Por el señor Don Francisco Tomás de Anzotegui se dijo:—Que se conforma con el voto del señor José Manuel de Reyes.—Por el señor Francisco de la Peña:—Que mientras no tenga noticias más ciertas de nuestra suerte en España, nada se innove; y en absolución de la segunda parte de la pregunta, se conforma con el voto del señor José Manuel de Reyes.—Por el señor Don Antonio Villamil se dijo:—Que debe continuar el señor Virrey en todo el lleno de facultades que le concedan las leyes; y en cuanto á la segunda parte de la pregunta se conforma con el voto del señor José Manuel de Reyes.—Por el señor Don Manuel de Velazco se dijo:—Que se conformaba con el voto del señor José Manuel de Reyes.—Por el señor Doc-

tor Agustín Fabre se dijo:—que se conformaba con el voto del señor Don Pedro Andrés García.—Por el señor Don Joaquín Belgrano se dijo:—que se conformaba con el voto del señor Don Pedro Andrés García, debiendo tenerlo decisivo el caballero Síndico Procurador General. — Por el señor Julián de Molino Torres se dijo:—Que se conformaba con el voto del señor José Manuel de Reyes.—Por el señor Don Mariano García Echaburu: - Que reproduce el voto dado por el señor Cornelio Saavedra y lo que ministra el que ha producido el señor Don Pedro Andrés García.—Por el señor Ildefonso Ramos se dijo:—Que se conformaba con el voto de Don Cornelio Saavedra, con la precisa calidad de que el caballero Síndico Procurador General deba tener voto con los demás señores vocales. — Por el señor Don Francisco Xavier Pizarro, se dijo:—Que se conformaba en todo con el voto del señor José Manuel de Reyes. — Por el señor Don José María Cabrera, se dijo:—Que se conformaba con el voto del señor Manuel José de Reyes.—Por el Reverendo Padre Provincial de San Francisco Fray Ramón Álvarez, se dijo:—Que debe continuar en el ejercicio de su autoridad; pero que en caso de que á pluralidad de votos resultase haber cesado en su autoridad, es de sentir que recaiga en el Exmo. Ayuntamiento. —Por el Reverendo Padre Guardián de la Observancia, Fray Pedro Cortinas, se dijo:—Que se conformaba en todo con el parecer del señor Oidor, Don Manuel José de Reyes.—Por el Reverendo Padre Guardián de la Recolectión, Fray Pedro Santibañes, se dijo:—Que en todo se conformaba con el parecer del señor Don José Manuel de Reyes.—Por el Reverendo Padre Provincial de la Merced, Doctor Fray Manuel Torres, se dijo:—Que se conformaba en todo con la votación del señor Comandante D. Cornelio Saavedra.—Por el Reverendo Padre Prior de Santo Domingo, Fray Manuel Albariño, se dijo:—Que se conformaba en todo con el voto del señor D. Cornelio Saavedra.—Por el Reverendo Padre Comendador de la Merced, Fray Manuel Aparicio, se dijo:—Que se conformaba en todo con el voto del señor Don Cornelio Saavedra, reproduciéndolo en todas sus partes. — Por el Reverendo Padre Prefecto de Bethlemitas, Fray José Vicente de San Nicolás, se dijo:—Que se conformaba en todo con el voto del señor José Manuel de Reyes.—Por el Reverendo Padre Maestro Fray José Ignacio Grela, se dijo: — Que ha fenecido la autoridad del Exmo. Señor Virrey: que ésta debe recaer en el Exmo. Cabildo, hasta tanto que, reunido el pueblo por medio de los representantes que él

mismo elija, designe los sujetos que deben componer la Junta Gubernativa, hasta la reunión de las Provincias interiores.—Por el señor D. José Luis de Chorroarin, se dijo:—Que bien consideradas las actuales circunstancias, juzga conveniente al servicio de Dios, del Rey y de la Patria, se subrogue otra autoridad á la del Exmo. Señor Virrey; debiendo recaer el mando en el Exmo. Cabildo, en el interin se dispone la erección de una Junta de Gobierno; y que entretanto tenga voto decisivo el caballero Síndico Procurador General.—Por el señor Doctor D. Francisco Planes, se dijo:—Que es de parecer, que en atención á los justos temores del pueblo, acerca de la total pérdida de la península, D. Baltazar Hidalgo de Cisneros subrogue el mando político en el Exmo. Cabildo, y el militar en el señor D. Cornelio Saavedra, por convenir que la fuerza armada se halle solo bajo una cabeza, y que hecha la abdicación por el Exmo. Señor Don Baltazar Hidalgo de Cisneros, se le deba á este tomar residencia acerca de los procedimientos de la Paz.—Por el señor Don Antonio Saenz, se dijo:—Que ha llegado el caso de reasumir el pueblo su originaria autoridad y derechos; y mientras que los afianza en una junta sana y espectable, deben subrogarse en el Exmo. Cabildo, con voto en su lugar al caballero Síndico Procurador General.—Por el señor Doctor D. Juan Dámaso Fonseca, Cura Rector de la Concepción, se dijo:—Que se conformaba con el voto del señor Don Cornelio Saavedra.—Por el señor Doctor Don José León Planchón, se dijo:—Que habiendo caducado la autoridad suprema, era de parecer recayese ésta en el Exmo. Cabildo, teniendo voto decisivo el caballero Síndico Procurador General.—Por el señor Doctor Don Juan Nepomuceno de Sola, se dijo:—Que en atención á las críticas circunstancias del día, es de sentir que debe subrogarse el mando en el Exmo. Cabildo, con voto decisivo el caballero Síndico Procurador General: debiéndose entender esto provisionalmente hasta la erección de una Junta Gubernativa cual corresponde, con llamamiento de todos los diputados del Virreinato. — Por el señor Doctor Don Ramón Vieytes, se dijo:—Que ha fenecido la autoridad de la Suprema Junta Central, y por consiguiente la del Exmo. Señor Virrey; que esta autoridad recaiga interinamente en el Exmo. Ayuntamiento, teniendo voto decisivo el caballero Síndico Procurador General, hasta que explorada por cuarteles la voluntad del pueblo, se elijan los miembros que hayan de constituir una Junta provisional.—Por el señor Doctor Don Juan León Ferragut, se

dijo: — Que en atención á las noticias funestas que hemos tenido de Europa, y haber, por consiguiente, fenecido la Suprema Junta Central, en quien residía la autoridad suprema cuya dominación habíamos jurado, juzga debe reasumirse el derecho de nombrar superior en los individuos de esta ciudad; y por consiguiente, el Exmo. Cabildo que lo representa deberá gobernar interinamente, hasta que disponga, con el pulso y prudencia que le es característica, determinar el modo de Gobierno que sea mas conveniente para la seguridad de toda la América. — Por el señor Doctor Don Pantaleón Rivarola, se dijo: — Que respecto á no estar instruido en los datos suficientes para votar en materia tan ardua, obedece y obedecerá, como siempre lo ha practicado, á quien representare la autoridad suprema de nuestro legítimo soberano el señor D. Fernando VII. — Por el señor Doctor Don Manuel Alberti, se dijo: — Que se conforma en todo con el voto del señor Doctor Don Juan Nepomuceno de Sola. — Por el señor Doctor D. Nicolás Calvo, Cura rector de la Concepción, se dijo: — Que para la decisión de las gravísimas dudas, si ha caducado la autoridad en la Suprema Junta Central, en la Regencia posteriormente nombrada, en el actual Virrey y en las demas autoridades, juzga que para no exponerse á una guerra civil, se debe oír á los demas pueblos del distrito, y que por lo tanto nos debemos conservar en el actual estado hasta la reunión de los diputados de los pueblos interiores con el de la Capital. — Por el señor Dr. D. Bernardo de la Colina, se dijo: — Que por un principio de equidad y atendiendo á la unidad y precisas relaciones de esta capital con los demas pueblos interiores, y á los disturbios que se originan de la mudanza de gobierno, debe permanecer el actual, con la condición, que para satisfacción completa de este vecindario, se asocien al Exmo. Señor Virrey cuatro individuos, uno del estado eclesiástico, otro del militar, otro profesor del derecho y el último del comercio, elegidos por el Exmo. Cabildo, hasta que se reunan los votos de las demás Provincias: y en caso de pluralidad de votos para la deposición del señor Virrey, recaiga la elección de sujeto que lo releve, en el Exmo. Cabildo. — Por el Sr. Dr. D. Pascual Silva Braga, se dijo: — Que en todas sus partes reproducía el dictamen del señor D. Cornelio Saavedra. — Por el señor Doctor D. Cosme Argerich, se dijo: — Que habiendo caducado la suprema autoridad, debe esta reasumirse en el pueblo, y por consiguiente interinamente en el Exmo. Cabildo, hasta que con la mayor brevedad

disponga las incorporaciones del vecindario que, por medio de sus Diputados, deben formar la Junta General del Virreinato, hasta que las Provincias decidan el sistema de Gobierno que se deba adoptar.—Por el Sr. Licenciado don Justo García y Valdez se dijo:—Que para evitar los males que ya amenaza la duda suscitada, si ya ha caducado ó no el supremo gobierno de la metrópoli, conviene que recaiga el mando en el Exmo. Cabildo interinamente, hasta que se organice el gobierno que deberá regirnos, teniendo siempre voto decisivo el señor Síndico Procurador General.—Por el señor D. Marcelino Callejas, se dijo:—Que se conformaba en todo con el voto del señor D. Manuel José de Reyes.—Por el Sr. D. Miguel Gerónimo Garmendia, se dijo:—Que se conformaba en todas sus partes con el voto del señor D. Cornelio Saavedra.—Por el señor D. José Superi, se dijo:—Que se conformaba en todo con el voto del Exmo. Señor D. Pascual Ruiz Huidobro.—Por el señor D. Felipe Castilla se dijo:—Que se conformaba en todo con el voto del Sr. Dr. D. Luis José Chorroarín.—Por el señor D. Antonio Ruiz se dijo:—Que se conformaba en todo con el voto del señor D. Cornelio Saavedra.—Por el señor D. José Botello se dijo:—Que se conformaba en todo con el voto del señor D. Cornelio Saavedra.—Por el señor D. Fermín de Tocornal, se dijo:—Que se conformaba en todo con el mismo dictamen del señor D. Cornelio Saavedra, y voto decisivo en el caballero Síndico Procurador General.—Por el señor D. Francisco Mancilla se dijo:—Que igualmente se conformaba en todas sus partes con el voto del señor D. Cornelio Saavedra.—Por el señor D. Francisco Prieto de Quevedo, se dijo:—Que interin no tengamos noticias más ciertas de nuestra España, no se haga innovación alguna, y en cuanto á la segunda parte de la pregunta, se conforma con el voto del señor D. Manuel José de Reyes.—Por el señor D. Alonso de Quesada se dijo:—Que se conformaba en todo con el voto del señor D. Cornelio Saavedra.—Por el señor D. Félix Casamayor se dijo:—Que no contempla necesaria la subrogación del mando, pero que para conciliar los intereses del pueblo con los de la buena y sana administración de justicia, bastará se den por adjuntos al Exmo. Señor Virrey, los señores Alcalde de primer voto y Síndico Procurador de esta Exma. Ciudad, quienes convocarán á las capitales y ciudades sufragáneas del virreinato, para que en consorcio y reunión de sus votos se establezca el método de gobierno sucesivo.—Por el señor D. Vicente Carballo, se dijo:

Que se conforma en todo con el voto del señor D. Cornelio Saavedra, entendiéndose deba tener voto decisivo el caballero Síndico Procurador General.—Por el señor D. José Martínez de Hoz se dijo:—Que no encuentra bastantes datos para considerar necesaria la remoción del Exmo. Señor Virrey; pero que para evitar todo recelo gobierne con asociación de dos individuos, que tenga á bien nombrar el Exmo. Cabildo.—Por el señor D. José Barreda, se dijo:—Que aun no encuentra mérito para tratarse de hacer alteración sobre este actual Gobierno, pero que si obligase á ella la pluralidad de votos, se verifique por dos ó más adjuntos que el Exmo. Cabildo tenga á bien nombrar al actual Virrey, sin perder de vista los inconvenientes de la falta de previo acuerdo con los gobiernos interiores.—Por el señor D. Martín Thompson, se dijo:—Que se conforma en todo con el voto del señor D. Cornelio Saavedra, debiendo tener voto el caballero Síndico Procurador General.—Por el señor D. José Gregorio Belgrano, se dijo:—Que igualmente se conforma en todo con el voto del señor D. Cornelio Saavedra, y que tenga voto decisivo el caballero Síndico Procurador General.—Por el señor D. Saturnino Sarasa, se dijo:—Que se conforma en todo con el voto del señor D. Cornelio Saavedra, y que el caballero Síndico Procurador General tenga voto decisivo.—Por el señor D. Fernando Díaz se dijo:—Que reproducía el voto del señor D. Cornelio Saavedra en todas sus partes.—Por el señor doctor D. Esteban Hernandez, se dijo:—Que en todas sus partes reproducía el voto del señor D. Cornelio Saavedra, y que el Sr. Síndico Procurador General tenga voto decisivo.—Por el señor D. José María Morell, se dijo:—Que se conforma con el voto del señor Manuel José de Reyes.—Por el señor D. Juan Bautista Elorriaga, se dijo:—Que mediante á no haber datos bastantes por ahora, exista en el mando el Exmo. Señor Virrey; y que en el caso de que la pluralidad de votos decida por su no existencia en el mando, recaiga este en el Exmo. Ayuntamiento.—Por el Sr. D. José Pastor Lezica, se dijo:—Que se conforma en todo con el voto del señor Dr. D. Juan Nepomuceno de Sola.—Por el Sr. Don Juan Bautista Castro, se dijo:—Que se conforma en todo con el voto del Sr. D. Luis José de Chorroarin.—Por el señor D. Hermenegildo Aguirre, se dijo:—Que en concepto á haber caducado la soberanía en la Suprema Junta Central, es su dictamen se subroge provisionalmente el gobierno general del Exmo. Virrey en el Exmo. Cabildo, previas las circunstancias de acompañar á este Exmo. Ayun-

tamiento, en calidad de consejeros: por lo que pertenece á lo político del gobierno, el Dr. D. Julián de Leiva, el Sr. D. Juan José Castelli, el Dr. D. Juan José Paso, y el Dr. D. Mariano Moreno; — y en lo militar, D. Cornelio Saavedra: todo esto provisionalmente, hasta la formación del nuevo gobierno. — Por el Sr. D. José Francisco Vidal, se dijo: — Que reproduce en todas sus partes el voto del Sr. Dr. D. José Luis Chorroarín. — Por el señor D. Agustín Pío de Elía, se dijo: — Que atentas las razones que han expuesto los señores D. Cornelio Saavedra y D. Pedro Andrés García, reproduce el voto del primero, concurriendo el señor Síndico con voto activo. — Por el señor D. Miguel Escuti, se dijo: — Que no halla mérito para innovar; pero en el caso de que á pluralidad de votos deba hacerse, que entonces gobierne el Exmo. Señor Virrey, asociado con los señores Regente de esta Real Audiencia y Síndico Procurador General. — Por el señor D. Pedro Francisco de Arteaga, se dijo: — Que no hay mérito para innovar el mando en el Exmo. Señor Virrey, y que en caso de no tener la pluralidad de votos para el privativo mando, siga asociado con el señor Regente de la Real Audiencia y el caballero Síndico Procurador de ciudad, opinando igualmente que de tratarse de alguna innovación substancial, se acuerde previamente con las Provincias interiores. — Por el Sr. D. José María de las Carreras, se dijo: — Que reproduce el anterior voto del señor D. Pedro de Arteaga, con solo el aditamento de que en su caso deba ser también adjunto el señor D. Cornelio Saavedra. — Por el señor D. Francisco Antonio de Letamendi, se dijo: — Que en todo se conforma con el voto del señor Dr. D. Juan Nepomuceno de Sola. — Por el señor D. Domingo López: — Que reproduce el voto del señor Doctor D. Juan Nepomuceno de Sola. — Por el señor D. Angel Sánchez Picado, se dijo: — Que reproduce en todas sus partes lo expuesto por el señor D. Francisco de la Peña Fernández. — Por el señor D. Basilio Torrecillas, se dijo: — Que sus sentimientos son iguales á los de los Drs. D. Juan Nepomuceno de Sola y D. Manuel Alberty. — Por el señor D. Miguel Sáenz, se dijo: — Que reproduce en todo el voto del señor D. Cornelio Saavedra, con la adición de que tenga voto decisivo el caballero Síndico Procurador General. — Por el señor D. Manuel Belgrano, se dijo: — Que reproduce el voto del señor D. Cornelio Saavedra, y que el caballero Síndico Procurador General tenga voto decisivo. — Por el señor D. Juan José Castelli, se dijo: — Que se conforma con el voto del señor

D. Cornelio Saavedra, con calidad de tener voto decisivo, durante el gobierno en el Exmo. Cabildo, el señor Síndico, y que la elección de los vocales de la corporación se haga por el pueblo, junto en Cabildo general sin demora. — Por el señor Don Matías de Frigoyen, se dijo: — Que reproduce en todas sus partes el voto del Dr. Juan José Castelli. — Por el señor D. Ignacio de Rezabal, se dijo: — Que entre tanto no se tenga noticia positiva de haber espirado en la Península la autoridad suprema legítima de la Nación, no se innove el sistema de gobierno: que siga en el mando el Exmo. Señor Virrey, asociado por los señores Alcalde de primer voto y Síndico Procurador General de ciudad; con advertencia que, por ningún acontecimiento, se altere en esta ciudad el sistema político, sin previo acuerdo de los pueblos del distrito del Virreinato, por depender su existencia política de su unidad con ellos. — Por el señor Prior del Real Consulado, Don Antonio Pirán, se dijo: — Que se conformaba con el voto del señor D. Manuel José de Reyes. — Por el señor D. José Hernández se dijo: — Que igualmente se conforma en todas sus partes con el voto del señor Don Manuel José de Reyes. — Por el señor Contador Mayor Don Ramón de Oromí, se dijo: Que no se cree con autoridad alguna para influir con su voto en alterar las autoridades constituidas, y en el presente caso no le queda más que desear que no se haga innovación alguna en ellas. — Por el señor Don Pedro Balleño se dijo: — Que ignora el supuesto de si la España existe ó no, é igualmente ignora si se debe ó no revalidar la autoridad del Exmo. Señor Virrey; pero en caso que justos motivos para ello hagan necesaria su separación del mando, se haga cargo de él el Exmo. Cabildo. — Por el señor Doctor Don Francisco Seguí se dijo: — Que siendo un principio legal que es mejor ocurrir en tiempo, que no después de recibir la herida buscar remedio, debiendo aplicarle al presente caso en que nos amenazan peligros bastante inminentes, atendida la notoria conmoción popular por el conocimiento de haber llegado el caso de reasumir sus derechos primitivos; en cuya virtud, para evitarlos, juzga de forzosa necesidad, quede depositada la autoridad interinamente en el Exmo. Cabildo, hasta tanto que se explore la voluntad general de los demás pueblos, por el medio más fácil que adopte el mismo Exmo. Cabildo, debiendo tener voto activo el caballero Síndico Procurador General, y decisivo en caso de discordia. — Por el señor Don Felipe Cardoso, se dijo: — Que reproduce en todas sus partes el voto dado por el señor Catedrático, Doctor Pla-

nes, con la previa circunstancia de tener voto activo y decisivo el caballero Síndico Procurador General.—Por el señor Juan Ramón de Urien:—Que se conforma con el voto del señor D. Cornelio Saavedra, debiendo tenerlo decisivo el caballero Síndico Procurador General.—Por el señor D. Tomás José de Boizo, se dijo:—Que se conforma en todo con el voto del señor D. Cornelio Saavedra.—Por el señor Don Juan Antonio Zelaya, se dijo:—Que se conforma con el voto dado por el señor Don Manuel José de Reyes.—Por el señor Don Nicolás de Vedia, se dijo:—Que reproduce el voto del señor Don Vicente Carballo.—Por el señor Don Norberto de Quirno y Echandía, se dijo:—Que reproduce el voto del señor Don Manuel José de Reyes.—Por el señor Don Agustín de Orta y Azamor, se dijo:—Que reproduce el voto del señor Don Manuel José de Reyes.—Por el señor Don Pedro Durán, se dijo:—Que reproduce el voto del señor Don Manuel José Reyes.—Por el señor Don Agustín Lizaur se dijo:—Que se conforma con el voto del señor Don Pedro Andrés García.—Por el señor Don José Antonio Echenagucía se dijo:—Que se conforma con el dictamen del señor Don Pedro Andrés García.—Por el señor Don José Soliveres se dijo:—Que reproduce lo expuesto por el señor Don Pedro Andrés García.—Por el señor Comandante Don Martín Rodríguez, se dijo:—Que en la imposibilidad de conciliar la permanencia de la autoridad del gobierno con la opinión pública, reproducía en todas sus partes el dictamen del señor Cornelio Saavedra, y el de que el señor Síndico tenga voto activo y decisivo en su caso, es decir, activo cuando no haya discordia, y decisivo cuando la haya.—Por el señor D. Simón de Cossio, se dijo:—Que se conformaba en todas sus partes con el anterior dictamen del señor D. Martín Rodríguez.—Por el señor Dr. D. José Darragueira, se dijo:—Que igualmente reproducía el parecer del señor D. Martín Rodríguez.—Por el señor D. José de Seide, igualmente se reprodujo en todas sus partes el antecedente dictamen.—Por el señor Doctor Don Vicente Anastasio de Echevarría, se dijo: Que igualmente se conformaba en todo con el parecer del señor Don Martín Rodríguez.—Por el señor Dr. D. Bernardino Rivadavia, se dijo:—Que reproducía también el parecer del señor D. Martín Rodríguez.—Por el señor Dr. S. Mariano Irigoyen, se dijo:—Que igualmente reproducía el parecer del señor D. Martín Rodríguez.—Por el señor Don Francisco del Passo, se dijo:—Que igualmente se conformaba con el parecer del señor Don Martín Rodríguez.—

Por el señor Doctor Don Mariano Moreno, se dijo:— Que reproducía en todas sus partes el dictamen del señor Don Martín Rodríguez.— Por el señor Don Bernardo Nogué, se dijo:— Que se conformaba igualmente con el voto del señor D. Martín Rodríguez.— Por el señor D. Gerónimo de Lasala, se dijo:— Que también reproducía en todo el voto del señor D. Martín Rodríguez.— Por el señor Don Juan Ramos, se reprodujo igualmente el voto del señor D. Martín Rodríguez.— Por el señor Dr. D. Juan José Paso, se dijo: Que se conformaba con el voto del señor Doctor Luis Chorroarín.— Por el señor Don Francisco Antonio Escalada, se dijo: Que se conformaba en todas sus partes con el voto del señor Comandante Don Martín Rodríguez.— Por el señor Don Tomás Antonio Lezica, se dijo:— Que reproducía el voto del señor D. Cornelio Saavedra, teniendo voto decisivo el señor Síndico Procurador.— Por el señor don D. Francisco Antonio Herrero, se dijo:— Que se conformaba en todo con el voto del señor Don Manuel de Reyes.— Por el señor Don Francisco Neira y Arellano, se dijo:— Que igualmente se conformaba en todo con el voto del señor Don Manuel de Reyes.— Por el señor Don Francisco Antonio de Belaustegui, se dijo:— Que reproducía en un todo el voto del señor Oidor Don Manuel José de Reyes, añadiendo que se les oiga á los vecinos citados y no concurridos.— Por el señor don Pablo Villarino, se dijo:— Que se conformaba en todas sus partes con el anterior voto del señor Don Francisco Belaustegui.— Por el señor Don Juan Ignacio Ezcurra, se dijo:— Que se conformaba con el voto del señor Manuel de Reyes, y adición hecha á éste por el señor Don Diego de la Vega.— Por el señor don Olaguer Reinal, se dijo:— Que se conformaba con el dictamen del señor Don Manuel de Reyes, en el modo expuesto por los tres precedentes señores.— Por el señor Don Domingo Antonio Achaval, se dijo lo mismo.— Por el señor Dr. D. Bonifacio Zapiola, se dijo lo mismo.— Por el señor Doctor Lorenzo Machado, se dijo:— Que se conformaba en todo con el voto del señor D. Cornelio Saavedra, y que lo tenga decisivo el señor Síndico Procurador.— Por el señor Don Pedro Antonio Cerviño, se dijo:— Que atendiendo la situación en que se hallaba la España, y á las circunstancias que nos rodean, por los peligros que nos amenazan, era de parecer que, á la imitación de la Metrópoli, se forme una junta de gobierno de vecinos buenos y honrados, para la elección del Excmo. Cabildo, que á nombre del Rey nuestro señor Don Fernando VII, atienda á la gobernación y defensa de estos dominios,

cuyo Presidente puede ser el Excmo. Señor Virrey, convocando á las ciudades interiores para que envíen sus vocales. — Por el señor Don José Martín de Zuloeta, se dijo: — Que interin no se sepa la pérdida de España y no haber dado motivo esta autoridad, debe subsistir la misma; y en caso de no querer variar, se trate de llamar diputados de las Provincias del Virreinato para su seguridad; y además, que concurran á votar más de doscientos vecinos de primer orden, que faltan. — Por el señor don José Antonio Capdevilla, se dijo: — Que se conformaba con el voto del señor Doctor D. José Luis Chorroarín. — Por el señor D. Juan de la Helguera, se dijo: — Que se conformaba en todas sus partes con el voto del señor Oidor D. Manuel de Reyes. — Por el señor Don Andrés de Lezica, se dijo: — Que se conformaba en todo con el parecer del señor D. Pascual Ruiz Huidobro, teniendo el señor Síndico Procurador voto decisivo en todo. — Por el señor Don Floro de Zamudio, se dijo: — Que se conformaba en todo con el voto del señor D. Cornelio Saavedra, debiendo tenerlo decisivo el señor Síndico Procurador. — Por el señor Don Manuel Antonio Barquín, se dijo: — Que como vecino de Buenos Aires, su Excmo. Cabildo se sometió á la Suprema autoridad, en cuyo caso votaba á favor del señor Virrey, el Excmo. Sr. D. Baltasar Hidalgo de Cisneros. — Por el Sr. D. Domingo French, se dijo: — Que reproducía en todas sus partes el voto del señor D. Cornelio Saavedra, y que lo tenga activo y decisivo en sus casos el señor Síndico Procurador. — Por el señor don Vicente Dupui se reprodujo el voto del señor D. Domingo French. — Por el señor Don Mariano Orma, se dijo: — Que igualmente reproducía el voto del señor D. Domingo French. — Por el señor Don Buenaventura de Arzac se dijo: — Que reproducía también el voto del señor D. Domingo French. — Por el señor Don Juan Florencio Terrada, se dijo: — Que se conformaba con el voto del señor D. Cornelio Saavedra, debiendo tenerlo activo y decisivo el señor Síndico Procurador General. — Por el señor D. Manuel Martínez y García, se dijo: — Que reproducía el dictamen del señor D. Juan Florencio Terrada. — Por el señor D. Domingo Matheu se dijo: — Que igualmente se conformaba con el voto del señor D. Juan Florencio Terrada. — Por el señor D. Juan Bautista Bustos, se dijo: — Que igualmente reproducía el voto del señor D. Juan Florencio Terrada. — Por el señor D. José Domínguez, se dijo: — Que también se conformaba con el parecer del señor D. Juan Florencio Terrada. — Por el señor Don Pedro Capdevilla, se dijo: — Que

su dictamen era el mismo que el del señor D. Juan Florencio Terrada. — Por el señor Don Felipe Arana, se dijo: — Que reproducía el dictamen del señor Don Juan Florencio Terrada. — Por el señor D. Joaquín Campaña, se dijo: Que igualmente se conformaba con el voto del señor Don Juan Florencio Terrada. — Por el señor Don Pedro Valerio Albano, se dijo: — Que se conformada en todas sus partes con el voto del señor Don Cornelio Saavedra. — Por el señor Don Juan Fernández Molina, se dijo: — Que reproducía el voto del señor Don Martín de Ochoteco. — Por el señor D. Pedro Martínez Fernández, se dijo: — Que reproducía el voto del señor Dr. D. Bernardo de la Colina. — Por el señor D. Francisco Xavier Macera, se dijo: — Que se conformaba con el voto del señor Don Cornelio Saavedra, teniendo activo y decisivo el señor Síndico Procurador. — Por el señor D. Manuel Ruiz Obregón, se dijo: — Que reproducía en todas sus partes el dictamen del señor D. Cornelio Saavedra, teniendo voto activo y decisivo el señor Síndico Procurador. — Por el señor D. Manuel Obligado se dijo: — Que en las circunstancias de no poderse combinar la permanencia del Superior Gobierno en el Exmo. Señor Virrey, con el concepto deducido por el pueblo, y bajo el supuesto de haber caducado el de la Suprema Junta Central, debe subrogarse en el Exmo. Cabildo; entretanto, de acuerdo por la convocatoria por las Provincias, se establece el método conveniente á uniformar el gobierno y conservación de todas las Américas á favor de la potestad en que debe recaer: con calidad de otorgarse al señor Síndico Dr. Julian de Leiva, voto activo en todas las materias, y decisivo en igualdad. — Por el señor D. Vicente López, se dijo: Que reproducía en todas sus partes el voto del señor D. Cornelio Saavedra, teniéndolo activo y decisivo, en sus casos, el señor Síndico Procurador. — Por el señor D. Mariano Conde, se dijo: — Que reproducía el anterior voto del señor D. Vicente López. — Por el señor D. Ambrosio Pinedo, se dijo: — Que reproducía el voto del señor D. Manuel Belgrano en todas sus partes. — Por el señor D. Manuel Pinto, se dijo: — Que igualmente reproducía en todo el dictamen del señor D. Manuel Belgrano. — Por el señor D. Antonio Luis Berutti, se dijo: — Que también reproducía en todas sus partes el parecer del señor Manuel Belgrano. — Por el señor D. Agustín José Donado, se dijo: — Que asimismo reproducía el voto del señor D. Manuel Belgrano. — Por el señor Dr. D. Matías Patrón, se dijo: — Que reproducía en un todo el voto del señor Dr. D.

Juan Nepomuceno de Sola. — Por el señor D. Enrique Ballesteros, se dijo:— Que se conformaba en todo con el voto del señor D. Cornelio Saavedra, teniéndolo decisivo el señor Síndico Procurador. — Por el señor D. Antonio Ramirez, se dijo: — Que igualmente se conformaba con el voto del señor Don Cornelio Saavedra, y que lo tenga decisivo el señor Síndico Procurador. — Por el señor D. Juan Francisco Marchesi, se dijo: — Que reproducía el voto del señor D. Cornelio Saavedra, teniéndolo activo y decisivo el señor Síndico Procurador. — Por el señor Don Manuel del Cerro Sáenz, se dijo:— Que se conformaba con el dictamen del señor Don Manuel José de Reyes.— Por el señor D. Valeriano Barreda, se dijo:— Que se conformaba en todo con el voto del señor D. Cornelio Saavedra. — Por el señor Dr. D. Alejo Castex, se dijo: — Que se conformaba con el voto del señor Doctor Don Nepomuceno de Sola.— Por el señor Don Juan Pedro de Aguirre, se dijo:— Que igualmente se conformaba en todo con el voto del señor Doctor Sola. — Por el señor D. Miguel de Azcuénaga, se dijo:— Que en la hipótesis de que haya terminado la representación de la Suprema Junta Central de España, en lo que está al mayor número de votos, es el suyo, reasuma el mando el Exmo. Cabildo, con voto activo del señor Síndico Procurador actual y decisivo en caso de discordia; y para constituir más el gobierno de este público, ejecutándolo lo más breve posible, y convocando, como que es la puerta del reino, á esta capital, las demás provincias y gobiernos, para sentar la autoridad que las presente y rija, en seguridad de estos dominios de la Corona, con voto en ella del señor Alcalde de primer voto, y su actual Síndico Procurador. — Por el señor D. Antonio José Escalada, se dijo:— Que es de dictamen, que para que en esta América del Sud no llegue á suceder lo que ha sucedido en España, por el abandono en que estaba cuando se posesionaron de ella los franceses, conviene que, sabido ya, como sabemos, el agonizante estado de la Península, se provea el urgentísimo remedio de ponerse de acuerdo esta capital con las provincias interiores (que tanto distan unas de otras) sobre el partido que deba tomarse, á fin de conservar ilesa á nuestro amado señor rey D. Fernando VII, esa parte de monarquía. Que á este objeto tan interesante como sagrado, conviene que se subrogué en el Exmo. Cabildo de esta Capital el gobierno interinario, así por el concepto en que está el pueblo de que la autoridad suprema la tiene devuelta por falta de la legítima, como por la con-

fianza que en él tiene; y ser de presumir hagan lo mismo las demás capitales de las Provincias del virreinato, por las irrefragables pruebas que les tiene dadas, de su fraternidad y uniforme modo de pensar sobre lo que mejor les conviene.—Que al Exmo. Cabildo le sea facultativo nombrar Presidente y más vocales, si lo tuviere por conveniente; teniendo la debida consideración al mérito y circunstancia del Exmo. Señor Virrey, y magistrados subalternos, y sobre todo á los que contemple más capaces de desempeñar el cargo:—Que tiene también por conveniente, y aun necesario, que el señor Síndico Procurador actual de ciudad tenga voto activo en las deliberaciones del Exmo. Cabildo:—Y finalmente que, siendo suprema ley la salud del pueblo, presume, según el incremento de opinión que éste ha tomado y en el que se halla todo el reino, que el medio que propone es el más adecuado á salvar la patria, cuyo interés debe prevalecer al particular y á todo otro respecto.—Por el señor D. Agustín de Aguirre, se dijo:—Que en todo se conforma con el dictamen del señor Cornelio Saavedra, y que tenga voto general en los asuntos el señor Síndico Procurador.—Por el señor D. Félix de Castro, se dijo:—Que se conformaba con el parecer del doctor Sola.—Por el señor D. José María Riera, se dijo:—Que igualmente se conformaba con el voto del señor Sola.—Por el señor D. Gerardo Esteve y Llac, se dijo:—Que se conformaba en todas sus partes con el voto del señor Cornelio Saavedra, y que lo tenga decisivo el señor Síndico Procurador actual de ciudad.—Por el señor D. Ignacio Ferrada, se dijo:—Que se conformaba en todas sus cláusulas con el dictamen del señor D. Pedro Cerviño.—Por el señor D. José Santos de Inchaurregui, se dijo:—Que reproducía el voto del señor Dr. D. Juan Nepomuceno de Sola.—Por el señor D. José Amat, se dijo:—Que igualmente reproducía el parecer del expresado señor Dr. Sola.—Por el señor D. Bernabé San Martín, se dijo:—Que igualmente se conformaba en todas sus partes con el dictamen del señor Dr. D. Juan Nepomuceno de Sola.—Por el señor D. José Moll, se dijo:—Que se conformaba en todas sus partes con la votación del señor Doctor Bernardo de la Colina.—Por el señor D. José Merello, se dijo:—Que se conformaba con el voto del Sr. D. Pascual Ruiz Huidobro, y que tenga voto consultivo el señor Síndico Procurador.—Por el señor D. Francisco Pico, se dijo:—Que reproducía lo expuesto por el señor D. Cornelio Saavedra, teniendo á más el señor Síndico voto activo y decisivo.—Por el señor D. Gerardo

Bosch, se dijo:—Que se conformaba con el parecer del señor Doctor D. Martín José de Ochoteco.—Por el señor D. José Martínez de Escobar, se dijo:—Que se conformaba con el voto del señor D. Cornelio Saavedra, y que lo tenga decisivo el señor Síndico Procurador.—Por el señor Dr. D. Joaquín Griera, se dijo:—Que habiendo expirado la legítima autoridad, el pueblo reasume los derechos primarios que tuvo para conferirla; y que entretanto se forma una Junta sabia, recaiga la autoridad en el Exmo. Cabildo, teniendo en las materias de gobierno, voto decisivo el señor Síndico Procurador actual, á quien por su idoneidad y conocimientos lo nombra del modo que puede.—Por el señor D. José Laguna, se dijo:—Que reproducía en un todo el voto del señor D. Manuel de Reyes.—Por el señor D. Toribio Mier, se dijo:—Que se conformaba en todas sus partes con el voto del señor D. Cornelio Saavedra, y que lo tenga decisivo el señor Síndico Procurador.—Por el señor Andrés Aldao, se dijo:—Que se conformaba con el voto del señor D. Hipólito Vieytes, en todas partes. Por el señor D. José Fornaguera, se dijo: Que reproducía el voto dado por el señor D. Martín de Ochoteco.—Por el señor D. Juan Antonio Rodríguez, se dijo:—Que igualmente reproducía el voto dado por el señor D. José Martín de Ochoteco. Concluída la votación, en la que han dejado de dar sus votos, por haberse retirado antes de llegarle la vez, los señores D. Cristobal de Aguirre, D. Antonio Ortiz Alcalde, D. Jacinto de Castro, D. Ambrosio Lezica, D. Saturnino Alvarez, D. Sebastián de Torres, D. José María Calderón, D. José Riera, D. Raimundo Real, D. José Nadal y Campo, D. Joaquin de la Iglesia, D. Juan Bautista Ituarte, D. Francisco Marzano, Dr. D. Julián Segundo de Agüero, D. José Antonio Lagos, D. Juan Cornet, D. Nicolás del Campo, D. Francisco Dozal, D. Pedro de Onsua, y el Dr. D. Domingo de Viola; y no habiendo concurrido más individuos, sin embargo, de haberse repartido cuatrocientas cincuenta esquelas; acordaron los Señores del Exmo. Cabildo, que por ser ya pasada la hora de las doce de la noche, y no siendo posible continuar el trabajo después del incesante que se ha tenido en todo el día, se estienda la acta con formalidad para el de mañana, citándose por carteles á los señores vocales, para que á las tres de la tarde concurran á estas casas capitulares á suscribirlas, después de confrontarse los votos, que hoy solamente han rubricado por simplificar el acto; y por la misma razón, y por ser obra laboriosa que exige algunas horas, determinaron que se suspen-

da también hacer la regulación de votos para el día de mañana, no obstante que alguna parte de los concurrentes ha pedido se realice en el momento, con lo que se concluyó la acta, que firmaron los señores del Exmo. Cabildo, de que doy fe.—*Juan José Lezica — Martín Gregorio Yantiz — Miguel Mancilla — Manuel José de Ocampo — Juan de Llano — Jaime Nadal y Guarda — Andrés Domínguez — Tomás Manuel Anchorena — Santiago Gutiérrez — Doctor Julián de Leiva — Licenciado Don Justo José Núñez*, Escribano Público y de Cabildo.

(*Registro Oficial de la República Argentina* — Tomo I (1810-1821) páginas 4 á 15 — *Publicación Oficial — Imprenta La República* — Año 1879.)

5

Acta del día 23 de Mayo

En Buenos Aires, á 23 de Mayo de 1810, se congregaron en la Sala de sus acuerdos los señores del Exmo. Cabildo; á saber: D. Juan J. de Lezica y D. Martín Gregorio Yaniz, alcaldes ordinarios de 1º y 2º voto; y regidores D. Manuel J. Mancilla, Alguacil Mayor, D. Manuel José de Ocampo, D. Juan de Llano, D. Jaime Nadal y Guarda, D. Andrés Domínguez, D. Tomás Manuel de Anchorena, D. Santiago Gutiérrez, y el caballero Síndico Procurador General Dr. D. Julian de Leiva.—Y estando así juntos y congregados, reflexionaron que, sin embargo de haberse fijado carteles citando á los señores Vocales del Congreso General del día de ayer, para que hoy á las tres de la tarde concuriesen á firmar la acta, no convenía, por las ocurrencias que han sobrevenido, el que se hiciese nueva reunión de concurrentes, ni se consideraba necesaria para el fin indicado, supuesto que en el Congreso de ayer se recogieron los votos rubricados, y se publicaron todos, cada uno en el acto mismo de haberse dado. En cuya virtud acordaron corra la acta en los términos en que está extendida, sin recogerse las firmas de los señores Vocales; que se archiven los votos rubricados, para cualquiera duda que ocurra, y que se proceda inmediatamente á la regulación de ellos, debiendo dos de los señores capitulares estar prontos para prevenir á los que concurren que se retiren hasta nueva citación.—En el acto procedieron á regular los votos: y hecha la regulación con el más prolijo examen, resulta de ella, á pluralidad con esceso, que el Exmo. Señor Virrey debe cesar en el mando, y recaer éste provisionalmente en el Exmo. Cabildo, con voto decisivo el caballero Síndico Procurador General, hasta la erección de una Junta que ha de formar el mismo Exmo. Cabildo, en la manera que estime conveniente; la cual haya de encargarse del mando, mientras se congregan los diputados que se han de convocar de las Provincias interiores para establecer la forma de gobierno que corresponda.—Y los señores, tratando de conciliar los respetos de la autoridad Superior con el bien

general de estas interesantes provincias, propendiendo á su unión con la capital, y á conservar franca la comunicación con las demás del continente, cuyo objeto jamás ha podido perderse de vista, acordaron que, sin embargo de haber á pluralidad de votos, cesado en el mando el Exmo. Señor Virrey, no sea separado absolutamente, sino que se le nombren acompañados con quienes haya de gobernar hasta la congregación de los Diputados del Virreinato: lo cual sea y se entienda por una junta compuesta de aquellos, que deberá presidir en clase de vocal dicho señor Exmo., mediante que para esto se halla con facultades el Exmo. Cabildo, en virtud de las que se le confirieron en el citado Congreso. Y mandaron que, para remover toda dificultad, se proponga por oficio á su Escelencia este arbitrio, como único al parecer capaz de salvar la Patria; manifestándole haber cesado en el mando, con certificación que yo el actuario deberé dar del resultado del Cabildo abierto.—Se extendió el oficio en los términos siguientes:— «OFICIO Á SU ESCLENCIA:— Exmo. Señor:—Noticioso este Ayuntamiento de la consternación general que habían causado en este pueblo los funestos acaecimientos de nuestra Península, y que animado de su lealtad y patriotismo dudaba en su situación actual y de su suerte futura, zozobrando en un conjunto de ideas diversas que exigían la más pronta combinación para evitar una fermentación lastimosa; obtuvo de V. E. permiso franco para convocar, por medio de esquelas, la principal y más sana parte del vecindario, para que en un Congreso público expresase la voluntad del pueblo, y acordase las medidas más oportunas para evitar toda desgracia y asegurar nuestra suerte venidera: consultando por ese medio este Ayuntamiento el mejor orden y la conservación é integridad de estos dominios bajo la dominación del señor D. Fernando VII; y habiéndolo verificado ayer día con toda la solemnidad que corresponde, y con la dignidad y el decoro que es propio de este pueblo leal y generoso, ha acordado dicho Congreso, á pluralidad de votos, que V. E. debe cesar en el ejercicio de su autoridad, y esta recaer en el Ayuntamiento, según aparece del conjunto del certificado del actuario, el cual servirá á V. E. de bastante comprobante, en atención á que las circunstancias críticas y urgentes no dan tiempo á extender testimonio del acta.— Pero este Ayuntamiento, siguiendo siempre las ideas de conciliar el respecto de la autoridad con la tranquilidad pública, ha deliberado, como único medio para conseguirlo, el nombrarle á V. E. acompañados en el ejercicio de sus

funciones, hasta que convocada la Junta General del Virreinato, resuelva lo que juzgue conveniente. — Lo que participa á V. E. para su perfecta inteligencia. — Dios guarde á V. E. muchos años. — Sala Capitular de Buenos Aires, Mayo 28 de 1810. — Exmo. Señor. — Juan José Lezica — Martín Gregorio Yaniz — Manuel Mancilla — Manuel José de Ocampo — Juan de Llano — Jaime Nadal y Guarda — Andrés Domínguez — Tomás Manuel de Anchorena — Santiago Gutiérrez — Dr. Julián de Leiva. — Exmo. Señor Don Baltazar Hidalgo de Cisneros. » — Y determinaron que sin perder instantes se le pase á S. E. por medio de una diputación, que ha de componerse de los señores D. Manuel José de Ocampo y el Dr. D. Tomás Manuel de Anchorena; á quienes se encarga muy especialmente le hagan comprender el fin que se ha propuesto este Cabildo con semejante arbitrio, y cuanto interesa á la quietud pública y á la salud del pueblo el que se lleve á su término, quedando abierto el acuerdo hasta que regresen. Regresaron los señores diputados y expusieron; — que el Exmo. Señor D. Baltazar Hidalgo de Cisneros se había allanado de palabra, no solo al arbitrio que se le proponía, sino también á no tomar la menor parte en el mando, siempre que ello se considerase necesario para la quietud pública, bien y felicidad de estas provincias: pero que juzgaba muy conveniente el que se tratase el asunto con los comandantes de los cuerpos de esta guarnición, respecto á que la resolución del Exmo. Cabildo, no parecía en todo conforme con los deseos del público, manifestados por mayoría de votos: y que de cualquier modo estaba resignado en la voluntad del Ayuntamiento, á quien dirigía la contestación que entregaba, y es del tenor siguiente: — « CONTESTACIÓN DE SU ESCELENCIA: — Siempre han sido los deseos más vivos de mi corazón el sacrificar los intereses todos, por mantener y conservar la felicidad y seguridad de todos los pueblos y provincias, que la dignación de nuestro muy amado soberano, el señor D. Fernando VII, tuvo á bien poner bajo mi inmediato mando. En este concepto y atentas las extraordinarias circunstancias que V. E. me manifiesta en su oficio de hoy, me presto desde luego á adoptar el medio que me propone, atento á que considero ser el único capaz de restablecer la tranquilidad pública y la confianza general, en que tanto me interesa, y de lo que he dado hasta ahora pruebas tan constantes: conciliando al mismo tiempo los respetos debidos á la dignación de mi empleo, al Rey á quien represento y al honor que tan dignamente ha sabido sostener siempre

esta Capital y sus fieles habitantes. Dios guarde á V. E. muchos años. Buenos Aires, 23 de Mayo de 1810. BALTAZAR HIDALGO DE CISNEROS. Excelentísimo Cabildo, justicia y regimiento de esta Capital.» Enterados de todo, los Señores acordaron se convoque en el acto á los señores comandantes de los cuerpos. Y habiendo éstos apersonándose en la Sala, y oído el medio adoptado por el Exmo. Sr. Don Baltazar Hidalgo de Cisneros, significaron que lo que ansiaba el pueblo era que se hiciese pública la cesación en el mando del Exmo. Sr. Virrey, y reasunción de él en el Exmo. Cabildo, y la conformidad que había prestado el Exmo. Cabildo: que mientras no se verificase esto, de ningún modo se aquietaría. Y los Señores, habiéndose despedido los señores Comandantes, determinaron que en el acto se forme el Bando y se publique, fijándose en los lugares acostumbrados: habiendo procedido á hacer presente esta determinación al señor Don Baltazar Hidalgo de Cisneros, por medio de una diputación compuesta de los señores D. Manuel José de Ocampo y Sr. D. Tomás Manuel de Anchorena. Y contestando su Excelencia que estaba llano en que se hiciese la publicación, mandaron se pase en el acto orden al Administrador de Correos para que no permita salir posta ni extraordinario á ningún destino, hasta nueva providencia de este Cabildo y superioridad: y comisionaron al señor Alcalde de primer voto para que libre las que fueren oportunas en las materias de gobierno ejecutivas, servicio de paza y demás que exijan pronto despacho. — Con lo que se concluyó esta acta, que firmaron dichos señores, de que doy fe. — Juan José Lezica — Martín Gregorio Yaniz — Manuel Mancilla — Manuel José de Ocampo — Juan de Llano — Jaime Nadal y Guarda — Andrés Domínguez — Tomás Manuel de Anchorena — Santiago Gutiérrez — Dr. Juan de Leiva — Licenciado D. Justo José Núñez, Escribano Público y de Cabildo.

BANDO

En la muy noble y muy leal ciudad, Puerto de Santa María de Buenos Aires, á veinte y tres de Mayo de mil ochocientos diez: los señores del Exmo. Cabildo, á saber: D. Juan José de Lezica y Martín Gregorio Yaniz, Alcaldes de primero y segundo voto, y Regidores D. Manuel Mancilla, Alguacil Mayor; D. Manuel José de Ocampo, Alférez Real de Turno; D. Juan de Llano; D. Jaime Nadal y Guarda; D. Andrés Domínguez, Juez Diputado de Policía; D.

Tomás Manuel de Anchorena, Defensor General de Pobres y Fiel Ejecutor; D. Santiago Gutiérrez, Defensor General de Menores; y el caballero Síndico Procurador General Dr. D. Julián de Leiva:—POR CUANTO: del Congreso General celebrado ayer 22 del corriente Mayo, ha resultado á pluralidad de votos deber subrogarse el mando superior de estas Provincias, que ejercía el Exmo. Señor D. Baltazar Hidalgo de Cisneros y refundirse en este Exmo. Cabildo provisionalmente, y hasta tanto se elija una superior Junta que haya de ejercerlo dependiente siempre de la que legítimamente gobierne á nombre del señor D. Fernando VII, se hace saber así al público por medio del presente bando para su gobierno é inteligencia, y que desechen cualesquiera deseos que hayan podido infundirle las últimas infaustas noticias recibidas de la Península; bien entendido que este Exmo. Cabildo procederá inmediatamente á la elección de la Junta que haya de encargarse del mando superior, hasta que se congreguen los diputados que se convocarán de las Provincias interiores, para establecer la forma de gobierno más conveniente.—Juan José Lezica—Martín Gregorio Yañiz.—Manuel Mancilla—Manuel José de Ocampo—Juan de Llano—Jaime Nadal y Guarda—Andrés Domínguez—Tomás Manuel de Anchorena—Santiago Gutiérrez—Dr. Julián de Leiva—Ante mí, Licenciado Don Justo José Núñez, Escribano Público y de Cabildo.—Se publicó por mí el Bando precedente, de que doy fe en su fecha. Mariano García de Echaburro, Escribano Público.

*(Registro Oficial de la República Argentina — Tomo I (1810-1821)
página 15 — Publicación Oficial — Imprenta «La República» —
Año 1879.)*

6

Acta del día 24 de Mayo

En la muy Noble y muy Leal Ciudad, Puerto de Santa María de Buenos Aires, á 24 de Mayo de 1810: los Srs. del Excmo. Cabildo Gobernador, á saber: D. Juan J. de Lezica y D. Martín Gregorio Yaniz, Alcaldes de primero y segundo voto; y Regidores D. Manuel Mancilla, Alguacil Mayor; D. Manuel José de Ocampo, D. Juan de Llano, D. Jaime Nadal y Guarda, D. Andrés Domínguez, D. Tomás Manuel de Anchorena, D. Santiago Gutiérrez y el señor Dr. D. Julián de Leiva, Síndico Procurador General, dijeron:—Que considerando los graves inconvenientes y riesgos que podrían sobrevenir para la tranquilidad pública, si conforme á lo resuelto á pluralidad de votos en el Congreso General del día 22 del corriente, fuese absolutamente separado del mando el Excmo. señor Virrey de estas Provincias, D. Baltazar Hidalgo de Cisneros, pues que ellas podrían ó no sujetarse á semejante resolución, ó al menos suscitar dudas sobre el punto decidido, en cuyo caso serían consiguientes males de la mayor gravedad; y procediendo con arreglo á las facultades que se han concedido á este Cabildo, á pluralidad de votos, en el citado Congreso General, debían mandar y mandaron; lo primero: Que continúe en el mando el Excmo. señor Virrey D. Baltazar Hidalgo de Cisneros, asociado á los señores, el Dr. D. Juan Nepomuceno de Sola, Cura Rector de la Parroquia de nuestra señora de Monserrat, de esta ciudad; el Dr. D. Juan José Castelli, abogado de esta Real Audiencia Pretorial; D. Cornelio Saavedra, Comandante del cuerpo de Patricios, y D. José Santos de Inchaurregui, de este vecindario y comercio: cuya corporación ó junta ha de presidir el Excmo. señor Virrey con voto en ella, conservando en lo demás su renta y altas prerrogativas de su dignidad, mientras se erige la junta General del Virreinato. Lo segundo, que los señores que forman la precedente corporación, comparezcan sin pérdida de momentos en esta Sala capitular, á prestar el juramento de usar bien y fielmente sus cargos, conservar la integridad de esta parte de los dominios de América á nuestro amado Soberano el señor

D. Fernando VII y sus legítimos sucesores, y observar puntualmente las leyes del reino.—Lo tercero, que luego que los referidos señores presten el juramento, sean reconocidos por depositarios de la autoridad superior del Virreinato, por todas las corporaciones de esta Capital y su vecindario: respetando y obedeciendo todas sus disposiciones, bajo las penas que imponen las leyes á los contraventores: todo hasta la congregación de la Junta General del Virreinato.—Lo cuarto, que faltando algunos de los referidos señores que han de componer la Junta de esta Capital, por muerte, ausencia ó enfermedad grave, se reserva este Cabildo nombrar el que haya de integrarla. Lo quinto, que aunque se halla plenísimamente satisfecho de la honrosa conducta y buen procedimiento de los señores mencionados, sin embargo, para satisfacción del pueblo, se reserva también estar muy á la mira de sus operaciones, y, caso no esperado que faltasen á sus deberes, proceder á la deposición, reasumiendo para este solo caso, la autoridad que le ha conferido el pueblo. Lo sexto, que los referidos señores, inmediatamente después de recibidos en sus empleos, publiquen una general amnistía en todos los sucesos ocurridos el día 22, en orden á opiniones sobre la estabilidad del Gobierno: y para mayor seguridad, este Excmo. Cabildo toma desde ahora bajo su protección á todos los vocales que han concurrido al Congreso General, ofreciendo que contra ninguno de ellos se procederá directa ó indirectamente por sus opiniones, cualesquiera que hayan sido. Lo séptimo, que con el mismo objeto de consultar la seguridad pública, quedarán excluidos los referidos señores, que componen la Junta provisional, de ejercer el poder judiciario, el cual se refundirá en la Real Audiencia, á quien se pasarán todas las causas contenciosas que no sean de Gobierno. Lo octavo, que esta misma Junta ha de publicar todos los días primeros del mes, un estado en que se dé razón de la Administración de la Real Hacienda.—Lo nono, que no pueda imponer pensiones, pechos ni contribuciones, sin previa consulta y conformidad de este Exmo. Cabildo.—Lo décimo, que no se obedezca ninguna orden ó providencia del Exmo. Señor Virrey, sin que vaya rubricada por todos los demas individuos que deban componer la Junta.—Lo undécimo, que los referidos señores despachen sin pérdida de tiempo órdenes circulares á los Gefes de lo Interior, y demas á quienes corresponda, encargándoles muy estrechamente, y bajo de responsabilidad, hagan que los respectivos Cabildos de cada uno convoquen, por medio de esquelas, la parte principal y mas

sana del vecindario, para que formado un Congreso de solos los que en aquella forma hubiesen sido llamados, elijan sus representantes, y estos hayan de reunirse á la mayor brevedad en esta Capital, para establecer la forma de Gobierno que se considere mas conveniente.—Lo duodécimo, que elegido así el representante de cada ciudad ó villa, tanto los electores como los individuos capitulares le otorguen poder en pública forma, que deberán manifestar cuando concurran á esta capital, á fin de que se verifique su constancia, jurando en dicho poder no reconocer otro soberano que el señor D. Fernando VII y sus legítimos sucesores, según el orden establecido por las leyes, y estar subordinado al Gobierno que legítimamente les represente.

—Lo décimotercio:—Que cada uno de los señores de la Junta tenga el tratamiento de ESCELENCIA, reservándose á la prudencia de ella misma la designación de los honores que se le hayan de hacer, y distinciones de que deben usar.—Cuyos capítulos mandan que se observen puntual é inviolablemente: y que para que llegue á noticia de todos, se publique esta acta por Bando, fijándose en los lugares acostumbrados. Y lo firmaron, de que doy fe.—Juan José Lezica — Martín Gregorio Yaniz — Manuel Mancilla — Manuel José de Ocampo — Juan de Llano — Jaime Nadal y Guarda — Andrés Domínguez — Tomás Manuel de Anchoarena — Santiago Gutiérrez — Dr. Julian de Leiva — Licenciado D. Justo J. Núñez, Escribano Público y de Cabildo.

—Concluida la acta que precede, los mismos señores del Exmo. Cabildo Gobernador, trataron sobre que, sin embargo de ser el medio adoptado el mas propio á radicar la confianza de los pueblos del Virreinato, y asegurar nuestra situación actual y nuestra suerte futura, era de necesidad indispensable, atendidas las precedentes circunstancias, proceder con el mayor pulso y prudencia en su publicación: pues aunque habían sido elegidos para vocales de la Junta Provisoria, sujetos que no podían menos de merecer la confianza del pueblo, podría este trepidar quizá en la elección de Presidente Vocal, hecha en la persona del Exmo. Señor D. Baltazar Hidalgo de Cisneros, no obstante que con esa única investidura se le conserva en el mando por fines de conveniencia pública.—Y en consideración á todo, acordaron de unánime conformidad explorar la voluntad de los señores Comandantes de los cuerpos de esta guarnición, instruirles de la resolución y de su objeto, y exigir de ellos si se hallan en ánimo y posibilidad de sostenerla: para lo cual se mandó que en el acto fueran citados en

esta Sala Capitular. — Y comparecieron en ella los señores José Ignacio de la Quintana, Coronel de Dragones; D. Francisco Rodrigo; D. Cornelio de Saavedra, Comandante de Patricios; D. Gerardo Esteve y Llac, de artilleros de la Unión; D. Juan Florencio Terrada, de Granaderos de Fernando VII; D. Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, de Arribeños; D. Pedro Andrés García, de Montañeses; D. Martín Rodríguez, de húsares del Rey; D. Manuel Ruiz, de Naturales; y D. José Merelo, de Andaluces. — El señor Alcalde de primer voto les hizo presente el objeto de la convocatoria; expresándoles que el Exmo. Cabildo Gobernador contaba con su auxilio, para llevar á efecto las resoluciones que había tomado en tan críticas y extraordinarias circunstancias. Contestaron unánimemente que estaban aparejados y dispuestos á sostener la autoridad que por voto del pueblo había reasumido el Exmo. Cabildo. A consecuencia se leyó, por mí, el Actuario, la acta celebrada el día de hoy, en que resulta establecida la Junta Provisoria. Los señores Comandantes, después de algunas discusiones promovidas sobre la materia, y especialmente por D. Pedro Andrés García, sobre que si el Exmo. Cabildo volvía á reasumir el mando, debería tener voto decisivo el caballero Síndico Procurador General; y por D. Cornelio de Saavedra, sobre que debía revocarse la elección de vocal hecha en su persona, y recaer en el caballero Síndico, porque no quería ser censurado en lo más mínimo; contestes expusieron, que aquel arbitrio era el único que podía adoptarse en las actuales circunstancias, como el más propio á conciliar los extremos que debían constituir nuestra seguridad y defensa; que no dudaban sería de la aceptación del pueblo. Ofrecieron contribuir de su parte á que quedase planificado, y se retiraron reiterando las mismas ofertas. Los Señores, en vista de ellas, acordaron se proceda en el día á la instalación de la Junta: y que al efecto sean citados inmediatamente los señores Vocales electos, para que á las tres de la tarde, con precisión, comparezcan en esta Sala Capitular. Que al propio tiempo pase una diputación, compuesta de los señores D. Manuel José de Ocampo, y el Dr. D. Tomás Manuel de Anchorena, á prevenir la misma comparencia al Exmo. Señor Presidente Vocal, manifestándole el fin de ella, y el ceremonial dispuesto para el caso; y que se convoque igualmente á los Tribunales y corporaciones, Reverendo Obispo, Cabildo Eclesiástico, Prelados de las Religiones y Jefes de los cuerpos, á fin de que presencien el juramento que han de prestar los señores Vo-

cales electos en manos del señor Alcalde de primer voto, de desempeñar bien y fielmente los cargos que se les confieren, conservar la integridad de esta parte de América á nuestro amado soberano el Sr. D. Fernando VII, y sus legítimos sucesores, y guardar puntualmente las leyes del reino. — Y mandaron que por el señor Alcalde de primer voto se impartan las órdenes necesarias para que la ceremonia se celebre con todo el aparato debido, y para que inmediatamente después de concluída la instalación de la Junta, se publique el Bando. — Tuvieron presente los Señores deberse obsequiar á los oficiales y tropas de la primera guardia de honor que se ha puesto á este Cabildo Gobernador; y mandaron que por el Tesorero de propios se entreguen á cada uno de los cuatro oficiales un reloj bueno, y se repartan cien pesos entre la tropa. — Con lo que se terminó la acta, que firmaron dichos señores, de que doy fe. — Juan José Lezica — Martín Gregorio Yaniz — Manuel Mancilla — Manuel José de Ocampo — Juan de Llano — Jaime Nadal y Guarda — Andrés Domínguez — Tomás Manuel de Anchorena — Santiago Gutiérrez — Dr. Julián de Leiva — Licenciado D. Justo José Núñez, Escribano público y de Cabildo.

(*Registro Oficial de la República Argentina* . — Tomo I (1810-1821)
página 16 — *Publicación Oficial* — *Imprenta La República* . —
Año 1879.)

Acta de instalación de la Primera Junta

En la muy Noble y muy Leal Ciudad, Puerto de Santa María de Buenos Aires, á 24 de Mayo de 1810, estando Congregados á la hora señalada en la Sala Capitular los señores del Exmo. Cabildo Gobernador, y colocados bajo el dosel, con sitial por delante, y en él la imagen del Crucifijo y los Santos Evangelios, comparecieron el Exmo. Señor Presidente y señores Vocales electos de la Junta provisoria Gubernativa, D. Baltazar Hidalgo de Cisneros, Don Cornelio de Saavedra, Dr. D. Juan Nepomuceno de Sola, Dr. D. Juan José Castelli y D. José Santos de Inchaurregui: ocuparon los respectivos lugares que se les tenían designados, siendo el del Exmo. Señor Presidente en el cuerpo Capitular, á la derecha del señor Alcalde de primer voto; y éste arregló al concurso, que se componía de algunos se-

ñores Ministros de la Real Audiencia, Contadores Mayores, Reverendo Obispo, Ministros de Real Hacienda, Dignidades y Prebendados, Prelados de las Religiones, Gefes Comandantes de los Cuerpos y empleados, haciéndoles entender el fin de aquella concurrencia; y me ordenó á mí el Actuario leyese la acta de elección de la Junta, lo que así verifiqué. Después de esto, los señores Presidente y vocales, por su orden, hincados de rodillas y poniendo la mano derecha sobre los Santos Evangelios, juraron desempeñar legalmente sus respectivos cargos, conservar íntegros estos dominios al señor D. Fernando VII, y sus legítimos sucesores, y guardar puntualmente las leyes del reino. — Concluida esta ceremonia, dejó el Exmo. Cabildo el lugar que ocupaba bajo el dosel, y se colocaron en él los señores Presidente y Vocales de la Junta; y de allí el Exmo. Señor Presidente dirigió la voz al concurso y al pueblo, incitándoles á la confianza, y manifestándoles que sus ideas y las de la Junta no serían otras que las de propender á la seguridad y conservación de estos dominios, y á mantener el orden, la unión y la tranquilidad pública. Con lo que se concluyó la acta, retirándose los señores Vocales por entre un numerosísimo concurso, á la Real Fortaleza, con repiques de campanas y salva de artillería en aquélla, á donde pasó inmediatamente el Exmo. Cabildo á cumplimentar á los señores Vocales. — Y lo firmaron, de que doy fe. — Juan José Lezica — Martín Gregorio Yaniz — Manuel Mancilla — Manuel José de Ocampo — Juan de Llano — Jaime Nadal y Guarda — Andrés Domínguez — Tomás Manuel de Anchorena — Santiago Gutiérrez — Dr. Julián de Leiva — Baltazar Hidalgo de Cisneros — Cornelio de Saavedra — Dr. Juan Nepomuceno de Sola — Dr. Juan José Castelli — Juan Santos de Inchaurregui — Licenciado D. Justo José Núñez, Escribano público y de Cabildo.

(« Registro Oficial de la República Argentina », Tomo I (1810-1821)
 página 16 — Publicación Oficial — Imprenta « La República » — Año
 1879.)

7

Acta del día 25 de Mayo

En la muy Noble y muy leal Ciudad de la Santísima Trinidad, Puerto de Santa María de Buenos Aires, á 25 de Mayo 1810: estando juntos y congregados en la Sala de sus acuerdos los señores del Exmo. Ayuntamiento, á saber: Don Juan J. de Lezica y D. Martín Gregorio Yaniz, Alcaldes ordinarios de primero y segundo voto; y Regidores D. Manuel Mancilla, Alguacil Mayor, D. Manuel José de Ocampo, D. Juan de Llano, D. Jaime Nadal y Guarda, D. Andrés Domínguez, el Dr. D. Tomás Manuel de Anchorena y D. Santiago Gutierrez, con asistencia del caballero Síndico Procurador General Dr. D. Julián de Leiva; se recibió un pliego con oficio de la Exma. Junta Gubernativa, fecha de ayer á las nueve y media de la noche; cuyo tenor es el siguiente:—OFICIO DE LA EXMA. JUNTA:—ÉXMO. Señor:—En el primer acto que ejerce esta Junta Gubernativa, ha sido informada por dos de sus vocales de la agitación en que se halla alguna parte del pueblo, por razón de no haberse excluido al Exmo. Señor Vocal Presidente del mando de las armas: lo que no puede ni debe ser, por muchas razones de la mayor consideración. Esto le causa imponderable sentimiento, y motiva á trasladarlo á su conocimiento, para que proceda á otra elección en sujetos que puedan merecer la confianza del pueblo, supuesto que no se la merecen los que constituyen la presente Junta: creyendo que será el medio de calmar la agitación y efervescencia que se ha renovado entre las gentes. La resolución es de urgentísima expedición; de modo que, sin pérdida de instantes, será preciso que V. E. se junte en Cabildo y se espida como corresponde: en la inteligencia de considerarse con el poder devuelto. — Dios guarde á V. E. muchos años.—Buenos Aires, 24 de Mayo de 1810.—Baltazar Hidalgo de Cisneros — Cornelio de Saavedra — Dr. Juan Nepomuceno de Sola — Dr. Juan José Castelli — José Santos de Inchaurregui — Exmo. Cabildo, justicia y regimiento de esta Capital.» —Y los Señores, reflexionando que la Exma. Junta, desde su instalación, celebrada con toda

solemnidad el día de ayer, recibió la autoridad que residía en este Ayuntamiento y antes obtenía el Exmo. Señor Virrey; que se halla sin facultades para renunciarla; que lo que en su concepto solicita alguna parte del pueblo, no debe influir á la menor innovación; y que teniendo el mando de las armas está estrechada á sugetar con ellas esa parte descontenta; acordaron que se le conteste sin pérdida de instantes, en estos términos: haciéndola responsable de lo contrario de las consecuencias que pueda causar cualquiera variación en lo resuelto. — OFICIO DEL CABILDO Á LA JUNTA. — Exmo. Señor: — Desde que los individuos de esa Exma Junta prestaron el juramento de desempeñar fiel y legalmente el cargo que se les ha conferido por este Ayuntamiento, en virtud de las facultades que le confió el pueblo, V. E. se ha encargado de la autoridad que residió en este Ayuntamiento, y que anteriormente obtenía el Exmo. Señor Virrey, de la cual no tiene V. E. facultad para desprenderse. En esta atención, y de lo que solicita alguna parte del pueblo en concepto de V. E., no puede ni debe ser, por muchas razones de la mayor consideración, teniendo V. E. las fuerzas á su disposición, está en la estrecha obligación de sostener su autoridad, tomando las providencias más activas y vigorosas para contener esa parte descontenta; y de lo contrario, este Ayuntamiento hace responsable á V. E. de las funestas consecuencias que pueda causar cualquiera variación en lo resuelto. — Dios guarde á V. E. muchos años. — Sala Capitular de Buenos Aires á Mayo 25 de 1810. — Exmo. Señor: — Juan José Lezica — Martín Gregorio Yaniz — Manuel Mancilla — Manuel José de Ocampo — Juan de Llano — Jaime Nadal y. Guarda — Andrés Domínguez — Tomás Manuel de Anchorena — Santiago Gutierrez — Dr. Julián de Leiva. — Exmo. Señor Presidente y Vocales de la Junta Superior Gubernativa provisional. — En esta circunstancia ocurrió multitud de gente á los corredores de las casas capitulares, y algunos individuos en clase de Diputados, previo el competente permiso, se apersonaron en la Sala, exponiendo que el pueblo se hallaba disgustado y en conmoción, que de ninguna manera se conformaba con la elección de Presidente Vocal de la Junta, hecha en el Exmo. D. Baltazar Hidalgo de Cisneros, y mucho menos con que estuviese á su cargo el mando de las armas; que el Exmo. Cabildo, en la erección de la Junta y su instalación, se había excedido de las facultades que á pluralidad de votos se le confirieron en el Congreso General; y que, para evitar desastres que ya se preparaban, según el fermento del pue-

blo, era necesario tomar prontas providencias y variar la resolución comunicada al pueblo por Bando. Los Señores procuraron serenar aquellos ánimos acalorados, y les suplicaron aquietasen la gente que ocupaba los corredores; en la inteligencia que, si el Cabildo había procedido á erigir la Junta en el modo que aparecía del Bando, fué por haberse considerado con facultades, á virtud de las que le confirió el Congreso á pluralidad de votos y por haber creído que aquél era el medio más adecuado á nuestra seguridad y defensa y á la conservación de estos dominios. Que sin embargo de todo, meditaría sobre el asunto con la reflexión y madurez que exigía por sus circunstancias, y que estuviese cierto el pueblo que á su Representante no le animaban otras miras que la del mejor bien y felicidad de estas Provincias.— Con lo que se despidieron los precitados individuos, suplicando que no se perdieran momentos, pues de lo contrario podrían resultar desgracias demasiado sensibles y de nota para el pueblo de Buenos Aires.— Con estos datos volvieron los Señores á tratar de la materia, y después de varias reflexiones vinieron á convenir en que cualquier innovación en el orden á lo resuelto el día de ayer, produciría males de la mayor entidad, pues que los pueblos del Virreynato y aun los del continente entrarían en desconfianzas al observar una tan repentina variación; y al ver que al Gefe de estas Provincias no se le dejaba la menor autoridad, sería consiguiente la división, y este el primer eslabón de nuestra cadena. Que la insistencia de una parte descontenta del pueblo no podía esponernos á consecuencias de tanto bulto, y era necesario contenerla por medio de la fuerza; pero que estando esta á cargo de los comandantes de los cuerpos, era también preciso explorar nuevamente su ánimo, no obstante que el día de ayer se comprometieron á sostener la resolución y la autoridad de donde dimanaba. En cuya virtud acordaron se cite á todos en el acto, para que inmediatamente comparezcan en esta sala Capitular, y se les pasó la siguiente: — ESQUELA: — Ofreciéndose tratar asunto muy urgente é interesante al bien común en este Cabildo, suplica á V. S. con el mayor encarecimiento, se digne concurrir á su sala Capitular, hoy 25 á las nueve y media de la mañana precisamente: á lo que quedará reconocido.» Comparecieron puntualmente á la hora señalada, los señores D. Francisco Orduña, Comandante de Artillería; D. Bernardo Lecoq, de Ingenieros; D. José Ignacio de la Quintana, de Dragones; D. Esteban Romero, segundo de Patricios; D. Pedro Andrés García, de

Montañeses; D. Francisco Antonio Ortíz de Campo, de Arribeños; D. Juan Florencio Terrada, de Granaderos de Fernando VII; D. Manuel Ruíz, de Naturales; D. Gerardo Esteve y Llac, de Artilleros de la Unión; D. José Merelo, de Andaluces; D. Martín Rodríguez, de Húsares del Rey; D. Lucas Vivas, del segundo Escuadrón de Húsares; D. Pedro Ramón Núñez, del tercero; D. Alejo Castex, de Migueletes; y D. Antonio Luciano Ballesteros, de Quinteros: y habiendo tomado la voz el caballero Síndico Procurador General, les hizo entender el conflicto en que se hallaba el Exmo. Cabildo, los males que iban á resultar siempre que se innovase en lo resuelto: y recordándoles su comprometimiento del día anterior, les significó que expresasen francamente su sentir, si se podría contar con las armas de su cargo para sostener el Gobierno establecido.— Contestaron todos por su orden, á excepción de los tres primeros, que nada dijeron, que el disgusto era general en el pueblo y en las tropas, por la elección de Presidente Vocal de la Junta, hecha en la persona del Exmo. Sr. D. Baltazar Hidalgo de Cisneros: y algunos, que habían trabajado incesantemente la noche anterior para contenerlas. Que no sólo no podían sostener al Gobierno establecido, pero ni aun sostenerse á sí mismos, pues los tendrían por sospechosos, ni aun evitar los insultos que se hacían al Exmo. Cabildo. Que el pueblo y las tropas estaban en una terrible fermentación, y era preciso atajar ese mal con tiempo, contrayendo á él sólo por ahora los primeros cuidados; porque así lo exigía la suprema ley, sin detenerse en los demás que se temían y recelaban.— Estando en esta sesión, las gentes que cubrían los corredores dieron golpes por varias ocasiones á las puertas de la Sala Capitular, oyéndose las voces de que quería saber lo que se trataba; y uno de los señores Comandantes, Don Martín Rodríguez, tuvo que salir á aquietarlas.— Concluida la sesión, en la que los señores comandantes ratificaron su primer concepto y cuanto habían espresado, se retiraron; y los Señores, conociendo que en tan apuradas circunstancias no se presentaba otro arbitrio sino que el Exmo. Señor D. Baltazar Hidalgo de Cisneros, hiciese absoluta dimisión del mando, acordaron que en el momento pase una diputación compuesta de los señores D. Manuel Mancilla y el Dr. D. Tomás Manuel de Anchorena, á hacer presente á la Exma. Junta, que nuevas ocurrencias y muy graves han estrechado á este Cabildo á variar de las ideas que manifestó en su oficio de hoy, y que era de necesidad indispensable para la salud del pueblo,

que el Exmo. Señor Presidente se separase del mando: y que, en el caso de avenirse, sea sin protesta alguna, para no exasperar los ánimos: en la inteligencia de que el Cabildo, en todo tiempo le franqueará cuantos documentos pida de lo ocurrido, quedando abierto el acuerdo hasta que regrese la diputación.—Regresó ésta y espuso que el Exmo. Señor Presidente se había prestado á la dimisión del mando: pero que, para dejar bien puesto su nombre, había querido hacerlo con protestas: que la diputación entonces le manifestó los deseos del Cuerpo Capitular en esta parte, y se había avenido á hacer la renuncia llanamente asegurado con la oferta del Exmo. Cabildo, que inmediatamente iba á ponerlo en práctica, y se pasaría aviso de todo.—Y los Señores acordaron se esperen las resultas.—En este estado, ocurrieron otras novedades. Algunos individuos del pueblo, á nombre de éste, se apersonaron á la Sala, esponiendo que para su quietud y tranquilidad, y para evitar cualesquiera resultas en lo futuro, no tenía por bastante el que el Exmo. Señor Presidente se separase del mando; sino que habiendo formado idea de que el Exmo. Cabildo en la elección de la Junta se había escedido de sus facultades, y teniendo noticia cierta de que todos los señores vocales habían hecho renuncia de sus respectivos cargos, había el pueblo reasumido la autoridad que depositó en el Exmo. Cabildo, y no quería existiese la Junta nombrada, sino que se procediese á constituir otra, eligiendo como Presidente Vocal y Comandante General de Armas, al señor Don Cornelio de Saavedra; para vocales, á los señores Doctor D. Juan José Castelli, Licenciado Don Manuel Belgrano, Don Miguel de Azcuénaga, Dr. D. Manuel Alberti, D. Domingo Matheu y D. Juan de Larrea; y para Secretarios á los Doctores D. Juan José de Paso y D. Mariano Moreno, con la precisa indispensable cualidad de que, establecida la Junta, debería publicarse en el término de quince días una expedición de quinientos hombres para las provincias interiores, costeada con la renta del señor Virrey, señores Oidores, Contadores mayores, empleados de tabacos, y otros que tuviese á bien cercenar la Junta, dejándoles congrua suficiente para su subsistencia.—En la inteligencia de que ésta era la voluntad decidida del pueblo, y que con nada se conformaría que saliese de esta propuesta; debiéndose temer, en caso contrario, resultados muy fatales. Y los Señores, después de algunas discusiones con dichos individuos, les significaron que para proceder con mejor acuerdo, representase el pueblo aquello mismo por escrito, sin causar el alboroto escandaloso

que se notaba: con lo que se retiraron. Se recibió en el acto un oficio de la Exma. Junta, fecha de hoy, cuyo tenor es el siguiente:—OFICIO DE LA JUNTA:—Exmo. Señor:—Como después de recibido el oficio de V. E. correspondiente al que se le dirigió á las nueve y media de la noche de ayer, se personase á esta Junta Provisional Gubernativa la diputación de V. E., manifestando la necesidad de pasar por el sacrificio de la dimisión del cargo que se ha conservado y dado al Exmo. Señor Virrey, como vocal Presidente, y prestándose á ello con la mayor generosidad y franqueza, resignado á mostrar el punto á que llega su consideración por la tranquilidad pública y en precaución de mayores desórdenes, lo participa á V. E. á fin de que, calmando las agitaciones de su ánimo, pase á la elección de Vocal que subrogue al Exmo. Señor Virrey Don Baltazar Hidalgo de Cisneros; y quede entendido que se le deben guardar las preeminencias del cargo que ha servido, y los honores correspondientes á su graduación y clase. De todo lo que se instruye prontamente al público por bando.—Dios Guarde á V. E. muchos años.—Buenos Aires, 25 de Mayo de 1810.—Dr Juan Nepomuceno Sola.—Cornelio de Saavedra—Dr. Juan José Castelli—José Santos Inchaurregui. Exmo. Cabildo, justicia y regimiento de esta Capital.» Y los Señores, con respecto á las ocurrencias últimamente sobrevenidas, acordaron se le conteste en el momento, suplicándole se sirva suspender la publicación del bando, hasta que este Cabildo le informe de sus últimas deliberaciones.—Y se pasó el Oficio, concebido en los términos siguientes:—OFICIO DEL CABILDO Á LA JUNTA:—Exmo. Señor:—Enterado este Cabildo, por el oficio que V. E. le ha pasado esta mañana de la dimisión hecha por el Exmo. Señor D. Baltazar Hidalgo de Cisneros del cargo que se le confirió de Vocal Presidente de la Junta Provisoria Gubernativa, solo puede contraerse por ahora, con respecto á las apuradas circunstancias y novedades últimamente ocurridas, á suplicar á V. E. se digne mandar suspender la publicación del bando, hasta que por este Cabildo se le informe de sus últimas determinaciones.—Dios guarde á V. E. muchos años. Sala Capitular de Buenos Aires, á las doce y media de la mañana del día 25 de Mayo de 1810.—Exmo. Señor —Juan José Lezica—Martín Gregorio Yaniz—Manuel Mancilla—Manuel José Ocampo—Juan de Llano—Jaime Nadal y Guarda—Andrés Dominguez—Tomás Manuel de Anchoarena—Santiago Gutiérrez—Dr. Julián de Leiva—Exmo. Señores Vocales de la Junta Superior de Gobierno.»—Des-

pués de un largo intervalo de espera, presentaron los individuos arriba citados el escrito que ofrecieron, firmado por un número considerable de vecinos, religiosos, comandantes y oficiales de los cuerpos, vaciando en él las mismas ideas que manifestaron de palabra. Y los Señores les advirtieron que congregasen al pueblo en la plaza, pues que el Cabildo, para asegurar la resolución, debía oír del mismo pueblo si ratificaba el contenido de aquel escrito.—Ofrecieron ejecutarlo así y se retiraron. Al cabo de un gran rato salió el Exmo. Cabildo al balcón principal, y el caballero Síndico Procurador General, viendo congregado un pequeño número de pueblo con respecto al que se esperaba, inquirió que «¿dónde estaba el pueblo?»—Y después de varias contestaciones dadas por los que allí se habían personado, y reconveniones hechas por el caballero Síndico, se oyeron entre aquellas las voces de que, si hasta entonces se había procedido con prudencia por que la ciudad no espermentase desastres, sería ya preciso echar mano de los medios de violencia: que las gentes, por ser hora inoportuna, se habían retirado á sus casas; que se tocase la campana del Cabildo y que el pueblo se congregase en aquel lugar para satisfacción del Ayuntamiento; y que si por falta del badajo no se hacía uso de la campana, mandarían ellos tocar generala y que se abriesen los cuarteles, en cuyo caso sufriría la ciudad, lo que hasta entonces se había procurado evitar.—Y los Señores, viéndose conminados de esta suerte, y con el fin de evitar la menor efusión de sangre, que sería una nota irreparable para un pueblo que tenía dadas tan incontestables pruebas de su lealtad, nobleza y generosidad, determinaron que por mí, el Actuario, se leyese en altas é inteligibles voces el pedimento presentado, y que los concurrentes espresasen si era aquella su voluntad. Se leyó el pedimento y gritaron á una: que aquello era lo que pedían y lo único que querían se ejecutase. Seguidamente se leyeron varios capítulos que había meditado el Exmo. Cabildo, para el caso de que se hiciese lugar á la erección de la nueva junta. Primero, que se encargaría á ésta velase sobre el orden y la tranquilidad pública, haciéndola responsable caso contrario: contestaron de conformidad.—Segundo, que el Cabildo velaría sobre la conducta de los vocales, y los removería siempre que no fuese arreglada: contestaron que esto debía ser con justificación de causa y conocimiento del pueblo.—A que repuso el caballero Síndico, que el Exmo. Cabildo no procedería sin causa y sin manifestarla:—y callaron.—Tercero, que la Junta debía nombrar á quien ocu-

pase cualquiera vacante por remoción, renuncia, muerte, ausencia ó enfermedad: contestaron de acuerdo.—Cuarto, que la Junta no podría imponer pechos, gravámenes ni contribuciones al vecindario, sin consulta y consentimiento del Cabildo: contestaron de conformidad.—Con lo que los señores se retiraron á la Sala, trataron sobre las circunstancias críticas en que se hallaba el Cabildo, precisado á ceder á la violencia y con una precipitación sin término, por evitar los tristes efectos de una conmoción declarada y las funestas consecuencias que asoman, tanto por lo que acaba de oirse, como por el hecho notorio de haber sido arrancados hoy públicamente los bandos que se fijaron, relativos á la elección é instalación de la primera Junta: y en vista de todo acordaron que sin pérdida de instantes se establezca nueva Junta por acta separada y sencilla, eligiéndose para ella de vocales los mismos individuos que han sido nombrados de palabra, en palabra, en papeles sueltos, y en el escrito presentado por los que han tomado la voz del pueblo, archivándose esos papeles y el escrito para constancia en todo tiempo. Que sin pérdida de tiempo, en precaución de que sobrevenga la noche, se proceda á la instalación de la Junta y se publique el bando, sin detenerse en las fórmulas que se observaron para la instalación de la primera, porque estrechan los momentos, citándose solamente á los señores Vocales, y á los Ministros, Gefes, Prelados y Comandantes que puedan ser habidos en tan limitado tiempo. Con lo que se concluyó la acta, que firmaron dichos señores, de que doy fe.—Juan José Lezica - Martín Gregorio Yaniz—Manuel Mancilla—Manuel José de Ocampo—Juan de Llano - Jaime Nadal y Guarda—Andrés Domínguez—Tomás Manuel de Anchorena—Santiago Gutiérrez - Dr. Julián de Leiva—Licenciado D. Justo José Núñez, Escribano Público y de Cabildo.

(*Registro Oficial de la República Argentina* : — *Tomo I* (1810-1821)
 página 18 — *Publicación Oficial* — *Imprenta La República* —
 Año 1879.)

Primera Junta -- 25 de Mayo

La Junta Provisional Gubernativa de esta Capital, etc., etc.
 — Por cuanto, á consecuencia de diputación pasada del Exmo. Cabildo á la Junta, manifestándole la absoluta nece-

sidad de calmar la agitación del pueblo por la dimisión del cargo de Vocal Presidente de ella por el Exmo. Señor Virrey Don Baltazar Hidalgo de Cisneros, no obstante de que se le había aceptado el día de ayer, fué en concepto de importar á la pública conveniencia; y manifestándose conforme y llano S. E. á ejecutarlo generosamente en manos de la misma Junta con resignación de sus facultades obtenidas, sin reserva de más que de los derechos, honores y preeminencias de su graduación, clase y cargo que ha servido: todo lo que le ha sido admitido en sesión de la Junta de este día, y noticiándolo al Exmo. Cabildo por oficio para los fines correspondientes, mandando se tenga notorio al público para su inteligencia.— Por tanto, y para que así se tenga entendido, se publicará por Bando en la forma ordinaria, fijándose ejemplares en los parajes de estilo.— Fecho en Buenos Aires, á veinte y cinco de Mayo de mil ochocientos diez.— Juan Nepomuceno Sola — Cornelio de Saavedra — Dr. Juan José Castelli — José Santos de Inchaurregui. — Por mandato de la Exma. Junta:— D. José Ramón de Basavilbaso.

(Publicado en la página 485, tomo IV, de la Revista del Río de la Plata.

Acta del día 25 de Mayo

En la muy Noble y muy Leal ciudad de la Santísima Trinidad, Puerto de Santa María de Buenos Aires, á 25 de Mayo de 1810: los Señores del Exmo. Cabildo, justicia y regimiento, á saber:— D. Juan José de Lezica y D. Martín G. Yaniz, Alcaldes ordinarios de primer y segundo voto; Regidores D. Manuel Mancilla, Alguacil Mayor, D. Manuel José de Ocampo, D. Juan de Llano, D. Jaime Nadal y Guarda, D. Andrés Domínguez, D. Tomás Manuel de Anchorena, D. Santiago Gutiérrez y el Dr. D. Julián de Leiva, Síndico Procurador General; se enteraron de una representación que han hecho á este Exmo. Cabildo un considerable número de vecinos, los Comandantes y varios oficiales de los cuerpos voluntarios de esta Capital, por sí y á nombre del pueblo: en que, indicando haber llegado á entender que la voluntad de este reside la Junta y Vocales que este Exmo Ayuntamiento se sirvió erigir y publicar, á consecuencia de las facultades que se le concedieron en el Cabildo

abierto del 22 del corriente; y porque puede, habiendo reasumido la autoridad y facultades que confirió, y mediante la renuncia que ha hecho el señor Presidente nombrado y demás Vocales, revocar y dar por ningún valor la Junta erigida y anunciada con el bando de ayer 24 del corriente, la revoca y anula; y quiere que este Exmo. Cabildo proceda á hacer nueva elección de vocales que hayan de constituir la Junta de Gobierno; y han de ser, los señores D. Cornelio de Saavedra, Presidente de dicha Junta y Comandante General de Armas; el Dr. D. Juan José Castelli; el Dr. D. Manuel Belgrano; D. Miguel Azcuénaga; Dr. D. Manuel Alberti; D. Domingo Matheu y D. Juan Larrea; y Secretarios de ella los Dres. Juan José Paso y D. Mariano Moreno: cuya elección se deberá manifestar al pueblo por medio de otro bando público, entendiéndose ella bajo la expresa y precisa condición, de que, instalada la Junta, se ha de publicar en el término de quince días una expedición de quinientos hombres para auxiliar las Provincias interiores del reino; la cual haya de marchar á la mayor brevedad, costeándose esta con los sueldos del Exmo. Señor D. Baltazar Hidalgo de Cisneros, Tribunales de la Real Audiencia Pretorial y de Cuentas, de la Renta de Tabacos, con lo demás que la Junta tenga por conveniente cercenar; en inteligencia de que los individuos rentados no han de quedar absolutamente incongruos, porque esta es la manifiesta voluntad del pueblo.—Y los Señores, habiendo salido al balcón de estas casas Capitulares, y oído que el pueblo ratificó por aclamación el contenido de dicho pedimento ó representación, después de haberse leído por mí en altas é inteligibles voces, acordaron: que debían mandar y mandaban: —Lo primero, se erigiese una nueva Junta de Gobierno, compuesta de los señores expresados en la representación á que se ha hecho referencia y en los mismos términos que de ella aparece, mientras se erige la Junta General del Virreinato. —Lo segundo, que los señores que forman la precedente corporación, comparezcan sin pérdida de momentos en esta Sala Capitular á prestar el juramento de usar bien y fielmente sus cargos, conservar la integridad de esta parte de los dominios de América á nuestro amado soberano, el señor D. Fernando VII y sus legítimos sucesores, y observar puntualmente las leyes del reino. Lo tercero, que luego que los referidos señores presten el juramento, sean reconocidos por depositarios de la autoridad Superior del Virreinato por todas las corporaciones de esta Capital y su vecindario, respetando y obedeciendo todas sus disposicio-

nes, hasta la Congregación de la Junta General del Virreinato; bajo las penas que imponen las leyes á los contraventores. Lo cuarto, que la Junta ha de nombrar quien deba ocupar cualquier vacante por renuncia, muerte, ausencia, enfermedad ó remoción. Lo quinto, que aunque se halla plenísimamente satisfecho de la honrosa conducta y buen procedimiento de los señores mencionados, sin embargo, para satisfacción del pueblo, se reserva también estar muy á la mira de sus operaciones, y caso no esperado que faltasen á sus deberes, proceder á la deposición con causa bastante y justificada, reasumiendo el Exmo. Cabildo, para este solo caso, la autoridad que le ha conferido el pueblo.—Lo sexto, que la nueva Junta ha de celar sobre el orden y la tranquilidad pública, y seguridad individual de todos los vecinos, haciéndosele, como desde luego se le hace, responsable de lo contrario.—Lo séptimo, que los referidos señores, que componen la Junta provisoria, quedan excluidos de ejercer el poder judiciario, el cual se refundirá en la Real Audiencia, á quien se pasarán todas las causas contenciosas que no sean de gobierno. Lo octavo, que esta misma Junta ha de publicar todos los días primeros del mes, un estado en que se de razón de la administración de Real Hacienda.—Lo nono, que no pueda imponer contribuciones, ni gravamen al pueblo ó sus vecinos, sin previa consulta y conformidad de este Exmo. Cabildo.—Lo décimo, que los referidos señores despachen sin pérdida de tiempo órdenes circulares á los Jefes de lo interior y demás á quienes corresponde, encargándoles muy estrechamente, y bajo de responsabilidad, hagan que los respectivos Cabildos de cada uno convoquen por medio de esquelas la parte principal y más sana del vecindario, para que, formado un Congreso de solos los que en aquella forma hubiesen sido llamados, elijan sus representantes, y éstos hayan de reunirse á la mayor brevedad en esta Capital, para establecer la forma de Gobierno que se considere más conveniente.—Lo undécimo, que elegido así el representante de cada ciudad ó villa, tanto los electores como los individuos capitulares, le otorguen poder en pública forma, que deberán manifestar cuando concurran á esta Capital, á fin de que se verifique su constancia; jurando en dicho poder no reconocer otro soberano que el señor D. Fernando VII y sus legítimos sucesores, según el orden establecido por las leyes, y estar subordinado al Gobierno que legítimamente les represente. Cuyos capítulos mandan se guarden y cumplan precisa y puntualmente:

reservando á la prudencia y discreción de la misma Junta el que tome las medidas más adecuadas para que tenga debido efecto lo determinado en el artículo 10, como también el que designe el tratamiento, honores y distinciones del cuerpo y sus individuos: y que para que llegue á noticia de todos, se publique esta acta por bando inmediatamente, fijándose en los lugares acostumbrados.—Y lo firmaron, de que doy fe.—Juan José Lezica—Martín Gregorio Yaniz—Manuel Mancilla—Manuel José de Ocampo—Juan de Llano -- Jaime Nadal y Guarda -- Andrés Domínguez -- Tomás Manuel de Anchorena -- Santiago Gutiérrez -- Dr. Julián de Leiva—Licenciado D. Justo José Nuñez, Escribano Público y de Cabildo.

(*Registro Oficial de la República Argentina* : — Tomo I (1810-1821)
página 22 — *Publicación Oficial* — *Imprenta* : La República : —
Año 1879.)

8

Acta de instalación de la Junta Provisoria Gubernativa

En la muy Noble y muy Leal Ciudad, Puerto de Santa María de Buenos Aires, á 25 de Mayo de 1810; sin haberse separado de la sala Capitular los señores del Exmo. Cabildo, se colocaron á la hora señalada bajo de dosel, con sitial por delante, y en él la imagen del crucifijo y los Santos Evangelios; y comparecieron los señores presidente y vocales de la nueva Junta Provisoria Gubernativa, D. Cornelio de Saavedra, Dr. D. Juan José Castelli, Licenciado D. Manuel Belgrano, D. Miguel de Azcuénaga, Dr. D. Manuel Alberti, D. Domingo Matheu y D. Juan Larrea; y los señores Secretarios Drs. D. Juan José Paso y Dr. D. Mariano Moreno, quienes ocuparon los respectivos lugares que les estaban preparados, colocándose en los demás los Prelados, Jefes, Comandantes y personas de distinción que concurrieron. Y habiéndose leído por mí, el actuario, la acta de elección, antes de jurar, expuso el señor Presidente electo que en el día anterior había hecho formal renuncia del cargo de vocal de la primera Junta establecida y que sólo por contribuir á la tranquilidad pública y á la salud del pueblo, admitía el que le conferían de nuevo; pidiendo se sentase en el acta ésta su esposición; seguidamente, hincado de rodillas, y poniendo la mano derecha sobre los santos Evangelios, prestó juramento de desempeñar legalmente el cargo, conservar íntegra esta parte de América á nuestro augusto soberano el señor D. Fernando VII y sus legítimos sucesores y guardar puntualmente las leyes del reino. — Lo prestaron en los mismos términos los demás señores vocales, por su orden, y los señores Secretarios, contraídos al exacto desempeño de sus respectivas obligaciones: habiendo expresado el señor D. Miguel Azcuénaga, que admitía el cargo de Vocal de la Junta, para que por el Exmo. Cabildo y una parte del pueblo había sido nombrado este día, atento al interés de su buen orden y tranquilidad, más que debiendo ser la opinión, no sólo del Exmo. Cabildo, sino la universal de todo el vecindario, pueblos y partidos de dependencia, pedía se tomara la que faltase y la representante,

para la recíproca confianza y seguridad de validez de todo procedimiento. — Finalizada la ceremonia, dejó el Exmo. Cabildo el lugar que ocupaba bajo de dosel, y lo tomaron los señores Presidente y Vocales de la Junta; y el señor Presidente exhortó al concurso y al pueblo á mantener el orden, la unión y la fraternidad, como también á guardar respeto y hacer el aprecio debido de la persona del Exmo. Señor D. Baltazar Hidalgo de Cisneros y toda su familia. — Cuya exhortación repitió en el balcón principal de las Casas Capitulares, dirigiéndose á la muchedumbre que ocupaba la Plaza. Con lo que se concluyó la acta de instalación, retirándose dicho señor Presidente y demás señores Vocales y Secretarios de la Real Fortaleza, por entre un inmenso concurso con repiques de campanas y salva de artillería en aquella: donde no pasó por entonces el Exmo. Cabildo, como lo había ejecutado la tarde de la instalación de la primera Junta, á causa de la lluvia que sobrevino, y de acuerdo con los señores Vocales, reservando hacer el cumplido el día de mañana. — Y lo firmaron, de que doy fe. — Juan José Lezica — Martín Gregorio Yaniz — Manuel Mancilla — Manuel José de Ocampo — Juan de Llano — Jaime Nadal y Guarda — Andrés Domínguez — Tomás Manuel de Anchorena — Santiago Gutiérrez — Dr. Julián de Leiva — Cornelio de Saavedra — Dr. Juan José Castelli — Manuel Belgrano — Miguel de Azcuénaga — Dr. Manuel Alberti — Domingo Matheu — Juan de Larrea — Dr. Juan José Paso — Dr. Mariano Moreno — Licenciado D. Justo José Nuñez, Escribano público y de Cabildo. — Concuerta con sus originales que existen en el archivo de este Exmo. Cabildo, á que en lo necesario me refiero. Y de mandato de dicho Exmo. Cabildo, autorizo, signo y firmo el presente, en Buenos Aires, á 2 de Octubre de 1810. Licenciado D. Justo José Nuñez, Escribano Público y de Cabildo.

(*Registro Oficial de la República Argentina* , — *Tomo I* (1810-21),
página 23 — *Publicación Oficial*. — *Imprenta La República* . —
Año 1879.)

9

Acta del juramento prestado á la Junta

Buenos Aires, 28 de Mayo de 1810. — En la muy noble y muy leal Ciudad de la Santísima Trinidad, Puerto de Santa María de Buenos Aires, á 28 de Mayo de 1810, estando juntos y congregados en la Sala de sus acuerdos, los señores del Exmo. Ayuntamiento, á saber: — Don Juan José Lezica y D. Martín Gregorio Yaniz, Alcaldes ordinarios de 1º y 2º voto, y Rejidores D. Manuel Mancilla, Alguacil Mayor; D. Manuel José de Ocampo; D. Juan de Llano; D. Jaime Nadal y Guarda; D. Andrés Dominguez; D. Tomás Manuel de Anchorena; D. Santiago Gutierrez; con asistencia del caballero Síndico Procurador General Dr. Julián de Leiva; trataron sobre que, habiendo los Tribunales, majistrados, corporaciones y jefes de esta Capital, prestado en los días anteriores el reconocimiento y obediencia á la Junta Provisoria Gubernativa, en virtud de haberlo ésta así determinado, era de precisa necesidad el que hubiese en las Actas Capitulares constancia del modo y forma con que se hizo esta ceremonia, para en todo tiempo hacer de ella el uso que corresponda. — A la hora de las 3 de la tarde del día 26, los señores Presidente, Vocales y Secretarios de la Junta, concurrieron á esta Sala Capitular y colocados bajo de dosel, con sitial por delante y en él una imagen del crucifijo y los Santos Evangelios, dirigió el señor Presidente una breve arenga al concurso, manifestando en ella el fin de aquella ceremonia y su necesidad, y significando que debía ser el primero en prestar el juramento el Exmo. Cabildo. — En este acto tomó la voz el señor Alcalde de primer voto, y con arreglo á lo acordado en la acta anterior del 26 del corriente, expuso las razones porque el Cabildo no debía sujetarse al juramento, y que sólo lo haría bajo la protesta de que el acto no perjudicase á sus derechos y prerrogativas, siempre que la Junta lo juzgare necesario, cuyas razones y protestas explanó seguidamente el caballero Síndico Procurador General, como representante inmediato del pueblo. A lo que repuso el señor Presidente que si la Junta exigía aquel juramento era

con el mismo fin de sostener los derechos y prerrogativas de la ciudad y los augustos de nuestro soberano el señor D. Fernando VII, como se advertirá por la fórmula que leyó y es del tenor siguiente:— « *Jura V. S. á Dios nuestro Señor y por estos Santos Evangelios, reconocer la Junta Provisional de las Provincias del Río de la Plata, á nombre del señor D. Fernando VII; y para guarda de sus derechos obedecer sus órdenes y decretos, y no atentar directa ni indirectamente contra su autoridad, propendiendo pública y privadamente á su seguridad y respeto?*— Que concebido el juramento en estos términos era necesario prestarlo, y debía hacerlo el Exmo. Cabildo, admitiéndosele, como se le admitía, la indicada protesta.— A cuya consecuencia el señor Alcalde de primer voto, hincado de rodillas y poniendo la mano derecha sobre los santos Evangelios, prestó el juramento por todo el cuerpo capitular. Seguidamente lo prestó á nombre de la Real Audiencia el Fiscal del Crimen D. Antonio Caspe y Rodríguez protestando del acto, porque el Tribunal, como inmediato representante de la soberanía, jamás había jurado sino al Soberano, ni debía jurar á otra autoridad; cuya protesta se le admitió, espresándole el señor Presidente que las circunstancias eran extraordinarias y estrechaban á la prestación del juramento.— Lo prestaron lisa y llanamente el Real Tribunal del Consulado, el Venerable Cabildo Eclesiástico, el Administrador de Correos, el de la Real Aduana, el Director de Tabacos, los prelados de las cuatro religiones y los Jefes y Comandantes militares de esta Guarnición. Al día siguiente y á la misma hora, con asistencia del Ilmo. Señor Obispo y el Comandante de las fuerzas Británicas surtas en este río, Mr. Carlos Fabian Montagier y su oficialidad, lo prestó el señor Oidor D. Manuel José de Reyes, á nombre de la Real Audiencia, como Ministro más antiguo de los que concurrieron al acto, reiterando las protestas que habían hecho el día antes el señor Fiscal del Crimen y el Exmo. Cabildo, y agregando que el juramento á la Junta lo hacía el Tribunal siempre bajo el concepto de dependencia en la Junta de Gobierno legítimamente establecida en la Península. Lo prestó el Tribunal de cuentas, con la misma protesta de la Real Audiencia; y lo prestaron los señores Ministros de la Real Hacienda, reiterando la del Exmo. Cabildo. En seguida los señores de la Junta y demás concurrentes salieron á los balcones de las Casas Capitulares y el señor Presidente bajó á la plaza mayor donde estaban formadas las tropas en cuadro y éstas prestaron el

mismo juramento, contestando con descargas generales, á que siguieron salvas de artillería en la Real Fortaleza y en los barcos ingleses anclados en estas balizas, los cuales, con la comandanta, estuvieron también empavesados. Con lo que se dió fin á la ceremonia. Hizo presente el señor Alcalde de primer voto, que el señor Presidente de la Junta Gubernativa le había significado á nombre de ésta, que era muy preciso para alcanzar la unión de la Provincia, que el Exmo. Cabildo de su parte dirigiese oficios circulares á los del Virreinato invitándoles á esta unión y al nombramiento de diputados con la mayor brevedad posible. Y los Señores, con respecto á las circunstancias, y con el fin de evitar en lo posible los desastres que pudieran ocasionar la desunión y la discordia, en perjuicio de los sagrados derechos del Rey y de la Patria, acordaron que en el día se forme oficio circular para los Cabildos del Virreinato, haciendo en él puntual expresión de los pasajes ocurridos y de las causas que los han motivado; acompañándose, para mayor instrucción, la proclama de este Cabildo, con que dió principio el Congreso General, el bando de la cesación en el mando del señor Virrey, la acta del 24, y el bando publicado el 25, comprensivo de la elección de la Junta Provisional Gubernativa, sacándose para ello las copias que fuesen precisas sin reparar en gasto, por lo que hace y estrecha el tiempo. Con lo que se concluyó este acuerdo, que firmaron dichos señores, de que doy fe. — Juan José Lezica — Martín Gregorio Yaniz — Manuel Mancilla — Manuel José de Ocampo — Juan de Llano — Jaime Nadal y Guarda — Andrés Domínguez — Dr. Tomás Manuel Anchorena — Santiago Gutiérrez — Dr. Julián de Leiva — Licenciado Justo J. Núñez, Escribano Público y de Cabildo.

(Apéndice á la Rec. de Angelis, que no se terminó; los pliegos publicados existen en la biblioteca del Dr. Esteves Sagui.)

10

Circular de Don Baltazar Hidalgo de Cisneros

comunicando su abdicación y recomendando el envío de Diputados á la Junta

Las apuradas críticas circunstancias en que estuvo esta Capital en los días 20 hasta el 25 del corriente, de resultados de las funestas noticias recibidas por un buque inglés procedente de Gibraltar, del estado en que se hallaba nuestra metrópoli en fines de Febrero, y consultando la decidida voluntad del Pueblo, según se manifestó por su Exmo. Cabildo, así de oficio como por medio de diputaciones, deseoso de evitarle los estragos que le amenazaban por dichos antecedentes y otros que mediaron, convencido por ellos que el único medio para libertarlo era la abdicación de mi mando, la verifiqué el día 25 del corriente, el que lo ha reasumido una Junta de Gobierno, cuyo Presidente es el Teniente Coronel y Comandante de los batallones Urbanos del Cuerpo de Patricios, D. Cornelio Saavedra; esperando yo del acreditado patriotismo de Vd. é individuos de su mando, que considerando el medio adoptado por este pueblo, como dirigido á conservar la integridad de estos dominios á su legítimo dueño nuestro amado soberano el señor D. Fernando VII, contribuirán por su parte al logro de tan altos fines, para los que tanto interesa el orden, la subordinación y unión de voluntades, que debe manifestarse enviando inmediatamente á esta Capital Diputados autorizados con los necesarios poderes para que en Junta General determinen lo que debe practicarse.—Dios guarde á V. muchos años.—Buenos Aires, 26 de Mayo de 1810.—Baltazar Hidalgo de Cisneros.—Señor Don...

(Continuación de la Rec. de Angelis, de que sólo se publicaron algunos pliegos; biblioteca del Dr. Esteves Seguí.)

11

Intimación de obediencia á las nuevas autoridades**BANDO:**

La Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata, por el señor D. Fernando VII.—POR CUANTO:—ha tenido por conveniente esta Junta disponer y determinar lo contenido en los artículos siguientes:—I. Que todas las Corporaciones, Jefes y vecindario asistan á la misa solemne que se celebrará en la Santa Iglesia Catedral el Miércoles 30 del Corriente en acción de gracias por la instalación de esta Junta, y terminación feliz que han tenido las agitaciones de este pueblo, causadas por los desgraciados sucesos de la Península.—II. Que siendo la base principal del orden felizmente restablecido, la confianza del pueblo en sus magistrados, y el respeto y puntual obediencia á sus determinaciones y mandatos, se ordena la subordinación á la autoridad nuevamente establecida, en inteligencia de que ésta usará de toda la energía conveniente para sostener con dignidad el sagrado depósito que el Pueblo le ha confiado, castigando con todo rigor á cualquiera que siembre desconfianzas ó recelos.—III. Que será castigado con igual rigor cualquiera que vierta especies contrarias á la estrecha unión que debe reinar entre todos los habitantes de estas Provincias, ó que concurra á la entre Españoles Europeos y Españoles Americanos, tan contraria á la tranquilidad de los particulares y bien general del Estado.—IV. Que todos los habitantes de este pueblo guarden decoro y veneración á la respetable persona del Exmo. Señor D. Baltazar Hidalgo de Cisneros, dispensándole las consideraciones correspondientes á su carácter y al distinguido patriotismo con que en favor de este País se ha ofrecido á repetir en cualquier destino sus importantes servicios.—V. Que los Alcaldes de barrio celen el puntual cumplimiento de las antedichas prevenciones, avisando á los señores Oidores de sus respectivos cuarteles, la menor inobservancia.—POR TANTO:—y para que lo determinado en los precedentes cinco artículos llegue á la noticia de todos los

vecinos estantes y habitantes de esta Capital, y que por los mismos se cumpla puntualmente, se publicarán en ella por bando en la forma de estilo, fijándose ejemplares, para su mayor notoriedad, en los lugares acostumbrados.—Fecho en Buenos Aires, á 26 de Mayo de 1810.—Cornelio de Saavedra—Manuel Belgrano—Miguel de Azcuénaga—Dr. Manuel Alberti—Juan Larrea—Dr. Mariano Moreno—Secretario.—En Buenos Aires, dicho día, mes y año, yo, el Escribano Mayor del Virreinato, salí de la Real Fortaleza acompañado de la Tropa, pifanos y tambores de estilo, haciendo cabeza principal el señor sargento mayor de Plaza D. José María Cabrer, y en los parajes acostumbrados de esta Capital hice publicar, por voz del pregonero público el Bando antecedente, fijando los ejemplares que en él se previenen: el que pongo por diligencia y de ello doy fe.—Basavilbaso.

(NOTA.—Este documento ha sido publicado en la página 491 del tomo IV de la «Revista del Río de la Plata»; según allí se expresa, fué hecho en la noche del 25 de Mayo de 1810, apenas instalada la primera Junta, extendiéndose y publicándose al día siguiente. El día primeramente señalado fué el 3 de Junio.)

Citación para prestar juramento á la Junta

Buenos Aires, 26 de Mayo de 1810.—Hallándose ya en posesión y ejercicio de sus funciones esta Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata, á nombre del señor D. Fernando VII, lo aviso á usted para que hoy á las tres de la tarde concurra á la Sala Capitular á prestar el juramento de reconocimiento y obediencia á ella, y repita mañana á la misma hora su comparencia en el propio lugar para presenciar igual juramento que deben prestar las tropas de esta guarnición.—Dios, etc.

(Archivo de Gobierno ... 1810 — XXXIII, Número 38.)

12

Circular comunicando la instalación de la Junta

La Junta Provisional Gubernativa de la Capital de Buenos Aires.—Los desgraciados sucesos de la Península, han dado más ensanches á la ocupación bélica de los franceses sobre su territorio, hasta aproximarse á las murallas de Cádiz y dejar desconcertado el cuerpo representativo de la soberanía, por falta del señor Rey D. Fernando VII: pues que, dispersada de Sevilla, y acusada de malversación de sus deberes por aquel pueblo, pasó en el discurso de su emigración y dispersión á constituir, sin formalidad ni autoridad, una Regencia, de la que nadie puede asegurar que sea centro de la unidad nacional, y depósito firme del poder del Monarca, sin exponerse á mayores convulsiones que las que acerbán el movimiento vicioso y arriesgado de su instalación. No es necesario fijar la vista en el término á que puedan haber llegado las desgracias de los pueblos de la Península, tanto por la fortuna de las armas invasoras, cuanto por la falta ó incertidumbre de un gobierno legítimo y supremo al que se deban referir y subordinar los demás de la Nación, que, por la dependencia forzosa que los estrecha al orden y seguridad de la asociación, tienen su tendencia á la felicidad presente, y á la precaución de los funestos efectos de la división de las partes del Estado, que temen con razón todo lo que puede oponerse á la mejor suerte en los dominios de América. El pueblo de Buenos Aires, bien cierto del estado lastimoso de los dominios europeos de S. M. C. el señor D. Fernando VII; por lo menos incierto del gobierno legítimo soberano en la representación de la Suprema Junta Central disuelta ya, y más en la Regencia que se dice constituida por aquella, sin facultades, sin sufragios de la América, y sin instrucción de otras formalidades que debían acceder al acto; y sobre todo, previendo que no anticipándose las medidas que deben influir en la confianza y opinión pública de los dominios de América, faltaría el principio de un gobierno indudable por su origen, estimó desplegar la energia que siempre ha mostrado para interesar su lealtad, celo y amor por la causa del Rey Fernando, removiendo los obstáculos que la des-

confianza, incertidumbre y desunión de opiniones podrían crear en el momento más crítico que amenaza, tomando á la América desapercibida de la base sólida del Gobierno que pudiese determinar su suerte en el continente americano español.—Manifestó los deseos más decididos por que los pueblos mismos recobrasen los derechos originarios de representar el poder, autoridad y facultades del Monarca, cuando éste falta, cuando éste no ha provisto de Regente y cuando los mismos pueblos de la Matriz han calificado de deshonorado al que formaron, procediendo á sustituirle representaciones rivales que disipan los tristes restos de la ocupación enemiga.—Tales conatos son íntimamente unidos con los deseos honrosos de su seguridad y felicidad, tanto interna como esterna, alejando la anarquía y toda dependencia de poder ilegítimo, cual podía ser sobre ineficaz para el instituto social, cualquiera que se hubiese levantando en el tumulto y convulsiones de la Península, después de la dispersión y emigración de los miembros de la Junta Central.—Cuando estas discusiones se hacen en sesiones de hombres desencontrados, son espuestas á las consecuencias de una revolución, y esponen á que quede acéfalo el cuerpo político: pero si se empeñan por el orden y modo regular de los negocios gravísimos, no pueden menos de conducir como por la mano, á la vista del efecto que se desea.—Tal ha sido la conducta del pueblo de Buenos Aires en propender á que examinase si, en el estado de las ocurrencias de la Península, debía subrogarse el mando superior de gobierno en las Provincias del Virreinato en una Junta Provisional, que asegurase la confianza de los pueblos y velase sobre su conservación contra cualesquier asechanzas, hasta reunir los votos de todos ellos, en quienes recae la facultad de proveer la representación del Soberano.—El Exmo. Cabildo de la Capital, con anuencia del Exmo. Señor Virrey, á quien informó de la general agitación, agravada con el designio de retener el poder del gobierno, aun notoriada que fuese la pérdida total de la Península y su Gobierno, como espresa la proclama del 18 del corriente, convocó la más sana parte del pueblo en Cabildo General abierto, donde se discutió y votó públicamente el negocio más importante por su fundamento, para la tranquilidad, seguridad y felicidad general; resultando de la comparación de sufragios, la mayoría con esceso por la subrogación del mando del Exmo. Señor Virrey en el Exmo. Cabildo, interin se ordenaba una Junta Provisional de Gobierno, hasta la congregación de la general de las Provincias: voto que

fué acrecentado y aumentado con la aclamación de las tropas y numeroso resto de habitantes. Ayer se instaló la Junta en un modo y forma que ha dejado fijada la base fundamental sobre que debe elevarse la obra de la conservación de estos dominios al señor D. Fernando VII. Los ejemplares impresos de los adjuntos bandos, y la noticia acreditada en bastante forma, que el Exmo. Cabildo y aun el Exmo. Señor Virrey, que fué, D. Baltazar Hidalgo de Cisneros, dan á Vd., no dejan duda á esta Junta de que será mirada por todos los jefes, corporaciones, funcionarios públicos y habitantes de todos los pueblos del Virreinato, como centro de la unidad, para formar la barrera inespugnable de la conservación íntegra de los dominios de América á la dependencia del señor D. Fernando VII, ó de quien legítimamente le represente. No menos espera que contribuirán los mismos á que, cuanto más antes sea posible, se nombre y vengan á la Capital los diputados que se enuncian, para el fin expresado, en el mismo acto de instalación ocupándose con el mayor esfuerzo en mantener la unión de los pueblos, y consultar la tranquilidad y seguridad individual; teniendo consideración á que la conducta de Buenos Aires, muestra que, sin desorden y sin vulnerar la seguridad, puede obtenerse el medio de consolidar la confianza pública y su mayor felicidad. Es de esperar que cimentado este paso, si llega el desgraciado momento de saberse sin duda alguna la pérdida absoluta de la Península, se halle el distrito del Virreinato de Buenos Aires, sin los graves embarazos que por la incertidumbre y falta de legítima representación del soberano de España á la ocupación de los franceses, la pusieron en desventaja para sacudirse de ellos: puesto que, tanto como el enemigo descubierto invasor, debe temerse y precaverse el que desde lo interior promueve la desunión, proyecta la rivalidad y propende á introducir el conflicto de la suerte política, no prevenido.—Cuenta Vd. con todo lo que penda de los esfuerzos de esta Junta, cuyo desvelo por la conservación del orden y sistema nacional se mostrará por los efectos. Este ha sido el concepto de proponer el pueblo al Exmo. Cabildo la expedición de quinientos hombres para lo interior, con el fin de proporcionar auxilios militares para hacer observar el orden, si se teme que sin él no se harían libre y honradamente las elecciones de vocales diputados, conforme á lo prevenido en el Artículo X del bando citado, sobre que hace esta Junta los más eficaces encargos por su puntual observancia y la del Art. XI. Asimismo importa

que usted quede entendido, que los diputados han de irse incorporando en esta Junta conforme y por el orden de su llegada á la Capital, para que así se hagan de la parte de confianza pública que conviene al mejor servicio del Rey y gobierno de los pueblos; imponiéndose, con cuanta anticipación conviene á la formación de la general, de los graves asuntos que tocan al Gobierno. Por lo mismo, se habrá de acelerar el envío de Diputados: entiendo deber ser uno por cada ciudad ó villa de las Provincias, considerando que la ambición de los extranjeros puede escitarse á aprovechar la dilación en la reunión, para defraudar á su Majestad los legítimos derechos que se trata de preservar.—Servirá á todos los pueblos del virreinato de la mayor satisfacción el saber, como se lo asegura la Junta, que todos los Tribunales, Corporaciones, Jefes y Ministros de la Capital, sin excepción, han reconocido la Junta, y prometido su obediencia para la defensa de los augustos derechos del Rey en estos dominios: por lo cual es tanto más interesante que este ejemplo empuje los deseos de Vd. para contribuir en estrecha unión á salvar la patria de las convulsiones que la amenazan, si no se prestasen las Provincias á la unión y armonía que debe reinar entre ciudadanos de un mismo origen, dependencia é intereses. A esto se dirigen los conatos de esta Junta; á ello los ruegos del pueblo principal del Virreinato, y á lo mismo se le escita, con franqueza de cuantos auxilios y medios penden de su arbitrio, que serán dispensados prontamente en obsequio del bien y concentración de los pueblos.—Real fortaleza de Buenos Aires, á 27 de Mayo de 1810.—Cornelio de Saavedra—Dr. Juan José Castelli—Manuel Belgrano—Miguel de Azcuénaga—Dr. Manuel Alberti—Domingo Matheu—Juan Larrea—Dr. Juan José Paso, Secretario—Dr. Mariano Moreno, Secretario.

(*Registro Oficial de la República Argentina* — Tomo I (1810-1821)
página 25 — *Publicación Oficial* — *Imprenta* — *La República* —
Año 1879.)

13

Plan de Operaciones

que el Gobierno Provisional de las Provincias Unidas del Río de La Plata
debe poner en práctica para consolidar la grande obra de nuestra
libertad é independencia

Señores de la Exma. Junta Gubernativa de las Provincias
del Río de La Plata:

Volar á la esfera de la alta y digna protección de V. E. los pensamientos de este plan, en cumplimiento de la honorable comisión con que me ha honrado, si no es ambición del deseo, es á lo menos, un reconocimiento de gratitud á la Patria; ella solamente es el objeto que debe ocupar las ideas de todo buen ciudadano, cuya sagrada causa es la que me ha estimulado á sacrificar mis conocimientos en obsequio de su libertad, y desempeño de mi encargo. Tales son los justos motivos que al prestar el más solemne juramento ante ese Superior Gobierno, hice presente á V. E. cuando, en atención á las objeciones que espuse, convencido de las honras, protestó V. E. que nunca podrían desconceptuarse mis conocimientos, si ellos no llegaban á llenar el hueco de la grande obra.

En esta atención y cumplimiento de mi deber, sería un reo de lesa patria, digno de la mayor execración de mis conciudadanos, indigno de la protección y gracia que ella dispensa á sus defensores, si habiéndose hecho por sus representantes en mi persona, la confianza de un asunto, en que sus ideas han de servir para regir en parte el móvil de las operaciones que han de poner á cubierto el sistema continental de nuestra gloriosa insurrección, no me desprendiese de toda consideración, aun para con la Patria misma, por lisonjear sus esperanzas con la vil hipocresía y servil adulación de unos pensamientos contrarios, que en lugar de conducirla á los grandes fines de la obra comenzada, sólo fuesen causa de desmoronar los débiles cimientos de ella; y en esta virtud, el carácter de la comisión y el mío, combinando un torrente de razones, las más sólidas y poderosas, uniformando sus ideas, me estrechan indispensablemente

á manifestarme con toda la integridad propia de un verdadero patriota.

La verdad es el signo más característico del hombre de bien: la resignación, el honor y la grandeza de ánimo en las arduas empresas, son las señales mas evidentes de un corazón virtuoso, verdadero amante de la libertad de su patria; tales son los principios que me he propuesto seguir para desenvolver el cúmulo de reflexiones que me han parecido mas conducentes para la salvación de la Patria, en el presente Plan, sin que preocupación alguna política sea capaz de trastornar ni torcer la rectitud de mi carácter y responsabilidad.

.....

En esta verdad las historias antiguas y modernas de las revoluciones, nos instruyen muy completamente de sus hechos, y debemos seguirlos para consolidar nuestro sistema, pues yo me pismo al ver lo que llevamos hecho hasta aquí, pero temo, á la verdad, que si no dirigimos el orden de los sucesos con la energía que es propia (y que tantas veces he hablado de ella) se nos desplome el edificio; pues el hombre en ciertos casos es hijo del rigor, y nada hemos de conseguir con la benevolencia y la moderación; estas son buenas, pero no para cimentar los principios de nuestra obra; conozco al hombre, le observo sus pasiones, y combinando sus circunstancias, sus talentos, sus principios y su clima, deduzco, por sus antecedentes, que no conviene sino atemorizarle y obscurecerle aquellas luces que en otro tiempo será lícito iluminarle; mi discurso sería muy vasto sobre esta materia, pero deduciendo la consecuencia, tendamos la vista á nuestros tiempos pasados y veremos que tres millones de habitantes, que la América del Sud abraza en sus entrañas, han sido manejados y subyugados sin mas fuerza que la del rigor y capricho de unos pocos hombres: véase pueblo por pueblo de nuestro vasto continente, y se notará que una nueva orden, un mero mandato de los antiguos mandones, ha sido suficiente para manejar miles de hombres, como una máquina que compuesta de inmensas partes, con el toque de un solo resorte tiene á todas en continuo movimiento, haciendo ejercer á cada una sus funciones para que fué destinada.

La moderación fuera de tiempo no es cordura ni es una verdad; al contrario, es una debilidad cuando se adopta un sistema que sus circunstancias no lo requieren: jamás, en ningún tiempo de revolución, se vió adoptada por los gobernantes la moderación ni la tolerancia; el menor pen-

samiento de un hombre que sea contrario á un nuevo sistema, es un delito por la influencia y por el estrago que puede causar con su ejemplo, y su castigo es irremediable.

Los cimientos de una nueva república nunca se han cimentado sino con el rigor y el castigo, mezclado con la sangre derramada de todos aquellos miembros que pudieran impedir sus progresos: pudiera citar los principios de la política y resultados que consiguieron los principales maestros de las revoluciones, que omito el hacerlo por ser tan notorias sus historias y por no diferir algunas reflexiones que se me ofrecen « acerca de la justicia de nuestra causa, « de la confianza que debemos tener en realizar nuestra « obra, de la conducta que nos es más propia observar, « como igualmente de las demás máximas que podrán « rantizar nuestros emprendimientos. »

En esta atención, *ya que la América del Sud ha proclamado su independencia, para gozar de una justa y completa libertad*, no carezca por más tiempo de las luces que se le han encubierto hasta ahora y que pueden conducirla en su gloriosa insurrección. Si no se dirige bien una revolución, si el espíritu de intriga, ambición y egoismo, sofoca el de la defensa de la patria, en una palabra, si el interés privado se prefiere al bien general, el noble sacudimiento de una nación es la fuente más fecunda de todos los escesos y del trastorno del orden social. Lejos de conseguirse, entonces, el nuevo establecimiento y la tranquilidad interior del Estado, que es en todo tiempo el objeto de los buenos, se cae en la más horrenda anarquía de que se siguen los asesinatos, las venganzas personales y el predominio de los malvados sobre el virtuoso y pacífico ciudadano.

.....
Hay hombres de bien (si cabe en los ambiciosos el serlo) que detestan verdaderamente todas las ideas de los gobiernos monárquicos, cuyo carácter se les hace terrible, y que quisieran, sin derramamiento de sangre, sancionar las verdaderas libertades de la patria; no profesan los principios abominables de los turbulentos, pero como tienen talento, algunas virtudes políticas, y buen crédito, son otro tanto más de temer; y á éstos sin agraviarlos (porque algún día serán útiles) debe separárselos; porque, unos por medrar, otros por mantenerse, cuales por inclinación á las tramas, cuales por la ambición de los honores, y el menor número por el deseo de la gloria, ó para hablar con más propiedad, por la vanidad de la nombradía, no son propios por su carácter

para realizar la grande obra de la libertad americana, en los primeros pasos de su infancia.

.....
Las máximas que realizan este plan y hago presentes, son, no digo las únicas practicables, sino las mejores y más admisibles, en cuanto se encaminen al desempeño y gloria de la lid en que estamos tan empeñados. ¿Quién dudará que á las tramas políticas, puestas en ejecución por los grandes talentos, han debido muhas naciones la obtención de su poder y de su libertad? Muy poco instruido estaría en los principios de la política, las reglas de la moral, y la teoría de las revoluciones, quien ignorase de sus anales las intrigas que secretamente han tocado los gabinetes en iguales casos; y ¿diremos por esto que han perdido algo de su dignidad, decoro y opinión pública en lo más principal? Nada de eso: los pueblos nunca saben, ni ven, sino lo que se les enseña y muestra, ni oyen más que lo que se les dice.

En el orden moral, hay ciertas verdades matemáticas en que todos convienen, así como todos admiten los hechos incontestables de la física. Pregúntesenos á cada uno qué figura tiene el sol, y responderemos unánimes que redonda; pregúntesenos, también, sobre los bienes de la esclavitud y males de la libertad, y nos parecerán éstos preferibles á aquéllos, porque siendo pocos numerosos unos y otros, queremos, naturalmente, la mayor suma de bienes, de la cual solo hay que separar una cantidad pequeña de males.

Pero cuando vengamos á los medios de formar la mayor suma de estos bienes, y la segregación más considerable de estos males, entonces falta la unanimidad, el problema divide las opiniones y los debates comienzan.

Tal sería el estado en que nos encontraríamos, si nos uniesen generalmente los intereses de la Patria; ¿y quien de vosotros, señores, sería capaz de poner en cuestión la libertad y felicidad de ella, no teniendo sino unos conocimientos superficiales de las causas secretas de la revolución? ¿Acaso se necesitó más fortaleza el 25 de Mayo de 1810, para derribar los colosos de la tiranía y despotismo, que se necesita para erigir los cimientos de nuestro nuevo edificio? Desembarácese el suelo de los escombros, quiero decir, concluyamos con nuestros enenigos, reformemos los abusos corrompidos y póngase en circulación la sangre del cuerpo extenuado por los antiguos déspotas, y de este modo se establecerá la santa libertad de la Patria.

Y en consecuencia, creería no haber cumplido, tanto con la comisión con que se me ha honrado, como con la gra-

titud que debo á la Patria, si no manifestase mis ideas según y como las siente el corazón más propias, y los conocimientos que me han franqueado veinticinco años de estudios constante sobre el corazón humano, en cuyo, sin que me domine la vanidad, creo tener algún voto en sus funciones intelectuales; y por el contrario, si moderando mis reflexiones no mostrase los pasos verdaderos de la felicidad, sería un reo digno de la mayor execración; y así no debe escandalizar el sentido de mis voces, de *cortar cabezas, verter sangre y sacrificar á toda costa*, aun cuando tengan semejanza con las costumbres de los antropófagos y caribes. Y sino ¿porqué nos pintan á la libertad ciega y armada de un puñal? Porque ningún estado envejecido ó provincias, pueden regenerarse, ni cortar sus corrompidos abusos, sin verter arroyos de sangre.

Hablemos con franqueza: hasta ahora sólo hemos conocido la especulativa de las conspiraciones y como tal cuando tratamos de pasar á la práctica nos amilanamos. Pues no; no son estas las lecciones que nos han enseñado y dado á conocer los maestros de las grandes revoluciones; fíjese la vista sobre los anales de las historias del Norte, de la Francia, etc., y aun de la misma España, y se observará las tramas y astucias políticas, únicamente dirigidas á conseguir por todo camino aquellos fines á que han aspirado.

.....
Art. 1º En cuanto á la conducta gubernativa más conveniente á las opiniones públicas, y conducente á las operaciones de la dignidad de este Gobierno, deben ser las que instruyen las siguientes reflexiones:

1º Sentado el principio, que en toda revolución hay tres clases de individuos: la primera, los adictos al sistema que se defiende; la segunda, los enemigos declarados y conocidos; la tercera, los silenciosos espectadores, que manteniendo una neutralidad, son realmente los verdaderos egoistas: bajo esta suposición, la conducta del gobierno en todas las relaciones exteriores é interiores, con los pueblos extranjeros y sus agentes ó enviados públicos y secretos, y de las estratagemas, proposiciones, sacrificios, regalos, intrigas, franquicias y demás medios que sea menester poner en práctica, debe ser silenciosa y reservada con el público, sin que nuestros enemigos, ni aun la parte sana del pueblo, lleguen á comprender nada de sus operaciones; la razón es: lo primero, porque nuestros enemigos exteriores é interiores podrían rebatirnos las más veces nuestras diligencias; lo segundo, porque además de comprometer á muchos de aque-

llos instrumentos de quienes fuese preciso valernos ocasionándoles su ruina, también perderíamos la protección de tales resortes para lo sucesivo, y lo que es más, la opinión pública; y lo tercero, porque mostrando sólo los buenos efectos de los resultados de nuestras especulaciones y tramas, sin que los pueblos penetren los medios ni resortes de que nos hemos valido, atribuyendo estos sus buenos efectos á nuestras sabias disposiciones, afianzaremos más el concepto público y su adhesión á la causa, haciendo que tributen cada día mayor respeto y holocausto á sus representantes; y así obviaremos quizá las diferentes mutaciones á que está espuesto el Gobierno.

2º A todos los verdaderos patriotas cuya conducta sea satisfactoria, y tengan dado en ella pruebas relevantes, si en algo delinquiesen, que no sea concerniente al sistema, débese siempre tener con éstos una consideración y extremada bondad; en una palabra, en tiempo de revolución, ningún otro delito debe castigarse, sino el de infidencia y rebelión contra los sagrados derechos de la causa que se establece; y todo lo demás debe disimularse.

3º En todos los empleos medios, después que se hallen ocupados por éstos, la carrera de sus ascensos debe ser muy lenta, porque conceptuando que el establecimiento radicado de nuestro sistema, es obra de algunos años, todos aspirarían á generales y magistrados; y para obviar esto deben establecerse premios, como *escudos*, *columnas*, *pirámides*, etc., para premiar las acciones de los guerreros y adormecer con estos engaños á aquellos descontentos que nunca faltan, y exigen por su avaricia más de lo que merecen. ¿Pues en qué se perjudica á la Patria que un ciudadano lleve el brazo lleno de escudos, ni que su nombre esté escrito en un paraje público, cuando de ello no resulta gravamen al erario? Y así con estos debe ser la conducta según y como llevo referido.

4º Con los segundos, debe observar el Gobierno una conducta muy distinta, y es la más cruel y sanguinaria; la menor especie debe ser castigada y aun en los juicios estrordinarios y asuntos particulares, debe siempre preferirse al patriota, porque, siendo una verdad el ser amante á su patria, es digno á que se le anteponga, y se forme de él no sólo el mejor concepto, sino que también se le proporcione la mayor comodidad y ventajas: es lo primero; y lo segundo, porque aprisionando más su voluntad, se gana un partidario y orador que forma con su adhesión una parte sólida de su cimiento.

5° Igualmente con los segundos, la menor semiprueba de hechos, palabras, etc., contra la causa, debe castigarse con pena capital, principalmente cuando concurren las circunstancias de recaer en sujetos de talento, riqueza, carácter, y de alguna opinión; pero cuando recaiga en quienes no concurren éstas, puede tenerse alguna consideración, moderando el castigo; pero nunca haciendo de éstos la más mínima confianza, aun cuando diesen las pruebas más relevantes y aun cuando se desprendiesen de la mitad de sus intereses, hasta tanto no consolidar nuestro sistema, sobre bases fijas y estables; que entonces si, á los que se hubiesen distinguido con servicios particulares, se les debe atender, y, formando de ellos el concepto á que son acreedores, participarles el premio.

6° En los mismos términos, como la conducta de estos segundos y su adhesión contraria á nuestra causa es radicalmente conocida, sin embargo, el Gobierno debe, tanto en la Capital como en todos los pueblos, á proporción de su extensión, conservar unos espías, no de los de primer ni segundo orden, en talentos y circunstancias, pero de una adhesión conocida á la causa, á quienes indistintamente se les instruya bajo de secreto, comisionándolos para que introduciéndose con aquellas personas de más sospecha, entablando comunicaciones y manifestándose siempre de un modo contrario de pensar á la causa que se defiende, traten de descubrir por este medio los pensamientos de nuestros enemigos y cualesquiera tramas que se pudieran intentar; y á éstos débese agradecerlos con un corto sueldo mensual, instruyéndolos como lo he referido, bajo de ciertas restricciones que se les debe imponer; éstos no han de obtener ningún empleo ó cargo alguno, ni aun el de soldado, pues este solo carácter sería suficiente para frustrar los intentos de este fin.

7° Consecuentemente, cuantos caigan en poder de la Patria de estos segundos exteriores é interiores, como gobernadores, capitanes generales, mariscales de campo, coroneles, brigadieres y cualesquiera otros sujetos que obtienen los primeros empleos de los pueblos, que aún no nos han obedecido, y cualquiera otra clase de personas de talento, riqueza, opinión y concepto, principalmente las que tienen un conocimiento completo del país, sus situaciones, caracteres de sus habitantes, noticias exactas de los principios de la revolución y demás circunstancias de esta América, debe decapitárselos; lo primero, porque son unos antemurales que rompemos de los principales que se opondrían á

nuestro sistema por todos los caminos; lo segundo, porque el ejemplo de estos castigos es una valla para nuestra defensa, y además nos atraemos el concepto público; y lo tercero, porque la Patria es digna de que se le sacrifique estas víctimas como triunfo de la mayor consideración é importancia para su libertad, no sólo por lo mucho que pueden influir en alguna parte de los pueblos, sino que, dejándolos escapar, podría la uniformidad de informes, perjudicarnos mucho en las miras de las relaciones que debemos entablar.

8° Ultimamente, la más mera sospecha denunciada por un patriota contra cualquier individuo de los que presentan un carácter enemigo, debe ser oída y aun debe dársele alguna satisfacción, suponiendo que sea totalmente infundada, por solo un celo patriótico mal entendido, ya desterrándolo por algún tiempo, más ó menos lejos del pueblo donde resida, ó apropiándole otra pena, según la entidad del caso, por un sinnúmero de razones que omito, pero una de ellas es para que el denunciante no enerve el celo de su comisión, vea que se tiene confianza y se forma concepto de su persona.

11. Los bandos y mandatos públicos deben ser muy sanguinarios y sus castigos al que infringiere sus deliberaciones, muy ejecutivos, cuando sean sobre asuntos en que se comprometan los adelantamientos de la Patria, para ejemplo de los demás.

14. Asimismo, cuando los sujetos que empleados en los primeros cargos, como gobernadores de los pueblos, jefes de divisiones, ó generales, llegasen á obtener una grande opinión y concepto, máxime los que gobiernan fuerzas, debe precisarse con disimulo mandarlos de unos destinos á otros, ó con cualquier pretexto, llamándolos á la Capital, separarlos de sus encargos por algún tiempo, haciendo variar sus comisiones después, á fin de que como son los que manejan las fuerzas, ayudados de la opinión y concepto, no puedan cometer atentados que comprometan la felicidad pública, de lo que causarían disensiones intestinas y guerras civiles; lo mismo debe ejecutarse cuando la opinión y concepto de los primeros empleados en todo ramo claudique en los pareceres públicos, aunque sea sin causa verdadera, dándoles luego el Gobierno una satisfacción secreta de las causas que han dado margen á retirarlos de sus empleos; y, sin perjudicar su mérito, emplearlos en oportunidad con variación de destino.

6° Al mismo tiempo de darse estos pasos, deben mandarse algunos agentes á cada pueblo, de conocimientos y con las instrucciones necesarias que sean del caso, sin que propaguen de golpe las especies de su misión, mandándolos recomendados á las casas más principales y de los jueces, tanto para observar la conducta de éstos, como para sembrar las benevolencias y buenas disposiciones del nuevo gobierno, lo justo de él, su actividad en los negocios, los fines santos de conservar á nuestro Soberano el precioso destino de la América del Sud, la felicidad que nos promete, la igualdad y demás beneficios de un gobierno sabio y benéfico; pero al mismo tiempo pintándoles la lucha de nuestra España, el gran poder de Napoleón, las pocas disposiciones y recursos y la ninguna esperanza que le quedan á la infeliz España, de cuyos resultados será indispensable su total exterminio; y que los debates de algunos pueblos del interior con la Capital, son sólo procedidos de la avaricia y ambición al mando, queriendo negarle un derecho tan antiguo y de preferencia; suponiendo al mismo tiempo que se dirigían las miras de aquellos antiguos gobernantes, hacia la entrega á Napoleón, y esto siempre con Fernando en la boca, que igualmente el haber quitado algunos jefes y castigádolos, es porque habiéndoseles encontrado contestaciones con la Francia, trataban de intrigar y adherir hacia las miras inicuas de Napoleón; y que relativo á estas consecuencias, se habia descubierto que las tropas que se habían desarmado en el año de 809, fué ya con designio de apocar las fuerzas y extenuar el Estado, con relación á las miras de entrega, cuyas tropas trataba el gobierno de volver á armar bajo de mejor pie y disciplina; estas y otras disposiciones políticas daré por separado en la obra anunciada, pues este solo es un bosquejo de lo que debe observarse, y á estos agentes debe señalárseles un sueldo competente para la subsistencia, con la esperanza de atender sus servicios oportunamente.

.....
8° Además, teniendo, como he dicho, espías en los pueblos, comunicando estos todas las noticias particulares y verdaderas que ocurran de cualquiera clase que sean, debe también tener el Gobierno en esta Capital seis ú ocho sujetos que se empleen en escribir cartas anónimas, ya fingiendo ó suplantando nombres y firmas supuestas, tanto para la plaza de Montevideo, como para la campaña, en que su contenido, v. gr. sea el siguiente:

Debe suponerse, en su sentido, que se ha recibido cartas

de alguien, á quien se contesta; en ellas se ha de espresar el acuse de recibo de aquellas noticias que se han tenido verdaderas, por los agentes, para dar un color sublime á la apariencia, suponiendo igualmente diversidad de imposturas, ya de que queda orientado, de que le comunicará todas las operaciones públicas y secretas, ó ya de que conoce su patriotismo acerca de la causa de la Patria, de cuyo queda satisfecho el Gobierno, ó ya de ofertas que se suponga haya hecho, y otras mil suposiciones relativas determinando la Junta que esas cartas sean mandadas por diferentes conductos, cuando se proporcione, con encargo reservado de manifestarlas y hacerlas interceptar por los gobernadores, satélites y demás justicias de Montevideo, ya porque por el tribunal de vigilancia ó por el gobierno, han de ser abiertas, las cuales con apariencias de unas demostraciones tan convincentes, por muchas razones que espongan aquellos sujetos á quienes se dirigen dichas cartas, y aunque juren no conocer semejantes firmas y protesten que son imposturas, últimamente por muchos alegatos que espongan, nunca podrá dejar el gobierno de parar su atención y mirarlos como sospechosos, cuando aparezcan á la vista comprobados unos datos tan positivos con cosas verídicas, como, v. gr., el acuse de noticias y disposiciones que el gobierno y las justicias han tomado de antemano, real y verdaderamente, siendo conforme lo pintan las cartas; de aquí resulta además, que por mucho que se le oculte al pueblo, no puede dejar este de trascender algo, y por cuya combinación indisponemos por esta forma los ánimos del populacho, con los de aquellos sujetos de más carácter y caudales, á quienes se haya enviado algunas de aquellas cartas, que podrían servir y ayudarles en su empresa y con sus talentos ó bienes, los que viéndose vilipendiados y calumniados no harán una mitad de lo que podrían hacer en favor de aquella, y, talvez, algunos, enconados sus espíritus, abandonando ó trayéndose consigo la parte de bienes que puedan salvar, en las ocasiones que haya proporción, tomen el partido de salirse afuera de la Plaza y venirse á nuestros territorios; de lo que resulta infinidad de adelantamientos con esta propagación de imposturas, y que cuanto más hombres de caudales y adictos tengamos, más recursos se nos presenten y á nuestros enemigos muchos menos.

Para estos ardidés nos franquea un margen absoluto la diversidad de opiniones y divisiones en que están las familias, pues unas son de un bando y otras de otro; y, por lo tanto, se deben escribir las cartas de padres á hijos, de

tíos á sobrinos, de mujeres á maridos, etc., y además por este orden, con cuya idea no puede dudarse, logremos dividir los ánimos é indisponernos de tal manera que quizá causemos disensiones y convulsiones populares, de que podemos sacar mucho fruto, sembrando entre ellos mismos la semilla de la discordia y desconfianza.

13. Además, con las proclamas seductivas, halagüeñas y lisonjeras, con las frases de *Libertad, Igualdad y Felicidad*, se les estimulará á que concurren los vecinos de la Banda Oriental con aquellos auxilios de carros, carretas, caballadas, boyadas y otros que sean menester para el tránsito y conducción de las divisiones del ejército en sus marchas, entusiasmandolos con papeles y certificados de buenos servidores, que se les dará por los jefes de destacamentos y demás oficiales á quienes auxiliaren, á nombre del Superior Gobierno, mandándose de aquí, en medios pliegos de papel, documentos impresos, dejando los correspondientes blancos para llenarlos con las correspondientes circunstancias que sean del caso, y si se denegasen á prestar aquellos auxilios correspondientes, se les hará comprender que se les tendrá por malos servidores y sospechosos á la causa que se defiende.

17. Serán desterrados todos los españoles, patricios y demás individuos que no hayan dado alguna prueba de adhesión á la causa con antelación, y los extranjeros, si estando avecinados no justificasen haberse mantenido neutrales, y serán conducidos á los destierros de Malvinas, Patagones y demás destinos que se hallase por conveniente.

Explican el origen del importantísimo documento que acaba de leerse, los que transcribimos á continuación:

Exma. Junta Gubernativa:

En el estado de las mayores calamidades y conflictos de estas preciosas provincias, vacilante el gobierno, corrompido el despotismo, por la ineptitud de sus providencias, le fué preciso sucumbir, transfiriendo las riendas de él en el nuevo Gobierno provisional de las Provincias Unidas del Rio de la Plata, quien haciéndose cargo de la gran máquina de este Estado, cuando se hallaba inundado de tantos males y abusos, destruido su comercio, arruinada su agricultura, las ciencias y las artes abatidas, su navegación estenuada, sus minerales desquiciados, exhaustos sus erarios,

los hombres de talento y mérito desconceptuados por la vil adulación, castigada la virtud y premiados los vicios; últimamente cuando destruidos todos los canales de la felicidad pública, entró á conocer en el fondo de sus contagios, de-seoso de sacrificar sus conocimientos y sus fuerzas físicas é intelectuales para cortar de raíz estos males que se tocaban ya con las manos, y hacer entrar á los perturbadores en el orden de sus deberes, en virtud de la confianza que los pueblos habían depositado en los representantes del nuevo gobierno, cuyos sagrados objetos fueron de su desvelo.

Entonces, agobiado por un trabajo incesante, nunca perdió de vista aquellos mas principales, para en oportunidad mas propia como de la mayor consideración; y sólo se ocupó en las primeras necesidades del Estado, hasta poner á cubierto la dignidad y decoro del nuevo gobierno, como la seguridad y salud pública, con el ejercicio de la restauración de los legítimos derechos de la libertad de los pueblos.

Estos fueron los primeros pasos que indispensablemente se obligó este gobierno á poner en ejecución para inspirar á los pueblos, más y más, la confianza que habían depositado en sus representantes, y combinar después los demás planes concernientes á los fines de su instalación.

En este estado, cuando el gobierno tomó las riendas de su manejo, se vió precisado á dictar diariamente providencias eslabonadas por el acaso de los acontecimientos que iban sucediéndose, de unos en otros, sin tener un plan formal que rigiese por un orden político las operaciones de la grande obra de nuestra libertad; y en consecuencia, existiendo las circunstancias, por reduplicarse más y más las necesidades y cuidados de este gobierno, se nombró una comisión secreta, para que presente un plan de proposiciones especulativas, que dirijan en parte, con arreglo á sus instrucciones políticas, las operaciones de su conato y deseos.

Además de los puntos que se previenen, podrá la comisión extender sus vastos conocimientos, hacia las demás máximas conducentes al desempeño de nuestros deberes y consolidación del sistema de nuestra causa, cuyos puntos, según y como van nombrados, son los siguientes:

Art. 1º En primer lugar, la conducta gubernativa más conveniente á las opiniones públicas, y conducentes á las operaciones de la dignidad de este gobierno.

Art. 2º El medio más adecuado y propio á la sublevación de la Banda Oriental del Rio de la Plata, rendición de la Plaza de Montevideo y demás operaciones á este fin.

Art. 3° El método de las relaciones que las Provincias Unidas deben secretamente entablar en la España, para el regimen de nuestra inteligencia y gobierno.

Art. 4° La conducta que sea más propia y debamos mantener con Portugal y el gabinete de Inglaterra.

Art. 5° Las comisiones que deben entablarse secretamente por nuestros agentes, en lo interior, y demás provincias dependientes de este gobierno, para consolidación de nuestro sistema.

Art. 6° Los arbitrios que deben adoptarse para fomentar los fondos públicos, luego que el Perú y demás interior del Virreinato sucumban, para los gastos de nuestra guerra y demás emprendimientos, como igualmente para la creación de fábricas, ingenios y otras cualesquiera industrias, navegación, agricultura, etc.

Art. 7° Las relaciones secretas que nuestros agentes y emisarios deben desempeñar en los países extranjeros, como Portugal é Inglaterra.

Art. 8° Las comisiones y clases de negocios que nuestros agentes y emisarios deben entablar secretamente con las provincias del Brasil para sublevarlas, haciéndolas gustar de las dulzuras de la libertad y derechos de la naturaleza.

Art. 9° Los medios que deben adoptarse cuando esté consolidado y reconocido por la Inglaterra, Portugal y demás naciones de la Europa el sistema de nuestra libertad; y cual debe ser el fin de sus negociaciones entonces en las provincias del Brasil, con relación á la conquista de todo el Rio Grande y demás provincias de dicho reino.

Es cuanto se me ofrece representar en cumplimiento de la comisión que para el efecto se me instruyó. — Dios guarde á V. E. muchos años. — Buenos Aires, 15 de Julio de 1810. — *Doctor Manuel Belgrano*. — Es copia de su original. *Cornelio de Saavedra*, presidente. — *Doctor Juan Jose Paso*, Secretario.

Acta del Acuerdo celebrado por el Superior Gobierno

El antecedente proyecto presentado por el miembro de este superior gobierno, el señor doctor Manuel Belgrano, en cumplimiento de la comisión dada por dicho para el efecto, fué leído una y dos veces, en acto secreto por los señores de esta Junta Gubernativa, quienes, después de una madura y reflexiva consulta, aprobándolo mutuamente to-

dos, y apoyándolo en todas sus partes, determinaron que, leyéndose por tercera vez para el día siguiente, se nombrase la comisión que había de desempeñar este encargo, que dicha comisión fuese á pluralidad de votos secretos, que deberían recogerse por uno de los señores secretarios, y puestos en manos del señor Presidente, mandase se oficiase inmediatamente al citado á pluralidad de votos, para que pasando á presentarse en la primera Junta que se le citare prestare juramento en la más debida forma, y según costumbre, sobre los puntos que se acordase, pasándole al mismo tiempo una copia firmada del antecedente proyecto, por solo el señor Presidente y uno de los señores secretarios; mandando igualmente se archivase el original en la caja de acuerdos y disposiciones reservadas, lo que se hará luego inmediatamente de presentarse las tres llaves de dicha caja; y firmaron la presente acta en la sala de acuerdos de esta Capital de Buenos Aires, á 17 de Julio de 1810.—*Cornelio de Saavedra*, presidente.—*Doctor Juan José Castelli*, *Miguel Azcuénaga*, *Doctor Manuel Alberti*, *Domingo Matheu*, *Juan Larrea*, *Doctor Juan José Paso*, secretario, *Doctor Mariano Moreno*, secretario.

(*Escritos de Mariano Moreno* , Biblioteca del Ateneo , tomo I, página 447 — Imprenta de Pablo E. Coni é Hijos — 1896).

14

Medidas para la conservación del orden público

¡Pueblo de Buenos Aires!—Desde que depositásteis el poder en nuestras manos quedaron las vuestras ligadas á la obediencia; vuestro juramento confirmó obligaciones concernientes á vuestra instalación, y la confianza debida á la elección libre de nuestras personas debe desterrar todos los recelos, esperando la salud pública del celo y vigilancia de los que gobiernan. La ambición no abrió el camino á los que formamos esta Junta; voluntariamente nos llamásteis, y no ha sido pequeño sacrificio recibir en nuestros hombros un peso superior quizás á nuestras fuerzas. Nos hemos consagrado á vuestro bien y moriremos por conseguirlo; pero también os habeis sujetado á nuestro gobierno y debeis estar obedientes á nuestros preceptos. La Junta os recuerda estos sencillos principios que jurásteis al tiempo de su instalación, pero que ayer noche han sido violados escandalosamente. El señor Fiscal del Crimen, al retirarse á su casa, ha sido insultado en su persona, y si sus agresores no han descubierto el vil interés de un asesino, han sido agitados seguramente de una atrevida venganza que en las equivocaciones de su origen deja espuesta la virtud y desairado el gobierno. La seguridad individual es el primer premio que recibe el hombre que renuncia sus derechos naturales para vivir en sociedad; mengua el honor del gobierno cuando no están seguros los que viven bajo su protección, y si el que atropella á un particular es reo de haber atacado los primeros principios del orden social, ¿á qué grado subirá el atentado cometido contra un magistrado respetable, que exige por tantos títulos la veneración y la confianza? La mordacidad nunca perdona tiro contra los que mandan, y la comunidad perecería envuelta en mil desgracias si los particulares pudiesen, por sí mismos, vengar sus resentimientos. ¡Vecinos de Buenos Aires! Os cubriría de ignominia este atentado, si una general consternación no proscribiese á sus autores. Cuando se instaló esta Junta solemnemente, terminó aquella augusta ceremonia por el voto público que congregásteis al orden, á la tranquilidad y á la obediencia.

La Junta exige de vosotros el más puntual cumplimiento; pero, siendo un deber sagrado de su instalación, perseguir los delitos y á los malvados, ha resuelto aquellas medidas que cree conducentes á la averiguación de este exceso, para explicar su energía con un ejemplar castigo. En esta virtud, manda la Junta lo siguiente:—1º.—Que el señor Alcalde de segundo voto de esta Capital se encargue de una inquisición prolija contra los autores de aquel esceso, procediendo á la prisión de los culpados, con allanamiento de todo fuero; debiendo remitir el sumario á esta Junta, después de concluido, para espedir las providencias que sean de justicia.—2º.—Que todos los alcaldes de barrio hagan rondas en sus respectivos cuarteles, acompañándose de vecinos, y pidiendo, en caso preciso, á todos los cuarteles militares, auxilio de tropa que se les deberá franquear.—3º.—Que ninguna persona particular ande con armas, si no estuviere en actual comisión del Gobierno.—4º.—Que los Alcaldes de rondas persigan toda reunión de gentes á horas intempestivas, prendiendo á los que se encontrasen en gavillas.—5º.—Que se prenda y se castigue con rigor, á todo el que de obra ó de palabra pretenda sembrar divisiones ó descontentos.—6º.—Se declara responsable ante el Gobierno, á cualquiera que no avise todo proyecto ó conspiración contra las autoridades, ó contra la seguridad de algunos particulares.—Buenos Aires, 11 de Junio de 1810.—CORNELIO SAAVEDRA — *Dr. Mariano Moreno, Secretario.*

(*Registro Oficial de la República Argentina* , tomo I (1810-1821),
página 35 — *Publicación Oficial* — *Imprenta de La República* —
— Año 1879.)

15

Integración de la Real Audiencia

Buenos Aires, 22 de Junio de 1810. — La separación de los Oidores y Fiscales puso á la Junta en la necesidad de nombrar Conjueces, que en consorcio del señor Regente Don Lucas Muñoz y Cubero desempeñen la Administración de Justicia. Los Doctores Don José Darragueira, Don Vicente Echeverría y Don Pedro Medrano, fueron nombrados para tan delicado cargo, y el Doctor Don Simón de Cossio fué destinado á servir el Ministerio Fiscal, en todos sus ramos. Estos nombramientos han sido estendidos con la expresa condición de que no gocen más sueldo que dos mil y quinientos pesos, que no tengan tratamiento ni otro traje que el de abogados, guardando en el orden de asiento, la antigüedad de su recepción. El concepto público de estos individuos, será un nuevo vínculo á la confianza del pueblo: no son obra de un favorito que encontraba en los empleos los medios de satisfacer las pasiones y de comprar los delitos, la integridad, la pureza, la literatura prepararon sus caminos y la Magistratura no ha desconocido sus votos, aun cuando sólo haya servido el sostén y brillantez de los que los suscribían. El litigante que ve pendiente de sus manos la decisión de su suerte, no averiguará con ansia cuales han sido sus principios; él esperará tranquilo la decisión de unos letrados á quienes antes entregaba con placer las defensas de sus derechos; y el foro no gemirá con la estrañeza de ver decidiendo *ex tripode* á quienes nunca pisaron sus estrados. La ceremonia de su inauguración fué magestuosa y sencilla; la Junta bajó á la Sala de Acuerdo y en consorcio del señor Regente exigió á los Conjueces el siguiente juramento: *jura Vd. á Dios nuestro Señor y estos Santos Evangelios, usar fiel y legalmente el cargo de Conjuez de esta Real Audiencia, volar las causas de su conocimiento con el desinterés, imparcialidad y justicia que previenen las Leyes; y morir por la defensa de nuestro augusto Monarca el señor Don Fernando VII y conservación de sus augustos derechos, observando las prácticas legales del Tribunal y puntual asistencia al despacho de su Ministerio?— Si así lo hiciere, Dios le ayude, y si no, se lo demande.*

(Gazeta, número 4.)

16

Derechos de esportación sobre frutos del país

ORDEN DE LA JUNTA: — Comprobado por la experiencia que las medidas adoptadas para el derecho de estracción de los frutos y efectos del país, lejos de promover los fines que se propusieron en la destrucción ó minoración del fraude, fomento del comercio y de la agricultura y provisión de medios al Erario, han obrado efectos poco sensibles al beneficio de estas causas, especialmente en lo respectivo á facilitar la esportación de los cueros, que son el principal artículo de nuestras campañas, sin presentarse apariencia de que podamos evacuar los inmensos acopios de esta especie que en los almacenes consumen á sus propietarios con gastos continuos y pérdidas considerables por el deterioro de que son susceptibles; y considerando que la sujeción escrupulosa á reglas que no pueden ajustarse á las actuales circunstancias, sería un obstáculo insuperable al logro de los espresados fines: — meditó esta Junta Provisional Gubernativa para poner en discusión esta importante materia, y al efecto de su más plena deliberación se confirió verbalmente en dos sesiones de los días 3 y 4 del corriente, con asistencia del señor Fiscal de Real Hacienda por S. M. y de los señores Síndico Procurador General del Exmo. Ayuntamiento y Síndico del Real Consulado, con la representación á la vista del apoderado de los hacendados de este suelo y espediente seguido á instancia de los de Montevideo, y de un examen serio y detenido, convenidos los tres referidos señores representantes en la idea esencial del pensamiento propuesto, se determinó, con acuerdo unánime de esta Junta, lo siguiente: — Que los cueros de ganado vacuno pagarán á su estracción cuatro por ciento de alcabala, un real de Ramo de Guerra, medio por ciento de avería ordinaria, medio por ciento de avería extraordinaria, y uno y medio de subvención; los de caballo pagarán medio real de Ramo de Guerra, y el sebo y demás frutos de estracción, pagarán el diez por ciento de derechos reales, y dos y medio por ciento de avería y subvención, aforándose los unos y regulándose la estimación de

los otros por los precios y en la forma prevenida en el acta de 6 de Noviembre del año próximo pasado, con declaración de que la minoración de derechos designada se entienda provisionalmente y rija solamente hasta la celebración del Congreso de las Provincias dependientes: tómese razón en la Administración de Aduana y Tribunal de Cuentas, archivándose éste en la Secretaría de Real Hacienda, por la que se pasarán copias al Ministerio Fiscal de Real Hacienda, al Exmo. Ayuntamiento y Real Tribunal del Consulado. — Buenos Aires, cinco de Junio de mil ochocientos diez. — Dr. Juan José Paso, Secretario.

(Gazeta de Buenos Aires, núm. 1.)

Reglamentando la introducción y extracción de efectos

ORDEN DE LA JUNTA.—De poco serviría que esta Junta Provisional Gubernativa hubiese tratado de moderar los derechos de extracción á los frutos del país, con el fin de hacerlos entrar más fácilmente al comercio exterior en retornos de las introducciones de géneros y efectos extranjeros, si al mismo tiempo que disminuía el ascendente de los derechos, no tomase las medidas y precauciones conducentes á impedir el contrabando y remover las ocasiones más frecuentes de hacerlo, otro de los principales motivos que influyeron en el acuerdo mencionado: en cuya consecuencia, y por apéndice de aquella disposición, se agregan por ahora las siguientes prevenciones:— Todo buque deberá dar á los tres días de su llegada, por medio de su consignatario, el manifiesto de su cargamento general, individualizando las pertenencias ó consignaciones de él, y si no lo hiciese, no se permitirá á ningún comerciante español que se haga cargo de la consignación, y de consiguiente no será admitido el buque y se le obligará á salir inmediatamente de este Río. Como en un mismo buque vienen efectos consignados á distintos sujetos, éstos presentarán, á las 24 horas de admitido, sus manifiestos respectivos al Administrador de la Real Aduana. Si el manifiesto general del cargamento no estuviese conforme con el libro de á bordo que debe llevar el Capitán ó Maestre y no se hubiese manifestado el total de que se componga, será declarado de comiso el buque y la carga que se hubiese ocultado. También se declara de comiso el buque del cual llegue á veri-

ficarse que han sido desembarcados algunos efectos clandestinamente. La minoración que se ha hecho de los derechos de salida, es de tal naturaleza, que no es presumible que en este particular haya el menor fraude, pero si lo hubiese, se hace manifiesto que esta Junta tomará las medidas más estrechas para impedirlo, hasta el extremo de mandar descargar cualquier buque que le pareciese, y si en él se hallase algún esceso, será irremisiblemente declarado por de comiso buque y carga. Sabiendo esta Junta que abusivamente se cargan los tercios de 125 cueros de caballo solo por de á 100, se previene que si siguiese este abuso se descomisarán los fardos que se intentase embarcar bajo este pie. Como también hay igual abuso en el peso del sebo en marquetas, para el caso en que se contravenga, se declara sujeto á las mismas penas. A este efectos, los fabricantes de marquetas y los dueños de prensas, deberán poner á fuego sus respectivas marcas en cada marqueta ó fardo, expresando el número de pieles ó arrobas que contenga. Tendráse así entendido y se tomará razón en la Administración de Aduana y Tribunal de cuentas, pasándose copias al Comandante de los resguardos, al Real Tribunal del Consulado y al señor Fiscal de la Real Hacienda, quedando ésta archivada en la Secretaría de ella.—Buenos Aires, cinco de Junio de mil ochocientos diez.—DR. CASTELLI, Vocal Secretario interino.

(Gazeta de Buenos Aires, núm. 2.)

17

Reglamento para el ejercicio de la autoridad de la Junta

La Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata, á nombre del señor D. Fernando VII.— I. La Junta se congregará todos los días en la Real Fortaleza, donde será la posada del señor Presidente, y durará su reunión desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde, y desde las cinco hasta las ocho de la noche.— II. Todos los asuntos gubernativos y de hacienda, se girarán ante ella por las oficinas respectivas.— III. El Departamento de Hacienda en la Secretaría, correrá á cargo del Dr. D. Juan José Paso; y el Departamento de Gobierno y Guerra, á cargo del Dr. D. Mariano Moreno.— IV. En los decretos de sustanciación, contestaciones dentro de la Capital, asuntos leves y de urgente despacho, bastará la firma del Presidente, autorizada por el respectivo Secretario.— V. En los negocios que deban decidirse por la Junta, lo formarán cuatro vocales, con el Presidente; pero en los asuntos interesantes de alto Gobierno, deberán concurrir todos precisamente.— VI. En las representaciones y papeles de oficio, se dará á la Junta el tratamiento de Excelencia; pero los vocales no tendrán tratamiento alguno en particular.— VII. Las armas harán á la Junta los mismos honores que á los Excmos. Sres. Virreyes: y en las funciones de tabla, se guardará con ella el mismo ceremonial.— VIII. El Sr. Presidente recibirá en su persona el tratamiento y honores de la Junta como Presidente de ella; los cuales se les tributarán en toda situación.— IX. Los asuntos del Patronato se deferirán á la Junta, en los mismos términos que á los señores Virreyes, sin perjuicio de las extensiones á que legalmente conduzca el sucesivo estado de la Península.— X. Todo vecino podrá dirigirse por escrito ó de palabra á cualesquiera de los vocales ó á la Junta misma, y comunicar cuanto crea conducente á la seguridad pública y felicidad del Estado.— Buenos Aires, 28 de Mayo de 1810. — Dr. MARIANO MORENO, Secretario.— Imprim.— Rubr. de S. E.— Dr. Moreno.

(Hoja suelta.)

18

Instrucciones

que deberá observar el Comandante General de la expedición de auxilio
á las provincias interiores

Hará guardar á las tropas una rigurosa disciplina, evitando todo vejamen del paisanaje y castigando con rigor todo esceso. Tendrá especial cuidado en precaver las deserciones, publicando un bando en el que se intima pena de la vida á los desertores y ejecutando irremisiblemente este castigo en el primero que se aprehenda en este delito. Se tendrá especial cuidado en que cada día, en las paradas, haga la tropa algunas evoluciones análogas al terreno que ocupa y á las diferentes posiciones de que sea susceptible. Toda parada de noche se ejecutará en los mismos términos, con las mismas precauciones y seguridades que si se tuviese al frente un enemigo. Siendo sumamente importante á estas provincias la formación de tropas disciplinadas, que aseguren el territorio contra los riesgos exteriores, se pondrá particular cuidado en que esta expedición produzca la ventaja de contar la Patria con una fuerza disciplinada y acostumbrada á la fatiga. Se procurará que las conferencias y conversaciones rueden siempre sobre materias que instruyan al soldado en la historia de la milicia y eleven su entusiasmo, escitándole sentimientos de honor y una justa ambición por la gloria del Rey y de su Patria. Se tendrá la mayor vigilancia en desterrar toda apariencia de mira hostil sobre los pueblos de la carrera: se busca su bien y no su ruina; se desea su amistad y no su división. Todas las resoluciones relativas á la conducta política con los pueblos y al gobierno militar de la expedición, toda providencia, toda resolución de importancia, deberá acordarse en la Junta de Observación del mismo ejército, y la pluralidad de los sufragios hará providencia. Esta junta se formará del Primer Comandante, del Segundo Comandante, del Auditor de Guerra y del Comisionado, D. Hipólito Vieytes. Procurarán los cuatros vocales la mayor armonía y conformidad, teniendo presente que siempre han sido la ruina de las expediciones militares las discordias entre los que las mandan;

que es preciso que las virtudes distingan á nuestros soldados de esos conquistadores feroces, viles instrumentos de la ambición ó de la codicia, que, en materias de esta clase, el que más cede más sirve, y que, siendo esta expedición el fundamento principal de la prosperidad de estas provincias, sus jefes serán el consuelo de su Patria, ó la execración de los hombres buenos, según el resultado de su comisión.

(Registro Oficial de la República Argentina — Tomo I (1810-1821)
página 36 — Publicación Oficial — Imprenta La República —
Año 1879.)

Instrucciones reservadas

para la expedición á las Provincias interiores al mando del Coronel
Don Francisco Ocampo (1)

Se tendrá gran cuidado en sofocar toda especie capaz de comprometer el concepto de fidelidad que anima á esta Junta, pues nada debe cuidarse más que imprimir en todos la obligación de ser fieles á su Rey y guardar sus augustos derechos. En estando á cuatro leguas de Córdoba, se hará una intimación al Gobernador y Cabildo, para que dejen obrar libremente al vecindario en la elección de su Diputado. Se exigirá, como condición precisa de la libertad del pueblo para elegir, que el Gobernador y Teniente salgan de la ciudad mientras dure la elección, asistiendo á ella un oficial de la expedición, para presenciar si hay alguna violencia. Si el Gobernador resistiese esta conducta, se moverán las tropas contra él, echando antes una proclama en que se anuncie al pueblo que no se trata de su agresión sino de su defensa, y conminando al Gobernador con que pagará con su sangre y sus bienes la que hiciese derramar á los vasallos del Rey; lo que así se verificará. Si se empuñase una resistencia formal, se sacarán del pueblo tres ó cuatro de aquellas personas principales que la hubiesen sos-

(1) En el borrador (autógrafo del Doctor Moreno) de estas instrucciones, que existe en el archivo, se encuentra un artículo lo cruzado por unas líneas que parecen indicar haber sido inutilizado, y cuyo tenor es como sigue: «Se tendrá especial cuidado en asegurar á todo trance y remitir con seguridad la persona del Exmo. Sr. D. Santiago Liniers, considerándola como uno de los principales embarazos que se oponen á la tranquilidad y unión de las Provincias.» Ignorándose si este artículo fué realmente suprimido ó si formó parte de las instrucciones remitidas, se prefiere colocarlo separadamente, dando cuenta de su origen.

tenido. La tropa se mantendrá en el pueblo hasta que se haya reconocido la Junta y salido el Diputado que debe asistir al Congreso, cuidando de que se estrechen por mil modos, las relaciones de aquellos habitantes con los de la Capital. En todo pueblo donde se entre se hará una revista formal de toda la tropa, tanto veterana como de milicias, que tuviese armamento, y se agregará á la expedición, de modo que ésta se engrose con toda la gente armada de la carrera, sin que á las espaldas quede objeto de recelo. Todo Gobernador que no cediese sino á presencia de la expedición que le amenaza, será suspenso de su empleo y remitido á la Capital, proveyéndose su plaza provisionalmente, hasta la aprobación de esta Junta, en persona de representación y respeto.

Se pedirán á los Cabidos los fondos necesarios para continuar la expedición, librándose contra la Tesorería de esta Capital. Se harán reclutas rigurosas, cuidando que recaigan en hombres de buena talla, y se remitirán á la Capital. Aun cuando la expedición tenga un suceso feliz y no se le opongan embarazos en la carrera, deberá parar en Jujuy hasta segunda orden. Siendo el fin principal de esta expedición facilitar la unión de los pueblos, si éstos, puestos en entera libertad para votar, se empeñasen en elegir una Junta que subrogue el mando de sus gobernadores, no se les sostendrá una oposición, siempre que reconozcan una absoluta dependencia de la Junta Provisional de la Capital, hasta la celebración del Congreso.— Buenos Aires, 16 de Junio de 1810.

(*Archivo de Gobierno, 1810, CXII, núm. 7.*)

Facultades de la Junta de Comisión que pasa al Interior

Circular.—En la expedición que pasa á las Provincias interiores, ha establecido esta Junta Provisional Gubernativa una Junta de Comisión, autorizada para acordar, disponer y proveer lo necesario y útil á los objetos de dicha expedición, y lo demás de que va encargada; y habiendo de necesitar en su marcha de dineros ó auxilios, franqueará Vd. todos los que pudiese, en todo género de dineros, especies, útiles y efectos, sin retardación capaz de ocasionar atraso ó dificultad, sobre que sufrirá Vd. el más fuerte cargo de responsabilidad á que asimismo se le sujeta, si dispusiere, ordenare, influir ó cooperare de cualquier

modo directo ó indirecto, á invertir caudal alguno de Real Hacienda, en preparativos ú obras de defensa, para oponerse al reconocimiento de esta autoridad Provisional Gubernativa, en la Capital y dependencia de esa provincia.—Dios guarde á Vd. muchos años.—Buenos Aires, dos de Julio de mil ochocientos diez.—CORNELIO SAAVEDRA—DOCTOR JUAN JOSÉ CASTELLI—MANUEL BELGRANO—MIGUEL DE AZCUÉNAGA—DOCTOR MANUEL ALBERTI—JUAN LARREA—*Juan José Paso, Secretario.—Señor Gobernador Intendente de Potosí.*

(«*Registro Oficial de la República Argentina*», tomo I (1810-1821)
página 48—*Publicación Oficial—Imprenta La República* —
Año 1879.)

19

El Paraguay aplaza el reconocimiento de la Junta

Por la carta que V. E. ha dirigido á este Ilmo. Cabildo con fecha 27 de Mayo ppdo., y los impresos que acompaña, nos hemos enterado de la instalación del nuevo gobierno adoptado por ese pueblo y de las razones y documentos que se tuvieron presentes para ello. Este Gobierno y Cabildo, considerando la gravedad del asunto y que su decisión no debe ser obra de su particular discernimiento, sino del voto meditado de toda la Provincia representada en los diputados de su villa, poblaciones y principales vecinos, ha acordado celebrar un Consejo general el 24 del corriente, para resolver tan importante y delicada materia, de cuyo resultado daremos á V. E. oportuno aviso, debiendo entre tanto manifestarle que, á pesar del disgusto ocasionado en esta Capital y sus campañas con motivo de la venida del Coronel Don José de Espinola, conductor de los pliegos, que se ha puesto en vergonzosa fuga, sin la menor causa para ello, reina en toda la provincia un sosiego inalterable, la más acendrada fidelidad á nuestro monarca el señor Don Fernando VII, y respetuosa sumisión á las autoridades legítimas.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Sala Capitular de la Asunción del Paraguay, Julio 17 de 1810.—Exmo. Señor:—*Bernardo de Velazco—Doctor Bernardo de Haedo—Antonio de Recalde—Bernardo de Azcona—José de Arzac—Pedro Pablo Martínez de Sáenz—José García del Barco—Joaquín de Enterria—Francisco Díaz de Bedoya—Juan Antonio Fernández.*—Señores de la Junta Provisional de Buenos Aires.

(*Archivo de Gobierno, 1810, CXVI, núm. 112.*)

20

El Paraguay se niega á reconocer la Junta

Reunida esta Provincia por medio de sus representantes en el Congreso general que celebró el 24 del corriente, y vista con la mayor atención la carta de V. E. de 27 de Mayo último, los impresos que acompaña y otros documentos relativos á la legítima instalación del Consejo Supremo de Regencia de España é Indias, ha acordado por unánime aclamación de más de doscientos vocales que asistieron á dicho Congreso, la acta del tenor siguiente: «Que
 « inmediatamente y sin disolverse esta Junta, se proceda al
 « reconocimiento y solemne jura del Supremo Consejo de
 « Regencia, legítimo representante de nuestro Soberano señor Don Fernando VII, respecto á que, según los incon-
 « testables documentos que se han leído y tenido presentes,
 « no puede dudarse de su legítima instalación y reconoci-
 « miento por las Provincias de España, naciones aliadas y
 « hasta en este mismo continente. Que se guarde armoniosa
 « correspondencia y fraternal amistad con la Junta Provisional de Buenos Aires, suspendiendo todo reconocimiento
 « de superioridad en ella, hasta tanto que S. M. resuelva lo
 « que sea de su soberano agrado, en vista de los pliegos
 « que la espresada Junta Provisional dice haber enviado con
 « un Oficial al Gobierno Soberano legítimamente establecido en España y del parte que se dará por esta Provincia. Que, en atención á estarnos acechando la potencia
 « vecina, según manifiesta la misma Junta, disponga nuestro Gobernador y Comandante General se forme á la
 « mayor brevedad una Junta de Guerra para tratar y poner
 « inmediatamente en ejecución los medios que se adopten,
 « para la defensa de esta provincia que, en prueba de su
 « fidelidad al Rey, está pronta á sacrificar las vidas y haciendas de sus habitantes, por la conservación de los dominios de S. M. — Que se de cuenta al Supremo Consejo
 « de la Regencia y se de cuenta á la Junta Provisional de
 « Buenos Aires con arreglo á lo resuelto y acordado en
 « esta acta, que con original se archivará para perpetua memoria, y lo firmaron con S. M. los señores arriba indi-

« cados y demás que forman este respetable Congreso; de
« que doy fe. » Y, habiéndose procedido al reconocimiento
y jura del espresado Consejo Supremo de Regencia con-
forme á lo resuelto y á los deseos del pueblo, que hizo las
demostraciones más sinceras de regocijo, fidelidad y patrio-
tismo, la trasladamos á V. E. para su inteligencia y en con-
testación de la citada carta. — Dios guarde á V. E. muchos
años. — Asunción del Paraguay, 27 de Julio de 1810. — Exmo.
Señor: — *Bernardo de Velazco* — *Dr. Bernardo de Haedo* —
Antonio de Recalde — *Manuel Juan Muxica* — *José de Ar-*
zac — *Bernardo de Argona* — *Pedro Pablo Martínez Sáenz* —
José García del Barco — *Joaquín de Enterria* — *Francisco*
Riera — *Francisco Díaz de Bedoya* — *Martín José de Ye-*
dros — *Juan Antonio Fernández*. — *Señores de la Junta Pro-*
visional de Buenos Aires.

(*Archivo del Gobierno, 1810, CXVI, núm. 116.*)

21

Proclama y reglamentación de la milicia

¡Cuerpos Militares de Buenos Aires!—La energía con que habéis dado una autoridad firme á vuestra patria no honra menos vuestras armas que la madurez de vuestros pasos distingue vuestra generosidad y patriotismo.—Agitados los ánimos por la incertidumbre de nuestra existencia política, supisteis conciliar todo el furor de un entusiasmo exaltado con la serenidad de un ciudadano que discurre tranquilamente sobre la suerte de su Patria, y las armas que cargábais no sirvieron sino de abrir paso á la razón, para que recuperando sus derechos, fuese la única guía de una resolución magnánima que debe fijar el destino de estas Provincias. Los pueblos antiguos no vieron un espectáculo tan tierno como el que se ha presentado entre nosotros, y cuando se creía apurado vuestro espíritu por el contraste á que la triste situación de la Península lo había reducido, un heroico esfuerzo se propuso vengar tantas desgracias, enseñando al opresor general de la Europa, que el carácter americano opone á su ambición una barrera más fuerte que el inmenso piélago que ha contenido hasta ahora sus empresas. ¿Quién no respetará en adelante á los cuerpos militares de Buenos Aires? Si examinan vuestro valor, lo hallarán consignado por las más gloriosas victorias; si se meditan esas intrigas que más de una vez dieron en tierra con los pueblos esforzados, temblarán al recordar la gloriosa escena que precedió á la inauguración de esa Junta; la sabiduría presidía en vuestros discursos, la más viva penetración disipaba los sofismas; y, religiosos observadores de los derechos del Rey y del Pueblo, nada pudo desviarlos del camino legítimo que habíais meditado para su conservación. Conservad siempre unida la oliva de los sabios al laurel de los guerreros y esperad de la Junta un celo por vuestro bien, igual que habéis manifestado para formarla. Esta reciproca unión de sentimientos ha fijado las primeras atenciones de la Junta sobre la mejora y fomento de la fuerza militar de estas Provincias; y aunque para justa gloria del país es necesario reconocer un soldado en cada habitante, el or-

den público y seguridad del Estado exigen que las esperanzas de los buenos patriotas y fieles vasallos reposen sobre una fuerza y regla correspondiente á la dignidad de estas Provincias:—á este fin ha acordado la Junta las siguientes medidas, en cuya pronta y puntual observación interesa su respeto y todo vuestro celo:—I. Los batallones militares existentes se elevarán á regimientos, con la fuerza efectiva de mil ciento diez y seis plazas; reservando la Junta proveer separadamente sobre el arreglo de la Caballería y Artillería volante.—II. Volverán al servicio activo todos los rebajados que actualmente no estuviesen ejerciendo algún arte mecánico ó servicio público.—III. Queda publicada desde este día una rigurosa leva, en que serán comprendidos todos los vagos y hombres sin ocupación conocida, desde la edad de 18 hasta 40 años.—IV. Los Alcaldes de barrios presentarán para el Sábado de la presente semana todos los estados de los habitantes de sus respectivos cuarteles, que por sus anteriores providencias se hallaban pedidos.—V. Los mismos Alcaldes de barrio ocurrirán al Vocal de la Junta Sr. Coronel D. Miguel de Azcuénaga, para que en virtud de la comisión particular que tiene para el efecto, dé las órdenes respectivas á la incorporación de aquellos individuos que deban aumentar la fuerza armada.—VI. Los comandantes de los cuerpos ocurrirán al mismo señor Azcuénaga, para que les haga entregar en la Armería Real el número de fusiles correspondiente al número de hombres que vaya aumentando.—VII. Estando igualmente encargado el señor Azcuénaga de activar y velar con especialidad sobre los trabajos de la Armería, se le dará razón de los fusiles descompuestos que se introduzcan en ella, para que apresure su compostura y devolución.—VIII. Los Alcaldes de barrio, comisionados y vecinos que tratasen de devolver las armas que se han exigido por bando, harán la entrega en casa del señor Azcuénaga, por cuyo conducto se impartirán las órdenes relativas á esta importante materia.—IX. Habiendo tomado la Junta medidas seguras para el acopio de armas, capaz de proveer al aumento de nuestra fuerza, espera del celo de los comandantes militares no omitirán diligencia alguna que sea conducente á la integración de sus cuerpos, bajo el plan propuesto.—Buenos Aires, Mayo 29 de 1810.—Cornelio de Saavedra—Dr. Juan José Castelli—Manuel Belgrano—Miguel de Azcuénaga—Dr. Manuel de Alberti—Domingo Matheu—Juan Larrea—Dr. Juan José Passo, Secretario—Dr. Mariano Moreno, Secretario.

(Hoja suelta.)

22

Ruptura de las hostilidades con Montevideo

ORDEN DE LA JUNTA.— Cuando en el curso de los sucesos humanos se ve precisado un pueblo á romper los vínculos que lo ligaban á otro, es un deber de justicia que por respeto á las opiniones de los demás hombres, se manifiesten los motivos que han conducido á esta separación. La Capital de Buenos Aires, inseparable de las medidas de moderación que se ha propuesto, tentó todos los medios legítimos de unirse estrechamente á Montevideo; esperó que una franca comunicación corriese el velo de las imposturas con que en un principio se desfiguró su conducta; guardó una constante adhesión á los principios de fidelidad que había jurado; hizo respetar los derechos de aquel pueblo y las relaciones de interés que nos unían á él, y hoy día que se halla reducida á la dura necesidad de romperlas, tiene la satisfacción de anunciar en su anterior conducta un justificativo á la presente, y en la obligación de sostener su dignidad y decoro, el principio legítimo de las providencias eficaces que ha resuelto oponer á los insultos y hostilidades de Montevideo. Son ya demasiado notorios los motivos que produjeron la instalación de la Junta en la Capital, y Montevideo no debió oponerse á la substancia del proyecto, después que con mayores fundamentos sostuvo su Junta de Observación que obtuvo aprobaciones de la Corte en el acto de disolverla. Las apologías que se escribieron en favor de aquella resolución justificaban la nuestra, y una ciudad del rango de Buenos Aires no debió esperar resistencia de un pueblo subalterno que había clamado tanto por la integridad de aquellos derechos, que en las circunstancias del día autorizan á los pueblos para semejante conducta. Esta justa esperanza regló los primeros pasos de la Capital, y, abandonando todos los recursos menos propios de la dignidad de su empresa, fió la unión de aquel pueblo á la notoria justicia de la causa y á las consideraciones de un interés recíproco que se mezclaban en ella. El primer impulso de Montevideo fué cual se había esperado y la naturaleza, escitada por el interés común, dictó una concordia

indisoluble cuando la seducción y el engaño no habían tenido aún tiempo para tender sus lazos. Es verdad que los marinos resistieron desde un principio la unión de la Capital; pero el público oía todavía á los vecinos pacíficos y respetables, y la Junta habría quedado reconocida en el primer congreso si la llegada del bergantín «Filipino» no hubiese entorpecido aquel acto. Se hicieron bajar de este buque fábulas mal forjadas que antes de ocho días quedaron desmentidas completamente, y una cadena de victorias imaginarias fué el primer arbitrio que se puso en movimiento para hacer odiosa una resolución que en nada se oponía á los triunfos de la Península, que todos deseamos eficazmente. Al mismo tiempo que se recomendaban las ventajas de nuestras armas se exigía el reconocimiento del Consejo de Regencia que reside en Cádiz y, desentendiéndose de las incertidumbres y dudas fundadas que exigían un determinado examen sobre esta materia, se decidió la división de la Capital, porque no daba en tierra con el legal y prudente partido que acababa de adoptar, sin otra nueva causa que exigirle así los jefes de Montevideo. El seguro convencimiento de que la parte más sana y principal de aquel pueblo deseaba una estrecha unión con la Capital, empeñó á ésta en cuantos sacrificios pudieron contribuir á conseguirla. Pasó en persona el Secretario Don Juan José Paso con poderes de la Junta para manifestar sus intenciones y allanar los embarazos que se oponían á la concordia de ambos pueblos; pero una continuada serie de insultos á su persona, logró frustrar el precioso fruto de su comisión. Se le recibió con tropa antes de su llegada á aquel pueblo; se le introdujo con un aparato tejido de pueriles precauciones con que se introdujo la desconfianza en los incautos y se sorprendió á la multitud para que, sofocando sus propios sentimientos, se dejase arrastrar ciegamente de los que daban dirección á aquel movimiento. Todos saben el resultado del Congreso celebrado en el Cabildo de Montevideo. El Secretario espuso en él los poderosos fundamentos que habían decidido á la Capital á la instalación de la Junta; ni era fácil resistirlos, ni se encontraba entre los contradictores algún sugeto capaz de sostener una discusión profunda sobre esta materia. Sin embargo, el Comandante de Marina dió algunos gritos descompasados en la sala; estos fueron comunicados al pueblo por algunos oficiales del mismo Cuerpo, situados diestramente en términos de poder transmitir el eco de su jefe, y sin que hasta ahora se sepa cual fué particularmente el voto de los que concurrieron á la sesión,

se respondió á la Junta que Montevideo quedaba separado de la Capital, y que cuando ésta reconociese al Supremo Consejo de Rejencia, se trataría de la unión y términos en que se debía verificar. El acto de romper un pueblo subalterno los vínculos de dependencia que lo ligan á la Capital es de suma importancia en el orden político, y el crimen de sus autores aumenta la entidad derivada de la violación de las leyes, por los gravísimos males á que queda espuesta la sociedad. La distribución de provincias y legítima dependencia de los pueblos que las forman, es una ley contitucional de Estado, y el que trate de atacarla, es un refractario del pacto solemne con que juró la guarda de la Constitución. ¿Qué sería del orden público si los pueblos subalternos pudiesen resolver por sí mismos la división de aquellas capitales que el Soberano ha establecido como centro de todas sus relaciones? A la escandalosa ilegitimidad del acto siguen consecuencias de la trascendencia más funesta. Los pueblos de la Provincia penden de la Capital en sus relaciones más importantes; los negocios de comercio, las reclamaciones de justicia, los socorros pecuniarios, la privación de los demás auxilios que se derivan precisamente de la Capital y no pueden encontrarse sino en ella, son los medios ordinarios de la felicidad y conservación de todo pueblo subalterno y, rotos de un golpe por cualquier acaecimiento, perecen mil familias antes que por otros caminos nuevos pueda repararse su falta. ¿Con qué habría acallado el gobierno de Montevideo las quejas de aquel pueblo, si la Junta hubiese castigado su desobediencia con un absoluto rompimiento de toda comunicación y relaciones? El comerciante que esperaba fondos de la Capital; el que necesitaba de ella para el espendio de sus efectos; el naviero que por falta de socorro veía detenido su viaje y en peligro su buque; el hacendado sobre cuyos frutos refluía la minoración de las esportaciones; el extranjero que huía del puerto porque la falta de numerario y de consumo lo alejaban de él; todos gritarían contra los jefes que ocasionaban aquellos males, y habría sido muy difícil que el interés general quedase sacrificado al capricho de cuatro hombres que no consultaban sino su conveniencia. No se ocultó al Gobierno de la Capital que aquél era un medio justo y seguro de dar en tierra con sus enemigos; pero el empeño de sostener en todos sus pasos la dignidad que caracteriza las empresas grandes, le hizo mirar con indiferencia sus propios insultos; encomendó al tiempo y á la paciencia el engaño de un pueblo á quien amaba tierna-

mente; conservó ilesas hasta las menores relaciones y, distinguiendo al mandón opresor, del vecino violentamente oprimido, proporcionó á éste todos los bienes de una franca comunicación, sin tomar de aquél otra venganza que el desprecio de sus insultos y amenazas. Si los jefes de Montevideo no nos han merecido consideración alguna, los habitantes de aquel pueblo han merecido de nosotros los obsequios de la más estrecha fraternidad. Vasallos de un mismo príncipe, no quisimos encontrar un principio legítimo que haga romper las estrechas relaciones de sangre y conveniencia que nos unen, y el extranjero que observaba nuestras discordias, no veía en ellas sino la disconformidad de los jefes de aquel pueblo, conducidos por un egoísmo que desconoce las resoluciones enérgicas que deben distinguir al vasallo de un Rey desgraciado. Por muy ventajoso concepto que el Gobierno de Montevideo haya formado de sí mismo, debió creer enteramente satisfechos sus derechos y aun sus caprichos, con la impune independencia en que se había constituido. El obraba por sí solo lo que debía implorar de la Capital; había sacudido la subordinación de un país subalterno; gozaba la protección de las leyes que había hollado con escándalo, y ejercía su mando despótico en unos súbditos á quienes no se hacían sentir las privaciones consiguientes á su deferencia. La Capital había jurado solemnemente la fidelidad á su amado monarca el señor don Fernando VII y la guarda constante de sus augustos derechos, y desafia al mundo entero á que se descubra en su conducta un sólo acto capaz de comprometer la pureza de su fidelidad ó una pretensión avanzada capaz de irritar los derechos y delicadeza de Montevideo. Nada se aventuraba en esperar algún tiempo la terminación de nuestros negocios; se había dado cuenta de ellos á nuestra Corte, y el transcurso de pocos meses debía proporcionar un resultado que fijase nuestras incertidumbres. ¿No era el nombre del Rey el que se daba á todas nuestras resoluciones? ¿No se veía sostenido el orden público, respetadas las leyes, guardada la seguridad individual, premiado el mérito, honrada la virtud y perseguidos los delitos, sin que las riquezas sirviesen de reparo á sus perpetradores? ¿Cuál era, pues, el estímulo que podía precipitar á Montevideo, cuál el riesgo que corrían estas Provincias, ó cuál la jurisdicción con que los jefes de aquella plaza podían emprender hostilidades contra la famosa Capital del Río de la Plata? Nadie pudo persuadirse de que el aturdimiento de aquellos jefes los precipitase al extremo de desempeñar una conducta hostil con la Capital; necesitaban

demasiado de sus pequeños recursos para conservarse á sí mismos y sofocar los esfuerzos de los verdaderos patriotas que gemían en la vergonzosa opresión á que la marina los había reducido, y no era fácil avanzarse á una responsabilidad arriesgada, hombres cuyas vastas ideas se circunscriben á la continuación de su sueldo. Sin embargo, la causa de los pueblos es muy temible para los que vinculan la firmeza de su suerte á la usurpación de sus derechos, y los jefes de Montevideo han desplegado una actividad empeñosa de que no vimos ejemplos, cuando estas Provincias han sido atacadas por potencias enemigas. El primer acto de hostilidad manifiesta contra Buenos Aires fué pedir socorro de tropas portuguesas y auxilios pecuniarios de la Corte del Brasil, para atacarnos. Si la circunspección del gabinete del Brasil no hubiese despreciado tan avanzada pretensión, ¿quién podría calcular hoy día los males en que se verían envueltas estas provincias? ¿Quién podría prever el último resultado de aquel socorro? ¿Ni quién podrá graduar dignamente el grave crimen de unos jefes subalternos que introducen en el territorio del Rey tropas extranjeras, para llevar la guerra y la desolación á la Capital que reconoce, jura y defiende los derechos de su monarca? Nada más probable que haber visto renovada la mediación de Filipo y de otros tantos príncipes, que aprovecharon la imprudencia de los pueblos débiles que los llamaron en su socorro; pero á los jefes de Montevideo, ¿qué les importaba la conservación de la tierra, como asegurasen la de sus personas y empleos? Tal vez el general portugués les continuaría sus antiguas rentas y, si perdían éstas, vengarían su desastre con haber envuelto al país en todo género de males, y aunque se perdiese la esperanza de repetir las campañas en el «Café de Marcos», se *embarcarían en sus buques bien provistos de municiones de boca* y buscarían otra región afortunada donde establecer tan importante colonia. Este era el consejo que Don Santiago Liniers les remitía con su hijo, y era seguramente la resolución más propia de hombres finos y delicados que no deben envolverse en las desgracias de los pueblos. El desengaño del Brasil no mudó la conducta de aquellos jefes; una pequeña convulsión puso en sus manos toda la fuerza que debió haber arrancado la que usurpaban; los jefes de los cuerpos fueron presos con ignominia, despojados de las insignias militares que habían ganado á costa de tantas fatigas; fueron cubiertos de grillos y todo género de oprobios; nada valieron sus méritos personales ni la distinción de sus familias; éstas eran del pueblo y habían tocado la túnica

inconsútil de la marina; tampoco valió el respeto debido á la gente del país de que se componía aquella fuerza; los regimientos fueron deshechos, los soldados repartidos entre otros cuerpos y dispersados los principales vecinos, quedó la marina dueña del pueblo y éste reducido á seguir ciegamente los caprichos de sus jefes.— Este trastorno (justo castigo del que se conduce débilmente en las empresas grandes), puso á los marinos en situación de desplegar todas sus miras hostiles contra Buenos Aires. Al momento salió una partida de tropa para ocupar á Maldonado. El Coronel Viana marchaba á su frente y atravesó con aire marcial, para oprimir á nuestros hermanos, la misma campaña que su inesperienza cubrió de nuestros cadáveres en el ataque de los ingleses. Maldonado no tenía otro crimen que haber reconocido la Capital; pero la Junta trataba seriamente de la prosperidad de aquel recomendable pueblo, y *este era un error político que no debía tolerarse en países donde es peligroso el engrandecimiento de los pueblos*. Al mismo tiempo salió otro destacamento para la Colonia, y el Capitán de Navío Don Juan Angel Michelena, vino con ciento cincuenta hombres á templar los sobresaltos del *asustado Ramón*. La ocupación del territorio de la Capital es un atentado que no pudo mirar con indiferencia la Junta, sin prostituir los primeros deberes de su representación. Un pueblo grande, esforzado y generoso, era provocado con insultos que atacaban en lo más vivo su honor y dignidad. Los buenos patriotas ardían por el desagravio de tamaña injuria, y sus clamores no pudieron ser desatendidos por un gobierno que deriva su principal gloria, de no tener otros intereses y sentimientos que los del justo pueblo que le ha confiado su representación y derechos. Esta consideración puso á la Junta en la necesidad de tomar providencias eficaces y fuertes que, á costa de propias privaciones, hiciesen sentir á sus contrarios el justo castigo de su temeridad. La osadía con que se atacaban los derechos y territorio de la Capital, exigía una deliberación pronta y eficaz, y, preparada por el voto y conspiración general de todos los buenos, debió huir la Junta de aquella lentitud que siempre ha sido la ruina de los Estados y de aquellos miramientos que la corrupción de las costumbres ha erigido en fuertes barreras contra las empresas enérgicas y magnánimas. La República, dice Cicerón en la oración 47, por Sextio, siempre es atacada bien y siempre se defiende mal. La razón consiste en que los viciosos y corrompidos son siempre audaces y se inclinan á hacer daño naturalmente, poniéndose en movimiento así

que ven la ocasión, y los hombres de bien, no se sabe por qué fatalidad, obran siempre con infinita lentitud, y casi con repugnancia, no haciéndoles fuerza los desórdenes á los principios y esperando á que la necesidad los fuerce á tomar medidas para remediarlos. Su disolución y sus dilaciones suelen ser causa de su ruina, pues cuando por fin buscan algún remedio para que los dejen en paz, aunque sea con poco honor, ordinariamente lo pierden todo. No permita el cielo que algún día pueda ser reconvenido el nuevo gobierno por lentitudes capaces de comprometer la seguridad de su pueblo. Todo sacrificio es pequeño cuando ha de resultar en provecho de la patria, y el buen vecino debe apreciar aquellas privaciones que exigen el honor y decoro de la comunidad á que pertenece. En esta virtud ha resuelto la Junta que se corte toda relación mercantil, epistolar y de cualquiera otra clase, de las que hasta aquí han ligado á Montevideo con esta Capital. Se sufrirán en ésta algunas privaciones, pero los verdaderos patriotas las sufrirán gustosos por el principio que las produce, y, por fortuna, el principal gravamen comprenderá á los que han fomentado la división ó complacidos de sus progresos. Ahora comprenderán prácticamente que el Gobierno no los engañaba cuando les proponía las ventajas de la unión, los incalculables males que debían seguir á un rompimiento, y aprenderán á su costa que nadie ofende impunemente los derechos de la comunidad y que el triste placer de humillar á unos ciudadanos que nada han querido sino el bien general bajo la guarda segura de los derechos del Rey, debía producir quebrantos á los que se alimentaban de él. Sobre estos principios ha fundado la Junta su resolución, cuya puntual observancia deberá circunscribirse á los artículos siguientes: — 1º — Queda desde el día cortada toda correspondencia y comunicación con Montevideo y territorio de su dependencia. — 2º — Ninguna persona podrá pasar á aquel territorio, ni escribir cartas, ni sostener cualquier otro género de comunicación. — 3º — Queda especialmente cortada toda correspondencia mercantil entre ambos pueblos. — 4º — Los buques nacionales surtos en aquel pueblo, que deban conducir caudales ó frutos á nuestra Península, deberán pasar á la Ensenada, donde lo podrán verificar libremente. — 5º — Lo mismo deberán practicar los buques nacionales procedentes de la Península que quieran introducir sus cargamentos, sin que por ningún título se abonen derechos pagados en Montevideo. — 6º — Toda persona estante ó habitante de Montevideo ó su territorio, que quiera establecerse

en la Capital ó sus dependencias, será recibida favorablemente y consultado su fomento por una decidida protección del gobierno. — 7° — Siendo verosímil que lleguen muchas familias de España, de las que han emigrado de las provincias ocupadas por el enemigo, se les incita con sinceridad y ternura á que pasen al territorio de la Capital, donde recibirán una fraternal acogida, y esperimentarán el carácter generoso de los americanos y el dulce placer con que éstos partirán las comodidades de su suelo, con unos hermanos amados á quienes la desgracia hace doblemente recomendables. — 8° — El Gobierno garantiza esa estrecha unión y amistad con nuestros hermanos los europeos, y su protección se extenderá á destinar terrenos fértiles para su cultivo, auxilios para que se provean de casa, anticipaciones de primeras labores y un ejercicio lucrativo de sus respectivas carreras, artes y profesiones. — Buenos Aires, 13 de Agosto de 1810. — CORNELIO SAAVEDRA. — *Doctor Mariano Moreno, Secretario.*

(*Registro Oficial de la República Argentina* : — *Tomo I (1810-1821)*)
página 64 — Imprenta La República — Año 1876.)

23

**Se niega el reconocimiento al Consejo de Regencia
establecido en España**

Buenos Aires, 8 de Junio de 1810.—Estando sobradamente asegurados los derechos de la autoridad que ejerza la representación soberana del Sr. D. Fernando VII, nuestro augusto monarca, por el juramento que esta Junta prestó al tiempo de su instalación, de obedecer á la representación soberana que existiese legítimamente constituida, disipando la notoria fidelidad de los habitantes de estas Provincias, todos los riesgos que en diferente caso podrían obligar á traspasar las leyes que prefijan la forma de tan importantes actos, sin que se advierta necesidad alguna de empeñar gestiones que nos desvíen del orden público establecido, resérvese el punto de reconocimiento para el acto de recibirse las órdenes oficiales que deben legitimarlo; y, entre tanto, guárdese la misma conducta que observó el superior Gobierno de acuerdo con la Real Audiencia y con la Junta Suprema de Sevilla, uniendo nuestras ideas, como entonces, con los demás pueblos de la Nación, cumpliendo sus encargos y redoblando sus esfuerzos para auxiliarlos con todo género de socorros que demuestren solemnemente la fraternidad de los pueblos de América con los de España que estuviesen libres del enemigo, y la constante adhesión á la causa del Rey, contra los proyectos abiertos y miras ocultas del usurpador.—Cornelio Saavedra—Dr. Juan José Castelli—Manuel Belgrano—Miguel de Azcuénaga—Dr. Manuel Alberti—Domingo Matheu—Juan Larrea—Dr. Juan José Paso, Secretario—Dr. Mariano Moreno, Secretario.—

(Gazeta Extraordinaria de 9 de Junio de 1810 y Anales de la América latina, vol. I, pág. 225.)

24

El documento que correspondía á este número, ha sido suprimido por hallarse intercalado en el texto.

25

**Suprimiendo los honores que se hacían al Presidente
de la Junta**

Orden del día.— En vano publicaría esta Junta principios liberales que hagan apreciar á los pueblos el inestimable don de su libertad, si permitiese la continuación de aquellos prestigios que, por desgracia de la humanidad, inventaron los tiranos para sofocar los sentimientos de la naturaleza. Privada la multitud de luces necesarias para dar su verdadero valor á todas las cosas; reducida por la condición de sus tareas á no estender sus meditaciones más allá de sus primeras necesidades; acostumbrada á ver los magistrados y jefes envueltos en un brillo que deslumbra á los demás y los separa de su inmediatez: confunde los incienso y homenajes con la autoridad de los que los disfrutan, y jamás se detiene en buscar al jefe por los títulos que lo constituyen, sino por el voto y consideraciones con que siempre lo ha visto distinguido. De ahí es que el usurpador, el déspota, el asesino de su patria, arrastra por la calle pública la veneración y respeto de un gentío inmenso, al paso que carga la execración de los filósofos y las maldiciones de los buenos ciudadanos; y de aquí es que á presencia de ese aparato exterior, precursor seguro de castigos y todo género de violencias, tiemblan los hombres oprimidos y se asustan de sí mismos si alguna vez el esceso de opresión les había hecho pensar en secreto algún remedio. ¡Infelices pueblos los que viven reducidos á una condición tan humillante! Si el abatimiento de sus espíritus no sofocase todos los pensamientos nobles y generosos; si el sufrimiento continuado de tantos males no hubiese distinguido hasta el deseo de libertarse de ellos, correrían á aquellos países felices, en que una Constitución justa y liberal, da únicamente á las virtudes el respeto que los tiranos exigen para los trapos y galones; abandonarían sus hogares, huirían de sus domicilios y dejando anegados á los déspotas en el fiero placer de haber asolado las provincias con sus opresiones, vivirían bajo el dulce dogma de la igualdad, que raras veces posee la tierra, porque raras ve-

ces lo merecen sus habitantes. ¿Qué comparación tiene un gran pueblo de esclavos, que con su sangre compra victorias que aumenten el lujo, las carrozas, las escoltas de los que lo dominan, con una ciudad de hombres libres, en que el magistrado no se distingue de los demás sino porque hace observar las leyes y termina las diferencias de sus ciudadanos? Todas las clases del Estado se acercan con confianza á los depositarios de la autoridad, porque en los actos sociales han alternado francamente con todos ellos; el pobre explica sus acciones sin timidez, porque ha conversado muchas veces familiarmente con el Juez que le escucha; el magistrado no muestra ceño en el Tribunal á hombres que después podrían despreciarlo en la tertulia, y sin embargo no mengua el respeto de la magistratura, porque sus decisiones son dictadas por la ley, sostenidas por la Constitución y ejecutadas por la inflexible firmeza de hombres justos é incorruptibles. Se avergonzaría la Junta y se consideraría acreedora á la indignación de este generoso pueblo, si desde los primeros momentos de su instalación hubiese desmentido una sola vez los sublimes principios que ha proclamado. Es verdad que consecuente á la acta de su erección, decretó al Presidente en orden del 28 de Mayo los mismos honores que antes se habían dispensado al Virrey; pero este fué un sacrificio transitorio de sus propios sentimientos, que consagró al bien general de este pueblo. La costumbre de ver á los Virreyes rodeados de escoltas y condecoraciones, habría hecho desmerecer el concepto de la nueva autoridad, si se presentaba desnuda de los mismos reales; quedaba entre nosotros el Virrey de puesto; quedaba una Audiencia formada por el principio de divinización de los déspotas, y el vulgo, que sólo se conduce por lo que ve, se resentiría de que sus representantes no gozasen el aparato exterior de que habían disfrutado los tiranos, y se apoderaría de su espíritu la perjudicial impresión de que los jefes populares no revestían el elevado carácter de los que venían de España.—Esta consideración precisó á la Junta á decretar honores al Presidente, presentando al pueblo la misma pompa del antiguo simulacro, hasta que repetidas lecciones lo dispusieron á recibir, sin riesgo de equivocarse, el precioso presente de su libertad.—Se mortificó bastante la moderación del Presidente con aquella disposición; pero fué preciso ceder á la necesidad, y la Junta ejecutó un arbitrio político que exigían las circunstancias, salvando al mismo tiempo la fuerza de sus intenciones, con la declaratoria de que los demás Vo-

crles no gozasen honores, ni tratamiento, ni otra clase de distinciones. Un remedio tan peligroso á los derechos del pueblo y tan contrario á las intenciones de la Junta, no ha debido durar sino el tiempo muy preciso para conseguir los justos fines que se propusieron. Su continuación sería sumamente arriesgada; pues los hombres sencillos creerían ver un Virrey en la carroza escoltada que siempre usaron aquellos jefes, y los malignos nos imputarían miras ambiciosas que jamás han abrigado nuestros corazones. Tampoco podrían fructificar los principios liberales que con tanta sinceridad comunicamos; pues el común de los hombres tiene en sus ojos la principal guía de su razón, y no comprenderían la igualdad que les anunciamos, mientras nos viesen rodeados de la misma pompa y aparato con que los antiguos déspotas esclavizaron á sus súbditos. La libertad de los pueblos no consiste en palabras ni debe existir en los papeles solamente. Cualquier déspota puede obligar á sus esclavos á que canten himnos á la libertad; y este canto maquinal es muy compatible con las cadenas y opresión de los que lo entonan. Si deseamos que los pueblos sean libres, observemos religiosamente el sagrado dogma de la igualdad. Si me considero igual á mis conciudadanos ¿porqué me he de presentar de un modo que les enseñe que son menos que yo? Mi superioridad sólo existe en el acto de ejercer la magistratura que se me ha confiado; en las demás funciones de la sociedad, soy un ciudadano sin derecho á otras consideraciones que las que merezca por mis virtudes. No son estos vanos temores de que un gobierno moderado pueda, alguna vez, prescindir. Por desgracia de la sociedad, existen en todas partes hombres venales y bajos, que no teniendo otros recursos para su fortuna que los de la vil adulación, tientan de mil modos á los que mandan, lisonjean todas sus pasiones y tratan de comprar su favor á costa de los derechos y prerrogativas de los demás. Los hombres de bien no siempre están dispuestos ni en ocasión de sostener una batalla en cada tentativa de los bribones, y así se enfria gradualmente el espíritu público y se pierde el horror á la tiranía. Permitásenos el justo desahogo de decir á la faz del mundo, que nuestros conciudadanos han depositado provisoriamente su autoridad en nueve hombres á quienes jamás trastornará la lisonja, y que juran por lo más sagrado que se venera sobre la tierra, no haber dado entrada en sus corazones á un solo pensamiento de ambición ó tiranía; pero ya hemos dicho otra vez que el pueblo no debe conten-

tarse con que seamos justos, sino que debe tratar de que lo seamos forzosamente. Mañana se celebra el Congreso y se acaba nuestra representación; es, pues, un deber nuestro disipar de tal modo las preocupaciones favorables á la tiranía, porque si por desgracia nos sucediesen hombres de sentimientos menos puros que los nuestros, no encuentren en las costumbres de los pueblos el menor apoyo para burlarse de sus derechos. En esta virtud ha acordado la Junta el siguiente reglamento, en cuya puntual é invariable observancia empeña su palabra y el ejercicio de todo su poder:—1° El art. 8° de la Orden del Día de 28 de Marzo de 1810, queda revocado y anulado en todas sus partes. —2° Habrá desde este día absoluta, perfecta é idéntica igualdad entre el Presidente y los demás Vocales de la Junta, sin más diferencia que el orden numerario y gradual de los asientos.—3° Solamente la Junta reunida en actos de etiqueta y ceremonia tendrá los honores militares, escolta y tratamiento que están establecidos.—4° Ni el Presidente ni algún otro individuo de la Junta en particular, revestirán carácter público ni tendrán comitiva, escolta ó aparato que los distinga de los demás ciudadanos. 5° Todo decreto, oficio y orden de la Junta, deberá ir firmado de ella, debiendo concurrir cuatro firmas cuando menos, con la del respectivo Secretario. 6°—Todo empleado, funcionario público ó ciudadano que ejecute órdenes que no vayan suscritas en la forma prescripta en el anterior artículo, será responsable al Gobierno de la ejecución.—7°—Se retirarán todas las centinelas del palacio, dejando solamente las de las puertas de la Fortaleza y sus bastiones.—8°—Se prohíbe todo brindis, viva ó aclamación pública en favor de individuos particulares de la Junta. Si estos son justos, vivirán en el corazón de sus conciudadanos: ellos no aprecian bocas que han sido profanadas con el elogio de los tiranos.—9°—No se podrá brindar sino por la patria, por sus derechos, por la gloria de nuestras armas y por objetos generales concernientes á la pública felicidad.—10°—Toda persona que brindase por algún individuo particular de la Junta, será desterrada por seis años.—11°—Habiendo echado un brindis Don Atanasio Duarte, con que ofendió la probidad del Presidente y atacó los derechos de la patria, debía perecer en un cadalso; por el estado de embriaguez en que se hallaba se le perdona la vida, pero se destierra perpetuamente de esta ciudad, porque un habitante de Buenos Aires, ni ebrio, ni dormido, debe tener impresiones contra la libertad de su país.—12°—No debiendo

confundirse nuestra milicia nacional con la milicia mercenaria de los tiranos, se prohíbe que ningún centinela impida la libre entrada en toda función ó concurrencia pública á los ciudadanos decentes que la pretendan; el oficial que quebrante esta regla, será depuesto de su empleo.—13°—Las esposas de los funcionarios públicos, políticos y militares no disfrutarán los honores de armas ni demás prerrogativas de sus maridos: estas distinciones las concede el Estado á los empleos, y no pueden comunicarse sino á los individuos que los ejercen.—14°—En las diversiones públicas de toros, ópera, comedia, etc., no tendrá la Junta palco ni lugar determinado: los individuos de ella que quieran concurrir, comprarán lugar como cualquier ciudadano; el Exmo. Cabildo á quien toca la presidencia y gobierno de aquellos actos por medio de los individuos comisionados para el efecto, será el que únicamente tenga una posición de preferencia.—15°—Desde este día queda concluído todo el ceremonial de Iglesia con las autoridades civiles: éstas no concurren al templo á recibir incienso, sino á tributarlos al Ser Supremo. Solamente subsiste el recibimiento en la puerta por los canónigos y dignidades en la forma acostumbrada. No habrán cojines, sitial ni distintivo entre los individuos de la Junta.—16°—Este reglamento se publicará en la *Gazeta*, y con esta publicación se tendrá por circulado á todos los jefes políticos, militares, corporaciones y vecinos, para su puntual observancia. Dado en Buenos Aires, en la Sala de la Junta, á 6 de Diciembre de 1810.—CORNELIO DE SAAVEDRA—MIGUEL DE AZCUÉNAGA—DOCTOR MANUEL DE ALBERTI—DOMINGO MATHEU—JUAN LARRREA—*Doctor Juan José Paso*, Secretario.—*Doctor Mariano Moreno*, Secretario.

(*Gazeta de Buenos Aires*, — Extr. 8 Dic. — 1810.)

26

Acta del 18 de Diciembre de 1810

En la ciudad de Buenos Aires, á diez y ocho de Diciembre de mil ochocientos diez, hallándose en la Sala de despacho los señores Presidente y Vocales de la Junta Provisional gubernativa, comparecieron los nueve diputados de las Provincias, que actualmente se hallan en esta ciudad, y tomando uno la voz por todos los demás, dijo: que los diputados se hallaban precisados á reclamar el derecho que les competía, para incorporarse en la Junta Provisional, y tomar una parte activa en el mando de las provincias, hasta la celebración del Congreso que estaba convocado; que este derecho, á más de ser incontestable en los pueblos sus representados, pues la capital no tenía títulos legítimos para elegir por sí sola gobernadores, á que las demás ciudades deben obedecer, estaba reconocido por la misma Junta, la cual en el oficio circular de la convocación, había ofrecido espresamente á los diputados que apenas llegasen tomarían una parte activa en el gobierno, y serían incorporados á la Junta; que los pueblos miraban con pesar que sus representantes no hubiesen sido puestos en posesión de una regalía que les era debida, y se les había prometido solemnemente; y que reclamaban este derecho por no serles lícito prescindir de su pretensión y goce. Agregó el diputado reclamante, que al derecho de sus socios se agregaba la necesidad de restituir la tranquilidad pública que estaba gravemente comprometida por un general y público descontento con la Junta, á la que no se presentaba otro remedio más legal, más seguro y más equitativo, que la asociación de los diputados á los vocales: que el crédito del gobierno había quebrado considerablemente, y que no pudiendo ya contar con la confianza pública, que hasta allí había servido de apoyo á sus resoluciones, era necesario reparar esta quiebra con la incorporación de los diputados, que los mismos descontentos reclamaban. Promovida con este motivo una discusión pacífica, los vocales de la Junta dijeron: que en cuanto á la cuestión de derecho, no consideraban ninguno en los diputados para incorporarse á la Junta, pues

siendo el fin de su convocación la celebración de un Congreso Nacional, hasta la apertura de éste no pueden empezar las funciones de los representantes; que su carácter era inconciliable con los individuos de un gobierno provisorio, y que el fin de éste debía ser el principio del ejercicio de aquéllos: que la cláusula de la circular había sido un rasgo de inesperienza, que el tiempo había acreditado después ser enteramente impracticable: que el ejemplo de las cortes y de toda asamblea nacional se oponía á la pretensión de los diputados; que el reconocimiento de la Junta, hecho en cada pueblo, subsanaba la falta de su concurso á la instalación; y que en los poderes, único título de su representación, no se les destinaba á gobernar provisoriamente el virreynato, sino á formar un Congreso Nacional, y establecer en él un gobierno sólido y permanente. En cuanto á la cuestión política, derivada también de la convulsión que se anuncia, dijeron los vocales: que resultando este movimiento del reglamento del 6 de Diciembre, no consideraban un conflicto formado por la opinión preponderante del pueblo en el número ó en su más sana parte, sino por algunos discolos que podían ser fácilmente contenidos siempre que la Junta se mantuviese firme en la energía que inspira el testimonio de la buena conciencia, y á cuyo ejercicio se deben los prodigiosos efectos del nuevo gobierno, que han producido el asombro de esos mismos que porque equivocadamente se persuaden ya que no hay peligros, se ostentan orgullosos é insolentes. Apurada por ambas partes la discusión y espuestos con orden cuantos racionios y fundamentos ofrece la materia, se trató del juez que debería decidir aquel punto, y conviniendo todos en que sería peligroso convocar al pueblo, por el estado de fermento que se suponía en él, conociendo además que el pueblo solo de Buenos Aires no era juez competente de unas cuestiones que tocaban al derecho de todas las provincias en las personas de sus representantes, se acordó que reunidos los vocales de la Junta con los diputados presentes, se procediese á la resolución y empezando á votar por el orden de asientos que casualmente habían tomado.

El diputado de Mendoza dijo: que se incorporasen los diputados á la Junta para ejercer las mismas funciones que los vocales que hasta entonces la habían formado.

El diputado de Santa Fe, dijo: que se incorporasen.

El Secretario de la Junta, Doctor Don Juan José Paso, dijo: que los diputados de las provincias no debían incorporarse á la Junta, ni tomar parte activa en el gobierno provisorio que ésta ejercía.

El diputado de Corrientes dijo: que se incorporasen á la Junta los diputados.

El diputado de Salta se conformó con el voto anterior.

El diputado de Córdoba se conformó con el voto anterior.

El diputado de Tucumán se conformó con el voto anterior.

El diputado de Tarija se conformó con el voto anterior.

El Presidente de la Junta, Don Cornelio Saavedra, dijo: que la incorporación de los diputados á la Junta, no era según derecho; pero que accedía á ella por conveniencia pública.

El vocal Don Miguel de Azcuénaga, dijo: que accedía á la incorporación en obsequio de la unidad y de la política.

El diputado de Catamarca dijo: que se incorporasen los diputados á la Junta.

El vocal Doctor Don Manuel de Alberti, dijo: que contemplaba contra derecho y origen de muchos males, semejante incorporación; pero que accedía á ella por conveniencia política.

El diputado de Jujuy dijo: que se incorporasen los diputados á la Junta.

El vocal don Domingo Matheu, dijo: que se conforma con el voto del vocal don Manuel de Alberti.

El vocal don Juan Larrea dijo: que se incorporen los diputados á la Junta.

El Secretario de la Junta, doctor don Mariano Moreno, dijo: que considera la incorporación de los diputados en la Junta, contraria á derecho y al bien general del Estado en las miras sucesivas en la gran causa de su constitución; que en cuanto á la convulsión política que ha preparado esta reclamación, derivándose toda ella de la publicación del reglamento de seis de Diciembre, cree contrario al bien de los pueblos y á la dignidad del gobierno, preferir una variación en su forma á otros medios enérgicos con que pudiera apaciguarse fácilmente, pero que decidida la pluralidad y asentado el concepto de un riesgo inminente contra la tranquilidad pública si no se acepta esta medida, es un rasgo propio de la moderación de la Junta conformarse con ella. Ultimamente, que habiéndose esplicado de un modo singular contra su persona el descontento de los que han impelido á esta discusión, y no pudiendo ser provechosa al público la continuación de un magistrado desacreditado, renuncia su empleo, sin arrepentirse del acto del seis de Diciembre (publicado en Gaceta de ocho) que

le ha producido el presente descrédito; antes bien, espera que algún día disfrutará la gratitud de los mismos ciudadanos que ahora lo han perseguido, á quienes perdona de corazón y mira su conducta errada con cierto género de placer; porque prefiere al interés de su propio crédito, que el pueblo empiece á pensar sobre el gobierno, aunque cometa errores que después enmendará, avergonzándose de haber correspondido mal á unos hombres que han defendido con intenciones puras sus derechos.

(FIRMADOS)

Vocales de la Junta Primitiva

*Cornelio de Saavedra**Miguel de Azcuénaga**Dr. Manuel Alberti**Domingo Matheu**Juan Larrea**Juan José Paso, secret.**Dr. Mariano Moreno, secret.*

Diputados de las provincias

*Dr. Gregorio Funes**Dr. Manuel Felipe de Molina**Dr. José García de Cossio**Manuel Ignacio de Molina**José Antonio Olmos**Dr. Juan Ignacio de Gorriti**Francisco de Gurruchaga**Dr. José Julián Pérez**Juan Francisco Tarragona*

(*Autobiografías y Memorias.*— Museo Histórico Nacional— Comisión Protectora de Bibliotecas Populares.— Tomo II, p. 203.)

27

Creación de Juntas Provinciales

Orden del día.— Los mismos motivos que obligaron á substituir una autoridad colectiva á la individualidad de los Virreyes, debieron, también, introducir una nueva forma en los gobiernos subalternos. El justo temor de no arriesgar unos primeros pasos que debían decidir de nuestra suerte, en la premura de un tiempo en que esta Junta no tenía una confianza entera de los pueblos, la puso en la necesidad de no alterar el sistema antiguo, depositando los gobiernos en manos de una fidelidad á prueba de peligros. Por lo demás, la Junta ha estado siempre persuadida de que el mejor fruto de esta resolución, debía consistir en hacer gustar á los pueblos las ventajas de un gobierno popular. Así es, que aun dejando á la suerte algún influjo, previno en las instrucciones reservadas de la expedición militar, condescendiese con los pueblos inclinados al gobierno de Juntas. Para pensar así, tenía muy presente que sin esta novedad, no habrían hecho otra cosa los pueblos que continuar en ser infelices. En efecto, la autoridad que no es contenida por la atención inquieta y celosa de otros colegas, rara vez deja de corromper las mejores intenciones. Después de haberse ensayado un magistrado en hacer usurpaciones, es preciso hacerse absoluto para asegurar la impunidad. Del quebrantamiento de las leyes al despotismo, el camino es corto. Entonces los súbditos esclavos no tienen ni patria, ni amor al bien público, y el Estado lánguido ofrece á todo enemigo una presa fácil. Por el contrario sucedería hallándose el gobierno en manos de muchos. De aquel continuo flujo y reflujo de autoridad se formarían costumbres públicas, que templan la acrimonia del poder y la bajeza de la obediencia. Esta clase de gobierno ofrecerá magistrados poderosos, pero esclavos de las leyes, ciudadanos libres, pero que saben que no hay libertad para el ciudadano que no ama las leyes, virtudes cívicas, virtudes políticas, amor de la gloria, amor de la patria, disciplina austera, y en fin, hombres destinados á sacrificarse por el bien del Estado. Para que esta grande obra tenga su perfección,

cree también la Junta, que será de mucha conducencia que los individuos de estas Juntas Gubernativas sean elegidos por los pueblos. Por este medio se conseguirá que, teniendo los elegidos en su favor la opinión pública, sólo el mérito eleve á los empleos y que el talento para el mando sea el único título para mandar. En esta inteligencia ha creído esta Junta Superior, hacer las siguientes declaraciones, á saber: —1°—Que en la Capital de toda provincia, comprendida la de Charcas, se formará una Junta compuesta de cinco individuos, que por ahora serán el presidente ó el gobernador intendente que estuviere nombrado, como Presidente, y los cuatro colegas que se eligiesen por el pueblo.—2°—Que en esta Junta residirá *in solidum* toda la autoridad del gobierno de la provincia, siendo de su conocimiento todos los asuntos que por las leyes y ordenanzas pertenecen al presidente ó al gobernador intendente; pero sea con entera subordinación á esta Junta Superior.—3°—Que el sueldo asignado al presidente ó á los gobernadores intendentes, lo percibirán por entero los que actualmente se hallan nombrados, sirviendo sin asignación alguna los colegas.—4°—La Junta tendrá tratamiento de V. S.—El Presidente de la Junta, el que le correspondiese por su grado militar, si acaso lo es, ó por el empleo de la República, y los Vocales ninguno en particular como tales vocales, pero sí el que les fuese debido por otros títulos.—5°—Que en la vacante del Presidente de la Junta, se dé noticia á esta Junta Superior, quien deliberará lo que convenga, procediendo á nueva elección para reemplazar á los demás vocales que vacasen, y dando cuenta á esta superioridad de haberlo ejecutado.—6°—Que en cada ciudad y villa de las que tengan ó deban tener Diputado en ésta, se formarán también sus Juntas respectivas, las que se compondrán de tres individuos, es á saber: el Comandante de Armas que actualmente lo fuese, y los dos socios que se eligiesen.—7°—Que á esta Junta corresponderá el conocimiento de todo aquello en que entendían los Subdelegados de Real Hacienda, cuyo empleo por separado queda abolido.—8°—Que lo dicho en orden á vacantes en las Juntas Provinciales, se observe también en ésta.—9°—Que estas Juntas reconocerán á sus respectivas Capitales la subordinación en que han estado las ciudades de que lo son.—10°—Que las Juntas Provinciales se congregarán diariamente en las posadas de sus Presidentes para el despacho de los negocios, y durará su reunión desde las diez de la mañana hasta la una de la tarde y desde las cinco hasta las ocho de la noche.—11°—Que las horas de despacho en las Juntas

subalternas, será según la ocurrencia de los negocios, bien que deberá ser diaria. — 11° Que estas Juntas velarán incesantemente en la tranquilidad, seguridad y unión de los pueblos encargados á su cuidado y en mantener y fomentar el entusiasmo á favor de la causa común. — 13° Pondrán particular esmero en la disciplina é instrucción de las milicias, para que sirviendo á conservar el orden interior, estén también prontas y espeditas para cualquier auxilio exterior en favor de la defensa general. — 14° A este fin meditarán y calcularán los recursos de cada ciudad, en razón de los auxilios de que sean capaces y propondrán los medios y arbitrios extraordinarios que podrán tocarse al efecto. — 15° Entenderán igualmente en los alistamientos y reclutas que se ordenen por las Juntas Provinciales ó por esta Superior, como asimismo en la ejecución y puntual cumplimiento de todas las órdenes que se les comuniquen. — 16° Se abstendrán de todo acto de jurisdicción contenciosa ó administración que no sea de los asuntos comprendidos en estas declaraciones, dejando obrar libremente y aun auxiliando á las justicias, cabildos y funcionarios públicos en lo que corresponda á su conocimiento y autoridad respectiva. — 17° Que por punto general, si la elección recayere en los asesores de Provincia, en alguno de los Alcaldes ordinarios ó en los dos, no podrán éstos ejercer ambas funciones simultáneamente, debiendo en tal caso elegir uno de los empleos, y si se prefiriese el de vocal, se hará nueva elección de Alcalde ordinario. — 18° Que para estas elecciones se ponga la mira en sujetos de las más recomendables calidades, y principalmente la de haber probado de un modo indeficiente, pero razonable, su decidida adhesión al sistema actual, de manera que no podrá recaer en ninguno que hubiese sido causado, que se halle ligado por alguna relación íntima con los que lo hayan sido, ni de quien se pueda recelar alguna fundada sospecha. — 19° Que los empleos de vocales ó asociados á las Juntas de Provincia, y de las subordinadas de cada pueblo sufragáneo, no puedan recaer por ningún título, causa ni motivo, en eclesiásticos seculares ó regulares, considerándose en ellos el mismo impedimento con que la antigua Constitución los ha separado de los cargos concejiles en los Cabildos y Ayuntamientos. — 20° Que del mismo motivo se declara incompatible el empleo de vocales con el de Oidor de la Real Audiencia de Charcas y de Ministros de Real Hacienda. — 21° Que se proceda á la elección de vocales en la forma siguiente: se pasará orden por el Gobernador ó por el Cabildo en las ciudades donde no lo haya, á todos los Al-

caldes de Barrio, para que citando á todos los vecinos españoles de sus respectivos cuarteles á una hora señalada, concurren todos á prestar libremente su voto para el nombramiento de un elector que asista con su sufragio á la elección de los colegas que han de componer la Junta; advertencia de que á escepción del Presidente de Charcas ó Gobernador, en la ciudad donde lo hubiere, deberán concurrir al nombramiento de electores todos los individuos del pueblo, sin escepción de empleos y ni aun de los Cabildos eclesiásticos y seculares, pues los individuos que constituyen estos cuerpos deberán asistir á sus respectivos cuarteles en calidad de simples ciudadanos al indicado nombramiento. Y por cuanto habrán ciudades que no estén divididas en cuarteles, ó si lo están sean de muy reducido número, se subdividirán éstos, ó se repartirán donde no los haya absolutamente, en seis cuarteles cuando menos, para este y demás casos ocurientes; pudiendo hacerse dicha subdivisión y reparto por el Cabildo de los pueblos que lo exijan, y nombrándose para cada barrio de los que no tengan alcalde designado, la persona de mejor nota y crédito del cuartel, para que en clase de Presidente asista á la elección; pero sin que éste ni otro alguno, por más condecorado que sea, limite ó prevenga la voluntad general de los concurrentes al predicho nombramiento. — 22º Que el nombramiento de electores se haga en el mismo día, y si es posible en una misma hora, en todos los cuarteles, y que en el mismo se congreguen en la Sala Capitular del Ayuntamiento, en la que procederán á pluralidad de votos á la elección de colegas, sirviéndose del Escribano del Ayuntamiento para la autorización de sus sufragios. — 23º Que en caso de empatarse por igualdad de votos, por ser pares los electores, se pase la elección á esta Junta Superior, para dirimir en acuerdo la discordia. — 24º Que este establecimiento de Junta y su arreglo es solamente provisorio, hasta la celebración del Congreso, quien con maduro acuerdo deliberará lo que más convenga al bien de la patria. — Buenos Aires, 10 de Febrero de 1811. — CORNELIO DE SAAVEDRA — MIGUEL DE AZCUÉNAGA — DOMINGO MATHEU — JUAN LARREA — DOCTOR GREGORIO FUNES — JUAN FRANCISCO TARRAGONA — DOCTOR JOSÉ GARCÍA DE COSSIO — ANTONIO OLMOS — FRANCISCO DE GURRUCHAGA — DOCTOR MANUEL FELIPE DE MOLINA — MANUEL IGNACIO MOLINA — DOCTOR JUAN IGNACIO DE GORRITI — DOCTOR JOSÉ JULIÁN PÉREZ — MARCELINO POBLET — JOSÉ IGNACIO MARADONA. — *Doctor Juan José Paso, Secretario — Hipólito Vieytes, Secretario.*

(Gazeta, núm. 36.)

28

Reglamento sobre la libertad de imprenta

Atendiendo á que la facultad individual de los ciudadanos, de publicar sus pensamientos é ideas políticas, es no sólo un freno de la autoridad de los que gobiernan, sino también un medio de ilustrar á la Nación en general y el único camino de llegar al conocimiento de la verdadera opinión pública; decretamos lo siguiente:—Art. 1º—Todos los cuerpos y personas particulares, de cualquiera condición y estado que sean, tienen libertad de escribir, de imprimir y de publicar sus ideas políticas, sin necesidad de licencia, revisión y aprobación alguna anteriores á la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades que se espresarán en el presente decreto.—Art. 2º—Por tanto, quedan abolidos todos los actuales juzgados de imprenta y la censura de las obras políticas, precedente á su impresión.—Art. 3º—Los autores ó impresores serán responsables, respectivamente, del abuso de esta libertad.—Art. 4º—Los libelos infamatorios, los escritos calumniosos, los licenciosos y los contrarios á la decencia pública y buenas costumbres, serán castigados con la pena de la ley y las que aquí se señalarán.—Art. 5º—Los jueces y tribunales respectivos entenderán de la averiguación, calificación y castigo de los delitos que se cometan por el abuso de la libertad de la imprenta, arreglándose á lo dispuesto por las leyes y en este reglamento.—Art. 6º—Todos los escritos en materia de religión quedan sujetos á la previa censura de los ordinarios eclesiásticos, según lo establecido en el Concilio de Trento.—Art. 7º—Los autores, bajo cuyo nombre quedan comprendidos el editor y los que hayan facilitado el manuscrito original, no estarán obligados á poner sus nombres en los escritos que publiquen, aunque no por eso dejan de quedar sujetos á la misma responsabilidad. Por tanto, deberá constar al impresor quién sea el autor ó editor de la obra, pues de lo contrario sufrirá la pena que se impondría al autor ó editor, si fuesen conocidos.—Art. 8º—Los impresores están obligados á poner su nombre y apellido y el lugar y año de la impresión en todo impreso, cualquiera que sea

su volumen: teniendo entendido que la falsedad de alguno de estos requisitos, se castigará como la omisión absoluta de ellos. — Art. 9.º— Los autores ó editores que, abusando de la libertad de imprenta, contraviniesen á lo dispuesto, no sólo sufrirán las penas señaladas por las leyes, según la gravedad del delito, sino que éste y el castigo que se les imponga, se publicará con sus nombres en la *Gazeta* del gobierno. — Art. 10.— Los impresos de obras ó escritos que se declaren inocentes ó no perjudiciales, serán castigados con cincuenta pesos de multa, en caso de omitir en ellos sus nombres ó algún otro de los requisitos indicados en el Artículo 8.º.— Art. 11.— Los impresores de los escritos prohibidos en el artículo 4.º, que hubieren omitido su nombre ú otras de las circunstancias ya expresadas, sufrirán, además de la multa que se estime correspondiente, la misma pena que los autores de ellos. — Art. 12.— Los impresores de escritos de materia de religión, sin la previa licencia de los ordinarios, deberán sufrir la pena pecuniaria que se les imponga, sin perjuicio de las que, en razón del esceso en que incurran, tengan ya establecidas las leyes. — Art. 13.— Para asegurar la libertad de la imprenta y contener, al mismo tiempo, su abuso, se nombrará una Junta Suprema de Censura, que deberá residir cerca del gobierno, compuesta de cinco individuos, y á solicitud de ellos, otra en la Capital de cada Provincia, compuesta de tres. — Art. 14.— Serán eclesiásticos dos de los individuos de la Junta Suprema de Censura y uno de los de las Juntas de Provincias, y los demás serán seculares; y unos y otros sujetos instruidos y que tengan virtud y probidad y el talento necesario para el grave encargo que se les encomienda. — Art. 15.— Será de su cargo examinar las obras que se hayan denunciado al Poder Ejecutivo ó justicias respectivas, y si la Junta Censora de Provincia juzgase, fundando su dictamen, que deben ser detenidas, lo harán así los Jueces y recogerán los ejemplares vendidos. — Art. 16.— El autor ó impresor podrá pedir copia de la censura y contestar á ella; si la Junta confirmase su primera censura, tendrá acción el interesado á exigir que pase el expediente á la Junta Suprema. — Art. 17.— El autor ó impresor podrá solicitar á la Junta Suprema que se vea primera y segunda vez su espediente, para que se le entregue cuando se hubiese actuado. Si la última censura de la Junta fuese contra la obra, será ésta detenida sin más examen; pero si la aprobase, quedará espedido su curso. — Art. 18.— Cuando la Junta Censora de Provincia ó la Suprema, según lo establecido, declaren que

la obra no contiene sino injurias personales, será detenida y el agraviado podrá seguir el juicio de injurias en el Tribunal correspondiente con arreglo á las leyes.—Art. 19.—Aunque los libros de religión no puedan imprimirse sin licencia del ordinario, no podrá ésta negarla sin previa censura y audiencia del interesado.—Art. 20.—Pero si el ordinario insistiese en negar su licencia, podrá el interesado acudir con copia de la censura á la Junta Suprema, la cual deberá examinar la obra, y si la hallase digna de aprobación, pasar su dictamen al ordinario, para que, más ilustrado sobre la materia, conceda la licencia, si le pareciere, á fin de escusar recursos ulteriores.

Decreto aprobando el reglamento que antecede

Buenos Aires, Abril 20 de 1811. —Teniendo en consideración las importantes ventajas que debe lograr la causa pública por la libertad de la prensa, del mismo modo que los han conseguido, por este medio, todas las naciones cultas de la Europa; y creyendo que este será un poderoso estímulo para que los literatos se esfuercen á dar á luz los conocimientos de que pueda aprovecharse el Congreso Nacional, y concluir con feliz éxito las grandes causas que deben ocuparlo; se aprueba, por ahora, el reglamento que antecede, dejando al Congreso su decisión perentoria, el que se publicará en la Gazeta de Gobierno, para inteligencia de todos.—CORNELIO SAAVEDRA—DOMINGO MATHEU—ATANASIO GUTIÉRREZ—JUAN ALAGON—DOCTOR GREGORIO FUNES—DOCTOR JOSÉ GARCÍA DE COSSIO—JOSÉ ANTONIO OLMOS—MANUEL FELIPE DE MOLINA—MANUEL IGNACIO MOLINA—FRANCISCO DE GURRUCHAGA—DOCTOR JUAN IGNACIO CORRINI—DOCTOR JOSÉ JULIÁN PÉREZ—MARCELINO POBLET—JOSÉ IGNACIO MARADONA—FRANCISCO A. ORTÍZ DE OCAMPO—*Doctor Joaquín Campana, Secretario.*

(Gazeta Estrordinaria de 22 de Abril.)

Decreto sobre libertad de imprenta

Tan natural como el pensamiento, le es al hombre la facultad de comunicar sus ideas. Es esta una de aquellas po-

cas verdades que más bien se sienten que se demuestran. Nada puede añadirse á lo que se ha escrito para probar aquel derecho, y las ventajas incalculables que resultan á la humanidad de su libre ejercicio. El Gobierno, fiel á sus principios, quiere restituir á los pueblos americanos, por medio de la libertad política de la imprenta, ese precioso derecho de la naturaleza, que le había usurpado un envejecido abuso del poder, y en la firme persuasión de que es el único camino de comunicar las luces, formar la opinión pública y consolidar la unión de sentimientos, que es la verdadera fuerza de los estados: ha venido en decretar lo siguiente: Art. 1º Todo hombre puede publicar sus ideas libremente y sin previa censura. Las disposiciones contrarias á esta libertad, quedan sin efecto. Art. 2º El abuso de esta libertad es un crimen. Su acusación corresponde á los interesados, si ofende derechos particulares; y á todos los ciudadanos, si compromete la tranquilidad pública, la conservación de la Religión Católica ó la constitución del Estado. Las autoridades respectivas impondrán el castigo según las leyes. Art. 3º Para evitar los efectos de la arbitrariedad en la calificación y graduación de estos delitos, se creará una Junta de nueve individuos con el título de *Protectora de la Libertad de la Imprenta*. Para su formación presentará el Exmo. Cabildo, una lista de cincuenta ciudadanos honrados, que no estén empleados en la Administración del Gobierno; se hará de ellos la elección á pluralidad de votos. Serán electores natos el prelado eclesiástico, alcalde de primer voto, síndico procurador, prior del Consulado, el fiscal de S. M. y dos vecinos de consideración, nombrados por el Ayuntamiento. El escribano del pueblo autorizará el acto y los respectivos títulos, que se librarán á los electos sin pérdida de instantes. Art. 4º Las atribuciones de esta autoridad protectora se limitan á declarar de hecho, si hay ó no crimen en el papel que da mérito á la reclamación. El castigo del delito, después de la declaración corresponde á las justicias. El ejercicio de sus funciones cesará al año de su nombramiento, en que se hará nueva elección. Art. 5º La tercera parte de los votos en favor del acusado, hace sentencia. Art. 6º Apelando algunos de los interesados, la Junta Protectora sorteará nueve individuos de los cuarenta restantes de la lista de presentación; se reverá el asunto y sus resoluciones, con la misma calidad en favor del acusado, serán irrevocables. En caso de justa recusación, se sustituirán los recusados por el mismo arbitrio. Art. 7º Se observará igual método en las capitales de pro-

vincias, sustituyendo al prior del consulado, el diputado de Comercio, y al fiscal de S. M., el promotor fiscal. Art. 8º Las obras que tratan de religión, no pueden imprimirse sin previa censura del eclesiástico. En casos de reclamación se reveerá la obra, por el mismo diocesado, asociado de cuatro individuos de la Junta Protectora, y la pluralidad de votos hará sentencia irrevocable. Art. 9º Los autores son responsables de sus obras, ó los impresores, no haciendo constar á quien pertenecen. Art. 10º Subsistirá la observancia de este decreto hasta la resolución del Congreso. Buenos Aires, 26 de Octubre de 1811. — Feliciano Antonio Chiclana — Manuel de Sarratea — Juan José Paso — *José Julián Pérez*, Secretario.

(Gazeta Extraordinaria de 26 de Octubre.)

Creación del Triunvirato Ejecutivo

BANDO.—*La Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata, á nombre del señor Don Fernando VII.*—Teniendo consideración á la celeridad y energía con que deben girar los negocios de la patria, y las trabas que ofrecen al efecto la multitud de los vocales, por la variedad de opiniones, que frecuentemente se experimentan, ha acordado constituir un Poder Ejecutivo compuesto de tres vocales y tres secretarios sin voto; y debiendo ser los sujetos en quienes recayese la elección, de probidad y pública aceptación, se procuró explorar la voluntad general de esta ciudad, por no estar en ejercicio sus Diputados electos; y habiéndola conocido, por unánime votación se eligieron los siguientes:—Para vocales, los señores Coronel Doctor Don Feliciano Chiclana, Don Manuel de Sarratea, y el Doctor Don Juan José Paso, y para secretarios, sin voto, los señores Doctor Don José Julián Pérez, de Gobierno; Doctor Don Bernardino de Rivadavia, de Guerra; y el Doctor Don Vicente López, de Hacienda; los cuales tomarán el Gobierno bajo las reglas ó modificaciones que deberá establecer la Corporación ó Junta Conservadora que formarán los señores Diputados de los Pueblos y Provincias, en consorcio de los dos suplentes que elegirá esta Capital por impedimento de los dos propietarios, que están constituidos vocales; debiendo entenderse que los miembros que componen el Poder Ejecutivo son responsables de sus acciones á la Junta Conservadora. Y para que así se tenga entendido, se publicará por Bando en la forma ordinaria, fijándose ejemplares en los parajes de estilo.—Buenos Aires, 23 de Septiembre de 1811.—DOMINGO MATHEU—JUAN DE ALAGON—JOSÉ ANTONIO OLMOS—DOCTOR JUAN IGNACIO DE GORRITI—FRANCISCO ANTONIO ORTIZ DE OCAMPO—*Por mandato de la Exma. Junta, Don José Ramón de Basavilbaso.*—Es copia, *Basavilbaso*».

(Gazeta Extraordinaria de 25 de Septiembre.)

30

Reglamento fijando las atribuciones, prerrogativas y deberes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial

Después que por la ausencia y prisión de Fernando VII quedó el Estado en una orfandad política, reasumieron los pueblos el poder soberano. Aunque es cierto que la Nación había trasmitido en los reyes ese poder, pero siempre fué con la calidad de reversible, no solo en el caso de una deficiencia total, sino también en el de una momentánea y parcial. Los hombres tienen ciertos derechos que no les es permitido abandonar. Nadie ignora que en las ocasiones en que el magistrado no puede venir en su socorro, se halla cualquiera revestido de su poder para procurarse todo aquello que conviene á su conservación. Una Nación ó un Estado es un personaje moral, procedente de esa asociación de hombres que buscan su seguridad á fuerzas reunidas. Por la misma razón que esa multitud forma una sociedad, la cual tiene sus intereses comunes y que debe obrar de concierto, ha sido necesario que en la orfandad política en que se hallaba la nuestra, estableciese una autoridad pública, de cuya inspección fuese ordenar y dirigir lo que cada cual debiese obrar relativamente al fin de la asociación. Claro está por estos principios de eterna verdad, que para que una autoridad sea legítima, entre las ciudades de nuestra confederación política, debe nacer del seno de ellas mismas, y ser la obra de sus propias manos. Así lo comprendieron estas propias ciudades, cuando revalidando por un acto de rehabilitación tácita el Gobierno establecido en esta Capital, mandaron sus Diputados para que tomasen aquella porción de autoridad que les correspondía como miembros de la asociación. Si una nación tiene derecho á establecerse un Gobierno, no lo tiene menor á todo aquello que se dirige á su conservación; pues que la ley que nos impone este deber, nos da derecho á todas las cosas sin las cuales no podemos satisfacerlo. Evitar con el mayor cuidado todo lo que pueda causar su ruina, entra, sin duda alguna, en sus más esenciales obligaciones. Por este principio, no menos evidente, fué que palpando la Junta el riesgo que co-

rría el Estado, por no ser compatible con el gobierno de muchos sufragantes la unidad de planes, la celeridad del despacho, ni el secreto de las deliberaciones, se creyó obligada á hacer un nuevo reglamento provisorio, por el cual, salvo aquellos inconvenientes, se viese la forma bajo la que debían obrar las ciudades en calidad de cuerpo político. La base en que creyó debía fundarlo, fué la división de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, reservándose aquélla, la Junta de Diputados bajo el título de Conservadora, y depositando éstas en varios funcionarios públicos. Es evidente que no hallándose abierto, á la sazón, el Congreso Nacional, la Junta actual de los Diputados no tiene una representación perfecta de soberanía; es decir, que no reúne en su persona, ni toda la majestad del cuerpo que representa, ni todos los derechos y facultades que le son propias. Pero no por eso es una representación nula y sin ningún influjo inmediato y activo, así como no lo era la que tenía la Junta antes de la división de poderes. En ella residía, seguramente, la soberanía, en aquel sentido en que el bien mismo del Estado exigía imperiosamente para aquellos casos urgentes de que solo ella podía salvarlos; así como reside en cualquier particular injustamente atacado por otro igual, la autoridad del Juez que no puede venir en su socorro. Esta es, pues, la soberanía y el alto poder que se adjudicó la Junta, separando el ejecutivo y judicial y reservándose el legislativo, en aquella acepción que es permitido tomarse: reserva tanto más conveniente, cuanto que por ella, al paso que se conserva en las ciudades en la persona de sus Diputados, todo entero su decoro, se pone también una barrera á la arbitrariedad. Usando, pues, de aquel poder, ha determinado fijar los límites de las respectivas autoridades, por el siguiente Reglamento, que deberá subsistir hasta la resolución del Congreso, ó antes, si el interés mismo de los pueblos exigiese algunas reformas.

REGLAMENTO

SFCCIÓN PRIMERA

De la Junta Conservadora.—Artículo 1º.—Los Diputados de las Provincias Unidas que existen en la Capital, componen una Junta, con el título de Conservadora de la soberanía del señor Don Fernando Séptimo y la de las leyes nacionales en cuanto no se oponen al derecho supremo de

la libertad civil de los pueblos americanos.— Art. 2°—Serán incorporados á esta Junta los Diputados que lleguen después de la formación de este Reglamento.— Art. 3°—Tendrá un Presidente cuyo empleo turnará de mes en mes en cada uno de sus vocales, empezándolo por el orden de sus nombramientos.— Art. 4°—La declaración de la guerra, la paz, la tregua, tratados de límites, de comercio, nuevos impuestos, creación de tribunales ó empleos desconocidos en la Administración actual y el nombramiento de individuos del Poder Ejecutivo, en caso de muerte ó renuncia de los que le componen, son asuntos de su privativo resorte, precediendo el informe y consulta del Poder Ejecutivo.— Art. 5°—La Junta Conservadora tendrá el tratamiento de *Alteza*, con los honores correspondientes y celebrará sus sesiones en los días Martes y Viernes de la semana en la Real Fortaleza.— Art. 6°—Asistirá á las funciones públicas el día de San Fernando, Reconquista, Defensa, 25 de Mayo y otras que se celebrasen con motivo de algún acaecimiento extraordinario; presidirá en ella, ocupando el lugar que llevaba el anterior Gobierno; y el Poder Ejecutivo, el que tenían los Virreyes como Presidentes de la Real Audiencia.— Art. 7°—Las personas de los Diputados son inviolables y en caso de delito serán juzgados por una comisión interior, que nombrará la Junta conservadora, cada vez que ocurra.— Art. 8°—Cesarán todas sus funciones, en el momento de la apertura del Congreso.

SECCIÓN SEGUNDA

Del Poder Ejecutivo.— Art. 1°—El Poder Ejecutivo, compuesto de los individuos que anunció el decreto de 23 de Septiembre, es independiente.— Art. 2°—La defensa del Estado, la organización de los ejércitos, el sosiego público, la libertad civil, la recaudación é inversión de los fondos del Estado, el cumplimiento de las leyes y la seguridad real y personal de todos los ciudadanos, forman el objeto del ejercicio de su autoridad.— Art. 3°—El Poder Ejecutivo conferirá todos los empleos militares y civiles de los ramos de la administración pública, suprimirá los inútiles y hará las reformas convenientes á la utilidad común y compatibles con el sistema de la actual administración.— Art. 4°—El Poder Ejecutivo acordará las Providencias necesarias para la reunión de los Diputados, elección de los que faltan y celebración del Congreso á la mayor posible brevedad y en los términos que permitan el estado de las circunstan-

cias; á cuyo importante fin le auxiliará la Junta Conservadora con todo el influjo de su autoridad; el sueldo de los Secretarios queda reducido á dos mil pesos, desde el día de su nombramiento. — Art. 5° — Al Poder Ejecutivo corresponde el nombramiento y remoción de sus Secretarios y el juzgamiento de su conducta pública. — Art. 6° — Los parientes de los individuos del Poder Ejecutivo, hasta el tercer grado inclusive, no podrán ser Secretarios de Gobierno, ni serán provistos para empleos, sin previa consulta y aprobación de la Junta Conservadora. — Art. 7° — El Poder Ejecutivo no podrá conocer de negocio alguno judicial, avocar causas pendientes ni ejecutoriadas, ni mandar abrir nuevamente los juicios: no podrá alterar el sistema de la Administración de Justicia, ni conocer de las causas de los magistrados superiores ni inferiores, ni demás Jueces subalternos y funcionarios públicos, quedando reservada al Tribunal de la Real Audiencia, ó á la Comisión que en su caso nombrará la Junta Conservadora. — Art. 8° — Al Poder Ejecutivo corresponde el conocimiento de las causas de contrabando y de todas aquellas en que se persiguiese el cobro de los caudales adeudados por los derechos establecidos de aduana y otros reglamentos. Las demás que no sean de este género, serán remitidas por el Poder Ejecutivo á la Real Audiencia, y las sentencias contra el Fisco no se ejecutarán sin consulta del Poder Ejecutivo, quien en este caso podrá suspender los libramientos, si el pago fuese incompatible con otros objetos preferentes por su urgencia y utilidad hacia el bien común. — Art. 9° — El Poder Ejecutivo no podrá tener arrestado á ningún individuo, en ningún caso, más que 48 horas, dentro de cuyo término deberá remitirlo al Juez competente con lo que se hubiese obrado. La infracción de este artículo se considerará como un atentado contra la libertad de los ciudadanos, y cualquiera, en este caso, podrá elevar su queja á la Junta Conservadora. — Art. 10. — Para el conocimiento de cada uno de los recursos de segunda suplicación que antes se dirigían al Consejo de Indias, nombrará el Poder Ejecutivo una comisión judicial de tres ciudadanos de probidad y luces. — Art. 11. — El Poder Ejecutivo tendrá el tratamiento de *Esclencia* y los honores militares de que antes gozaba la Junta Gubernativa. — Art. 12. — La Presidencia del Poder Ejecutivo turnará entre sus individuos cada cuatro meses, por el orden de sus nombramientos. — Art. 13. El Poder Ejecutivo será responsable á la Junta Conservadora de su conducta pública. — Art. 14. — Su autoridad es provisoria, y durará por el término de un año.

SECCIÓN TERCERA

Del Poder Judicial. — Art. 1° El Poder Judicial es independiente y á él solo toca juzgar á los ciudadanos. — Ar. 2° Las leyes generales, las municipales y bandos de buen gobierno, serán la regla de sus resoluciones. — Art. 3° El Poder Judicial será responsable del menor atentado que cometa en la substancia ó en el modo, contra la libertad y seguridad de los súbditos. — Art. 4° Subsistirá este reglamento hasta que el Congreso deslinde constitucionalmente las atribuciones y facultades del Poder Judicial. — Art. 5° La Junta Conservadora se reserva el derecho de esplicar las dudas que puedan ocurrir á la ejecución ú observancia de los artículos del presente Reglamento. Dado en la Real Fortaleza, á 22 de Octubre de 1811. — JUAN FRANCISCO TARRAGONA — DOCTOR GREGORIO FUNES — DOCTOR JOSÉ GARCÍA DE COSSIO — JOSÉ ANTONIO OLMOS — MANUEL IGNACIO MOLINA — FRANCISCO DE GURRU-CHAGA — JOSÉ IGNACIO MARADONA — MARCELINO POBLET — FRANCISCO ANTONIO ORTIZ DE OCAMPO — FRAY IGNACIO GRELA — DOCTOR JUAN IGNACIO DE GORRITI, Diputado Secretario.

(Colección de Constituciones, por Don Florencio Varela.)

31

Revocando las confinaciones decretadas en 5 y 6 de Abril

Octubre 1° de 1811.—Vistos los presentes autos, seguidos sobre los acontecimientos de 5 y 6 de Abril del corriente, relativos á una sedición intentada en esta ciudad; no resultando de ellos comprobado ni aun indicado el menor crimen contra los señores vocales que fueron de este Gobierno, Coronel Don Miguel Azcuéneza, Don Juan Larrea, Don Nicolás Peña y don Hipólito Vieytes, ni contra el Coronel Don Domingo French, el Teniente Coronel Don Antonio Luis Berutti, el presbítero Don Domingo Vieytes, Don Agustín Donado, Don Gervasio Antonio Posadas y Don Felipe Cardoso, declárase, por ahora, y sin perjuicio de otras declaratorias que se hagan oportunamente, que los citados señores vocales y demás sujetos mencionados pueden restituirse libremente á sus domicilios, y al efecto líbrense las órdenes correspondientes á los Comandantes ó Jueces en cuyos distritos fueron confinados, pasándose igualmente oficio á los interesados, para su inteligencia.—FELICIANO ANTONIO CHICLANA.—JUAN JOSÉ PASO.—*Bernardino Rivadavia*, Secretario.

(Gazeta, núm. 69.)

32

**Convención entre las Exmas. Juntas Gubernativas
de Buenos Aires y del Paraguay**

Los infrascriptos, Presidente y vocales de la Junta de esta ciudad de la Asunción del Paraguay, y los representantes de la Exma. Junta establecida en Buenos Aires, y asociada de Diputados del Río de la Plata, habiendo sido enviados con plenos poderes con el objeto de acordar las providencias convenientes á la unión y común felicidad de ambas provincias y demás confederadas, y á consolidar el sistema de nuestra regeneración política, teniendo al mismo tiempo presente las comunicaciones hechas por parte de esta dicha Provincia del Paraguay, en 20 de Julio último á la citada Exma. Junta, y las ideas benéficas y liberales que animan á ésta, conducida siempre de sus constantes principios de justicia, de equidad y de igualdad, manifestados en su contestación oficial de 28 de Agosto siguiente, hemos decidido y concordado después de una detenida reflexión, en los artículos siguientes:—Art. 1º Hallándose esta Provincia del Paraguay en urgente necesidad de auxilios para mantener una fuerza efectiva y respetable, para su seguridad y para poder rechazar y hacer frente á las maquinaciones de todo enemigo interior ó exterior, convenimos unánimemente en que el tabaco de Real Hacienda existente en esta Provincia, se venda de cuenta de ella, sus productos se inviertan en aquel sagrado objeto, ú otro de su analogía, al prudente arbitrio de la propia Junta de esta ciudad de la Asunción, quedando, como efectivamente queda, estinguido el estanco de esta especie y consiguientemente, de libre comercio para lo sucesivo.—Art. 2º Que asimismo el peso de sisa y arbitrio, que anteriormente se pagaba en Buenos Aires por cada tercio de yerba que se estraía de esta Provincia del Paraguay, se cobre en adelante en esta misma ciudad de la Asunción, con aplicación precisa á los mismos objetos indicados. Para que esta determinación tenga en adelante el debido efecto, se harán oportunamente las prevenciones convenientes, en la inteligencia de que, sin perjuicio de los derechos de esta Provincia del Paraguay, podrá para los

mismos fines establecerse por la Exma. Junta algún moderado impuesto á la introducción de sus frutos en Buenos Aires, siempre que una urgente necesidad lo exija.—Art. 3°—Considerando que á más de ser regular y justo que el derecho de alcabala se satisfaga en el lugar de la venta donde se adeuda, no se cobre en esta Provincia del Paraguay alcabala alguna del espendio que en la de Buenos Aires ha de hacerse de los efectos ó frutos que se esportasen de esta de la Asunción. Tampoco en lo sucesivo se cobrará anticipadamente alcabala alguna en dicha ciudad de Buenos Aires y demás de su comprensión, por razón de las ventas que en esta del Paraguay deben efectuarse de cualesquier efectos que se conducen ó se remiten á ella, entendiéndose con la calidad de que, sin perjuicio de los derechos de esta Provincia, podrá arreglarse este punto en el Congreso.—Art. 4° A fin de precaver en cuanto sea posible toda desavenencia entre los moradores de una y otra Provincia, con motivo de la diferencia ocurrida entre la pertenencia del partido nombrado *Pedro González*, que se hallaba situado en esta banda del Paraná, continuara por ahora en la misma forma que actualmente se halla, en cuya virtud se encargará al cura de las ensenadas de la ciudad de Corrientes, no haga novedad alguna, ni se ingiera en lo espiritual de dicho partido, en la inteligencia de que en Buenos Aires se acordará, con el Ilmo. señor Obispo, lo conveniente al cumplimiento de esta disposición interina, hasta tanto que con más conocimiento se establezca en el Congreso General la demarcación fija de ambas Provincias hacia ese costado, debiendo en lo demás quedar también por ahora los límites de esta Provincia del Paraguay, en la forma en que actualmente se hallan, encargándose consiguientemente su Gobierno de custodiar el Departamento de Candelaria. Art. 5° Por consecuencia de la independencia en que queda esta Provincia del Paraguay de la de Buenos Aires, conforme á lo convenido en la citada contestación oficial de 28 de Agosto último, tampoco la mencionada Exma. Junta pondrá reparo en el cumplimiento y ejecución de las demás deliberaciones tomadas por esta del Paraguay, en Junta General, conforme á las declaraciones del presente tratado: y bajo de estos artículos, deseando ambas partes contratantes estrechar más y más los vínculos y empeños que deben unir á ambas Provincias en una federación y alianza indisolubles, se obliga cada una por la suya, no solo á cultivar y conservar una sincera, sólida y perpetua amistad, sino también á auxiliarse y cooperar mutua y eficazmente con todo

género de auxilios, según permitan las circunstancia de cada una, toda vez que lo demande el sagrado fin de aniquilar y destruir cualquier enemigo que intente oponerse á los progresos de nuestra justa causa y común libertad. En fe de todo lo cual, con las más sinceras protestas de que estos vínculos unirán siempre en dulce confraternidad á esta Provincia del Paraguay y las demás del Río de la Plata, haciendo á este efecto entrega de los poderes insinuados, firmamos esta acta por duplicado, con los respectivos secretarios para que cada parte conserve la suya á los fines consiguientes. Fecha en esta ciudad de la Asunción del Paraguay, á doce de Octubre de mil ochocientos once.—FULGENCIO YEDROS—DOCTOR JOSÉ GASPAS DE FRANCIA—MANUEL BELGRANO—PEDRO JUAN CABALLERO—DOCTOR VICENTE ECHEVARRÍA—*Fernando de la Mora*, vocal Secretario,—*Pedro Feliciano de Cavia*, Secretario. —

(«*Registro Oficial de la República Argentina*», tomo I (1810—1821)
pág. 120 — *Publicación Oficial*— Imp. «*La República*» — 1879.)

**Tratado de pacificación entre la Junta de Buenos Aires y
el Exmo. señor Virrey Don Francisco Xavier Elio**

La Exma. Junta de Buenos Aires, y el Exmo. Señor Don Francisco Xavier Elio, deseando terminar las desagradables diferencias ocurridas en estas Provincias, han conferido plenos poderes; la referida Exma. Junta al señor D. José Julián Pérez y S. E. el señor Virrey, á los señores D. José Acevedo y D. Antonio Garfias, para que arreglen el correspondiente tratado, quienes, después de canjear debidamente sus espresados respectivos poderes, han convenido en los artículos siguiente:—Art. 1º—Ambas partes contratantes, á nombre de todos los habitantes sujetos á su mando, protestan solemnemente á la faz del Universo que no reconocen ni reconocerán jamás otro soberano que al señor Don Fernando VII y sus legítimos sucesores y descendientes. —Art. 2º—Sin embargo de considerarse la Exma. Junta sin las facultades necesarias en su actual estado, y que en consecuencia debe reservarse para la deliberación del Congreso General de las Provincias, que está para reunirse, la determinación sobre el grave é importante asunto del reconocimiento de las Cortes Generales y Extraordinarias de la Monarquía, se declara con todo, que el Gobierno reconoce la unidad indivisible de la nación española, de la cual forman parte integrante las Provincias del Río de la Plata en unión con la Península y las demás partes de América que no tienen otro soberano que el señor Don Fernando VII. —Art. 3º—Persuadido firmemente el Gobierno de Buenos Aires, de la justicia y necesidad de auxiliar y sostener á la madre patria, en la santa guerra que con tanto tesón y gloria hace al usurpador de Europa, conviene gustosísimo en procurar remitir á España, á la mayor brevedad, todos los socorros pecuniarios que permita el presente estado de las rentas y los que pueden recojerse de la franqueza y generosidad de los habitantes, á que el Gobierno propenderá con las más eficaces providencias é insinuaciones.—Art. 4º—En demostración de la sinceridad de sus sentimientos y principios, el Gobierno de Buenos Aires ofrece dirigir prontamente un manifiesto á las Cortes, explicando las causas

que le han obligado á suspender el envío á ella de sus Diputados, hasta la antedicha deliberación del Congreso General.—Art. 5°—El insinuado Gobierno nombrará una ó más personas de su confianza que pasen á la Península á manifestar á las Cortes Generales y Extraordinarias sus intenciones y deseos.—Art. 6°—Las tropas de Buenos Aires desocuparán enteramente la Banda Oriental del Río de la Plata hasta el Uruguay, sin que en toda ella se reconozca otra autoridad que la del Exmo. Señor Virrey.—Art. 7°—Los pueblos del Arroyo de la China, Gualeguay y Gualeguaychú, situados entre ríos, quedarán de la propia suerte sujetos al gobierno del Exmo. Señor Virrey; y al de la Exma. Junta los demás pueblos; no pudiendo entrar, jamás, en aquella Provincia ó distrito, tropas de uno de los dos Gobiernos, sin anuencia del otro.—Art. 8°—En dichos Gobiernos no se perseguirá á persona alguna, sea de la esfera, estado ó condición que fuese, por las opiniones políticas que haya tenido, ni por haber escrito papeles, tomado las armas, ni otro cualquier motivo, olvidando enteramente la conducta observada por causa de las desavenencias ocurridas por una y otra parte.—Art. 9°—Toda la artillería perteneciente á la Banda Oriental, quedará en los propios puntos donde actualmente se halle y la artillería que tenían los buques de Buenos Aires, aprehendidos por el crucero, se restituirá igualmente á la posible brevedad.—Art. 10.—Del mismo modo se devolverán todos los prisioneros, de cualquiera clase que sean hechos por uno y otro Gobierno.—Art. 11.—El Exmo. Señor Virrey, se ofrece á que las tropas portuguesas se retiren á sus fronteras y dejen libre el territorio español, conforme á las intenciones del señor Príncipe Rejente, manifestadas á ambos Gobiernos.—Art. 12.—Queda también el Exmo. Señor Virrey, en librar las órdenes precisas, para que desde luego cese toda hostilidad y bloqueo, en los ríos y costas de estas Provincias.—Art. 13.—Igualmente S. E. oficiará al Exmo. Señor Virrey del Perú y al señor General Goyeneche, participándoles el presente acomodamiento.—Art. 14.—Todo vecino de la Banda Oriental se restituirá, si gusta, á sus hogares, y podrán pasarse mutuamente de uno á otro territorio cuantos lo deseen, dándoles de todos modos en quieta y pacífica posesión de su fortuna.—Art. 15.—Se restablecerá enteramente, como se hallaba antes de las actuales desavenencias, la comunicación, correspondencia y comercio entre Buenos Aires y Montevideo y sus respectivas dependencias.—Art. 16.—En consecuencia del antecedente artículo, todo buque nacional ó extranjero, podrá libremente entrar en los puertos de uno y

otro territorio, pagando respectivamente en ellos los correspondientes reales derechos, conforme á un arreglo particular que se acordará entre los citados Gobiernos.—Art. 17.—En el caso de invasión por una potencia extranjera, se obligan recíprocamente ambos Gobiernos á prestarse todos los auxilios necesarios para rechazar las fuerzas enemigas.—Art. 18.—El Exmo. Señor Virrey protesta no variar de sistema hasta que las Cortes declaren su voluntad, que en todo caso se manifestará oportunamente al Gobierno de Buenos Aires.—Art. 19.—Los mencionados Gobiernos se obligan á la religiosa observancia de lo estipulado, constituyéndose en la responsabilidad de las resultas que pudiese ocasionar su infracción.—Art. 20.—El Exmo. Señor Virrey y el señor Diputado de Buenos Aires, nombrarán dos oficiales que acuerden el modo de dar cumplimiento al artículo sobre la evacuación de tropas de la Banda Oriental, que se efectuará con la mayor anticipación, embarcándose en la Colonia todo el número posible.—Art. 21.—Las presas que se hagan desde la firma del presente tratado, serán restituidas; y respecto á las anteriores se estará á lo estipulado en el armisticio de 7 del corriente.—Art. 22.—Todas las propiedades existentes, de cualquier especie que sean, correspondientes á los vecinos de la Banda Oriental, quedarán en poder de sus respectivos dueños, á reserva de los esclavos comprendidos en las listas manifestadas por el señor Diputado de Buenos Aires, que ofrece dejar en libertad para que vuelvan á poder de sus amos, á cualquiera de los espresados negros que lo deseen; y la ejecución de este artículo, será del cuidado y cargo de los oficiales de que se hace mérito en el veinte.—Art. 23.—Si ocurriese en adelante alguna duda respecto á la observancia de cualquier artículo del presente contrato, se resolverá amigablemente por una y otra parte.—Art. 24.—El presente convenio tendrá todo su efecto desde el momento que se firme y será ratificado en el término de ocho días ó antes, si se pudiese. En testimonio de todo, firmamos dos de un tenor, en la ciudad de Montevideo, á 20 de Octubre de 1811.—*José Julián Pérez—José Acevedo—Antonio Garfias.*

Montevideo, á Octubre 21 de 1811.—Se aprueban y ratifican por mi parte los artículos del precedente tratado, que se devolverá para los demás efectos consiguientes.—XAVIER ELIO.

Buenos Aires, Octubre 24 de 1811.—Aprobado y ratificado por este Gobierno.—FELICIANO A. CHICLANA—MANUEL DE SARRATEA—JUAN JOSÉ PASO—*José Julián Pérez*, Secretario.

(Gazeta Extraordinaria — 27 Octubre.)

34

Estatuto provisional del Gobierno Superior de las Provincias Unidas del Río de la Plata, á nombre del Señor Don Fernando VII.

La justicia y la utilidad dictaron á los pueblos de las Provincias el reconocimiento del Gobierno Provisorio que instituyó esta Capital, en momentos en que la desolación y conquista de casi toda la Península, dejaba espuesta nuestra seguridad interior á la invasión extranjera ó al influjo vicioso de los Gobernadores españoles, interesados en sostener el brillo de una autoridad que había caducado. Conocieron los pueblos sus derechos y la necesidad de sostenerlos. Los esfuerzos del patriotismo rompieron, en poco tiempo, los obstáculos que oponía por todas partes el fanatismo y la ambición. La causa sagrada de la libertad anunciaba ya un día feliz á la generación presente y un porvenir lisonjero á la prosperidad americana. Se sucedían unos tras otros los triunfos de nuestras armas, y el despotismo intimidado no pensaba más que en buscarse un asilo en la región de los tiranos. Cambia de aspecto la fortuna y repentinamente se ve la patria rodeada de grandes y urgentes peligros. Por el Occidente, derrotado ó disperso nuestro ejército del Desaguadero; espuestas á la ocupación del enemigo las provincias del Alto Perú; interceptadas nuestras relaciones mercantiles y casi aniquilados los recursos para mantener el sistema. Por el Oriente un ejército extranjero, á pretexto de socorrer á los Gobernadores españoles que invocaron su auxilio, avanzando su conquista sobre una parte la más preciosa de nuestro territorio; el bloqueo del río paralizando nuestro comercio exterior; relajada la disciplina militar; el gobierno débil; desmayado el entusiasmo; el patriotismo perseguido; envueltos los ciudadanos en todos los horrores de una guerra cruel y esterminadora y obligado el Gobierno á sacrificar al imperio de las circunstancias el fruto de las victorias con que los hijos de la patria en la Banda Oriental, han enriquecido la historia de nuestros días. No era mucho, en medio de estas circunstancias, que converjiendo los pueblos su aten-

ción al Gobierno, le atribuyesen el origen de tantos desastres. La confianza pública empezó á minar la opinión y el voto general indicaba una reforma ó una variación política que fuese capaz de contener los progresos del infortunio, dar una acertada dirección al patriotismo y fijar de un modo permanente las bases de nuestra libertad civil. El pueblo de Buenos Aires, que en el beneplácito de las provincias á sus disposiciones anteriores, ha recibido el testimonio más lisonjero del alto aprecio que le dispensan como á Capital del Reino y centro de nuestra gloriosa revolución, representa al Gobierno por medio de su respetable Ayuntamiento la necesidad urgente de concentrar el poder para salvar la patria en el apuro de tantos conflictos. La Junta de Diputados, que no desconocía la necesidad, adoptó la medida sin contradicción, y aplicando sus facultades, traspasó á este Gobierno su autoridad con el título de Poder Ejecutivo, cuyo acto debía recibir la sanción del consentimiento de los pueblos. Si la salvación de la patria fué el grande objeto de su institución, una absoluta independencia en la adopción de los medios debía constituir los límites de su autoridad. De otro modo, ni el Gobierno se habría sujetado á las responsabilidades que cargó la Junta sobre sus hombros, ni su creación hubiera podido ser útil en ningún sentido, cuando agitada la patria de una complicación extraordinaria de males, exigía de necesidad una pronta aplicación de violentos remedios. De-seaba, sin embargo, el Gobierno una forma que, sujetando la fuerza á la razón y la arbitrariedad á la ley, tranquilizase el espíritu público, resentido de la desconfianza á una tiranía anterior. Pide á este fin el Reglamento que le prometió la Junta en el acto de su creación, y recibe un Código Constitucional muy bastante para precipitar á la patria en el abismo de su ruina. Parece que la Junta de Diputados, cuando formó el reglamento de 22 de Octubre, tuvo más presente su exaltación que la salud del Estado. Con el velo de la *pública felicidad* se erige en soberana, y rivalizando con los poderes que quiso dividir, no hizo más que reasumirlos en grado eminente. Sujetando al Gobierno y á los magistrados á su autoridad soberana, se constituye á sí misma en Junta Conservadora para perpetuarse en el mando y arbitrar sin regla sobre el destino de los pueblos. Como si la soberanía fuese divisible, se la atribuye de un modo imperfecto y parcial. Ya se ve que en tal sistema, no queriendo el Gobierno otra cosa que una autoridad intermedia y dependiente, ni correspondería su establecimiento

á los fines de su instituto, ni tendría su creación otro resultado que complicar el despacho de los negocios, y retardar las medidas que reclama urgentemente nuestra situación, quedando abandonada la salud de la patria al cuidado y arbitrariedad de una Corporación, que en tiempos más felices y con el auxilio de un poder ilimitado, no pudo conservar las ventajas conseguidas por el patriotismo de los pueblos contra los enemigos de su sosiego y de su libertad. Convencido el Gobierno de los inconvenientes del Reglamento, quiso oír el informe del Ayuntamiento de esta Capital, como el representante de un pueblo el más digno y el más interesado en el vencimiento de los peligros que amenazan á la patria. Nada parecía más conforme á la práctica, á la razón, á las leyes y á la importancia del asunto. Pero los Diputados, en la sombra de sus ilusiones, equivocaron el motivo de esta medida. Sin reflexionar que, después de la abdicación del Poder Ejecutivo no era ni podía ser otra su representación pública, que aquella de que gozaban antes de su incorporación al Gobierno, calificaron aquel trámite de notorio insulto contra su imaginaria soberanía, promoviendo una competencia escandalosa que, en un pueblo menos ilustrado, hubiera producido consecuencias funestas sobre el interés general. El Gobierno, después de haber oído el dictamen del respetable Cabildo y el juicio de los ciudadanos ilustrados, ha determinado rechazar el reglamento y existencia de una autoridad suprema y permanente que envolvería á la patria en todos los horrores de una furiosa aristocracia. El Gobierno cree que sin abandono de la primera y más sagrada de sus obligaciones, no podría suscribir á una institución que sería el mayor obstáculo á los progresos de nuestra causa y protesta á la faz del mundo entero, que su resistencia no conoce otro principio que el bien general, la libertad y la felicidad de los pueblos americanos. Con el mismo objeto, y para dar un testimonio de sus sentimientos, capaz de aquietar el celo de los más exaltados, ha decretado una forma, ya que el conflicto de las circunstancias no permite recibirla de las manos de los pueblos, que prescribiendo límites á su poder y refrenando la autoridad popular, afiance sobre las bases del orden el imperio de las leyes, hasta tanto que las Provincias reunidas en el Congreso de sus Diputados establezcan una Constitución permanente. A este fin publica el Gobierno el siguiente Reglamento: — Art. 1.º Siendo la amovilidad de los que gobiernan el obstáculo más poderoso contra las tentativas de la arbitrariedad y de

la tiranía, los Vocales del Gobierno se removerán alternativamente cada seis meses, empezando por el menos antiguo en el orden de la nominación: debiendo turnar la presidencia en igual período, por orden inverso. Para la elección del candidato que debe sustituir al vocal saliente, se creará una Asamblea General compuesta del Ayuntamiento, de las representaciones que nombren los pueblos, y de un número considerable de ciudadanos elegidos por el vecindario de esta Capital, según el orden, modo y forma que prescribirá el Gobierno, en un reglamento que se publicará á la posible brevedad: en las ausencias temporales, suplirán los secretarios. — Art. 2° El Gobierno no podrá resolver sobre los grandes asuntos del Estado, que por su naturaleza tengan un influjo directo sobre la libertad y existencia de las Provincias Unidas, sin acuerdo espreso de la Asamblea General. — Art. 3° El Gobierno se obliga de un modo público y solemne, á tomar todas las medidas conducentes para acelerar, luego que lo permitan las circunstancias, la apertura del Congreso de las Provincias Unidas, al cual serán responsables, igualmente que los secretarios de su conducta pública, ó á la Asamblea General después de diez y ocho meses, si aún no se hubiere abierto el Congreso. — Art. 4° Siendo la libertad de la imprenta y la seguridad individual, el fundamento de la felicidad pública, los decretos en que se establecen, forman parte de este Reglamento. Los miembros del Gobierno, en el acto de su ingreso al mando, jurarán guardarlos y hacerlos guardar religiosamente. — Art. 5° El conocimiento de los asuntos de justicia corresponde, privativamente, á las autoridades judiciares con arreglo á las disposiciones legales. Para resolver en los asuntos de segunda suplicación, se asociará el Gobierno de dos ciudadanos de probidad y luces. — Art. 6° Al Gobierno corresponde velar sobre el cumplimiento de las leyes, y adoptar cuantas medidas crea necesarias para la defensa y salvación de la patria, según lo exija el imperio de la necesidad y las circunstancias del momento. — Art. 7° En caso de renuncia, ausencia ó muerte de los Secretarios, nombrará el Gobierno á los que deben sustituirlos, presentando el nombramiento en la primera Asamblea siguiente. — Art. 8° El Gobierno se titulará *Gobierno Superior Provisional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, á nombre del señor Don Fernando VII;* su tratamiento será el de *Exca.*, que ha tenido hasta aquí en cuerpo y *Vmd.* llano á cada uno de sus miembros en particular. La presente forma existirá hasta la apertura del

Congreso, y en caso que el Gobierno considerase de absoluta necesidad hacer alguna variación, lo propondrá á la Asamblea General, con espresión de las causas, para que recaiga la resolución que convenga á los intereses de la patria. — Art. 9º La menor infracción de los artículos del presente reglamento, será un atentado contra la libertad civil. El Gobierno y las autoridades constituidas jurarán solemnemente su puntual observancia, y con testimonio de esta diligencia y agregación del decreto de la libertad de imprenta, de 26 de Octubre último, y de la seguridad individual, se circulará á todos los pueblos, para que se publique por Bando, se archive en los registros y se solemnice el juramento en la forma acostumbrada. — Dado en la Real Fortaleza de Buenos Aires, á 22 de Noviembre de 1811. — FELICIANO ANTONIO CHICLANA — MANUEL DE SARRATEA — JUAN JOSÉ PASO — BERNARDINO RIVADAVIA, Secretario.

*(Registro Oficial de la República Argentina, — Tomo I (1810-1821)
pág. 127 — Publicación Oficial — Imprenta La República : —
Año 1879.)*

35

Fijando el número de miembros de la Asamblea

(Oficio del Exmo. Ayuntamiento de esta Capital al Superior Gobierno).—Exmo. Señor:—Cuando este Cuerpo municipal hizo presente á V. E. en oficio de tres de Marzo, la reducción del número de los electos para la Asamblea, consideró que el objeto de toda elección era establecer una buena representación, que fundada en el convencimiento de los intereses de los representados, recibiera todo su valor de la unidad de la voz deliberativa, la que en momentos tan difíciles sería frustrada en gran parte por un número tan excesivo como el de ciento. Le movió principalmente la necesidad de consultar los derechos y representaciones de los demás pueblos y de hacer desaparecer toda notable desigualdad.—V. E., sin embargo, no tuvo á bien aprobar esta proposición, y el Cabildo no habría insistido hasta después de la formación de la Asamblea, si una imperiosa necesidad no le impeliese á anticipar esta medida.—El ha tocado de cerca las dificultades que ofrece encontrar un número tan esceso de ciudadanos, en quienes concurren las cualidades que exigen los intereses sagrados que se les van á confiar; y que sería necesario echar mano de muchos sujetos poco aptos para tan delicado encargo y dejar, quizás, á la suerte, la prosperidad ó la desgracia del Estado. V. E. se convencerá de esta y de las demás razones ya expresadas, y entonces cree el Ayuntamiento que reformando en esta parte el Reglamento Provisional, dejará reducido el número de los insaculados al de ciento, de los cuales los primeros que salgan á la suerte sean los individuos de la Asamblea hasta el número que se juzgue suficiente.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Sala Capitular de Buenos Aires, Marzo 30 de 1812.—Exmo. Señor:—*Francisco Javier de Ríglas—José Pereyra Lucena—Manuel Mansilla—Manuel Lezica—Manuel José García—Mariano de Sarratea—Fermín Tocornal—Juan José Cristóbal de Anchorena—José María Yevenez—Manuel de Andrés Pinedo y Arroyo—Exmo. Gobierno Superior Provisional.*

CONTESTACIÓN—Convencido el Gobierno de la absoluta

necesidad de reducir el número de los Vocales de la Asamblea y de consiguiente el de los ciudadanos que deben nombrarse para el sorteo, según lo prevenido en el Reglamento: y accediendo á la fundada proposición que incluye el oficio de V. E. fecha de ayer, ha determinado que el número de los electos para la insaculación sea el de ciento, de los cuales los treinta y tres primeros que salgan de la suerte, serán miembros de la Asamblea; cuya disposición se circulará y publicará para los efectos consiguientes.—Buenos Aires, Marzo 31 de 1812.—MANUEL DE SARRATEA—FELICIANO ANTONIO CHICLANA—BERNARDINO RIVADAVIA—*Nicolás Herrera*, Secretario — *Al Exmo. Cabildo*.—

(« *Gazeta Ministerial* », número 1.)

Reglamento que da forma á la Asamblea Provisional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, anunciada en el estatuto del Gobierno, de 23 de Noviembre de 1811.

Art. 1º El Ayuntamiento de esta Capital, los apoderados de las ciudades de las Provincias Unidas y cien ciudadanos, compondrán la Asamblea. El Ayuntamiento será su Presidente.— Art. 2º Los ciudadanos se elegirán de los de esta Capital y de los otros pueblos de las Provincias que se hallaren aquí, aunque sea de paso. La elección se hará en la forma siguiente: Precediendo el aviso del Gobierno, se dividirá la ciudad en cuatro secciones, y el Ayuntamiento nombrará cuatro regidores, uno por cada una de ellas. Los Regidores en sus casas y en un término prefijo que se anunciará de un modo público, recibirán de cada vecino una cédula firmada y cerrada, en que manifiesten su voto á favor de dos ciudadanos de la misma sección, para que desempeñen el cargo de electores. Cumplido el término se llevarán las cédulas al Ayuntamiento y se abrirán con separación de las correspondientes á cada sección por el escribano, en sala pública, para los que quieran concurrir á cerciorarse del acto. Los dos individuos que reunan más votos, serán diputados electores por su respectivo departamento. Acto continuo se les pasará aviso por el Ayuntamiento, para que asistan sin demora alguna á la Sala Capitular. Reunidos los ocho electores nombrarán, con el Ayuntamiento, trescientos ciudadanos cuyos nombres se escribirán en papeles separados, se echarán en un saco, y serán miembros de la Asamblea los cien primeros que salgan á la suerte, debiendo ejecutarse el acto con la misma publicidad que el anterior. En el caso de notorio impedimento de alguno de los electores, le sustituirá el que le siga en la mayoría de votos. Siendo éstos iguales, decidirá la suerte.— Art. 3º Las personas que se hallen criminalmente procesadas, las que hayan sufrido pena infamatoria, los fallidos, los extranjeros, los menores de 21 años, los que no tengan arraigo ó jiro conocido, y una decidida adhesión á la causa de la libertad de las Provincias Unidas, no pueden ser

electores ni electos. El que use de seducción ó intriga para ganar votos en la Asamblea, será espatriado y para siempre privado de los derechos de ciudadano.— Art. 4° Para evitar el influjo del Gobierno en las deliberaciones de la Asamblea y consultando el sistema que han adoptado constantemente los pueblos libres de las naciones cultas, se declara que los militares del ejército y los empleados de las ramas de la Administración pública, bajo la inmediata dependencia del gobierno, quedan escluidos de intervenir de modo alguno en la Asamblea, como se determinó con respecto á la Junta Protectora de la libertad de la Imprenta.— Art. 5° Verificada la elección, se pasará una relación de los electos al Gobierno, con cuyo conocimiento librará éste el decreto de apertura de la Asamblea. En su virtud, pasará el Ayuntamiento los avisos oportunos á los vocales, con expresión del día, hora y lugar á que deben asistir: el mismo aviso se comunicará á los apoderados de los pueblos cuyos poderes hayan sido aprobados por el Ayuntamiento, á quien deberán presentarlos al efecto con la necesaria anticipación. Ningún vocal podrá excusarse de asistir sin un impedimento legítimo y calificado á juicio del Ayuntamiento, bajo la pena de mil pesos de multa y privación de los derechos de ciudadano. Los impedidos legítimamente se sustituirán de los insaculados por el arbitrio de la suerte.

— Art. 6° Reunida la Asamblea, jurarán los vocales en manos del jefe y éste en las del decano del Ayuntamiento, el fiel desempeño de sus deberes y que sus votos no tendrán otro objeto que la libertad y felicidad de los pueblos de las Provincias Unidas. Inmediatamente se noticiará la apertura de la Asamblea al Gobierno, y este remitirá una nota de los negocios que han motivado la convocación. Empezará sus tareas y la elección del vocal para el Gobierno, según lo prevenido en el Estatuto Provisional de 23 de Noviembre, es el primer asunto que resolverá con preferencia á todos los demás.— Art. 7° Solo el Gobierno puede convocar la Asamblea y deberá hacerlo cada seis meses. La Asamblea no es una corporación permanente. En ella no se tratarán otros negocios diferentes de aquellos para que ha sido convocada, ni podrá permanecer en sesión más término que el de ocho días, á no ser que el gobierno juzgue conveniente prorrogarla. Pasado el término, cuanto se actúe sin este requisito será nulo.— Art. 8° El gobierno podrá asistir á la Asamblea en los casos en que lo exija el interés mismo de los negocios que deben resolverse, y en que su presencia no pueda

comprometer la libertad de las votaciones; en estos casos tendrá la presidencia. — Art. 9° Para la formación de aquellas causas del conocimiento de la Asamblea, cuya substanciación y fallo exige más tiempo que el designado para sus sesiones, nombrará ésta una Comisión de Estado, compuesta de once de sus miembros, de los cuales cuatro serán del Ayuntamiento. La comisión formará los procesos, substanciará y resolverá definitivamente las causas que le deleguen. — Art. 10° La apelación de sus sentencias se otorgará para la primera Asamblea siguiente. En los casos expresos en el antecedente artículo se nombrará una comisión de siete vocales, dos de los cuales serán precisamente del Ayuntamiento. Esta nueva comisión juzgará y sus sentencias serán irrevocables. — Art. 11° Los individuos de ambas comisiones pueden ser recusados sin causa y por una sola vez, antes de abrirse el juicio; después de abierto, solo podrá verificarse con motivo expreso y calificado. Si los recusados son miembros del Ayuntamiento, se sustituirán por medio de la suerte, con otros de la misma corporación; siendo de los otros vocales, se hará la sustitución también á la suerte, de los otros miembros que compusieron la Asamblea. Si la recusación fuese general ó de más de la mitad de los individuos de la comisión, se hará el sorteo por el Ayuntamiento con citación de los interesados y si es parcial, por la misma comisión. — Art. 12° En ambos juicios la pluralidad de votos hace sentencia. — Art. 13° El Ayuntamiento designará el lugar en que ha de reunirse la Asamblea. Durante sus sesiones, ninguna persona armada podrá acercarse á él en una cuadra de contorno. El Teniente alguacil mayor, con los ministros de justicia en los puntos correspondientes, velarán sobre la observancia de este artículo. Si la Asamblea llegase á entender que se reúne gente con el fin de prevenir sus deliberaciones, suspenderá la sesión y se dará cuenta al gobierno. En caso de omisión será nulo cuanto en ella se determine, quedando autorizado el Gobierno para disolverla, si lo exigen la seguridad y la tranquilidad pública. Los que por estos medios indirectos comprometan la libertad de las resoluciones de la Asamblea, son reos de lesa patria. — Art. 14° Luego que esté reunida, la Asamblea nombrará entre sus vocales un Secretario que autorizará sus actas. El Alcalde de primer voto, por impedimento de Gobernador de Provincia según el artículo 4°, llevará la voz ó nombrará un vocero para que en la Asamblea se guarde silencio, orden y decoro. Solo hablará el vocal que haya pedido la pala-

bra, sin permitir que se le interrumpa. Concluído su discurso no volverá á hablar en la materia, y otro tomará la palabra, á no ser que se considere necesario, para la mayor inteligencia y esclarecimiento del negocio que se discute. Cuando le parezca al Jefe, se votará si el punto está ó no suficientemente discutido; y en caso de afirmativa por la pluralidad, se procederá á la votación del negocio principal. Los votos serán públicos y se escribirán y leerán públicamente por el secretario. Antes de estar acordado un negocio, no se permitirá tratar de otro diferente. Se hará la correspondiente prevención al que en su discurso se separe del asunto principal. Se prohibirá con el mayor cuidado toda discusión acalorada, insultos personales y cuanto puede de algún modo alterar el orden, la moderación y el decoro. Si algún vocal se olvidase del carácter que representa, desobedeciendo á las insinuaciones que se le hagan, se le mandará salir de la Asamblea y no podrá optar á ella en lo sucesivo.—Art. 15° Concluída la resolución de los negocios para que se ha convocado la Asamblea, pasará al Gobierno una nota de sus decisiones, firmada del Presidente y secretario. El Gobierno avisará el recibo, y si la Asamblea se prorroga ó disuelve. En el primer caso, continuará sus sesiones: en el segundo, se retirarán los vocales, estendiéndose antes la correspondiente acta de quedar concluída y cerrada la Asamblea. Todas sus actas se escribirán en un libro, autorizadas competentemente, el cual se pasará y custodiará en la arca del Ayuntamiento, con las formalidades y precauciones acostumbradas.—Art. 16° El tratamiento de la Asamblea será el de su Presidente y Vm. llano el de cada uno de sus miembros. Solo el Ayuntamiento como presidente tendrá lugar de preferencia. Con respecto á los vocales, no habrá asientos de distinción, cada uno podrá colocarse donde le parezca.—Art. 17° Concluída la Asamblea queda enteramente disuelta y sus vocales en la clase de simples ciudadanos. Para formar la segunda Asamblea nombrarán los pueblos nuevos apoderados, esta capital nuevos diputados electores y éstos con el Ayuntamiento nuevos vocales en los mismos términos en que se hizo la primera, observándose este método en todas las que se celebren en adelante.—Art. 18° La ejecución de las resoluciones de la Asamblea corresponde al Gobierno.—Art. 19° En caso que se considere necesario alterar, derogar ó modificar alguno de los artículos de este reglamento, lo verificará el gobierno, precedente consulta de la Asamblea.—Art. 20° El presente reglamento se circulará á las autorida-

des á quienes corresponda, y se publicará en la Gazeta, archivándose el original en la secretaría de Gobierno.—Buenos Aires, 19 de Febrero de 1812.—FELICIANO ANTONIO CHICLANA—MANUEL DE SARRATEA—JUAN JOSÉ PASO—*Bernardino Rivadavia*, Secretario.

(*Registro Oficial de la República Argentina—tomo I (1810-1821)*
pág. 139—Publicación Oficial—Imprenta La República —
Año 1879.)

37

Adiciones al Reglamento de la Asamblea

El Gobierno, con precedente consulta del Exmo. Ayuntamiento de esta Capital, ha acordado en esta fecha hacer al Reglamento de la Asamblea las adiciones siguientes:— 1º—A la Asamblea corresponde fijar el carácter y prerrogativas de ciudadanía, para que con conocimiento de sus cualidades, procedan los Ayuntamientos á la formación de la lista cívica.—2º—Los vecinos de las campañas, con las calidades requisitas, tienen derecho á ser electores y electos en la Asamblea, del mismo modo que los de esta Capital y demás pueblos de las Provincias Unidas, con tal que puedan asistir para el tiempo de la apertura.—3º—La Asamblea puede proponer la derogación, ampliación ó variación de los artículos de su reglamento, según le parezca más útiles á los fines de su institución.—4º—La Asamblea tiene derecho para hacer las mociones que halle por conveniente, fuera de las consultas que nazcan precisamente de la decisión de los asuntos designados en la nota que debe pasarle el Gobierno.—5º—La asamblea arreglará los votos con que debe sufragar en adelante cada uno de los pueblos de las provincias que no estén ocupadas por los enemigos.—Estas adiciones, que formarán parte del Reglamento que da forma á la Asamblea, se circularán y publicarán en la «Gaceta». —Buenos Aires, 9 de Marzo de 1812.—FELICIANO ANTONIO CHICLANA—MANUEL DE SARRATEA—JUAN JOSÉ PASO—*Bernardino Rivadavia*, Secretario.

(Publicado en hoja suelta y suplemento al «Censor» de 10 de Marzo de 1812.)

38

Disposiciones generales sobre seguridad individual

Si la existencia civil de los ciudadanos se abandonase á los ataques de la arbitrariedad, la libertad de la imprenta publicada en 26 de Octubre del presente año, no sería más que un lazo contra los incautos y un medio indirecto para consolidar las bases del despotismo. Todo ciudadano tiene un derecho sagrado á la protección de su vida, de su honor, de su libertad y de sus propiedades. La posesión de este derecho, centro de la libertad civil y principio de todas las instituciones sociales, es lo que se llama seguridad individual. Una vez que se haya violado esta posesión, ya no hay seguridad, se adormecen los sentimientos nobles del hombre libre y sucede la quietud funesta al egoismo. Sólo la confianza pública es capaz de curar esta enfermedad política, la más peligrosa de los Estados, y una garantía afianzada en una ley fundamental es capaz de restablecerla. Convencido el Gobierno de la verdad de estos principios, y queriendo dar á los pueblos americanos otra prueba positiva y real de la libertad que preside á sus resoluciones y de la libertad que les prepara su independencia civil, si saben sostenerla gloriosamente y con honor contra los esfuerzos de la tiranía, ha venido en sancionar la *seguridad individual* por medio del siguiente decreto:—Art. 1° Ningún ciudadano puede ser penado ni espatriado, sin que preceda forma de proceso y sentencia legal.—Art. 2° Ningún ciudadano puede ser arrestado sin prueba, al menos semi-plena ó indicios vehementes de crimen, que se harán constar en proceso informativo dentro de los tres días perentorios. En el mismo término se hará saber al reo la causa de su detención, y se remitirá con los antecedentes al juez respectivo.—Art. 3° Para decretar el arresto de un ciudadano, pesquisa de sus papeles, ó embargo de bienes, se individualizará en el decreto ú orden que se espida, el nombre ó señales que distinguen su persona, y objetos sobre que deben ejecutarse las diligencias, tomando inventario que formará el reo, y dejándole copia autorizada para su resguardo.—Art. 4° La casa de un ciudadano es un sagrado cuya

violación es un crimen: solo en el caso de resistirse el reo refugiado á la convocación del Juez podrá allanarse: su allanamiento se hará con la moderación debida y personalmente por el Juez de la causa. Si algún motivo urgente impide su asistencia, dará al delegado una orden por escrito y con la especificación que contiene el antecedente artículo, dando copia de ella al aprehendido y al dueño de la casa, si la pide.—Art. 5° Ningún reo estará incomunicado después de su confesión y nunca podrá ésta dilatarse más allá del término de diez días.—Art. 6° Siendo las cárceles para seguridad y no para castigo de los reos, toda medida que á pretexto de precaución sólo sirva para mortificarlos, será castigada rigurosamente.—Art. 7° Todo hombre tiene libertad para permanecer en el territorio del Estado ó abandonar cuando guste su residencia.—Art. 8° Los ciudadanos habitantes del distrito de la jurisdicción del gobierno y los que en adelante se establezcan, están inmediatamente bajo su protección en todos sus derechos.—Art. 9° Sólo en el remoto y extraordinario caso de comprometerse la tranquilidad pública ó la seguridad de la patria, podrá el Gobierno suspender este decreto, mientras dure la necesidad, dando cuenta inmediatamente á la Asamblea General con justificación de los motivos, y quedando responsable, en todos tiempos, de esta medida.—Buenos Aires, 23 de Noviembre de 1811.—FELICIANO ANTONIO CHICLANA — MANUEL DE SAARATEA — JUAN JOSÉ PASO — *Bernardino Rivadavia, Secretario.*

(*Registro Oficial de la República Argentina — Tomo I (1810-1821) — página 128 — Publicación Oficial — Imp. : La Republica — Año 1879.*)

Señalando los colores de la escarapela nacional

Don Santiago Carrera, Teniente Coronel del Ejército y Gobernador Intendente de esta Provincia. — POR CUANTO: — el Exmo. Señor Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, con fecha de 18 de Febrero último, me dice lo siguiente:

« En acuerdo de hoy se ha resuelto que desde esta fecha en adelante se haya, reconozca y use por las tropas de la patria, la escarapela que se declara nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y deberá componerse de los dos colores blanco y azul celeste, quedando abolida la roja con que antiguamente se distinguían. Se comunica á V. E. para los efectos consiguientes de esta resolución. Dios guarde á V. E. muchos años. — Buenos Aires, Febrero 18 de 1812. — FELICIANO ANTONIO CHICLANA — MANUEL DE SARRATEA — JUAN JOSÉ PASSO — *Bernardino Rivadavia, Secretario.* — *Al Gobernador de Córdoba.* »

Y en su virtud igualmente ordeno y mando, que ningún vecino, sea militar ó de otra cualquier clase, use ni pueda usar de otra escarapela que la espresada en la orden inserta, de la que á más de los militares que por obligación deben traerla, podrá también llevarla cualquier paisano que quiera, como distinción de nuestro actual sistema, con prevención de que los contraventores de este mandato, serán severamente castigados al arbitrio de este Gobierno. — Que es fecha en Córdoba del Tucumán, á 20 días del mes de Abril de 1812 años. — SANTIAGO CARRERA. — Por mandato del señor Intendente, *José Diego de Olmos y Aguilera*, escribano mayor público de comercio.

(*Compilación de leyes y decretos de Córdoba, Tomo I, pág. 7*)

40

Diputados á la Asamblea General

OFICIO DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CAPITAL AL SUPERIOR GOBIERNO. — Exmo. Señor: — acompañamos á V. E. la relación de los individuos que por suerte han salido electos para vocales de la próxima Asamblea, á fin de que con su conocimiento determine V. E. lo que corresponde. — Dios guarde á V. E. muchos años. — Sala Capitular de Buenos Aires, Abril 3 de 1812. — Exmo. Señor: — *Francisco Xavier de Riglos — José Pereyra de Lucena — Manuel Mansilla — Manuel de Lezica — Manuel José García — Mariano de Sarratea — Fermín Tocornal — Juan José Cristóbal de Anchorena — José María Yevenez — Manuel de Andrés de Pinero y Arroyo — Exmo. Gobierno Superior Provisional.* —

RELACIÓN DE LOS CIUDADANOS Á QUIENES HA TOCADO LA SUERTE PARA SER MIEMBROS DE LA PRÓXIMA ASAMBLEA

Don Juan de Alagón	D. Juan Bautista Castro
Fr. Cayetano Rodríguez	D. Marcos Salcedo
D. Rafael Blanco	Dr. José F. Ugarteche
Dr. D. Tomás Gomensoro	D. Martín Grandoli
Dr. D. Domingo Belgrano	D. Juan G. Espinosa
D. Manuel Galup	D. Fr. Nicolás Herrera
D. Agustín Wright	Dr. D. Dámaso Fonseca
D. Angel María Elio	D. Eugenio Balvastro
D. Esteban Luca	D. Miguel Arellano
Dr. D. Juan Cossio	D. Mariano Soloaga
D. Francisco A. Escalada	Dr. D. Jose Diaz Vélez
Dr. D. Saturnino Seguro	Dr. D. Juan José Cernadas
Dr. D. Juan Francisco Reyes	Dr. D. José Joaquín Díaz de
D. Domingo Achega	Bedoya
D. Luis Dorrego	Dr. D. Juan N. de Sola
D. Manuel Zamudio	Dr. D. José Rivadavia
D. Carlos Vidal	D. Francisco C. Argerich

RELACIÓN DE LOS APODERADOS NOMBRADOS POR LOS PUEBLOS DE LAS PROVINCIAS UNIDAS PARA REPRESENTAR SUS DERECHOS EN LA PRÓXIMA ASAMBLEA. —

De Salta	D. Francisco Gurruchaga
De Santiago del Estero	Dr. Félix Frías
De Tucumán	Dr. D. Diego Estanislao Zavaleta
De Catamarca	Dr. D. Vicente Anastasio Echevarría
De La Rioja	D. Mauricio Luna
De Santa Fe	D. José Alberto Cálcena y Echevarría
De Mendoza	Dr. D. José Antonio Villanueva
De San Juan	Dr. D. Julián Alvarez
Punta de San Luis	Dr. D. Antonio Sáenz
Banda Oriental	D. Valentín Gómez y
	D. Francisco Bruno Rivarola

Ayer á las cuatro de la tarde se abrió la Asamblea de las Provincias Unidas del Río de la Plata, presidida por el Exmo. Ayuntamiento de esta Capital. Sus vocales prestaron el Juramento prevenido: el Gobierno pasó á la Asamblea la nota de los grandes negocios de Estado, felicitándola por su deseada instalación, y el pueblo virtuoso de Buenos Aires, lleno de las más dulces esperanzas, aguarda en silencio sus justas deliberaciones. A la hora de la misa solemne á que concurrirá la Asamblea en este día, ha determinado el gobierno saludarla con salva general de artillería, repiques de campanas y músicas militares.

(*Gazeta Ministerial Extraordinaria, 5 de Abril de 1812.*)

41

Disolución de la Asamblea

Notas cambiadas entre el Gobierno y la Asamblea sobre el carácter de Suprema que ésta se atribuye y el nombramiento de un suplente elegido por la segunda para integrar el primero.

Número 5.—Exmo. Señor:—Habiendo tratado esta Asamblea sobre el carácter que reviste, ha sancionado que le corresponde la autoridad suprema, sobre toda otra constituida en las Provincias Unidas del Río de la Plata y se lo comunica á V. E. para su inteligencia y para que, circulando las correspondientes órdenes, se haga notorio á todos, para los objetos y fines que puedan interesar á la salud del Estado.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Sala de la Asamblea, Abril 6, de 1812.—Exmo. Señor:—*Francisco Xavier de Riglos—Dr. D. Vicente Anastasio de Echevarría*, Secretario. *Exmo. Gobierno Superior Provisorio.*—Es copia, *Herrera*.

Número 6.—Exmo. Señor:—Consecuente á la declaratoria que se avisa á V. E. en oficio que acompaña á ésta, sobre el carácter y autoridad suprema que constituye á las Provincias Unidas del Río de la Plata, espera que V. E. ponga en posesión inmediatamente al Doctor Don José Miguel Díaz Vélez, como suplente del vocal Coronel Don Juan Martín Pueyrredón.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Sala de la Asamblea, Abril 6 de 1812.—Exmo. Señor:—*Francisco Xavier de Riglos—Doctor Vicente Anastasio de Echevarría*, Secretario.—*Exmo. Gobierno Superior Provisorio.*—Es copia, *Herrera*.

Número 7.—Exmo. Señor:—Siendo nula, ilegal y atentatoria contra los derechos soberanos de los pueblos, contra la autoridad de los pueblos y contra el Estatuto Constitucional, jurado, reconocido y sancionado por la voluntad popular de las Provincias Unidas, la atribución de autoridad suprema, que se ha abrogado indebidamente y por sí misma la Asamblea, comprometiendo de un modo criminal los intereses sagrados de la patria, ha determinado el Gobierno, en virtud de sus altas facultades, y para evitar las conse-

cuencias de tan extraño atentado, disolver como disuelve la Asamblea y suspender á V. E. de las funciones particulares de su autoridad ordinaria, sin perjuicio de tomar las providencias que convengan para asegurar la tranquilidad pública y evitar la disolución del Estado, á que camina aquella escandalosa resolución, lo que se comunica á V. E. como su Presidente, para que en el acto haga entender á la Asamblea que está disuelta y á sus vocales que se retiren sin otro carácter que el de simples ciudadanos, so las penas establecidas en el Bando de 3 del corriente, avisando á V. E. el puntual cumplimiento de esta disposición en todas sus partes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Buenos Aires, Abril 6 de 1812.—MANUEL DE SARRATEA—FELICIANO ANTONIO CHICLANA—BERNARDINO RIVADAVIA—*Nicolás de Herrera*, Secretario.—*Exmo. Señor Presidente de la Asamblea*.—Es copia, *Herrera*.

(*Registro Oficial de la República Argentina,—tomo I (1810-1821)*
pagina 161 -- Publicación Oficial—Imp. «La República» — Año
1879.)

Creación del Gobierno Intendencia de Buenos Aires

OFICIO DEL EXMO. CABILDO AL SUPERIOR GOBIERNO.—
 Exmo. Señor:—Ocupado este Cabildo en promover los medios de la mayor seguridad de sus representados, á la que está estrechamente ligada la suerte de las Provincias Unidas, y deseoso de cooperar en lo posible al feliz progreso de la sagrada causa, que hemos jurado sostener, á presencia del cuadro político que en el día se presenta, no puede desentenderse y dejar de hablar á V. E. con toda la libertad que le impone su carácter representativo. En el instante afortunado del heroico sacudimiento de este pueblo, el 18 de Septiembre del año último, los dignos ciudadanos y patriotas se decían en la exaltación de su esperanza: «ahora «tenemos un gobierno de nuestra confianza, ahora seremos «fuertes y nuestros negocios tendrán el pronto despacho «que interesa á la causa pública.» Sin embargo, la marcha es y ha sido lenta, los esfuerzos flojos, los resultados débiles, la opinión en problema ó enteramente quebrada; en una palabra: los peligros multiplicados y el curso mismo de los negocios civiles, en un movimiento tardío, capaz de inspirar el desaliento y la indolencia.—¿Cuál podrá ser, Exmo. Señor, el verdadero origen de estos males? ¿Acaso existen en los dignos individuos que componen el Superior Gobierno? Pero son demasiado notorias las tareas é improbas fatigas que diariamente consagra en servicio de la patria. ¿Qué fatal principio, pues, influirá en situación tan singularmente delicada? El Ayuntamiento, después de una detenida reflexión sobre la materia, cree que puede descubrirse con seguridad y señalarse con certeza en la constitución misma del Gobierno. Los que gobiernan, Exmo. Señor, apenas tienen tiempo para gobernar, máxime en los primeros pasos de una revolución. Ocupada la atención en los inmensos é implicados objetos de la alta autoridad y mando, no es posible fijarla á un tiempo mismo en las diversas relaciones y circunstancias que organizan un Estado, y en el regimen particular de un pueblo y de sus negocios comunes y ordinarios. El querer dirigirlo todo, el em-

peñarse en saber y mandarlo todo, es un manantial de desórdenes y no menos funesto que el de omitirlo y despreciarlo todo; en una justa demarcación de los conocimientos respectivos y de las autoridades intermedias, consiste la fuerza y el orden, que hacen el fundamento del edificio social. Nuestra máquina política no podrá rodar sobre los principios que se nos ofrecen y ocurrirá, que siendo montada sobre muelles irregulares y complicados, en los momentos de mayor celeridad se entorpecerá la acción y el movimiento, y los enemigos audaces se aprovecharán del tiempo perdido y conseguirán unas ventajas menos debidas á su superioridad, que á nuestra imprudencia y desorganización. Es preciso decirlo y el Cabildo debe tener valor de no disimularlo: la situación actual es sobremanera peligrosa y acelerará el instante del abatimiento de la patria, si no se toma ejecutivamente la medida de crear un gobierno territorial en quien descanse V. E. el peso de los asuntos comunes relativos á las cuatro causas de que conocían antes los virreyes. El supremo interés del Estado debe ser el objeto preciso y principal de V. E.: todo lo que pueda distraer y apartar el Gobierno de este gran fin, será un paso retrógrado en el camino de la libertad. El establecer un ejército bien disciplinado, proporcionar un tesoro suficiente á mantenerlo, sostener el sistema de las Provincias Unidas y, en fin, promover y conservar las relaciones exteriores con la mayor ventaja en el orden diplomático, son atenciones que no pueden llenarse como es necesario, cuando se ocupan los momentos en el ejercicio y esclarecimiento del derecho privado de los pueblos. El Ayuntamiento cree que V. E. está penetrado en tan justos sentimientos y que conociendo la importancia de esta medida y aprobando el pensamiento, se procederá á la instalación y arreglo conveniente. A este efecto no se reserva derecho alguno en nombre de la libertad del pueblo, de intervenir á proponer personalmente para el nombramiento ó confirmación.—La calidad indispensable provisoria en el nuevo gobernador, su aproximación al centro del poder, su carácter mismo de uniformidad política que tomará este pueblo á la par de los demas que componen las Provincias Unidas del Río de la Plata, los que á mas de la Superior autoridad que reconocen en V. E., tienen el gobierno territorial que les es propio; en fin, todo lo decide al Cabildo á prestar abiertamente su consentimiento en esta justa innovación, y descansar en la sabiduría, patriótico celo y alta confianza de V. E.—En el choque de pasiones que por desgracia se ha dejada sen-

tir, no será extraordinario que se presenten obstáculos que dificulten la realización del pensamiento; pero todo interés particular debe ceder y ser sacrificado á la suprema razón del bien general, y el gobierno marchando rápida y majestuosamente á su fin, fuerte con la opinión pública que quiere que haga cuanto pida la salud de la patria, arrollará las dificultades, fortificará el espíritu público, y acabará, lleno de eterna gloria, de zanzar los incontrastables cimientos de nuestra libertad é independencia. Dios guarde á V. E. muchos años. Sala Capitular de Buenos Aires, Enero 11 de 1812.—Exmo. Señor:—*Francisco Javier Riglos—José Percyra de Lucena—Manuel Mansilla—Manuel de Lezica—Manuel José García—Mariano de Sarraatea—Juan José Cristóbal de Anchorena—José María Yvenez—Carlos José Gómez—Manuel de Andrés de Pinedo y Arroyo—Doctor Antonio Alvarez de Jonte—Exmo. Gobierno Superior Provisional.*—

CONTESTACIÓN DEL SUPERIOR GOBIERNO AL EXMO. CABILDO.—Penetrado este Gobierno de todo el influjo que arroja el convencimiento del oficio de V. E. de fecha de ayer, para ponerse al alcance de la gran necesidad que impone á la creación de un gobierno territorial; consecuente á ella y á los fundamentos en que la apoya, ha proveído el decreto del tenor siguiente:—Defiriendo este Gobierno á la actual solicitud del Exmo. Cabildo por las poderosas razones en que la apoya y preferentes objetos á que se dirige (que en el día una necesidad imperiosa eleva á la fuerza de ley) ha venido en constituir provisionalmente un Gobernador Intendente, con conocimiento en las cuatro causas, con la estensión y en las formas que designan las leyes y Ordenanzas de Intendentes, como por el presente decreto constituye y nombra para servir tan importante cargo al Coronel Don Miguel de Azcuénaga, y para facilitar el despacho y librar mejor el acierto, se destinan á los dos asesores que lo eran de este Gobierno, el Doctor Miguel Carballo y el Doctor Don Gregorio Tagle: y consultando la exigencia, se pondrá mañana en posesión del Gobierno Intendencia de la Provincia de Buenos Aires en los términos espresados, á dicho Coronel, comunicándose al efecto esta resolución al Exmo. Cabildo, Comandante de armas, corporaciones, gobiernos y cabildos de los pueblos de la comprensión de dicha provincia. Cuya resolución se le traslada á V. E. para que con la brevedad que interesa á la causa de la patria, y como Presidente de ese ilustre Ayuntamiento, proceda con manifiesto del despacho que ponga en manos de V. E. el Coronel del Ejército Don Miguel de

Azcuénega, á su recibimiento, con las formalidades que prescriben estos actos, y deberá verificar á las ocho de la noche de este día.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Buenos Aires, 13 de Enero de 1812.—FELICIANO ANTONIO CHICLANA — MANUEL DE SARRATEA — BERNARDINO RIVADAVIA — *Nicolás de Herrera*, Secretario.—*Al Exmo. Cabildo de esta Capital.*

(*Gazeta de Buenos Aires, número 20.*)

43

Armisticio celebrado el 26 de Mayo

entre el Exmo. Gobierno Superior Provisional de las Provincias Unidas
del Río de la Plata, y el Teniente Coronel Don Juan Rademaker,
enviado al efecto por S. A. R. el Principe Regente de Portugal.

Habiendo oído el Exmo. Gobierno de estas Provincias, cuanto tenía que proponerle el enviado de S. A. R. el Príncipe Regente de Portugal, después de examinadas sus credenciales y poderes necesarios para negociar, y habida la suficiente discusión, concluyó su excelencia con el dicho plenipotenciario el siguiente tratado:—Art. 1°—Cesarán inmediatamente las hostilidades entre las tropas de S. A. R. el Principe Regente de Portugal ú otros cuerpos armados portugueses, y las tropas ú otros cuerpos armados de la dependencia del Exmo. Gobierno Provisional de estas Provincias, y al efecto se mandará con toda la diligencia posible el correspondiente aviso de este ajuste y convención á los respectivos Generales en Jefes de los respectivos ejércitos.—Art. 2°—Se observará un armisticio ilimitado entre los dos ejércitos y en el caso de que por algunas circunstancias infelices (que no pueden preverse y que no permita Dios que sobrevengan) fuese necesario recurrir á las armas, quedan obligados recíprocamente y en fuerza de este armisticio, los Exmos. Generales de los Ejércitos opuestos, en pasarse los respectivos avisos de la rotura de esta convención, tres meses antes de poder romperse de nuevo las hostilidades: esperando muy sinceramente que esta cláusula de pura cautela en ningún tiempo será necesaria.—Art. 3° Luego que los Exmos. Generales de los dos ejércitos hayan recibido la noticia de esta convención, darán las ordenes necesarias así para evitar toda acción de guerra como para retirar las tropas de sus mandos á la mayor brevedad posible dentro de los límites de los territorios de los dos Estados respectivos; entendiéndose estos límites aquellos mismos que se reconocian como tales antes de empezar sus marchas el ejército portugués hacia el territorio español; y en fe de que quedan inviolables ambos territorios en cuanto subsista esta convención, y de que será exactamente cum-

plido cuanto en ella se estipula, firmamos este documento para su debida constancia, en Buenos Aires á veinte y seis de Mayo de mil ochocientos doce.—De orden de S. E. el Superior Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, como su Secretario de Guerra y Hacienda é interino de Gobierno y Relaciones Exteriores.—*Nicolás Herrera—Juan Rademaker.*—Hay dos sellos.

(*Gazeta Ministerial*, núm. 14.)

44

**Libertad del negro denunciante de la conspiración
del 1º de Julio**

Queriendo el Gobierno dar una prueba de gratitud y estimación á la persona del negro Ventura, esclavo de Doña Valentina Feijó, que fué el primer denunciante de la horrible conspiración contra la patria que acaba de descubrirse, ha venido en concederle la libertad y el uso del uniforme del Regimiento número 2, con un escudo en el brazo izquierdo que tenga la inscripción: *Por fiel á la patria*: que se le den cincuenta pesos fuertes por vía de gratificación, y un sable para custodia de su benemérita persona, declarándosele con opción al sueldo de soldado de la Patria, siendo de cuenta del Estado suministrarle el uniforme, cuando lo necesite, por todo el tiempo de su vida; y á fin de que se satisfaga á dicha señora trescientos pesos en que se regula el valor del esclavo, y se cumpla en todas sus partes esta resolución, espedirá V. S. sus providencias, dando cuenta de quedar ejecutadas. — Dios guarde á V. S. muchos años. — Buenos Aires, Julio 22 de 1812. — FELICIANO ANTONIO CHICLANA — JUAN MARTÍN DE PUEYRREDON — BERNARDINO RIVADAVIA. — *Nicolás Herrera*, Secretario. — *Al Gobernador Intendente*.

(*Gazeta Ministerial*, núm. 16.)

45

**Fiestas celebrando el descubrimiento de la
conjuración de Alzaga**

El Gobierno Superior Provisional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, á nombre del señor Don Fernando VII.—POR CUANTO ha determinado que el próximo Domingo 9 del corriente se celebre en la Santa Iglesia Catedral en acción de gracia al Ser Supremo, por la muy especial protección que se ha dignado prestar á la patria, en el descubrimiento de la horrorosa conjuración que iban á ejecutar contra este ilustre y benemérito pueblo, algunos españoles malvados y enemigos del nombre americano, para disolver el Estado, destruir su Gobierno y entregar las Provincias á la venganza de los tiranos, después de haber deramado la sangre de los ciudadanos más recomendables por sus virtudes patrióticas: POR TANTO, manda el Superior Gobierno que concurran á un acto tan debido todas las autoridades, vecinos y habitantes de esta Capital, solemnizando su regocijo con iluminación general extraordinaria, en los días 8, 9 y 10 del corriente, y con demostraciones del patriotismo en que se guarde el orden y se consulte el decoro y dignidad que forma el carácter del pueblo de Buenos Aires, y que se haga saber esta determinación por Bando que se publicará y fijará en la forma de estilo.—Buenos Aires, 7 de Agosto de 1812. — FELICIANO ANTONIO CHICLANA—JUAN MARTÍN DE PUEYRREDON—BERNARDINO RIVADAVIA—Por mandato de S. E., *Don José Ramón de Basavilbaso.*

(Gazeta Ministerial, núm. 19.)

46

Creación de un gobierno provisorio

Los señores del Exmo. Cabildo, justicia y regimiento de esta Capital, Don Miguel de Azcuénaga, Gobernador Intendente, D. José Pereyra de Lucena, Alcalde Ordinario de segundo voto, y Regidores Don Manuel Mansilla, Alguacil mayor; D. Manuel Lezica, Don Fermin de Tocornal, D. Juan José Cristóbal de Anchorena, Don José María Yevenez, D. Carlos José Gómez y Dr. Don Ventura Díaz de Bedoya. — Por cuanto: Habiéndose enterado en acuerdo extraordinario del día de hoy de una representación que ha hecho á este Exmo. Cabildo una gran parte del pueblo, protegido por toda la fuerza armada de la Capital, en que manifestándose resentidas todas las clases del Estado, de las públicas infracciones de los artículos del Estatuto Provisional de 23 de Noviembre de 1811 y del Reglamento del 19 de Febrero de 1812, habiéndose procedido de un modo ilegal y escandaloso á las elecciones de los vocales para el Gobierno escluyendo á los representantes de Salta y Jujuy, y frustrando el sufragio del diputado suplente de Tucumán, dando por impedido sin causa al de Mendoza, usando los gobernantes de seducción é intriga para ganar los votos en la Asamblea á favor de la facción, con otros hechos de no menos gravedad que se espresaban, pedían todos los suscriptos que en el acto se suspendiese la dicha Asamblea, y cesasen en sus funciones los individuos depositarios del Poder Ejecutivo, reasumiendo el Ayuntamiento la autoridad que le delegó el pueblo, congregado el 22 de Mayo de 1810, y creando, desde luego, un Poder Ejecutivo de las personas más dignas del sufragio público, ligado precisamente á la indispensable convocación de una Asamblea General, que decida de los grandes negocios de la comunidad, porque ésta era la manifiesta voluntad del pueblo, que esperaba, dispuesto á ofrecer el último sacrificio á la libertad de la Patria, y juraba delante del Eterno, no abandonar el lugar que ocupaba hasta ver concluidos sus votos: ha determinado, después de la meditación que permitieron las circunstancias, y haber oído á los señores jefes militares de la fuerza que

ocupaba la plaza de la Victoria, D. Francisco Ortiz de Ocampo, Coronel del Regimiento número 2; D. José de San Martín, Comandante de los Granaderos montados; D. Manuel de Pinto, Comandante de la Artillería volante; D. Carlos Alvear, Sargento Mayor de los Granaderos montados; D. Román Fernández, de igual clase del número 2;—entre otras cosas, que quedase suspensa la Asamblea congregada el 6 del corriente, y sin efecto sus resoluciones, y proceder á la elección de los individuos que deben constituir el Gobierno Provisorio, y la ha realizado en las personas de los señores Dr. D. Juan J. de Paso, D. Nicolás de la Peña, y Dr. D. Antonio Álvarez de Jonte, que fué aprobada á pluralidad de votos por el inmenso pueblo que ocupaba los corredores y galerías de las Casas Consistoriales, depositándoles la autoridad bajo las condiciones siguientes:—1° Que los señores electos comparezcan sin pérdida de momentos en esta Sala Capitular, á prestar el juramento de usar bien y fielmente de la confianza con que les ha honrado el pueblo.—2° Que luego que los referidos señores presten el juramento, sean reconocidos por Depositarios de la Autoridad Superior de las Provincias Unidas del Río de la Plata, por todas las corporaciones de esta ciudad, su vecindario y cuerpos militares, respetando y obedeciendo todas sus disposiciones, hasta la reunión de una Asamblea General que se verificará dentro de tres meses, precisa é indispensablemente, procediendo en cualquier caso de acuerdo con el Exmo. Ayuntamiento.—3° Que los poderes para esta Asamblea, sean con toda la extensión que quieran darles los pueblos.—4° Que la Asamblea sea el Supremo Tribunal de residencia de todos los que hayan ejercido el Poder Ejecutivo desde el 25 de Mayo de 1810.—5° Que la Asamblea formará una Constitución Provisoria, y que entre tanto el nuevo Gobierno observará inviolablemente el Estatuto Provisional, á escepción de los artículos que se hayan derogado, cumpliendo con especialidad, con los decretos de seguridad individual y libertad de imprenta.—6° Que el presente Gobierno nombrará los Secretarios que crea convenientes, siendo él responsable de su conducta.—7° Que haya de ejercer el cargo de vocal suplente D. Francisco Belgrano durante la ausencia de D. Nicolás de la Peña, á consecuencia de habérsele elegido al efecto por unanimidad de votos.—8° Que en caso de enfermedad, ausencia ó fallecimiento de alguno de los vocales del Gobierno Provisorio, quede á cargo del Ayuntamiento el nombrar quien le subrogue.—9° y último: que haya de instruir eficazmente á los pueblos de

la necesidad de justicia y conveniencia de tan importante medida como la que se ha tomado; reservándose el Ayuntamiento proponer las ideas que juzgue convenientes, y á que por ahora no da lugar la premura del tiempo; publicándose esta determinación inmediatamente por bando, para que llegue á noticia de todos, y fijándose en los lugares acostumbrados: por tanto, y al indicado efecto, publíquese por bando y fíjese.—Sala Capitular de Buenos Aires, 8 de Octubre de 1812.—MIGUEL DE AZCUÉNAGA—*José Pereyra de Lucena—Manuel Mansilla—Manuel de Lezica—Fermín de Tocornal—Juan José Cristóbal de Anchorena—José María Yevenez—Carlos José Gómez—Dr. Ventura Díaz de Bedoya—Licenciado D. Justo José Núñez*, Escribano Público y de Cabildo.—Es copia del bando publicado por mí el infrascripto Escribano, en el día de la fecha de su mandato, doy fe.—*Juan Pablo de Merlo*, Escribano receptor.

(*Hoja suelta.*)

Separación temporal de varios Capitulares

(OFICIO DEL EXMO. CABILDO, AL EXMO. SUPERIOR GOBIERNO) Entre las solicitudes que contiene la representación de una gran parte del pueblo, bajo la protección de las legiones armadas, que dió mérito al procedimiento público del día de ayer, fué una la de que después de constituido un Gobierno ejecutivo « se procediese ulteriormente y sin « demora á la convocación de una Asamblea General Es- « traordinaria, que decida de un modo digno los grandes « negocios de la comunidad, separando, antes de todo, por « sospechosos, á los señores: el Alcalde de primer voto D. « Francisco Xavier de Riglos, á los Regidores D. Manuel « de Arroyo y D. Manuel García, y al Síndico Procurador « Doctor D. Vicente López ». Estas son sus formales pala- bras y únicas con referencia á dichos señores individuos: y para proceder el Cabildo con justicia, sin exponerse á la censura del pueblo y sin perder su confianza, ni rebajar un ápice del concepto que le merece, ha creído preciso, por la duda que al parecer presentan las espresiones subraya- das, dirigirse á la superioridad de V. E., como lo hace, á fin de que se digne declarar si los referidos señores deben continuar ó no en el ejercicio de sus funciones: teniendo presente cuanto urge la brevedad, porque, separados dichos señores, son muy pocos los que han quedado en el Ayun- tamiento para desempeñar las grandes atenciones que lo rodean en las circunstancias actuales, y para ocurrir al des- pachó del público. Dios guarde á V. E., muchos años. — Sala Capitular de Buenos Aires, Octubre 9 de 1812. — Exmo. Señor: *José Pereyra de Lucena — Manuel Mansilla — Fermín de Tocornal — Juan José Cristóbal de Anchorena — José Ma- ría Yenevez — Carlos José Gómez — Dr. Ventura Díaz de Bedoya — Exmo. Superior Gobierno Provisorio.*

CONTESTACIÓN. — Enterado este Gobierno de la consulta de V. E., relativa á la conducta que debe observar con res- pecto al alcalde de primer voto D. Xavier de Riglos, á los Regidores D. Manuel de Arroyo y D. Manuel García, y al Síndico Procurador Doctor Don Vicente López, en atención

á la cláusula espresa de la representación del pueblo que dió mérito al procedimiento público del día de ayer, ha acordado que respecto á no haberles formado antes proceso alguno, ni aparecer datos por los que deban ser separados en castigo de su anterior conducta, y debiéndose considerar aquella medida sólo como necesaria en el momento de la delicadeza en que estaba el pueblo, su solicitud no ha de entenderse de una absoluta separación, y en consecuencia, se restituyen los citados individuos al ejercicio de sus respectivas funciones, y lo avisa á V. E. esta Superioridad para el más breve cumplimiento de la resolución, y obviar los perjuicios públicos de que V. E. hace mérito en su oficio de hoy.— Buenos Aires, Octubre 9 de 1812. — JUAN JOSÉ PASO — FRANCISCO BELGRANO — DR. ANTONIO ALVAREZ DE JONTE.—*Juan Manuel de Luca*, Secretario interino de Gobierno.— *Al Exmo. Cabildo de esta Capital.*

—Después de esto, deseando el Cabildo remover toda duda y proceder con la mayor seguridad en las próximas elecciones, ocurrió al Superior Gobierno á fin de que se declarase si los señores Capitulares D. Francisco Xavier de Riglos, D. Manuel García y D. Manuel de Andrés de Pinedo y Arroyo, estaban ó no hábiles para sufragar en ellas, con concepto á la representación hecha por el pueblo en 8 de Octubre último: sobre lo que se ha servido declarar, que tratándose de un acto especialmente representativo, deben darse por suspensos dichos señores para el caso de la elección del Cabildo entrante, pues para una función de tanta importancia y consecuencia respecto del pueblo, se hacía conveniente alejar todo motivo de sospecha á éste, y de comprometimiento á aquéllos. En vista de cuya superior resolución, ha acordado el Exmo. Cabildo su cumplimiento, y que se proceda conforme á ella en las próximas elecciones.

(Hoja suelta, 19 de Diciembre de 1812 — Colección del Doctor Eguía.)

Convocación para las elecciones de diputados á la Asamblea General

Si pudo proclamarse triunfo la disolución de la Primera Asamblea provisional del 6 de Abril último, la patria debe, sin duda, datar un nuevo nacimiento desde el instante mismo en que se salvó de la terrible crisis que preparaba la del 6 de Octubre. La Asamblea mostróse como un centro de impulsión arbitraria en una circunsferencia aparentemente popular. ¡Absurdo ciertamente insoportable, figurarse representación de los pueblos, habiéndose sofocado la espresión del voto general; y como si pudiera sentarse el edificio moral de la libertad, sobre cimientos de elecciones viciosas, exclusiones violentas y suplencias ilegales! Pero los ciudadanos virtuosos, superiores al choque de las pasiones, que habían empezado á estallar en toda fuerza, contestaron oportunamente, que para los que tienen y conocen sus derechos no eran respetos los abusos, leyes los artificios ni mandatos los caprichos. Por un movimiento tan majestuoso, no quisieron dar un paso hacia la libertad ultrajada sin darlo igualmente hacia la independencia nacional. Los medios que pusieron en obra, si hirieron de algún modo la imaginación, dejaron también satisfecha la razón y lisonjearon los sentimientos de los hombres libres. El objeto inmediato fué la organización del Estado, que no tenía ley, jurisprudencia, forma ni genio alguno cierto, y donde una serie de decretos contrarios había servido hasta aquí de título y alimento á la arbitrariedad de los magistrados. Sin violencia, pues, se estableció la autoridad superior que preparase el camino; y el pueblo que había asombrado al mundo el 25 de Mayo de 1810, le dió nuevas lecciones de moderación y de justicia con el espectáculo de la nueva instalación.

Constituído el Gobierno, si su primer cuidado en tiempo fué la espulsión de los enemigos exteriores, atender los ejércitos y rendir el justo homenaje á los ilustres defensores de la patria en Tucumán, la libertad interior y la felicidad permanente del Estado han sido su empeño principal en importancia. Cualquier abandono del pueblo en el piélago

de abusos agolpados para su ruina por el poder arbitrario, sería, á los ojos de los individuos encargados de la autoridad, un delito tan enorme, como sujetar su suerte á la disposición y capricho del conquistador más insolente. Así es que, luego que lo permitió el torbellino de las primeras atenciones á que nos empuñaban los sucesos militares, se anunció en un manifiesto la Asamblea General prevenida en el bando ereccional del 8 del corriente, anuncio escuchado con recelo por los políticos misteriosos, temido con horror por los tiranos y deseado ardientemente por los amantes del orden, unión y prosperidad de estas Provincias.

Después de haber afianzado el primer paso á la libertad con un esfuerzo y resistencia tan general como sublime; después de sostener por el espacio de tres años una lucha de ferocidad y de barbarie peninsular de una parte, y de virtud y constancia americana por la otra, cuando la España no puede justificar su conducta en constituirse ante el Tribunal de las naciones imparciales, sin confesar, á pesar suyo, la justicia y santidad de nuestra causa; cuando el eterno cautiverio del señor Fernando VII ha hecho desaparecer sus últimos derechos con los postreros deberes y esperanzas las más ingenuas; cuando el estado de nulidad é incertidumbre política no nos ha ofrecido ni prepara sino terribles contrastes que pongan á una difícil prueba la moderación, la firmeza y el valor; cuando una serie desgraciadamente necesaria de movimientos nos ha precisado á flotar de un gobierno en otro provisorio, escitando á su vez nuevas pasiones, odios y desconfianzas que privan á la República de aquella preciosa fuerza, que sólo puede ser el resultado y fruto de la unión; cuando las victoriosas legiones de la patria en el Perú y en el Norte, marchan á zanjár los cimientos de nuestra seguridad y el sepulcro de los injustos agresores del país; cuando la necesidad misma de mantener aquélla, demanda imperiosamente una reforma general en la administración pública, que facilite en nuestro mismo seno los recursos proficuos que en el día se hacen insuficientes, por los vicios del antiguo régimen y por el ejercicio irregular é incierto del poder; en fin, cuando la hidra de las facciones se ha acallado, felizmente, con la creación de una autoridad para llenar las intenciones de los pueblos, ¿qué otro tiempo puede esperarse para reunir en un punto la majestad y fuerza nacional? Esta, sin duda, debe ser la memorable época en que el pueblo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, abriendo con dignidad

el sagrado libro de sus eternos derechos por medio de libres y legítimos representantes, vote y decreta la figura con que debe aparecer en el gran teatro de las naciones.

Elevados sus Diputados á la altura de su noble ministerio y elevada la patria á su brillante destino, saldrán entonces las grandes medidas, la energía y la fortuna. La Constitución que se sancione alentará la timidez de unos, contendrá la ambición de otros, acabará con la vanidad importuna, atajará pretensiones atrevidas, destruirá pasiones insensatas y dará, en fin, á los pueblos la carta de sus derechos y al Gobierno la de sus obligaciones. En vano los impostores políticos ó erguidos aristócratas intentarán paralizar esta justa empresa, enlazando el interés público con el mantenimiento de antiguos abusos á la par de estériles esperanzas; los tiempos y la fuerza misma de las cosas, han completado ya la revolución moral en los sentimientos é ideas de los americanos: su indefinición política ó su neutra permanencia, ó los arrastraría á la disolución de una espantosa anarquía, ó los volvería á sepultar en la calma estúpida de la más ignominiosa servidumbre, descendiendo á ella con los sagrados derechos de que no hubiesen hecho uso en su tiempo y en su turno. ¿Porqué se temerá escuchar por primera vez la voluntad de todos los pueblos que pueden libremente explicarla? ¿Qué acontecimiento podrá hacer gravitar los ultrajes de la servidumbre sobre los pueblos aun oprimidos con mayor estrago y fiereza, cuando los sucesos de La Paz, Cochabamba y Potosí han completado ya los términos de ferocidad, de desolación y tiranía? Manténgase, si se quiere, los abusos mismos ó las envejecidas instituciones, pero reciba al menos cualquier determinación el gran carácter del consentimiento público, para que regle la conducta de los pueblos que no pueden ser ya gobernados sino por verdaderas leyes, dictadas en una Asamblea General.

Partiendo de estos principios, los individuos del Gobierno, fuertes con la justicia y sinceridad de sus intenciones, no corresponderían á la alta confianza con que se les ha honrado, si no caminasen firmemente á tan elevado y justificado fin. Llamados al ejercicio del poder, no por ambición ni por intriga, sino por el sufragio de los hombres libres, cuando se haya establecido la base y forma de Gobierno que se crea más á propósito al bien y utilidad de todos, resignarán el mando inmediatamente en las manos que una legítima elección señale, enteramente contentos con la gloria y el honor de haber conducido á los pueblos del Río de

la Plata, á la dignidad de una nación legítimamente constituida: así que reconociendo desde luego la representación nacional, no sólo como un derecho, sino como un deber, la invocan como el medio más eficaz de proveer á la común defensa, procurar la felicidad general y asegurar las bendiciones de la libertad para la edad presente y futura, y por lo mismo han acordado que la Asamblea sea convocada desde esta fecha, para que empiece sus augustas funciones en todo el mes de Enero del año próximo entrante, reunidos que sean en esta Capital los Diputados de los pueblos libres.

La representación en ella debe ser tan completa, cual deba y pueda ser en un Congreso de tan alto carácter é importancia; pero no habiendo forma alguna establecida que regle legítimamente el modo de las elecciones de los representantes, de suerte que puede decirse con verdad que sus resoluciones sean la expresión de la voluntad general y así para destruir el deseo de que sea reducida la Asamblea á las formas estrechas y exclusivas de las Asambleas anteriores, como para evitar el desorden y tumultuosa confusión, consiguientes á toda reunión sin plan, regla ni sistema, escollo tan eversivo del justo uso de la libertad, como la arbitraria limitación prescripta por tímidos tiranos, ha creído el Gobierno indispensable fijar la primera institución que deberá observarse con la más delicada actitud, bajo las declaraciones siguientes:

1º—Se pasará orden por los Gobernadores ó Tenientes, de acuerdo con los Ayuntamientos, á todos los alcaldes de barrio, para que citando éstos á todos los vecinos libres y patriotas de sus respectivos cuarteles, concurran á una hora señalada á la casa de cada alcalde ó donde éstos designaren y á consecuencia, luego que se hallen reunidos nombrarán á cada cuartel un elector á pluralidad de votos.

2º—Las ciudades que no estuviesen divididas en cuarteles, ó que su número sea reducido, se repartirán, en el primer caso, en ocho cuarteles, cuando menos, y en el segundo se subdividirán los barrios de modo que se cuenten en el mismo número indicado, comisionando el jefe del pueblo los sujetos de reconocida imparcialidad y patriotismo que hayan de presidir el nombramiento de electores en cada cuartel, si tampoco hubiese alcaldes que desempeñen estas funciones.

3º—El nombramiento de electores se hará en un mismo día, y, si es posible, en una misma hora, en todos los cuarteles, debiendo concurrir acto continuo á congregarse en la

Sala Capitular del Ayuntamiento del lugar, para proceder inmediatamente en consorcio de éste y su Presidente á la elección del Diputado ó Diputados para la Asamblea, sirviéndose del Escribano de Cabildo para la autorización de los sufragios.

4°—Todas las personas libres y de conocida adhesión á la justa causa de la América, sin escepción de empleados civiles ó militares, podrán ser electores ó electos Diputados, no siendo preciso que éstos sean naturales ó residentes en los mismos pueblos que van á representar.

5°—Las votaciones serán públicas y en voz alta, de un modo digno de un pueblo virtuoso y libre, así como deben ser las sesiones de la Asamblea, circunstancia indispensable que comprenderán los poderes ó instrucciones.

6° Esta Capital tendrá cuatro Diputados, por su mayor población é importancia política; las demás capitales de Provincia nombrarán dos, y uno cada ciudad de su dependencia, á escepción de Tucumán que podrá, á discreción, concurrir con dos diputados á la Asamblea.

7° Concluida la votación y hecho el escrutinio, se hará saber inmediatamente al pueblo el ciudadano que resulte electo Diputado á pluralidad de votos, en la inteligencia que debe reunir las más recomendables cualidades; principalmente, estar acreditado de un modo indeficiente su fervorosa adhesión á la libertad del país y una virtuosa imparcialidad que lo ponga á cubierto de la nota escandalosa de faccioso ó de algún otro vicio que desdiga de tan alto ministerio, circunstancias que encarga sobremanera el Gobierno, como que de la felicidad ó desacierto de la elección, resultará evidentemente ó el feliz destino ó el más ultrajante infortunio de los pueblos.

8° Como el motivo poderoso que induce la celebración de la Asamblea tiene por objetos principales la elevación de los pueblos á la existencia y dignidad que no han tenido, y la organización general del Estado, los poderes de los Diputados serán concebidos sin limitación alguna, y sus instrucciones no conocerán otros límites que la voluntad de los poderdantes, debiendo aquéllos ser calificados en la misma Asamblea, antes de su apertura, en una sesión preliminar.

9° Bajo este principio, todo ciudadano podrá legítimamente indicar á los electores que estíendan los poderes é instrucciones de los Diputados, lo que crea conducente al interés general, y al bien y felicidad común y territorial.

10° Debiendo, precisa é indispensablemente, verificarse la

apertura de la Asamblea, en todo el mes de Enero del año próximo entrante, el cuerpo de electores, con su Presidente, entenderán breve y sumariamente sobre cualquier vicio de la elección ó calificación de la persona electa, sin que de su pronunciamiento haya lugar á recurso alguno, ni aun á este Gobierno, procediéndose, en caso de evidente nulidad, á una nueva elección en la forma prescripta, para evitar de este modo cualquier entorpecimiento que haga traspasar el tiempo prefijado. A cuyo efecto, y para aplicar dignamente las reglas que en general deben observarse, se estará á lo que previene el Art. 3° del Reglamento de 23 de Noviembre de 1811, que da forma á la Asamblea Provisional.

Dada en esta Fortaleza de Buenos Aires, á 24 de Octubre de 1812.—DOCTOR JUAN JOSÉ PASO — FRANCISCO BELGRANO — DOCTOR ANTONIO ALVAREZ JONTE — *Juan Manuel de Luca*, Secretario del Gobierno Interino.

(Trabajos Legislativos de las Asambleas Argentinas, coleccionados por Uladislao Frías — tomo I (1811-1820) pág. 9 — Imprenta de la Universidad — Año MDCCCLXXXII).

Decreto instalando la Asamblea

El Supremo Poder Ejecutivo Provisorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata; á los que la presente viesen, oyesen y entendiesen, sabed:

Que verificada la reunión de la mayor parte de los Diputados de las Provincias libres del Río de la Plata en la Capital de Buenos Aires, é instalada en el día de hoy la Asamblea General Constituyente, ha decretado los artículos siguientes:

Art. 1º — Que reside en ella la representación y ejercicio de la soberanía de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y que su tratamiento sea el de Soberano Señor, quedando el de sus individuos en particular con el de Vd. llano.

Art. 2º — Que su Presidente sea el señor Diputado de la ciudad de Corrientes, Don Carlos Alvear.

Art. 3º — Que sus Secretarios para el despacho, lo sean los señores Diputados de Buenos Aires, Don Valentín Gómez y Don Hipólito Vieytes.

Art. 4º — Que las personas de los Diputados que constituyen la Soberana Asamblea son inviolables y no pueden ser aprehendidos ni juzgados sino en los casos y términos que la misma Soberana Corporación determinará.

Art. 5º — Que el Poder Ejecutivo queda delegado interinamente en las mismas personas que lo administran, con el carácter de Supremo y hasta que tenga á bien disponer otra cosa, conservando el mismo tratamiento.

Art. 6º — Que para que el Poder Ejecutivo pueda entrar en el ejercicio de las funciones que se delegan, comparezca á prestar el juramento de reconocimiento y obediencia á esta Asamblea Soberana, disponiendo lo hagan inmediatamente las demás Corporaciones, y que en orden al que hayan de prestar las autoridades y jefes militares existentes fuera de la Capital, espedirá con la inmediatez posible el decreto correspondiente.

Art. 7º — Que el Poder Ejecutivo, en la publicación de los decretos de la Asamblea Soberana, encabece en los términos siguientes: *El Supremo Poder Ejecutivo Provisorio de*

las Provincias Unidas del Rio de la Plata, á los que la presente vieses, oyesen y entendiesen, sabed que la Asamblea General Constituyente ha decretado lo siguiente:

Art. 8º—Que á las órdenes y decretos espedidos por esta Asamblea General Constituyente, autorizadas con solas las firmas del señor Presidente y algunos de sus Secretarios, se les de toda la fe y crédito como si fuesen autorizadas por todos sus individuos.

Art. 9º—Que todos los anteriores decretos se publiquen en esta Capital y circulen á todos los pueblos de las Provincias Unidas.

Art. 10º—Que el Poder Ejecutivo disponga la celebración de tan interesante instalación, con las demostraciones que acrediten del modo más importante el júbilo y general regocijo de que debe hallarse penetrado este pueblo.—Y en obediencia de los soberanos decretos que anteceden, y para su puntual cumplimiento, ordena y manda se publiquen por bando solemne en esta Capital, se fije en los parajes de estilo, se circule á todas las Provincias y pueblos del Estado, se imprima al efecto, previniendo á todos los estantes y habitantes de esta ciudad, que en celebridad de tan feliz inauguración y del digno objeto á que se contrae, se espresen el júbilo y alegría de los amantes de la libertad, con iluminación general por tres días consecutivos, que deberán principiarse desde la noche del presente.

Buenos Aires, Enero 31 de 1813.

JUAN JOSÉ PASO—NICOLÁS RODRIGUEZ PEÑA

Por mandato de S. E.

D. José Ramón de Basalvilbaso.

(Trabajos Legislativos de las Asambleas Argentinas, coleccionados por Uladislao S. Frías — Tomo I (1811-1820) pág. 12 — Imprenta La Universidad — Año 1882.)

50

Reglamento sobre la inviolabilidad de los Diputados

Buenos Aires, Marzo 10 de 1813. — Queda aprobado el reglamento que comprende los términos de inviolabilidad de los Diputados de esta Asamblea General, presentado por el ciudadano López como encargado en comisión para formarlo, después de haberse discutido los artículos que abraza y de haber recibido las modificaciones y reformas que este Soberano Cuerpo estimó convenientes y pásese en copia certificada al Supremo Poder Ejecutivo, para su publicación. — DR. TOMÁS VALLE, Presidente — *Hipólito Vieytes*, Secretario.

REGLAMENTO

Artículos relativos al Soberano Decreto de la inviolabilidad de los Diputados de la Asamblea General Constituyente.

Art. 1º — Los Diputados que componen la Asamblea General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, no pueden ser acusados, perseguidos ni juzgados en tiempo alguno por las opiniones que verbalmente ó por escrito hayan manifestado en las sesiones de la Asamblea.

Art. 2º — Desde el día de su nombramiento hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, no pueden ser reconvenidos en Tribunal alguno por causas civiles.

Art. 3º — Durante el mismo periodo, no pueden ser procesados por causas criminales, ni violada la inmunidad de las casas en que habiten, sino en la forma y casos prescriptos en los artículos siguientes:

Art. 4º — Si algún reo retraído en una de estas casas resistiese los llamados judiciales de comparencia, bien sea doméstico del Diputado que la habite ú otro extraño, podrá allanarse. Su allanamiento se hará en virtud de decreto de la Asamblea, si estuviere en sesión. Si no estuviere actualmente en sesión, se hará el allanamiento por el Presidente de la Asamblea, con la calidad de dar cuenta en la sesión inmediata. Si estuvieran suspensas las sesiones, se hará el allanamiento por la Comisión permanente con la misma calidad.

Art. 5°—Solo por delito criminal de enorme gravedad, in fraganti, pueden ser aprehendidos los Diputados. Cualquier Juez ó comandante que haya verificado la prisión, deberá, sin demora, elevar á la Asamblea el parte de lo ocurrido. Desde aquel momento queda inhibida toda otra autoridad de intervenir en la causa.

Art. 6°—Fuera del caso del artículo precedente, ningún Diputado puede ser aprehendido sin previo mandamiento de la Asamblea.

Art. 7°—Ninguna denuncia contra la persona de un Diputado puede dar mérito á procedimiento, si no se hace por escrito, firmada y dirigida á la soberana Asamblea.

Art. 8°—Si después de discutir la denuncia en la forma adoptada para los demás asuntos, resultara admitida, se nombrará una Comisión Interior para la correspondiente formalización del proceso, quedando suspenso el Diputado en el ejercicio de sus funciones, cuando resulte de él mérito suficiente, á juicio de la Asamblea.

Art. 9°—Presentado el proceso por la Comisión en estado de sentencia y discutido en la forma ordinaria, fallará la Asamblea.

Art. 10.—El juicio de la Asamblea no se dirigirá á más que remover al reo del alto oficio de Diputado é inhabilitarlo para todo empleo honroso y lucrativo. Desde aquel momento queda á disposición del Supremo Poder Judicial, quien procederá á la sentencia y castigo que corresponda, según las leyes.

Art. 11.—Si el acusado es absuelto por el juicio de la Asamblea, se restituye al ejercicio de sus funciones.—Buenos Aires, Marzo 10 de 1813.—TOMAS VALLE, Presidente
—*Hipólito Vieytes*, Secretario.

(Redactor, número 3.)

Estatuto dado al Supremo Poder Ejecutivo

El Supremo Poder Ejecutivo queda delegado en las tres personas que lo administran. Su duración será hasta la sanción de la Constitución de este Estado. Cesarán alternativamente en sus funciones al llenarse los períodos de seis meses, empezando por el menos antiguo, según el orden de sus nombramientos. La Asamblea Constituyente nombrará al que deba sustituir al individuo saliente. Turnará la presidencia cada mes, por el orden de su mayor antigüedad.

Ningún miembro del Supremo Poder Ejecutivo podrá salir á mandar en jefe los ejércitos, ni á alguna otra comisión, sin la expresa aprobación de la Asamblea General Constituyente. En caso de ausencia ó impedimento de algunos individuos por un tiempo que esceda del término de seis días, nombrará la Asamblea al que lo haya de suplir en el ejercicio de sus funciones. Si el impedimento ó ausencia no tocase el término prefijado de seis días, despacharán sin suplente los dos individuos restantes, menos en el caso de discordia, en que queda autorizado el Secretario más antiguo para dirimir la discordia con su sufragio.

Firmarán todos los decretos que espidiesen, quedando al arbitrio del disidente si lo hubiese, salvar su voto en el libro reservado.

El Supremo Poder Ejecutivo es inviolable: solo será juzgado ó removido por la Asamblea General Constituyente en el caso de traición, cohecho, malversación de los caudales del Estado ó violación de sus soberanos decretos.

Las facultades del Supremo Poder Ejecutivo son las siguientes:

Hacer ejecutar puntualmente las leyes y decretos soberanos y Gobernar el Estado.

Mandar el ejército, armada y milicias nacionales.

Nombrar los embajadores y cónsules, los jueces criminales y civiles, menos los del Supremo Poder judicial; los Generales, los Secretarios de Estado, los oficiales de ejército y milicias nacionales, y los demás empleados; presentar á los obispos y prebendas de todas las iglesias del Estado.

Formar los reglamentos y ordenanzas que crea convenientes para la más fácil ejecución de las leyes.

Administrar las rentas del Estado y ejercer la superintendencia de las fábricas de moneda.

Proveer á la seguridad interior y defensa exterior de las Provincias Unidas. Distribuir sus fuerzas y darles dirección del modo más conveniente.

Recibir los embajadores, ministros públicos ó enviados de cualquier clase.

Mantener las relaciones exteriores, conducir las negociaciones y hacer estipulaciones preliminares, firmar y concluir los tratados de paz, alianza y comercio; los de tregua, neutralidad y otras convenciones; pero las declaraciones de guerra, tratados de paz, alianza y comercio, deben ser propuestas, discutidas y decretadas por la Asamblea Constituyente.

Suspender, en caso de invasión ó inminente peligro de ella, de sublevación ú otro atentado grave contra la seguridad del Estado, el decreto de seguridad individual dando cuenta á la Asamblea General Constituyente de la innovación expresada, dentro del término de 24 horas.

Proponer á la consideración de la Asamblea Constituyente, aquellos puntos de cuya resolución estime pendiente el bien del Estado y todos los que puedan ser digna materia de sus soberanos decretos, instruyendo con las razones correspondientes.

Incitar á la reunión de la Asamblea General Constituyente, si tuviese levantadas sus sesiones, en los casos necesarios dirigiéndose, al efecto, á la Comisión que quede autorizada para convocarla.

Se le delega particularmente el poder de revocar y confirmar, con arreglo á ordenanza, en último grado, las sentencias dadas contra militares, por los consejos de guerra en que respectivamente cada uno debe ser juzgado.

Podrá, asimismo, conocer y sentenciar por las leyes todas las causas civiles y criminales de todos los empleados, menos los del Supremo Poder Judicial, suspendiéndolos y privándolos de los empleos en los casos necesarios y con arreglo á las leyes. Los miembros del Supremo Poder Ejecutivo, disfrutarán de una pensión competente que designará la ley.

(Dado en la sesión de 27 de Febrero de 1813).

(Redactor, número 2.)

52

Proyecto de Constitución para las Provincias del Río de la Plata, formado por la Comisión especial nombrada en 4 de Diciembre de 1812. (1)

CAPÍTULO I

Art. 1º Las Provincias del Río de la Plata forman una República libre é independiente.

Art. 2º La soberanía del Estado reside esencialmente en el pueblo.

Art. 3º El pueblo es la reunión de todos los hombres libres de la República...

CAPÍTULO IV

Del Gobierno

Art. 1º El ejercicio del poder soberano de la República, reside en el Congreso, en los depositarios del Poder Ejecutivo y en los Tribunales establecidos por la ley.

2º La potestad de hacer las leyes reside en el Congreso.

3º La potestad de hacer ejecutar las leyes, reside en los depositarios del Poder Ejecutivo.

4º La potestad de aplicar las leyes, reside en los Tribunales de justicia establecidos por la ley...

CAPÍTULO VIII

Del Cuerpo Legislativo

Art. 1º El Cuerpo Legislativo es el Congreso de las Provincias que se compondrá de un Senado y de una Sala de Representantes.

2º La Sala de Representantes se compondrá de ciudada-

(1) Este proyecto se halla inserto en la *Colección de Memorias y documentos del Río de la Plata*, por D. Andrés Bello, 1849, tomo I, pág. 150, precedido de estas palabras: «La copia de que nos servimos, de puño del escribiente de la Comisión, pertenecía á uno de sus miembros y está corregida por él. La publicamos, tal cual está, á pesar de que nos consta que los artículos que van como adicionales á varios capítulos, fueron debidamente colocados en ellos».

nos elegidos cada dos años, por las asambleas de las Provincias.

3° El Senado de la República se compondrá de un Senador de cada Provincia, elegido por la Asamblea electoral de ella por seis años.

4° Juntos los senadores después de la primera elección, se dividirán lo más igualmente que pueda ser, en tres clases.

5° Los asientos de los Senadores de la primer clase, vacarán á los dos años, los de la segunda á los cuatro, y los de la tercera á los seis. De manera que una tercera parte del Senado se renovará cada dos años.

CAPÍTULO IX

De las facultades de la Sala de Representantes

Art. 1° La Sala de Representantes elegirá su Presidente y demás oficiales.

2° Ella sola tendrá el poder de acusación contra los empleados públicos, sin escepción.

3° Ella sola podrá proponer los proyectos de contribuciones, ó los aumentos en las y impuestas . .

CAPÍTULO X

De las facultades del Senado

Art. 1° El Senado elegirá su Presidente y oficiales subalternos. Solo el Senado tendrá poder para procesar los acusados por la Sala de Representantes.

2° Cuando el Presidente y miembros del directorio ejecutivo sean procesados, el jefe del Supremo Tribunal de Justicia presidirá el Senado.

3° El juicio en causas de acusación no se estenderá más que á remover del oficio y declarar la capacidad de ejercer y obtener algún empleo de honor, de confianza ó provecho en la República. Pero los convencidos del delito, quedarán, no obstante, sujetos á acusación, juicio, proceso y castigo conforme á la ley . . .

CAPÍTULO XIII

De los privilegios de los miembros del Congreso

Art. 1° Ningún senador ó representante podrá ser molestado por sus opiniones, discursos ó debates que haya sostenido en la Sala de sus sesiones.

2° No podrán ser arrestados en el tiempo que asistan á la sesión de su sala respectiva, ni sesenta días antes de comenzar las sesiones, ni en igual término después de haberse retirado, á escepción de los casos de traición, felonía ó de homicidio, y los de violación á mano armada de la persona, casa ó bienes de algún ciudadano: tampoco podrán ser presos por deudas ó causas civiles, hasta pasado un mes de concluidas las sesiones del Congreso.

3° Los senadores y representantes tendrán una asignación moderada, pero suficiente á compensarles sus gastos, y sostenerlos con decoro. Esta la señalará la ley, y les será pagada de la Tesorería General del Estado.

4° Ningún senador ó representante, mientras lo sea, podrá ser nombrado para cargo alguno civil, cuya renta se haya aumentado durante su asistencia al senado ó sala de representantes.

5° Los empleos de senados y representantes son incompatibles con el ejercicio de cualquier otro de la república...

CAPÍTULO XVII

Del Poder Ejecutivo

Art. 1° El Poder Ejecutivo residirá en un Directorio compuesto de tres individuos elegidos por seis años y amovibles por tercias partes cada dos años.

2° Por la primera vez, se nombrarán distintamente primero, segundo y tercer miembro del Directorio: el primero será removido á los dos años, el segundo á los cuatro y el tercero á los seis.

3° La presidencia turnará entre ellos por el orden de su antigüedad y durará por dos años.

4° El senado y la sala de representantes elegirán los miembros del directorio ejecutivo de la manera siguiente...

CAPÍTULO XIX

Del Consejo de Estado

Art. 1° Habrá un Consejo de Estado, compuesto de diez individuos de orden, ilustración y mérito: uno por cada provincia.

2° Serán nombrados por el cuerpo legislativo de entre la lista nacional de elegibles: dos de ellos serán eclesiásticos, tres militares y cinco ciudadanos.

3° El Congreso podrá aumentar este número cuando la población y circunstancias del país lo hagan oportuno.

4° Todos los obispos del territorio de la República son Consejeros honorarios del Estado.

5° El directorio ejecutivo oirá el dictamen del consejo en todos los asuntos graves de gobierno, y también para prestar su consentimiento á los proyectos de ley...

CAPÍTULO XXI

Del Poder Judicial

Art. 1° El orden judicial es independiente.

2° La facultad de juzgar y de aplicar las leyes, pertenece exclusivamente á los Jueces y Tribunales, según las formas que ellos establezcan.

3° Los Jueces deben juzgar por el texto de la ley.— Toda interpretación ó arbitrariedad es un crimen de que responderán personalmente.

4° La Justicia se administrará á nombre del pueblo americano de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

5° El orden judicial en lo civil y criminal será uniforme en todo el Estado.

6° Los Jueces permanecerán en sus empleos mientras obren bien. No pueden ser removidos sino en virtud de sentencia legal: pero pueden ser suspendidos con justas causas por el Supremo Tribunal de Justicia, con calidad de que deberá formalizarse su proceso en el preciso término de ocho días después de su remoción.

7° Al Fiscal General del Estado corresponde promover la acusación y fenecimiento del negocio.

8° El Congreso señalará las dotaciones de los Jueces.

9° Estos, en el acto de tomar posesión, jurarán observar la Constitución, ser fieles al Estado, obedientes á las leyes y rectos administradores de justicia.

De los Tribunales

10. Habrá una Corte Suprema de Justicia para todo el Estado: un Tribunal Superior en cada Provincia: Jueces letrados en cada partido y Alcaldes en todos los pueblos.

11. Los miembros de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por el Congreso de la lista nacional: los de los Tribunales Superiores por el Poder Ejecutivo á propuestas del Concejo del Estado, de la lista provincial: los Jueces letrados de partido, de la lista de partido: los Alcaldes, inmediatamente por sus pueblos.

12. Habrá, también, Juzgados en todos los Partidos y Provincias para los asuntos criminales, cuya calidad determine la ley.

13. El Congreso formará, por una ley, el Reglamento que prescriba el método y duración de las sesiones de cada juzgado, el número de subalternos y sus funciones. . .

CAPÍTULO XXII

De los ayuntamientos

Art. 1º En todas las ciudades, villas y cabezas de partido que tengan trescientos vecinos, habrá ayuntamientos, compuestos de Alcaldes y regidores nombrados por los pueblos anualmente.

2º Nadie podrá escusarse del cargo sin causa denominada por la ley.

3º La ley prescribirá la forma de la elección, el número de los individuos, las calidades que se requieren para ser elegidos, y los motivos que legitimen la excusa.

4º Los objetos de su institución son: primero, velar sobre la sanidad, comodidad, abundancia, prosperidad y ornato de los pueblos; segundo, sobre la educación pública; tercero, sobre los establecimientos de beneficencia; cuarto, sobre la conservación del orden público, en el modo y forma y con la extensión que prescribirá la ley.

53

**Declarando libres á todos los que nacieren después
de instalada la Asamblea**

(SESIÓN DEL DÍA 2 DE FEBRERO DE 1813).—El Supremo Poder Ejecutivo Provisorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, á los que la presente viesen, oyesen y entendiesen, sabed:

Que la Asamblea Soberana General Constituyente, se ha servido espedir el decreto del tenor siguiente:

« Siendo tan desdoloroso como ultrajante á la humanidad, « el que en los mismos pueblos que con tanto tesón y es- « fuerzo caminan hacia la libertad, permanezcan en la esclavitud los niños que nacen en todo el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, manda que sean considerados y tenidos por libres todos los que en dicho territorio hubiesen nacido después del 31 de Enero de 1813 « inclusive en adelante, día consagrado á la libertad por la « feliz instalación de la Asamblea General, bajo las reglas « y disposiciones que al efecto decretará la Asamblea General Constituyente. Lo tendrá así entendido el Supremo Poder Ejecutivo, para su debida observancia.—CARLOS ALVEAR, Presidente.—*Hipólito Vieytes*, Diputado Secretario.»

Por tanto, para que este soberano decreto tenga su puntual y debido cumplimiento, publíquese por bando en esta Capital, imprímase y comuníquese al Gobernador Intendente de esta Provincia, para que lo haga, asimismo, notorio en todos los puntos de su dependencia, dirigiéndose, igualmente á los Gobiernos de la comprensión de este Supremo Poder Ejecutivo á los efectos que van prevenidos.—Buenos Aires, Febrero 3 de 1813. — JUAN JOSÉ PASO — NICOLÁS RODRIGUEZ PEÑA — ANTONIO ALVAREZ DE JONTE — Por mandato de S. E., *Don José Ramón de Basavilbaso*.—

(*Registro Oficial de la República Argentina, tomo I (1810-21) página 194 — Publicación Oficial — Imp. . La República — Año 1879.*)

Medidas represivas para con los españoles europeos

El Gobierno, á los ciudadanos estantes y habitantes de la Capital.—Ciudadanos: Cuando los ejemplares castigos en los autores de la horrible conspiración de 3 de Julio, y la firmeza invariable del Gobierno en su ejecución, parecia dejaba escarmentados á nuestros enemigos de tentar otra vez contra la vida de la patria, sus bárbaras combinaciones no han cesado. El sosiego y la armonía habian sucedido á la persecución de los cómplices del parricidio, y la serenidad que se observaba, se creía el anuncio del desengaño de nuestros rivales; pero una parte considerable de los españoles europeos, aborrece la paz, detesta la moderación y desprecia la tolerancia. Fascinados con las noticias menos funestas de su madre España, han vuelto á concebir el plan abominable de nuestro esterminio, y ya se glorian, en el secreto de sus meditaciones, de la esclavitud eterna de nuestra América. Un plan combinado entre las fuerzas de Montevideo y un gran número de españoles de los que existen en esta Capital, es el que se prepara para saciar su sed de sangre y desahogar el encono que rebosa en su corazón. La aflicción y el conflicto de los de aquella plaza, y el despecho y desesperación en los de ésta, los ha dispuesto el pensamiento inicuo de una nueva conjuración. Las repetidas denuncias, las cartas interceptadas de una y otra parte, las declaraciones contestes de varios pasajeros en Montevideo, el aire insultante de los enemigos y la esposición de los comprendidos en el transfugato del lanchón de auxilio, ha dejado al Gobierno un pleno convencimiento de la horrosa empresa en que han entrado nuevamente estos bárbaros asesinos. Cinco de los traidores, sabedores y cómplices del delito, los teneis á la espectación pública, y no cesarán los castigos mientras los enemigos intenten perseguirnos; ya veis el fin de vuestra obstinación, si os complaceis en las víctimas de vuestros connaturales, si no escuchais la voz de vuestros hijos, si detestais el país que os alimenta y si vuestra impiedad no os deja ver la mano visible de la Providencia, que abiertamente protege nuestra causa, seguid en el

desenfreno de vuestra ridícula impotencia, y vuestro estermio será inevitable. El brazo de la justicia va á caer sobre vosotros, y la suavidad y dulzura del carácter americano alejadla de vuestro cálculo, si el arrepentimiento no es en tiempo. Ciudadanos: reposad en el celo del Gobierno: la seguridad pública ocupa sus desvelos, y la libertad de la patria será indestructible. Con este objeto y sin perjuicio de las providencias ulteriores, para afianzarla de un modo inequívoco, ha decretado lo siguiente:—1º Ninguna reunión de españoles europeos pasará de tres, y en caso de contravención serán sorteados y pasados por las armas irremisiblemente, y si ésta fuese de muchas personas sospechosas á la causa de la patria, nocturna ó en parajes escusados, con pena de muerte.—2º—No podrá español alguno montar á caballo, ni en la Capital ni en su recinto, si no tuviere espresa licencia del Intendente de Policía, bajo las penas pecuniarias ú otras que se consideren justas, según la calidad de la persona, en caso de contravención.—3º—Será ejecutado de incontinenti con pena capital al que se aprehenda en un transfugato con dirección á Montevideo, ú otro punto de los enemigos del país, y el que supiere que alguno lo intenta y no lo delatare, probado que sea, será castigado con la misma pena.—Y para que llegue á noticias de todos, publíquese por bando, imprímase, fíjese en los parajes de estilo, y pásense copias con las órdenes respectivas al Gobernador de la Plaza é Intendente de Policía.—Buenos Aires, 23 de Diciembre de 1812.—JUAN JOSÉ PASO—NICOLÁS RODRÍGUEZ PEÑA—ANTONIO ALVAREZ DE JONTE—*Don José Ramón de Basavilbaso.*

(Hoja suelta.)

55

**Nota del Poder Ejecutivo pidiendo la reforma del personal
del Gobierno**

Soberano Señor:

Desde que el Gobierno llega á descubrir un objeto de suma importancia á los intereses de los pueblos, sería criminal á los ojos de la Nación, si influido de motivos menos elevados que los de la salud general, guardase un indecoroso y débil silencio.

Por el voto de Vuestra Soberanía y la confianza pública, los individuos que ejercen ahora este Poder Supremo fueron llamados á ponerse al frente de los negocios de estas Provincias: pero en tan arduo como honroso cargo, han descubierto que la serie de los sucesos y la naturaleza de las actuales circunstancias, harían infructuosos todos sus desvelos como continuasen en dedicarlos á la Patria, bajo la misma forma en que hasta el presente lo han ejecutado. La experiencia del mando y el conocimiento inmediato de nuestras transacciones, han enseñado á este Gobierno que, para dar el impulso que requieren nuestras empresas y el tono que nuestros negocios exigen, la concentración del Poder en una sola mano es indispensable.

Vuestra Soberanía se halla encargada de dirigir los destinos de estos heroicos pueblos; penetra muy bien su carácter, sus costumbres y estados, y no necesita de la pintura que ahora podría ofrecerse á su vista sobre la situación política de nuestras Provincias en este preciso momento, para persuadirse de la necesidad de condensar la Autoridad Ejecutiva. Por lo que hace al gobierno, él guarda como el más dulce premio de sus incesantes fatigas, la satisfacción de haber servido al Estado con todo el lleno de sus fuerzas: la más estrecha unión y armonía existe entre los miembros que lo componen actualmente: y los inconvenientes que toca en el ejercicio de su alto ministerio, son sólo el resultado de la discordancia que existe entre la forma de la administración actual y lo que los tiempos exigen, según solemnemente protesta ante este Cuerpo respetable.

El Gobierno hace ante Vuestra Soberanía la presente ges-

ción, más como ciudadano que como primer Magistrado de estas Provincias.

Esta es la primera vez en que un Poder constituido para regir los pueblos, se deja ver solicitando la creación de otra autoridad que le subrogue en sus grandes funciones: contra el espíritu de todos los que mandan, por ensanchar sus prerrogativas, el Gobierno desea verlas pasar á otras manos, robustecidas por una constitución más análoga á las circunstancias presentes. Salga, Soberano Señor, un ciudadano, ayudado de aquella forma competente, á ponerse al frente de nuestros riesgos y de nuestras empresas, y entonces la prosperidad nacional será obtenida á mucho menos costa, y la Patria salva sin zozobras.

Dios guarde á Vuestra Soberanía muchos años.

Buenos Aires, 21 de Enero de 1814.

Soberano Señor:

GERVASIO POSADAS — NICOLÁS RODRÍGUEZ PEÑA —
JUAN LARREA.

Soberana Asamblea General Constituyente.

*(Colección de Trabajos Legislativos de las Asambleas Nacionales,
compilados por Uladislao G. Frías — tomo I, página 83.)*

56

Reforma del estatuto provisorio del Supremo Gobierno*De la Suprema Potestad Ejecutiva*

Art. 1° — La Asamblea General ordena que en la persona en quien se concontrase la suprema potestad ejecutiva, recaigan todas las facultades y preeminencias acordadas al Supremo Gobierno por el Estatuto de 27 de Febrero de 1813, y demás decretos posteriores.

Art. 2° — Ella será distinguida con la denominación de Director Supremo de las Provincias Unidas: tendrá el tratamiento de *Excelencia* y la escolta competente.

Art. 3° — Llevará una banda bicolor, blanca al centro y azul á los costados, terminada en una borla de oro, como distintivo de su elevada representación.

Art. 4° — Residirá en la Fortaleza de esta Capital, y la duración de su cargo será de dos años.

Art. 5° — En caso de muerte, renuncia ó absoluta imposibilidad del supremo Director para continuar en el Gobierno, se procederá á la elección del que deba sucederle.

Art. 6° — Disfrutará una pensión competente, que baste á sostener el decoro de la suprema autoridad.

Del Consejo de Estado

Art. 7° — La prudencia, sabiduría y acierto que deben presidir á todas las deliberaciones del Gobierno, y hacer la felicidad de las Provincias de su mando, exigen la creación de un Consejo de Estado, cual por este decreto se establece, compuesto de nueve Vocales, incluso el Presidente y Secretario, facultándose al Supremo Director para que pueda nombrar por sí dos supernumerarios para el Consejo, siempre que por las circunstancias lo halle convenir al mejor servicio del Estado.

Art. 8° — En las enfermedades graves que impidan al Supremo Director el desempeño de sus funciones, suplirá el Presidente del Consejo, con las mismas facultades y preeminencias; por tanto su nombramiento se hará siempre

por el Poder Legislativo, y el de Secretario y demás consejeros por el Supremo Director.

Art. 9º.—El Presidente y Secretario continuarán en el desempeño de sus respectivas funciones por todo el tiempo de su duración en el Consejo.

Art. 10.—Los Secretarios del despacho universal, se considerarán consejeros natos, é integrarán el número designado en el Art. 7º.

Art. 11.—Cada dos años cesarán los Consejeros: los de primera creación por el orden de posterioridad en sus nombramientos, y por el orden inverso los que fueren sucesivamente provistos: pueden ser reelegidos, si interesa al bien de la patria.

Art. 12.—No son comprendidos en el artículo anterior los secretarios de Estado.

Art. 13.—Las obligaciones y facultades del Consejo, consistirán en abrir al Supremo Director los dictámenes que tuviese á bien pedirles en los negocios de mayor gravedad, y elevar á su consideración aquellos proyectos que concierniere de utilidad y conveniencia del Estado.

Art. 14.—El Supremo Director deberá consultar indefectiblemente con su Consejo sobre las negociaciones que hubiere entablado, de paz, guerra y comercio con las Cortes extranjeras.

Art. 15.—Jurarán los Consejeros en manos del Supremo Director, al ingreso de sus respectivas plazas, ser fieles á la Patria, sacrificar sus desvelos á su felicidad, aconsejar al Supremo Gobierno con sabiduría y justicia, y guardar secreto inviolable sobre los negocios de su inspección.

Art. 16.—Cinco ministros formarán Consejo; sus deliberaciones se sentarán en un libro, firmadas por los presentes. El que tuviere opinión especial, podrá estamparla en el mismo libro.

Art. 17.—El Presidente llevará la voz y hará guardar el reglamento de su interior economía, que formará el mismo Consejo, con aprobación del Supremo Director.

Art. 18.—Se reunirán dos días á la semana ó más, si fueren convocados por el Supremo Director, ó lo exigiere la urgencia de los negocios.

Art. 19.—El Consejo tendrá el tratamiento de *Señoría* y sus individuos el de *Usted* llano. En las asistencias públicas acompañará al Supremo Director, presidiendo á las demás Autoridades.

Art. 20.—Ocuparán los Secretarios de Estado los asientos inmediatos al del Presidente, y los demás los que correspondan á su antigüedad.

Art. 21.—Por ausencia del Presidente, llevará la voz el más antiguo. Ningún consejero podrá ausentarse á distancia de cinco leguas sin licencia del Supremo Director, ni á menos, sin aviso del Presidente.

Art. 22.—Disfrutará de una pensión competente.

VALENTÍN GOMEZ, *Presidente*.
Hipólito Vieytes, Diputado Secretario.

(Redactor, número 19.)

57

Prescribiendo que sean pasando por las armas todos los individuos que ataquen al gobierno, los que divulguen ó inventen noticias falsas, los que promuevan la desertión ó seduzcan á los soldados, los que formen conspiraciones y finalmente, los que, conociendo su existencia, no las delaten.

*El Director Supremo del Estado, se ha servido expedir el decreto siguiente:—*Considerando que en esta Capital y en los pueblos de las demás Provincias que constituyen el Estado, existen algunos hombres perversos que, aprovechando las ocasiones que presentan las circunstancias, son por sistema ó por interés los agentes de las revoluciones, los que perturban la opinión pública con especies falsas y calumniantes, los detractores del Gobierno constituido y el azote del orden social. Que la condescendencia con que se los ha tratado hasta aquí, lejos de traerlos al conocimiento de sus deberes, sólo ha servido para animarlos en sus empresas sediciosas. Que en las circunstancias que nos rodean, y cuando los pueblos necesitan concentrar todos sus recursos para destruir la expedición enemiga que se dirige á nuestras costas, nada sería más funesto á los fines de la defensa común, que la falta de unidad de sentimientos y de subordinación al Gobierno que rige el Estado en situación tan peligrosa. Y que el Gobierno faltaría de un modo criminal á la más sagrada de sus obligaciones, si no velase sobre la conservación del orden, la defensa del Estado, la quietud de las familias y la felicidad de todos los ciudadanos, que es fin de todas las instituciones civiles. Por estas consideraciones, y oído previamente el dictamen de mi Consejo de Estado, he venido en expedir y mandar publicar el siguiente decreto:

Art. 1º Los españoles sin excepción alguna que, de palabra ó por escrito, directa ó indirectamente ataquen el sistema de libertad é independencia que han adoptado estas Provincias, serán pasados por las armas dentro de veinticuatro horas; y si algún americano, (lo que no es de es-

perar), incurriese en semejante delito, sufrirá la misma pena.

Art. 2° Todo individuo, sin escepción alguna, que invente ó divulgue maliciosamente especies alarmantes contra el Gobierno constituido, y capaces de producir la desconfianza pública, el odio y la insubordinación de los ciudadanos, serán castigados con las penas que fulminan las leyes 1ª y 2ª, título 18, libro VIII, de la Recopilación de Castilla; y en el caso que de resulta de dichas especies acaeciese algún movimiento, que comprometa al orden público, sufrirá la pena de muerte.

Art. 3° Todo individuo, sin escepción alguna, que directa ó indirectamente trate de seducir á los soldados ó promueva la desertión de los ejércitos de la patria, será pasado por las armas dentro de veinticuatro horas.

Art. 4° Todos los que sepan de un modo indudable, que se prepara una conspiración contra la autoridad constituida, están obligados á denunciarla, bajo la pena de ser reputados como consentidores y cómplices del mismo crimen: pero en caso de que sólo sean sospechas graves las que se tengan de semejante atentado, al honor y al celo de todo buen ciudadano corresponde el dar avisos oportunos á la comisión para que tome las medidas precaucionales que juzgue convenir.

Art. 5° Una comisión especial juzgará de estos delitos, privativa y militarmente, conforme al Reglamento que se le dará en oportunidad.

Art. 6° Los reos de los delitos de que trata este decreto, que se aprehendan en los pueblos de la jurisdicción del Gobierno, se remitirán inmediatamente á esta Capital, con sus respectivos procesos, para que sean juzgados por la Comisión.

Art. 7° El presente decreto se circulará por mis Secretaríos de Estado, á todas las autoridades de la dependencia de sus departamentos, se leerá á todos los cuerpos del ejército en la orden del día, se publicará por bando en todos los pueblos y se insertará en la «Gazeta del Gobierno», dando cuenta oportunamente á la Soberana Asamblea General.

Buenos Aires, á 28 de Marzo de 1815.

CARLOS DE ALVEAR.
Nicolás Herrera, Secretario.

(*Gazeta del Gobierno, número 7.*)

58

Acta por la cual el Exmo. Cabildo reasume la autoridad soberana

En la muy noble y leal ciudad de la Santísima Trinidad, puerto de Santa María de Buenos Aires, á diez y seis de Abril de mil ochocientos quince, los señores del Exmo. Ayuntamiento, á saber: Don Miguel Estanislao Soler, Comandante General de Armas; Don Francisco Antonio Escalada y Don Francisco Belgrano, Alcaldes de primero y segundo voto; y Regidores Don Manuel Oliden, Don José Clemente Cueto, Don Mariano Vidal, Don Laureano Rufino, Don Diego Barros, Don Gaspar de Ugarte, Don Juan de Alsina, Don Romualdo Segurola, Don Manuel Zamudio, Don Manuel Bustamante y el Doctor Don Mariano Tagle, Síndico Personero del Común.

Por cuanto en las apuradas circunstancias en que se halla la patria, de resultas de estar próximos á batirse dos ejércitos formados de uno que levantó el pueblo de Buenos Aires, para la defensa y seguridad de estas Provincias, este mismo pueblo, constante siempre en los inalterables principios de libertad y seguridad, habiendo ocurrido á la soberana Asamblea por el remedio á los intensos males que prepara una medida tan de suyo contraria á su existencia y conservación, ha tocado con el tropiezo de estar disuelta aquella corporación, por cuyo motivo ha visto frustradas en parte sus nobles ideas, y obstruido el primer paso que adoptó para cortar los inminentes riesgos y peligros que le rodean; habiendo, en consecuencia de estos conflictos, solicitado que este Cabildo, como su representante y única autoridad que existe, reasumiese la que él ha retrovertido, por la disolución absoluta de las que la ejercían, ha venido en declararlo así, reasumiendo provisoriamente por la premura de las circunstancias la autoridad soberana del pueblo, con la extensión de facultades que le son propias, y con la calidad de nombrar inmediatamente un Gobierno provisorio, el más adaptable á las ideas del pueblo y de las Provincias de quienes deberá recibir el sello de la aprobación, quedando, por ahora, la Comandancia de armas á cargo del señor Coronel Mayor D. Miguel Estanislao Soler.

Por tanto, y á fin de que llegue á noticia de todos, se publicará por bando en la forma acostumbrada, fijándose ejemplares en los parajes de estilo. — (Firmado por los señores del Exmo. Cabildo) — Por mandato del Exmo. Cabildo Gobernador, *José Manuel Godoy*, Escribano interino de Cabildo.

(*Hoja suelta.*)

Disposiciones relativas á la creación de un gobierno provisional

BANDO

El Exmo Cabildo de esta Capital.—Por cuanto, siendo imposible consultar en el momento el sufragio universal de las Provincias, no puede, por otra parte, mantenerse el Estado acéfalo, y sin aquel centro de unidad que conserve las relaciones exteriores é interiores, facilite los recursos á nuestra fuerza contra los enemigos de la causa americana, cautele la entera disolución de este nudo precioso, que infelizmente habia aflojado la tiranía entre unos Pueblos, que, sin ley constitucional, fácilmente correrían al caos de una nulidad política, en medio de disensiones domésticas y exclusivas: y siendo, por último, absolutamente necesario presentarles el remedio provisorio al lado de la crisis terrible de que acabamos de salvarnos por los esfuerzos de la Capital y de sus hermanos del benemérito ejército libertador:— Por tanto, ha acordado este Cabildo que inmediatamente se proceda á la elección de Gobierno provisional, en los términos siguientes:

La ciudad se divide en cuatro Departamentos. — El primero, se comprende en el espacio que abrazan una línea tirada desde la esquina de la Plaza, en la calle de las Torres, al Poniente, y otra al Norte, ambas hasta el fin de la ciudad. Este Departamento será presidido por el señor D. Manuel Oliden, que asociado de un Escribano (como lo harán los otros tres señores Regidores) recibirá los votos en su casa, situada en la misma calle, media cuadra de la Plaza al campo. El segundo Departamento, será el espacio comprendido entre dos líneas tiradas desde la misma esquina de las Torres, una al Este y otra al Norte. La presidirá el señor D. Laureano Rufino, en su casa, tres cuartas del correo al Retiro. — El tercer Departamento se comprende entre las líneas tiradas desde la misma esquina de las To-

rres, al Poniente y al Sud. La presidirá el señor D. Diego Antonio Barros, en su casa, que hace crucero con el cuartel de Patricios. El cuarto Departamento se comprende entre las líneas tiradas desde la esquina de las Torres, al este y al sud. La presidirá el señor D. Bernardo Seguro, en su casa dos cuadras de San Juan para Barracas.—Los ciudadanos de cada Departamento, concurrirán, á las ocho del día de mañana, hasta las seis de la tarde, á casa de los respectivos Presidentes, á nombrar tres electores correspondientes á su distrito. El voto irá bajo una cubierta cerrada y sellada, y el sobre en blanco. En la mesa del Presidente, firmará todo sufragante su nombre en el sobre-escrito, que también se rubricará por aquél y el Escribano. Los Escribanos numerarán y entregarán los papeles entregados por los votantes, echándolos en una caja que, concluida la hora, se conducirá cerrada á este Cabildo; el cual abrirá las cuatro sucesivamente, y cotejando en cada una los votos con su numeración y anotación, precederá al escrutinio.—Los tres ciudadanos que, en cada Departamento, saquen la pluralidad, se tendrán por electores para el nombramiento del Gobierno, al cual procederán, siendo citados acto continuo.—Reunidos en la Sala Capitular (de la cual se separará el Cabildo, que no tiene voto en esta función), nombrarán entre sí, un Presidente que haga guardar el orden, y decidiendo previamente la forma de Gobierno, harán su elección.—Nombrado y publicado el Gobierno Provisional que ejerza interinamente el Supremo Poder Ejecutivo, hasta las resultas del Congreso General de las Provincias, al segundo día de posesionado de este encargo, precisamente, les dirigirá una solemne convocatoria, para obtener su ratificación y el nombramiento de los Diputados que han de componer el Congreso, fijándoles el mismo Gobierno un lugar intermedio en el territorio de las Provincias Unidas, como punto de reunión para que allí reglamenten la Constitución del Estado. El Cabildo, en unión de los Electores, procederá á nombrar una Junta de Observación, compuesta del número de ciudadanos virtuosos que se hallase por conveniente, la que dará al nuevo Gobierno un Estatuto Provisional capaz de contener los grandes abusos que hemos experimentado, por restituir la libertad de imprenta, la seguridad individual y demás objetos de pública felicidad, reclamando la menor infracción enérgicamente.

El Cabildo organizará un manifiesto de todos los sucesos de esta gran revolución, en que por primera vez parece respirarse el dulce aire de la suspirada libertad. Para satis-

facción de nuestros conciudadanos, y que se glorien del fiel uso que hace el Cabildo de los derechos que, por momentos, le han depositado, publíquese en Bando, imprímase y figense en la forma ordinaria.—Dado en la Sala Consistorial de Buenos Aires, á 18 de Abril de 1815.—*Francisco Antonio Escalada—Francisco Belgrano—Manuel Luis Oliden—José Clemente Cueto—Mariano Vidal—Laureano Rufino—Diego Barros—Gaspar Ugarte—Juan Alsina—Romualdo Segurola—Manuel Zamudio—Manuel Bustamante—Doctor Nariano Antonio Tagle*, Síndico Procurador General—Por mandato de S. E., *José Ramón de Basavilbaso*.—Es copia, *Doctor Félix Ignacio Frías*, Secretario del Cabildo.

(Registro Oficial de la República Argentina, tomo I, página 309.
Publicación Oficial—Imprenta «La República»—Año 1879.)

Nombramiento del General Don José Rondeau, como Director del Estado y del Coronel Don Ignacio Alvarez Thomas, como suplente.

(Circular del Exmo. Cabildo Gobernador interino, á todos los Ayuntamientos y Gobiernos de las Provincias Unidas).—A consecuencia del Bando de 18 del corriente, circularado á todos los pueblos, se reunieron los electores, nombrados por el de esta Capital, para proceder á elegir la persona que hubiere de encargarse del mando de las Provincias, y recayó el nombramiento en la benemérita persona del Brigadier General del Ejército del Perú, D. José Rondeau, y en calidad de suplente, en la del General del Ejército Auxiliador, Coronel D. Ignacio Alvarez Thomas. El regocijo público que han inspirado á este pueblo ambas elecciones, responde de la buena fe que ha presidido el acto más solemne, público y libre que desde el principio de nuestra regeneración política se ha celebrado; sin embargo, los ciudadanos de Buenos Aires no estarán tranquilos, ni podrán alegrarse de su obra, hasta tanto que los demás pueblos ratifiquen, espontánea y generosamente, una elección que, si fuere posible, no hubieran hecho jamás sin su concurso. Buenos Aires no aspira á conservar una prepotencia funesta sobre los demás pueblos: respeta su opinión, sostiene sus derechos, y espera oír su voz para acreditarles que no habrá cosa que pueda romper los vínculos que los unen.

— El Coronel D. Ignacio Alvarez Thomas se ha posesionado del mando militar, que no admitia, sin peligro, un momento de acefalia; quedando el político en el Ayuntamiento, mientras la Junta de Observación forme el Estatuto que cautele los abusos del poder, para que, bajo este pacto sagrado, pueda el electo, entrar á ocupar el alto puesto á que lo ha elevado, por amor y bien de la patria, el sufragio de sus conciudadanos. Pero si á los demás pueblos les ocurre algun inconveniente en esta elección, ó en la del General del Ejército del Perú, deferirá gustoso Buenos Aires al voto de sus hermanas, sin orgullo y sin resentimiento. No se ha hecho otra cosa que poner una cabeza al frente del Estado, para establecer provisoriamente el orden y restituir la tranquilidad que desgraciadamente habíamos perdido. Este Cabildo, que comunica á V. E., aquella ocurrencia, para los objetos que se han indicado, espera la más pronta contestación para tranquilizar al pueblo en su obra; recomendando á Vd. la más decidida confianza en nuestra buena fe y pureza de intenciones, y en las formales protestas que hacemos de que la voluntad de Buenos Aires no es otra cosa que la que expresen sus hermanos de las Provincias; y que primero nos abandonaremos á toda la crueldad del destino, que convertir las armas ni atizar el fuego devorador de la discordia entre los defensores ilustres de una misma causa. — Dios guarde á V. E., muchos años. — Sala Capitular de Buenos Aires, Abril 21 de 1815. — *Francisco Antonio de Escalada* — *Francisco Belgrano* — *Manuel Luis de Oliden* — *José Clemente Cueto* — *Diego Antonio Barros* — *Mariano Vidal* — *Juan Alsina* — *Romualdo José Seguro* — *Manuel de Bustamante* — *Laureano Rufino* — *Mariano Tagle*, Síndico. — *Doctor Felix Ignacio Frías*, Secretario del Cabildo.

(Gazeta de Buenos Aires, número 1.)

59

Estatuto provisional para la dirección y administración del Estado, formado por la Junta de Observación nuevamente establecida en Buenos Aires, á 5 de Mayo de 1815.

La Junta de Observación encargada de formar un Estatuto Provisional para el régimen y Gobierno del Estado, que adoptando las medidas más exactas para proporcionar la felicidad común, precava igualmente á aquél del escandaloso desorden á que le había conducido la impropiedad de los anteriores Reglamentos, poniéndole á cubierto del criminal abuso que se ha hecho de ellos, en razón de la indiscreta franqueza que otorgaron á los administradores del sagrado depósito de los intereses públicos, y cuyos fatales forzosos resultados ha manifestado en todos tiempos una dolorosa experiencia que no ha muchos días llegó á vos, ¡oh pueblo virtuoso de Buenos Aires!, y arrancó de vuestra noble sensibilidad las lágrimas con que todavía humedeceis la ara augusta del altar del desengaño; deseando corresponder y dignamente á la honrosa confianza con que se le ha distinguido, y penetrada de la necesidad de reforzar los eslabones de la cadena que debe ligar los robustos brazos del despotismo, para que no pueda internarse al sagrado recinto donde se custodian *la Libertad, la Igualdad, la Propiedad y la Seguridad*, que hacen el precioso vello-cino, la rica herencia y los más interesantes derechos del hombre; y teniendo en consideración las insuperables dificultades que ofrece el necio propósito de formar una Constitución sin defectos, después de las horribles devastaciones que ha hecho en el espíritu humano el monstruo de la ambición que se agita furiosamente por traspasar los límites que le ha prefijado la justicia: que las innumerables y diversas constituciones que hoy hacen el imponente objeto del estudio y asidua meditación de los sabios, son otros tantos desgraciados monumentos de aquella desgraciada impotencia, y que la observación y la experiencia son los más rígidos resortes que pueden dar al espíritu esa fuerza bastante para estender la esfera de sus conocimientos, ha creído que para satisfacer los votos del pueblo y acercarle á la

senda que conduce á la felicidad común, según que lo permite su actual estado y la premura del tiempo y de sus circunstancias, debe establecer, como establece, las reglas siguientes:

SECCIÓN PRIMERA

DEL HOMBRE EN LA SOCIEDAD

CAPÍTULO I

De los derechos que competen á todos los habitantes del Estado

Art. I.—Los derechos de los habitantes del Estado, son: la vida, la honra, la libertad, la igualdad, la propiedad y la seguridad.

Art. II.—El primero tiene un concepto tan uniforme entre todos, que no necesita de más explicación. El segundo resulta de la buena opinión que cada uno se labra para con los demás, por la integridad y rectitud de sus procedimientos. El tercero es la facultad de obrar cada uno á su arbitrio, siempre que no viole las leyes ni dañe los derechos de otro. El cuarto consiste en que la ley, bien sea perceptiva, penal ó tuitiva, es igual para todos y favorece igualmente al poderoso que al miserable para la conservación de sus derechos. El quinto es el derecho de gozar de sus bienes, rentas y productos. El sexto es la garantía que concede el Estado á cada uno, para que no se le viole la posesión de sus derechos, sin que primero se verifiquen aquellas condiciones que estén señaladas por la ley para perderla.

Art. III.—Todo hombre gozará de estos seis derechos en el territorio del Estado, sea americano ó extranjero, sea ciudadano ó no.

CAPÍTULO II

De la religión del Estado

Art. I.—La religión católica, apostólica, romana, es la religión del Estado.

Art. II.—Todo hombre deberá respetar el culto público y la religión santa del Estado; la infracción de este artículo será mirada como una violación de las Leyes fundamentales del país.

CAPÍTULO III

De la ciudadanía

Art. I.—Todas las Municipalidades formarán un registro público de dos libros: en uno, se inscribirán indispensable-

mente todos los ciudadanos, con expresión de su edad y origen, sin cuyo requisito no podrán sufragar en los actos públicos de que adelante se tratará; y en el otro, los que hayan perdido el derecho de ciudadanía, ó se hallen suspensos de ella.

Art. II.—Todo hombre libre, siempre que haya nacido y resida en el territorio del Estado, es ciudadano, pero no entrará al ejercicio de este derecho, hasta que haya cumplido 25 años ó sea emancipado.

Art. III.—Todo extranjero de la misma edad, que haya residido en el país por más de cuatro años, y se haya hecho propietario de algún fundo, al menos de cuatro mil pesos, ó en su defecto ejerza arte ú oficio útil al país, gozará de sufragio activo en la Asamblea y comicios públicos, con tal que sepa leer y escribir.

Art. IV.—A los diez años de residencia tendrá voto pasivo, y podrá ser elegido para los empleos de la República, mas no para los del Gobierno. Para gozar ambos sufragios, debe renunciar, antes, toda otra ciudadanía.

Art. V.—Ningún español europeo podrá disfrutar del sufragio activo ó pasivo, mientras los derechos de estas Provincias no sean reconocidos por el Gobierno de España.

Art. VI.—Los españoles, sin embargo, decididos por la libertad del Estado y que hayan hecho servicios distinguidos á la causa del país, gozarán de la ciudadanía; pero deben obtener la correspondiente carta, que expedirá por ahora, hasta el Congreso General, el Jefe respectivo de la Provincia, asociado del Ayuntamiento ó de su Capital.

Art. VII.—Los nacidos en el país, que sean originarios por cualquiera línea de Africa, cuyos mayores hayan sido esclavos en este continente, tendrán sufragio activo, siendo hijos de padres ingenuos; y pasivo, los que ya estén fuera del cuarto grado respecto de dichos sus mayores.

CAPÍTULO IV

Prerrogativas del ciudadano

Art. I.—Cada ciudadano es miembro de la soberanía del pueblo.

Art. II.—En esta virtud, tiene voto pasivo y activo en los casos y forma que designa este Reglamento provisional.

CAPÍTULO V

De los modos de perderse y suspenderse la ciudadanía

Art. I.—La ciudadanía se pierde: por la naturalización en país extranjero; por aceptar empleos, pensiones ó distinciones de nobleza de otra Nación; por la imposición legal de pena aflictiva ó infamante, y por el estado de deudor dolosamente fallido, si no se obtiene nueva habilitación después de purgada la nota.

Art. II.—La ciudadanía se suspende: por ser deudor á la hacienda del Estado, estando ejecutado; por ser acusado de delito, siempre que éste tenga cuerpo justificado y por su naturaleza merezca pena corporal, aflictiva ó infamante; por ser doméstico asalariado; por no tener propiedad ú oficio lucrativo y útil al país; por el estado de furor ó demencia.

Art. III.—Fuera de estos casos, cualquiera autoridad ó magistrado que prive á un ciudadano de sus derechos civiles, incurre en la pena del Talión.

Art. IV.—Los Jueces que omitan pasar á las respectivas Municipalidades nota de los que deben ser borrados de los registros cívicos, por haber sido condenados en forma legal, serán privados de voto activo y pasivo en dos actos consecutivos.

CAPÍTULO VI

Deberes de todo hombre en el Estado

Art. I.—Todo hombre, en el Estado, debe, primero, su misión completa á la Ley, haciendo el bien que ella prescribe, y huyendo el mal que prohíbe.

Art. II.—Obediencia, honor y respeto á los magistrados y funcionarios públicos, como ministros de la ley y primeros ciudadanos.

Art. III.—Sobrellevar gustoso cuantos sacrificios demande la patria en sus necesidades y peligros, sin que se exceptúe el de la vida, sino que sea para el extranjero.

Art. IV.—Contribuir, por su parte, al sostén y conservación de los derechos de los ciudadanos, y la felicidad pública del Estado.

Art. V.—Merecer el grato y honroso título de hombre de bien, siendo buen padre de familia, buen hijo, buen hermano y buen amigo.

CAPÍTULO VII

Deberes del cuerpo social

Art. I.—El cuerpo social debe garantizar y afianzar el goce de los derechos del hombre.

Art. II.—Aliviar la miseria y la desgracia de los ciudadanos, proporcionándoles los medios de prosperar é instruirse.

Art. III.—Toda disposición ó Estatuto contrarios á los principios establecidos en los artículos anteriores, será de ningún efecto.

SECCIÓN SEGUNDA

DEL PODER LEGISLATIVO

Capítulo y Artículo único

El Poder Legislativo reside en los pueblos originariamente; hasta la determinación del Congreso General de las Provincias la Junta de Observación sustituirá, en vez de Leyes, Reglamentos Provisionales en la forma que éste prescribe, para los objetos necesarios y urgentes.

SECCIÓN TERCERA

DEL PODER EJECUTIVO

CAPÍTULO I

De la elección y facultades del Director del Estado

Art. I.—El Director del Estado ejercerá el Poder Ejecutivo en todo su territorio; su edad será la de treinta y cinco años cumplidos; su elección ya está verificada, según las circunstancias que han ocurrido en el presente tiempo; en lo sucesivo, se practicará según el Reglamento particular que deberá formarse, sobre el libre consentimiento de las Provincias y la más exacta conformidad á los derechos de todas.

Art. II.—Recaerá precisamente la elección en persona de reconocido patriotismo, integridad, concepto público, buenas costumbres y aptitud para el cargo.

Art. III.—Podrá ser vecino y natural de cualquiera de los pueblos del Estado, con residencia dentro de él, al menos de cinco años inmediatos á su elección, aunque éstos hayan sido interrumpidos por un año intermedio de ausencia.

Art. IV.—Durará el mando solo un año, contado desde el día de su recepción.

Art. V.—Su sueldo será el de doce mil pesos anuales, sobre los fondos del Estado.

Art. VI.—No disfrutará de ningún otro emolumento ni derecho, bajo cualquier pretexto ó causa.

Art. VII.—No tendrá más tratamiento que el de Escelencia.

Art. VIII.—Su guardia y honores los de Capitán General de Ejército, con entera sujeción á los títulos primero y sexto, tratado tercero, de las Ordenanzas Militares, guardándose el ceremonial que se formará, para las concurrencias públicas.

Art. IX.—Al ingreso de su cargo deberá prestar juramento ante el Exmo. Cabildo, y la Junta de Observación, con asistencia de las demás corporaciones civiles y militares, en la forma siguiente:

«Yo, N., juro por Dios nuestro señor y estos Santos Evangelios, que desempeñaré fiel y legalmente el cargo de Director del Estado, para el que he sido elegido; que cesaré en el mando luego que sea requerido por la Junta de Observación y el Exmo. Ayuntamiento; que observaré el Reglamento Provisional formado por dicha Junta, establecida por la voluntad del pueblo; que defenderé la Patria y sus derechos, de cualquier agresión.—Si así lo hiciera, Dios me ayude, y sino, él y la patria me hagan cargo.»

Art. X.—La protección de la Religión del Estado, su defensa y felicidad; el puntual cumplimiento y ejecución de las leyes que actualmente rigen; el mando y organización de los ejércitos, armada, milicias nacionales; el sosiego público; la libertad civil; la recaudación y económica, arreglada inversión de fondos públicos, y la seguridad real y personal de todos los que residen en el territorio del Estado, son otras tantas atribuciones de su autoridad.

Art. XI.—Nombrará los embajadores, cónsules y enviados para las demás naciones y potencias extranjeras, y recibirá todos los que de esta clase vinieren de las mismas á este Estado, dando inmediatamente aviso instruido á la Junta de Observación, bajo grave responsabilidad, de los motivos y objetos de su misión en ambos casos, igualmente que de sus contestaciones.

Art. XII.—Vigilará particularmente sobre el aumento de la población, agricultura y comercio: arreglo de minería, correos, postas, caminos y repesalias: concederá los pasaportes para dentro y fuera de las Provincias del Estado, por mar y tierra y las licencias para la carga y descarga, entrada y salida de las embarcaciones.

Art. XIII.—Nombrará los tres Secretarios de Gobierno,

Guerra y Hacienda y sus respectivos oficiales, siendo responsable de la mala elección de los primeros, sin que en manera alguna puedan ser electos los parientes del Director, hasta el tercer grado inclusive, ni provistos en otro cualquiera empleo, sin noticia y aprobación de la Junta de Observación.

Art. XIV.—La provisión de empleos en el ramo de Hacienda, de cualquier clase que sean y que no estén exceptuados en este Reglamento, la hará, á propuesta de los respectivos jefes del ramo á que correspondan, por escala de antigüedad y servicios, publicándose dicha propuesta en la oficina ó Departamento respectivo, ocho días antes de encastrarla al Director, quedando así á los agraviados franco el recurso de sus derechos á la autoridad que corresponda, espresándose en el despacho ó nombramiento la indispensable calidad de *propuesta*, sin la cual ni se tomará razón de él en el Tribunal de cuentas y Oficinas, ni se acudirá con el sueldo al que de otro modo fuese provisto.

Art. XV.—Los funcionarios públicos que deban tener la calidad de letrados, serán nombrados por el Director, á propuestas que harán las respectivas Cámaras de Apelaciones.

Art. XVI.—La duración de todo empleado será la de su buena y exacta comportación, y será removido siendo inepto ó delincuente, con causa probada y audiencia suya, á no ser de los exceptuados en el presente Reglamento.

Art. XVII.—Los recursos de esta naturaleza y los de que habla el Art. XIV de este Capítulo, se harán por los interesados á la Junta que debe establecerse, compuesta del Presidente de la Cámara, el Decano del Tribunal de Cuentas, el Ministro de Cajas más antiguo y el Fiscal de dicha Cámara, quedando concluída, con la determinación de dicha Junta, toda instancia, sin más recurso, y procediéndose en ellos sumariamente.

Art. XVIII.—Esta misma Junta conocerá en grado de apelación y primera suplicación, de los pleitos sobre contrabandos y demás ramos de hacienda.

Art. XIX.—Teniendo el Director la Superintendencia General en todos los ramos y fondos del Estado, de cualquier clase y naturaleza que sean, se arreglará, por ahora, á las disposiciones de la Ordenanza de Intendentes, excepto en cuanto á la Junta Superior, que sigue abolida, sin alterar el método de cuenta y razón que actualmente se observa en las oficinas públicas.

Art. XX.—Sin embargo de la supresión de dicha Junta Superior, no podrá por esto el Director disponer por sí solo

á su arbitrio, los gastos, obras, aprestos y erogaciones extraordinarias, sino asociado en una Junta que formarán, con voto decisivo, el mismo Director, el Decano del Tribunal Mayor de Cuentas, el Ministro más antiguo de la Caja principal, el Alcalde de primer voto, el Prior del Consulado, el Fiscal de la Cámara, y el Procurador General de la ciudad, estendiéndose los acuerdos ante el Escribano de Hacienda, y debiendo tener voto solo informativo en dicha Junta, el Secretario de ella.

Art. XXI.—Cuidará, con particularidad, de mantener el crédito de los fondos del Estado, consultando eficazmente su recaudación, y el que se paguen con fidelidad las deudas, en cuanto lo permita la existencia de caudales y atenciones públicas.

Art. XXII.—Remitirá á la Junta de Observación, cada tres meses, una prolija razón que demuestre, por clases y ramos, los ingresos, las inversiones y existencias.

Art. XXXIII.—Conocerá privativamente en las causas de contrabandos y demás de Hacienda: las que no fueren de esta clase, serán remitidas á los Tribunales de Justicia á que correspondan; pero las sentencias contra el Fisco no serán ejecutadas sin mandato especial del Director, quien podrá suspender los libramientos si el pago fuese incompatible con las urgencias de utilidad común.

Art. XXIV.—Entenderá en el establecimiento y dirección de las Casas de Moneda y Bancos.

Art. XXV.—Podrá mantener las relaciones exteriores: conducir las negociaciones, hacer estipulaciones preliminares: firmar y concluir tratados de tregua, paz, alianza, comercio, neutralidad y otras convenciones: pero todos estos graves é importantes particulares y el de la declaración de guerra, no podrá nunca resolverlos por sí solo, si no fueren primero acordados por la Junta de Observación, Comisión Militar de Guerra y Tribunal de Consulado, en su caso.

Art. XXVI.—Podrá confirmar ó revocar, con arreglo á ordenanza y dictamen de su Asesor General (que deberá ser también auditor General de Guerra) en último grado, las sentencias dadas contra militares en esta Capital por la Comisión Militar que se halla establecida, y en los demás pueblos del distrito, por los Consejos de Guerra ordinarios.

Art. XXVII.—Tendrá facultad de suspender las ejecuciones capitales ordenadas y conceder perdón ó conmutación en el día del aniversario de la libertad del Estado, ó con ocasión de algún insigne acontecimiento que le añada nuevas glorias; pero esta prerrogativa no la podrá ejercer con

los delincuentes de traición á la patria y demás delitos esceptuados.

Art. XXVIII.—En el caso de renuncia, enfermedad ó muerte de éste, entrará á reemplazar su lugar hasta que se verifique nueva elección, según el artículo primero de este capítulo, el que inmediatamente nombrase la Junta de Observancia, unida con el Exmo. Cabildo para el pronto remedio de la ocurrencia.

Art. XXIX.—En el de ausencia, que sólo será en defensa de la patria, ú otro impedimento legítimo que le embarrace el desempeño de sus deberes y despacho de los negocios públicos por más de ocho días, se hará por la Junta y Cabildo el mismo nombramiento.

Art. XXX.—Luego que se posesione del mando, invitará con particular esmero y eficacia á todas las Ciudades y Villas de las Provincias interiores, para el pronto nombramiento de Diputados que hayan de formar la Constitución, los cuales deberán reunirse en la ciudad del Tucumán, para que allí acuerden el lugar en que hayan de continuar sus sesiones, dejando al arbitrio de los pueblos el señalamiento de viático y sueldo á sus respectivos representantes.

CAPÍTULO II

Límites del Poder Ejecutivo y autoridad del Director

Art. I.—No podrá, fuera de los casos que expresa este Reglamento, intervenir en negocio alguno judicial, civil ó criminal contra persona alguna de cualquier clase ó condición que fuese, ni alterar el sistema de administración de justicia.

Art. II.—Cuando la urgencia del caso le obligue á arrestar á algún ciudadano, deberá ponerlo, dentro de las veinticuatro horas, á disposición de los respectivos Magistrados de Justicia, con toda la independencia que corresponde al Poder Judicial, pasándoles los motivos para su juzgamiento.

Art. III.—No proveerá ni presentará, por ahora, ninguna canongía ó prebenda eclesiástica.

Art. IV.—No podrá disponer expedición alguna militar para fuera de esta Provincia, ni imponer pechos, contribuciones, empréstitos, ni aumento de derechos de ningún género, sin previa consulta y determinación de la Junta Observadora, unida con el Exmo. Cabildo y Tribunal del Consulado.

Art. V.—No expedirá orden ni comunicación alguna, sin que vaya suscripta del respectivo Secretario del Departa-

mento á que corresponda el negocio, bajo responsabilidad de ambos por los daños que causaren.

Art. VI.—No podrá conceder á ninguna persona del Estado exenciones ni privilegios exclusivos, escepto á los inventores de artes ó establecimientos de pública utilidad, con aprobación de la Junta Observadora.

Art. VII.—No podrá absolutamente, en ningún caso, por sí solo violar ó interceptar, directamente, la correspondencia epistolar de los ciudadanos, la que debe reservarse como sagrada; y cuando por algún raro ó extraño accidente, fuese preciso practicar la apertura de alguna correspondencia, lo verificará con previa noticia y consentimiento de la Junta Observadora, Fiscal de la Cámara y Procurador General de la ciudad, que en el caso tendrán voto, con juramento del secretario; como también el administrador de correos, solo consultivo: cuando haya de interrumpirse, suspenderse ó variarse el curso de ellos.

CAPÍTULO III

De los Secretarios de Estado

Art. I.—Los tres Secretarios de Estado entenderán respectivamente en todos los negocios que se hallan deslindados en el último Reglamento de Secretarios, el que por ahora subsistirá, en lo que no estuviere en oposición con éste.

Art. II.—Los espresados Secretarios no podrán por sí solos, en ningún caso, negocio ni circunstancias, tomar deliberaciones arbitrarias, sin previo mandato y anuencia del Director del Estado, limitando sus funciones á las de meros subalternos, y con calidad de que cuantas órdenes comunicaren por escrito á nombre del Director, á las corporaciones, magistrados, oficinas é individuos particulares, hayan de estar autorizadas con la rúbrica de aquél al margen, para certidumbre de su conocimiento, sin cuyo requisito no tendrán efecto alguno, y serán desatendidas impunemente.

Art. III.—Ninguno de los Secretarios podrá autorizar órdenes, decretos ó providencias contrarias á este Estatuto, sin que le sirva de escepción la Junta, mandato ó fuerza del Director.

Art. IV.—Serán amovibles, á la voluntad del Director, ó cuando lo exija la Junta de Observación, igualmente que los oficiales de dichas Secretarías; pero esta separación no inferirá nota á las personas, no siendo por causa legítima ó probada en juicio formal, y deberán los separados ser atendidos para otros destinos, conforme á su capacidad y mérito.

Art. V.—El Secretario de Hacienda no podrá entorpecer, modificar ó trabar los pagos y libramientos decretados por el Director, que deberán cumplirse con fidelidad en la Tesorería principal del Estado, á donde han de dirigirse, quedando rigurosamente prohibida otra vía de pago.

Art. VI.—El sueldo de dichos Secretarios será de tres mil pesos anuales y su tratamiento el de Vd. llano.

SECCIÓN CUARTA

DEL PODER JUDICIAL

CAPÍTULO I

Del ejercicio del Poder Judicial

Art. I.—El ejercicio del Poder Judicial, por ahora y hasta la resolución del Congreso General, residirá en el Tribunal de recursos extraordinarios de segunda suplicación, nulidad é injusticia notoria: en las Cámaras de Apelaciones y demás Juzgados inferiores.

Art. II.—No tendrá dependencia alguna del Poder Ejecutivo del Estado, y en sus principios y formas estará sujeto á las leyes de su instituto.

CAPÍTULO II

De los Tribunales de Justicia

Art. I.—Ninguno podrá ser nombrado en adelante, ni aun interinamente, para los empleos de las Cámaras de Apelaciones, si no es mayor de veinticinco años, y letrado recibido, con seis años, al menos, de ejercicio público.

Art. II.—El tratamiento de las Cámaras de Apelaciones será el de Excelencia, y el de sus individuos en particular, de Vd. llano. Su sueldo anual, por ahora, y atentas las escaseces del erario público, será de dos mil quinientos pesos.

Art. III.—Los nombramientos de los individuos de las Cámaras, se harán por el Director del Estado, á propuesta del cuerpo de abogados residentes en la ciudad del asiento de dichas Cámaras, en la forma siguiente:

Art. IV.—Llegado el caso de la vacante, el Presidente de la Cámara designará día y lugar en que se reunan todos los abogados, sin excusa, citándolos previamente al efecto; y verificada la reunión, nombrarán, á pluralidad de votos, un Presidente entre ellos, que haga guardar el orden, y un Secretario.

Art. V.—Inmediatamente se traerá á la vista la matrícula

de todos los letrados residentes en el distrito; de ellos nombrarán, del mismo modo, tres candidatos, de los cuales uno residirá en cualquier lugar del distrito, fuera de la Capital; y firmada la acta de la elección, la pasarán en testimonio, por conducto del Presidente de la Cámara, al Director, para el nombramiento.

Art. VI.—Los juzgados de primera y segunda instancia conocerán de todas las causas que hasta ahora han sido peculiares de su autoridad.

Art. VII.—Las Cámaras conocerán, no solo de todas las causas de que conocían las Audiencias extinguidas, según las leyes, (salvo las que excluye este Reglamento), sino también de las que él nuevamente les designe.

CAPÍTULO III

De la Administración de Justicia

Art. I.—Seguirá la Administración de justicia los mismos principios que hasta el presente, con las reformas siguientes:

Art. II.—Primera. Queda abolido en todas sus partes el Reglamento de Administración de Justicia de 20 de Abril de 1812, y restablecido el orden de derecho para la prosecución de causas criminales, con la calidad de que en éstas se permite á los reos nombrar un padrino que presencie su confesión y declaración de los testigos, cuidando que ambas se sienten por el Escribano ó Juez de la causa, clara y distintamente, en los mismos términos en que hayan sido espresadas, sin modificaciones ó alteraciones, ayudando al reo en todo aquello en que por el temor, pocos talentos ú otra causa, no pueda por sí mismo espresarse; entendiéndose que dicho padrino será á voluntad del reo, sin perjuicio del Abogado y Procurador establecidos por la ley y práctica de los Tribunales.

Art. III.—Segunda. Las causas criminales de todas clases que se hallen iniciadas al tiempo de la publicación de este Reglamento, sin el nuevo sistema de defensa que establece el artículo anterior, seguirán en sus posteriores actuaciones y orden de proceder, el mismo antiguo que han tenido en las primeras.

Art. IV.—Tercera. Queda restituído el juramento en todos los casos civiles y criminales que lo prescriben las leyes, sin innovación alguna, escepto en la confesión del reo sobre hecho ó dicho propio, en que no se le deberá exigir.

Art. V.—Cuarta. En los recursos de segunda suplicación, nulidad é injusticia notoria, las Cámaras, terminada la subs-

tanciación del grado, darán cuenta con autos al Director del Estado, quien deberá nombrar inmediatamente una comisión de cinco letrados que la determinen, la cual, concluido su acto, quedará disuelta; esta Comisión, durante el ejercicio de sus funciones, tendrá tratamiento de Esclencia.

Art. VI.—Quinta. Los recursos de nulidad é injusticia notoria de las sentencias del Tribunal de Alzadas de Comercio, se decidirán en la Cámara de Apelaciones.

Art. VII.—Sexta. El Juzgado de Alzadas turnará por un año entre los individuos de la Cámara.

Art. VIII.—Séptima. Quedan restituidos los Procuradores de número en las Cámaras de Apelaciones, en la forma que prescriben las leyes y ha establecido la práctica, estendiéndose su intervención á los Juzgados Subalternos de primera instancia, excepto en el Consulado, Juzgado de Alzadas y Diputación de Comercio.

Art. IX.—Octava. Los escribanos harán, personalmente, las notificaciones á las partes, suscribiéndolas éstas, y en el caso de no saber escribir, suplirá por ellos un testigo con espresión del defecto del principal interesado, siendo responsables los escribanos de la omisión de tan interesante punto, que penará el Juez de la causa, según la entidad y circunstancia del caso.

Art. X.—Nona. Queda enteramente abolido y disuelto el Tribunal de Concordia: los Jueces de primera instancia ante quienes se promuevan las demandas, deberán invitar á las partes á la transacción y conciliación de ellas por todos los medios posibles, antes de entrar á conocer judicialmente.

SECCIÓN QUINTA

DE LAS ELECCIONES PARTICULARES Y FORMA DE ELLAS.

CAPÍTULO I

De las personas y empleados que deben ser elegidos popularmente

Artículo único.—Serán nombrados por elecciones populares, y en la forma que prescribe este reglamento:—1°. El Director del Estado.—2°. Los Diputados representantes de las Provincias para el Congreso General.—3°. Los Cabildos seculares de las ciudades y villas.—4°. Los Gobernadores de Provincia.—5°. Los individuos de la Junta de Observación, luego que hayan concluido su término los que actualmente la componen.

CAPÍTULO II

*De las elecciones de Diputados de las Provincias para
el Congreso General y forma de ellas.—
Asambleas primarias.*

Art. I.—Para las Asambleas primarias que han de celebrarse para la elección de Diputados de Provincias, se formará antes, indispensablemente, un censo puntual de todos los habitantes de su distrito, si no estuviere ya formado por lo menos de ocho años á esta parte, con la respectiva separación de ciudades, villas y pueblos.

Art. II.—Las Asambleas primarias, en las ciudades y villas donde hubiese Municipalidades, se harán en cuatro secciones, y cada una será presidida por un miembro de la municipalidad y dos Jueces de barrio de la mayor probidad, auxiliados de un Escribano, si hubiese número competente de estos oficiales, y en su defecto de dos testigos.

Art. III.—En cada sección darán su voto los sufragantes, por tanto número de electores cuantos correspondan al total de la población, de suerte que resulte un elector por cada *cinco mil* almas; pero si la ciudad ó villa no sufriese las cuatro secciones, se hará la votación en un solo lugar.

Art. IV.—En la campaña guardará la misma proporción cada elección; pero el método de las secciones será diverso.

Art. V.—En cada Asamblea primaria habrá secciones de proporción y secciones de número. Cada parroquia será una sección de proporción, y cada ciudadano votará en ella por un elector.

Art. VI.—El Juez principal del curato y el cura, con tres vecinos de probidad, nombrados por la Municipalidad del distrito, se juntarán en casa del primero y recibirán los sufragios, según fueren llegando, los cuales depositarán inmediatamente en un arca pequeña de tres llaves, que se distribuirán entre el Juez, el Cura y uno de los vecinos asociados.

Art. VII.—El sufragio podrá darse de palabra ó por escrito, abierto ó cerrado, según fuere del agrado del sufragante, y en él se nombrará la persona que ha de concurrir á la Asamblea General con la investidura de elector.

Art. VIII.—Después de entregado el sufragio, ó escrito en una cédula el que se diere de palabra, se retirará el sufragante, cuidando de esto los Jueces, para evitar confusión y altercados.

Art. IX.—Si alguno dedujese en aquel acto ó después,

queja sobre cohecho ó soborno, deberá hacerse, sin pérdida de instantes, justificación verbal del hecho ante los cinco Jueces de aquella sección, reunidos al efecto al acusado, y siendo cierto, serán privados de voz activa y pasiva perpetuamente el sobornante y sobornado. Los calumniadores, sufrirán la misma pena, por aquella ocasión, y de este juicio no habrá más recurso.

Art. X.—Concluido el término perentorio de dos días, que durará la recepción de votos, quedarán cerrados los actos de aquella sección, y al otro día el Alcalde, con dos de los tres vecinos asociados, conducirán la arca cerrada á la sección de número, entregando entonces el Cura su llave al que corresponda.

Art. XI.—El distrito de curatos reunidos que comprendan en su territorio cinco mil almas, es la sección de número.

Art. XII.—Cuando no hubiere alguna villa en el distrito de sección de número, la Municipalidad inmediata de aquel territorio, señalará el curato que ha de ser cabeza de la sección, prefiriendo siempre el de vecindario más numeroso, y las dudas que en ellos ocurran.

Art. XIII.—A la cabeza de la sección de número deberán conducirse las arcas de las secciones de proporción, las que recibirán el Juez, el cura y tres asociados de los de mayor probidad é instrucción, y abriéndolas, contarán los sufragios y calificarán la pluralidad, practicando este acto publicamente, y á presencia de todos los que quieran concurrir á él.

Art. XIV.—Al que resultare con mayor número de votos para elector, se le notificará que se traslade inmediatamente al lugar donde ha de celebrarse la Asamblea electoral.

CAPÍTULO III

De las Asambleas electorales

Art. I.—Las Asambleas electorales se congregarán en la cabeza de cada Provincia, donde deberán reunirse los electores el día que se señalase, según la distancia y circunstancias, sin demoras, y celebrarán sus sesiones en la casa de la Municipalidad.

Art. II.—El Jefe de la Provincia presidirá el primer acto de los electores, que será nombrar un Presidente de entre ellos, para guardar el orden, y nombrado á pluralidad de votos, le cederá el lugar, retirándose inmediatamente.

Art. III.—La Asamblea electoral estenderá sus actas con el Escribano de la Municipalidad y podrá acordar previa-

mente aquellas cosas que sean precisas para establecer el buen orden y validez de su elección, sin preocuparse en esos actos más tiempo que el preciso de veinte y cuatro horas.

Art. IV. — Procederá inmediatamente á la elección de Diputados en el Congreso, para la que han sido reunidos los electorales, y la elección, por ahora, resultará de la simple pluralidad de votos.

Art. V. — Si el caso fuese tal que por la dispersión de sufragios y la adhesión de cada sufragante al suyo, después de repetida hasta tres veces la votación, no resultase ni simple pluralidad, entonces, los que tuviesen igualdad de votos entrarán en suerte y ésta decidirá.

Art. VI. — Ninguno de los electores puede darse el voto á sí mismo, y dentro de tercero día debe quedar indispensablemente concluida y publicada la elección, la que el Presidente de la Asamblea electoral comunicará al electo inmediatamente, con testimonio de la acta autorizada por el Escribano.

Art. VII. — Como el censo de que habla el Art. I, Cap. 2°, ha de ser el fundamento para el número de Representantes ó Diputados que han de asistir al Congreso General, se arreglará de modo que por cada quince mil almas se nombre uno.

Art. VIII. — Si al formarse este arreglo se hallasen algunas fracciones, se observarán las reglas siguientes:

Art. IX. — Primera. Si en la elección de número que se arregla para elegir, hubiese alguna fracción que no esceda de dos mil y quinientas almas, sólo se votará por un elector; pero si la fracción pasa de este número en la sección, se votará por dos electores.

Art. X. — Segunda. Si en el distrito de las quince mil almas, que debe representar cada Diputado, hubiese una fracción que escediese de siete mil y quinientas, se nombrará por ellas, en la Asamblea General, un Diputado, como si llegase al número señalado; pero si la fracción fuese menor, no tendrá más representante y quedará comprendida en la representación que hacen los Diputados por la Provincia.

Art. XI. — Si alguna de éstas encontrase por ahora grandes dificultades para practicar sus elecciones por el modo que se ha prescripto para la campaña, podrá libremente sustituir el que crea más oportuno, procurando, siempre, que el número de Diputados sea correspondiente á la masa de la población, según la proporción que queda establecida.

CAPÍTULO IV

De las elecciones de Cabildos seculares

Art. I. — Las elecciones de los empleos concejiles, sólo se harán popularmente en las ciudades y villas donde se hallen establecidos los Cabildos.

Art. II. — La ciudad ó villa se dividirá en cuatro secciones, y en cada una de ellas votarán todos los ciudadanos allí comprendidos, por uno ó más electores, según corresponda al número de habitantes en dicha sección.

Art. III. Este acto será presidido por un Capitular, asociado de dos alcaldes de barrio y un escribano, si lo hubiese, ó en su defecto dos vecinos, en calidad de testigos, y se practicará el 15 de Noviembre.

Art. IV. — Concluida la votación en las secciones, se reunirán todos los votos de ellas en la Sala Capitular, y hecho allí por los mismos regidores que la han presidido, y el Alcalde de primer voto, públicamente, el escrutinio general: serán electores los que resulten con mayor número de sufragios.

Art. V. — Estos se juntarán en la misma Sala Capitular á hacer la elección para el año entrante, el día 15 de Diciembre, y concluida se notificará á los electos, á fin de que estén espeditos para su recepción el día primero de Enero, en que serán posesionados por el Cabildo saliente.

CAPÍTULO V

De las elecciones de los Gobernadores de Provincia

Art. I. — Los Gobiernos de las Provincias serán nombrados por los respectivos electores de ellas.

Art. II. — Para este nombramiento, elegirán dichos electores, seis ciudadanos de las calidades necesarias, cuyos nombres serán insaculados, y los tres primeros que salgan por suerte, serán otros tantos candidatos, de los cuales elegirán, á pluralidad de sufragios, el que haya de ser Gobernador de la Provincia.

Art. III. — Hecho el nombramiento, se comunicará al electo y al Cabildo de la ciudad capital de su residencia, para que lo reciba luego que el anterior haya cumplido su tiempo.

Art. IV. — Durarán los Gobernadores en su empleo el término de tres años. — Su sueldo será el que le señale la Provincia.

Art. V. — Los Tenientes Gobernadores serán nombrados por el Director, á propuesta en ternario del Cabildo de su residencia.

Art. VI. — Los subdelegados serán nombrados por los Gobernadores de la Provincia, á igual propuesta que hará el Cabildo de la capital de ella.

CAPÍTULO VI

De la elección de los individuos de la Junta de Observación

Art. único. — La elección de los individuos de la Junta de Observación, se hará, por ahora, en la forma prescrita por el Bando del Exmo. Cabildo de esta Capital, de 18 de Abril anterior, hasta la formación del Reglamento de que habla el artículo primero, capítulo primero, sección tercera de éste.

SECCIÓN SEXTA

DEL EJÉRCITO Y ARMADA

CAPÍTULO I

De las tropas veteranas y marina

Art. I. — Residiendo en el Director del Estado toda la autoridad militar, en la plenitud de facultades que designan las ordenanzas de mar y tierra al Capitán General de Ejército y Armada, cuyas fuerzas debe mandar, queda privado de mezclarse en lo interior y económico de todos los cuerpos de línea de tierra, para cuyo arreglo nombra inmediatamente un Inspector General que llene con exactitud las funciones que detalla el título 8º, Tratado 3º de las Ordenanzas del Ejército.

Art. II. — En lo respectivo á las fuerzas de mar, disciplina, economía y completo arreglo de ellas, seguirá las disposiciones de la Ordenanza de Marina que actualmente rige, en todo lo adaptable á las actuales circunstancias del Estado, como también la de Intendencia, en lo relativo al ramo de Guerra.

Art. III. — Debiendo consultarse la mayor economía del Erario y su justa inversión, prevendrá cuidadosamente al Inspector General que las tropas de línea estén completas de sus respectivos Oficiales, sin crear otros, reformando el lujo del ejército conforme al Art. 18, tratado 2, de las Ordenanzas Generales.

Art. IV. — De los sobrantes de todas clases que en las

diferentes épocas de Gobierno han sido separados, con motivo ó sin él, esclarecido y juzgado que sea el de unos y otros, si se declarasen espeditos, se formará de ellos una escala por clases, para la colocación en las vacantes de línea ú otras análogas á la carrera.

Art. V.—Si los comprendidos en el artículo anterior, disfrutasen actualmente sueldo entero, medio ó tercio, pedirá el Director á los Ministros de Hacienda una razón general de éstos y de las órdenes que hayan recaído para su abono, reformándolas según lo que resulta de lo que esplica el artículo antecedente.

Art. VI.—Hasta el completo arreglo de este asunto, no se proveerá empleo de sueldo, escepto los de escala natural en los Cuerpos, á propuesta de sus jefes, según ordenanza, y por el preciso conducto del Inspector General, á quien pasará el Director las escalas de que trata el artículo V, para que los tenga presentes en colocación y retiro.

Art. VII.—Los Coroneles mayores sin mando de cuerpo, y los Brigadieres, corresponden al Estado Mayor del Ejército, cuyos Mayores Generales de infantería y caballería llevarán la respectiva escala de ellos, para el servicio que les toca en campaña, sin esceder el número que corresponda.

Art. VIII.—Podrá premiar el mérito con los grados establecidos, sin sueldo; suprimiendo, desde la fecha de este Estatuto, todo aumento ó gratificación concedida anteriormente con este motivo. También dará escudos de premio á los oficiales beneméritos, según se señalaren por la Junta observadora, á exposición cuya.

Art. IX.—Cuando la elección de Director del Estado, recaiga en persona de la carrera militar, no podrá, por sí sola, disponer de la fuerza armada de mar y de tierra para fuera de este punto, ó de los arrabales de esta ciudad, respectivamente, sin previa consulta de un Consejo de Guerra, compuesto según ordenanza de jefes inteligentes.

Art. X.—Si la elección de Director recayese en persona que no sea militar, nombrará un General en Jefe, sujeto á lo que previenen los dos artículos antecedentes.

CAPÍTULO II

De las milicias provinciales

Art. I.—Subsistirá, por ahora, para las que aún permanezcan en esta clase, el Reglamento de 14 de Enero de 1801, sujetas á la Inspección General.

Art. II.—El Reglamento expedido en 7 de Mayo anterior

para la Comisión Militar permanente en esta Capital, sobre el método con que deben substanciarse y sentenciarse las causas criminales contra individuos militares del ejército, delincuentes, subsistirá del mismo modo.

Art. III.—La pena de muerte impuesta por dicho Reglamento al soldado, por primera desertión, queda abolida enteramente, y sólo se le aplicará cuando sea aprehendido con dirección al enemigo, pasados los límites que señalare por Bando el General en Jefe del Ejército.

Art. IV.—Fuera de este caso sufrirá, por primera desertión, cuatro años de recarga; por la segunda quedará inhabilitado para todos los premios que concede el Estado y obligado á servir duplicado tiempo al de su empeño, hasta que diez años de buena comportación revaliden sus servicios anteriores; y por la tercera, tendrá pena de muerte.

Art. V.—Queda abolida para siempre la calidad puesta en el espresado Reglamento, de no poder alegar el soldado en su defensa la inasistencia del pré.

Art. VI.—Se les leerán á los soldados con frecuencia, por los oficiales subalternos de sus respectivas compañías, entre las demás leyes penales de la Ordenanza, los artículos 26 hasta el 43, inclusive, del título 10, tratado 8°.

Art. VII.—Estando éste reformado en la mayor parte por diferentes órdenes, se metodizará por otro que se forme por la Junta Observadora, en los términos que prescriben los artículos VIII y IX de su particular Reglamento, para que sirva de instrucción y lectura á todo el ejército.

CAPÍTULO III

De las milicias cívicas

Art. I.—Todo habitante del Estado nacido en América; todo extranjero con domicilio de más de cuatro años; todo español europeo con carta de ciudadano y todo africano y pardo libre, son soldados cívicos, escepto los que se hallan incorporados en las tropas de línea y armada.

Art. II.—Quedan, también, escludidos, los que fueren juzgados y sentenciados por el atroz delito de facción ó traición contra la patria.

Art. III.—Bajo estos principios, estarán todos prontos á defenderla desde la edad de quince años hasta la de sesenta, si tuviesen robustez, en el caso de hallarse en peligro, y que sean llamados en esta Capital por la campana del Cabildo y en la Provincia por la de cada pueblo, ó en su defecto por los alcaldes del respectivo Partido, previo el

correspondiente aviso por orden espresa de la Junta Observadora y del Exmo. Cabildo, sin cuyo requisito no deberán ponerse en movimiento, bajo la pena de perturbador del orden público, al individuo ó individuos que lo causaren.

Art. IV.—De todo este conjunto de habitantes, organizará el Exmo. Ayuntamiento de esta Capital, que será Brigadier nato, con antigüedad desde el 25 de Mayo de 1810, una brigada de cívicos de infantería, compuesta, por ahora, de tres batallones de á mil hombres: dos compañías de artillería cada uno, con sus correspondientes cañones de campaña, y un regimiento de caballería de quinientos hombres, bajo del alistamiento, sin perjuicio de aumentarlos cuando convenga.

Art. V.—Para que no quede sin ejercicio la jurisdicción ordinaria, ni se recargue indebidamente la militar, si se concediese el fuero á todos los que se comprenden en los Artículos I y IV, sólo disfrutarán el fuero militar los individuos veteranos que actualmente se hallan sirviendo en los tercios cívicos, y los precisos que en adelante se aumenten en la Brigada, para su enseñanza y arreglo.

Art. VI.—La señal de que *la patria se halla en peligro*, será la bandera de ésta, puesta al tope de la torre del Cabildo y toque de su campana, observándose esta misma señal en los demás pueblos de la Provincia, y en los Partidos, en casa del Alcalde, que la colocará en una asta, previa la orden, y bajo la pena de que habla el Art. III de este Capítulo.

Art. VII.—A ella, acudirán los cívicos alistados á sus respectivos cuarteles, y los no alistados, á la Plaza Mayor, con las armas que tengan, para lo que el Exmo. Señor Brigadier los destine.

Art. VIII.—Los primeros, tendrán el uniforme sencillo que actualmente usan, con las armas de la ciudad en el sombrero ó gorra, en campo azul y blanco; y los segundos, sólo tendrán el escudo; pero de éstos se formarán también compañías, batallones y escuadrones que se llamarán de *imaginaria* para aumentar la fuerza sin confusión, en caso de alarma.

Art. IX.—Jurará la Brigada, como patrón principal, á la Santísima Trinidad y por menos principal á San Martín; y en el día que se destine para esta solemnidad en la Catedral, se bendecirán, también, las banderas y estandartes, que serán iguales á las del Estado, con la sola diferencia de ocupar el centro las armas de la ciudad.

Art. X.—Esta fuerza armada ha de estar subordinada al

Gobierno; pero, cuando éste claudicase en la observancia del presente Estatuto Provisional, ú obrase contra la salud y seguridad de la patria, declarándolo así la Junta de Observación y el Exmo. Cabildo, por escrito ó de palabra, quedará sujeta á dicha Junta de Observación, igualmente que la fuerza de línea de mar y tierra, para sostener sus determinaciones, en el caso que las resista el Director.

Art. XI.—Como el Exmo. Cabildo Brigadier no podrá, por las muchas y graves atenciones de su instituto, salir á mandar inmediatamente por sí la Brigada, propondrá al Gobierno sujetos de su satisfacción para Coronel, Teniente Coronel y Comandante de los tres batallones de infantería (que deberán tener la graduación de Tenientes Coroneles), como también para Coronel, Teniente Coronel y Sargento Mayor del regimiento de caballería, por cuyo conducto espida sus disposiciones, para el buen orden de la brigada y público sosiego en sus casos.

Art. XII.— El Sargento Mayor de Brigada, lo será el más antiguo de ella, supliendo sus veces en el Batallón ó Regimiento en que fuese, el Ayudante Mayor más antiguo, conforme al título II, tratado 7 de las Ordenanzas Generales del Ejercito, procurando recaiga la elección de Jefes, como también las demás clases de Oficiales en vecinos de honor; debiendo los Ayudantes, cabos y sargentos, estar al sueldo que ahora tienen, ó sea preciso aumentar para las citaciones, enseñanza, etc., que serán pagados por el Exmo. Cabildo, pasando el cargo á las cajas del Estado.

Art. XIII.—No deberá nunca la Brigada hacer servicio fuera de la ciudad y sus arrabales, pues de ella toma la denominación de cívica, para defenderla.

Art. XIV.—Como por la constitución de esta Brigada, cada individuo de ella ha de mantener y conservar en su poder su arma y forniture, ó los capitanes de las respectivas compañías, que en ambos deberán responder de ellas, será muy del particular cuidado del Exmo. Señor Brigadier y demás jefes, pasar, al menos, dos revistas de armas en cada mes, dentro de los cuarteles, señalando los días que deberán tener entendido todos, para que no falten ni se estravíen.

Art. XV.—Será reputado por *sospechoso* el que pierda ó enajene su arma; será arrestado hasta que pague su importe; y se hará por el sargento Mayor rigurosa averiguación para inquirir su destino é imponerle pena más grave, según las circunstancias del caso.

Art. XVI.—Ningún soldado cívico á quien se confía la arma blanca ó de fuego para el solo y único objeto de de-

fender la Patria, podrá hacer uso de ella, contra ningún habitante de cualquiera clase ó nación que fuese, bajo las penas que imponen las leyes generales á los que matan, hieren ó infieren grave daño con armas á otros, y será juzgado por los Jueces ordinarios, con aplicación de las penas que, según el caso, correspondan, en el breve término de tres días, para la satisfacción de la vindicta pública, altamente interesada en la seguridad individual.

Art. XVII. — Estando prevenido en las Ordenanzas del Ejército, que los Regimientos pidan venia al Gobernador de una Plaza para salir de ella al campo á hacer ejercicios doctrinales, observará la misma regla el Exmo. Señor Brigadier de Civicos cuando éstos hayan de hacerlo dentro ó fuera de la ciudad, para evitar así desconfianzas de reuniones clandestinas, que perturban la buena armonía y tranquilidad pública, por cuya observación deberán apurarse las más serias providencias, por medio de los alcaldes y tenientes de barrio.

Art. XVIII. — El armamento de esta Brigada será provisto por la armería del Estado; pero no obstante esto, el Exmo. Señor Brigadier procurará tener su armamento propio, municiones, etc., con todo el sobrante necesario para reponer fallas y aumentar las fuerzas, al menos hasta ocho mil hombres de infantería y á proporción la artillería y caballería.

Ert. XIX. — Para que esta brigada no carezca de la debida formalidad en el modo de hacer el servicio, observará en lo posible la Ordenanza General del Ejército, mientras se forme un Reglamento aceptable á sus circunstancias.

Art. XX. — Últimamente, para que la noticia de que *la patria está en peligro* llegue rápidamente al resto de la Provincia, el Exmo. Ayuntamiento invitará á este benemérito pueblo y sus dependencias, para que presenten el proyecto de un telégrafo con que pueda lograrse tan interesante objeto. El autor del modelo que se adaptase, será premiado con una demostración de honor á nombre de la patria.

SECCIÓN SÉPTIMA

SEGURIDAD INDIVIDUAL Y LIBERTAD DE IMPRENTA

CAPÍTULO I.

De la seguridad individual

Art. I. — Las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofenden el orden público ni perjudican á un tercero, están sólo reservadas á Dios y exentas de la autoridad de los magistrados.

Art. II. — Ningún habitante del Estado será obligado á hacer lo que no manda la ley, clara y espresamente, ni privado de lo que ella del mismo modo no prohíbe.

Art. III. — El crimen es sólo la infracción de la ley que está en entera observancia y vigor; pues sin este requisito debe reputarse sin fuerza.

Art. IV. — Ningún habitante del Estado puede ser penado ni confinado, sin que preceda forma de proceso y sentencia legal.

Art. V. — Toda sentencia en causas criminales, para que se reputé válida, ha de ser pronunciada por el testo espreso de la Ley, y cualquiera infracción de ésta es un crimen en el magistrado, que será corregido con el pago de costas, daños y perjuicios causados.

Art. VI. — Todos los mandamientos, órdenes, decretos y acuerdos, que en uso legítimo de su autoridad expidan los magistrados, como el Director del Estado, la Cámara de Apelaciones, Gobernadores Intendentes de Provincia y Tenientes Gobernadores, para el buen orden de los pueblos y dirección de los negocios de su instituto, deberán ser por escrito, espresando con claridad la pena en que incurran los infractores.

Art. VII. — Se exceptúan del antecedente artículo las órdenes relativas al ejército y sus individuos en asuntos del servicio, en el que se procederá conforme á la Ordenanza.

Art. VIII. — Los ciudadanos y demás habitantes del país que forman la milicia cívica de *imaginaria*, de que trata el Artículo VIII, Capítulo III de esta Sección, podrán tener en sus casas pólvora, armas blancas y de fuego para la defensa de su persona y propiedades, en casos urgentes en que no puedan reclamar la autoridad y protección de los magistrados; y el Gobierno no podrá exigirselas sino por su justo precio, cuando sean necesarias para la defensa del Estado. — En cuanto á los cívicos de brigada, se observarán los artículos XIV, XV y XVI del citado Capítulo.

Art. IX. — Ningún individuo podrá ser arrestado sin prueba, al menos semiplena ó indicios vehementes de crimen, que se harán constar en proceso informativo dentro de tres días perentorios, si no hubiese impedimento; pero habiéndolo, se pondrá constancia de él en el proceso.

Art. X. — En el mismo término se hará saber al reo la causa de su prisión, y no siendo el Juez aprehensor el que deba seguirla, lo remitirá, con los antecedentes, al que fuere nato y deba conocer.

Art. XI. — Para decretar prisión contra cualquiera habitan-

te del Estado, pesquisa de sus papeles ó embargo de bienes, se individualizará en el decreto el nombre ó señales que distingan su persona, con el objeto de las diligencias, formándose, en el acto del embargo, prolijo inventario, á presencia del reo, que deberá firmarlo, del cual se le dejará copia autorizada para su resguardo, poniendo en seguridad los bienes, con fe del Escribano de la causa ó, en su defecto, del mismo Juez y dos testigos.

Art. XII. — Cuando, al tiempo del embargo, no se pudiese, por algún accidente, formar el inventario, se asegurarán los bienes á que se estienda dicho embargo, bajo de dos llaves, una de las cuales tomará el juez y la otra el reo; y no siendo esto practicable, se cerrarán y sellarán á presencia suya las arcas ó puertas de la casa y habitaciones, y en primera oportunidad se abrirán á su presencia y practicará el inventario.

Art. XIII. — Cuando hubiese de hacerse el embargo en ausencia del reo, fuera del lugar, nombrará el Juez un ciudadano honrado, de bienes conocidos, que haga sus veces en este acto, al que se le abonará la comisión que se considere proporcionada á su trabajo; pero si la no asistencia del reo al embargo procediese de enfermedad, él mismo nombrará personero de su satisfacción.

Art. XIV. — El Juez ó comisionado que prenda ó arreste á cualquiera individuo (no siendo en flagrante delito), sin guardar las formalidades que prescribe este capítulo, será removido; y el que faltase las que se previene en el embargo ó inventario de bienes, será responsable á las sustracciones de que se quejase el interesado.

Art. XV. — La casa de un ciudadano es un sagrado que no puede violarse sin crimen, y sólo en caso de resistirse á la convocación del Juez podrá allanarse. Esta diligencia se hará con la moderación debida, personalmente por el mismo Juez; y en caso que algún urgente motivo se lo impida, dará al delegado orden por escrito, con las especificaciones convenientes, dejando copia de ella al individuo que fuese aprehendido y al dueño de la casa, si la pidiere.

Art. XVI. — Ningún reo estará incomunicado después de su confesión, y nunca podrá dilatarse ésta por más de diez días sin justo motivo, del que se pondrá constancia en el proceso, y se hará saber al reo el embarazo al fin de dicho término, y sucesivamente de tres en tres días, si continuase el motivo de retardación.

Art. XVII. — Siendo las cárceles para seguridad y no para castigo de los reos, toda medida que, á pretexto de pre-

caución, sólo sirva para mortificarles maliciosamente, deberá ser corregida por los Juzgados y Tribunales Superiores, indemnizando á los agraviados de los males que hayan sufrido por el abuso.

Art. XVIII.—Todo hombre tiene derecho para resistir, hasta con la fuerza, la prisión de su persona y embargo de sus bienes, que se intente hacer, fuera del orden y formalidades prescritas en los respectivos artículos de este capítulo; el ayudar ó cooperar á esta resistencia, no podrá reputarse un crimen.

Art. XIX.—Todo hombre tiene libertad para permanecer en el territorio del Estado ó retirarse, siempre que por esto no se esponga la seguridad del país, ó sean perjudicados sus intereses públicos.

Art. XX.—Todo habitante del Estado, y los que en adelante se establezcan, están bajo la inmediata protección del Gobierno y de sus magistrados en todos sus derechos.

Art. XXI.—Todas las anteriores disposiciones, relativas á la seguridad individual, jamás podrán suspenderse: y cuando por un muy remoto y extraordinario acontecimiento que comprometa la tranquilidad pública ó la seguridad de la patria, no pueda observarse cuanto en él se previene, las autoridades que se viesen en esta fatal necesidad, darán razón de su conducta á la Junta de Observación y Exmo. Cabildo, que deberán examinar los motivos de la medida y el tiempo de su duración.

CAPÍTULO II

De la libertad de imprenta

Art. I.—Se restablece el decreto de la libertad de la imprenta, espedido en 26 de Octubre de 1811, que se agregará al fin de estos artículos, como parte de este capítulo.

Art. II.—Para facilitar el uso de esta libertad, se declara que todo individuo natural del país ó extranjero, puede poner libremente imprentas públicas en cualquiera ciudad ó villa del Estado, con solo la calidad de previo aviso al Gobernador de la Provincia, Teniente Gobernador y Cabildos respectivos, y que los impresos lleven el nombre del impresor y lugar donde exista la imprenta.

Art. III.—Con el mismo objeto deberá el Cabildo de esta ciudad disponer que de sus fondos se costee la compra y establecimiento de una imprenta pública, además de la que existe en el día.

Art. IV.—Toda Municipalidad podrá disponer libremente

cada año de doscientos pesos de sus fondos, para costear la impresión de los papeles que tenga á bien público.

Art. V. — La Junta de Observación podrá, también, disponer de igual cantidad con el mismo objeto, de los fondos municipales de esta ciudad.

Art. VI. — Se establecerá un periódico, encargado á un sujeto de instrucción y talento, pagado por el Cabildo, el que en todas las semanas dará al público un pliego ó más, con el título de *Censor*. Su objeto principal será reflexionar sobre todos los procedimientos y operaciones injustas de los funcionarios públicos y abusos del país, ilustrando á los pueblos en sus derechos y verdaderos intereses.

Art. VII. — Habrá, también, otro periódico, encargado del mismo modo á sujeto de las calidades necesarias, pagado por los fondos del Estado, cuyo encargo es dar todas las semanas una *Gazeta*, noticiando al pueblo los sucesos interesantes, y satisfaciendo á las censuras, discursos ó reflexiones del *Censor*.

Art. VIII. — El Gobierno y el Ayuntamiento cuidarán, con particular celo, que en ambos periódicos se hable con la mayor moderación y decoro posibles, esponiendo, sin exceder, los abusos que notasen, con los remedios que consideren oportunos, sin faltar el respeto debido á los magistrados, al público y á los individuos en particular, y en el caso que alguno de los periodistas infrinja estos precisos deberes, cualesquiera de las dos predichas autoridades, sin perjuicio del derecho del ofendido, lo manifestará al Tribunal de la libertad de imprenta, que deberá obrar en el examen del hecho con toda escrupulosidad, conforme á su instituto.

Decreto sobre libertad de imprenta, de 26 de Octubre de 1811

(Este decreto se halla inserto en este mismo volumen de *Documentos Justificativos*, bajo el número 28).

Estatuto Provisional de la Junta de Observación

Art. I. — El número de vocales de la Junta de Observación, será el de cinco, que se nombrarán, en lo sucesivo, por el mismo método que prescribe el Bando del Exmo. Cabildo de esta Capital, de 18 de Abril anterior. Elegirán de entre ellos un Secretario, quien, del modo que la Junta acordare, autorizará sus deliberaciones y llevará el orden interior que estableciere para la mejor expedición de sus negocios.

Art. II. — Habrá un escribano y un portero, con la dota-

ción que la misma Junta acordase con el Exmo. Cabildo, la que se pagará con los fondos de éste, en el modo y forma que también acordarán.

Art. III.— Los gastos de oficina se pagarán, igualmente, de los antedichos fondos, con arreglo á las razones que se pasarán oportunamente, firmadas por el vocal secretario de la Junta. El tratamiento de ésta será solo el de *Honorable*.

Art. IV.— Su presidencia rolará entre sus vocales, con esclusión del que haga de Secretario, durante el ejercicio de este cargo; guardándose, por ello, el orden de sus nombramientos, y durará tres meses en cada uno.

Art. V.— Sus sesiones ordinarias serán dos en cada semana, por ahora, en las mañanas de los días Lunes y Jueves, y posteriormente, con arreglo á la disposición que sobre este particular diese la misma Junta; siendo privativo de su Presidente, señalar las horas de entrada y salida.

Art. VI.— Será, también, de las facultades del Presidente, convocar á sesiones estraordinarias de días y horas, con arreglo á las circunstancias que ocurran, ó porque lo exija alguno de sus vocales, con causa.

Art. VII.— El instituto de esta Junta es, esencialmente, celar la puntual observancia del Reglamento Provisional que acaba de formar para el Gobierno del Estado, en todos los ramos de la administración pública, reclamando enérgicamente la menor infracción de aquel Estatuto y oponiéndose á cuanto de algún modo perjudique la felicidad común.

Art. VIII.— A consecuencia de ello, es también de su institución promover todos los arbitrios y medidas que crea conducentes á tan importante objeto, y en su virtud, estará autorizada para limitar, añadir y enmendar este Estatuto, igualmente que para hacer otros nuevos, según que lo exijan las circunstancias, con arreglo, siempre, al interesantísimo objeto de su establecimiento. Toda adición ó corrección de los que hasta ahora han regido, ó nuevo Reglamento, se consultará con el Gobierno, antes de publicarse, igualmente que con el Exmo. Cabildo, quienes, en el término de ocho días, á más tardar, deberán expresar su conocimiento ó disenso para la publicación, esponiendo oficialmente á la Junta, en el último caso, las razones fundamentales de su oposición.

Art. IX.— Si el Gobierno (á quien primero se consultará), disintiese á la publicidad de la Ley ó Estatuto, los devolverá, con las razones de la oposición, á la Junta, la que lo pasará todo al Exmo. Cabildo; y convenido éste en la publicación, se ejecutará inmediatamente. Si el Exmo. Cabildo

disintiese, la ley ó Estatuto quedará sin efecto, y remitidos á la Junta se reservarán. Si ambas autoridades aprobasen y consintiesen en la publicación, se ejecutará inmediatamente.

Art. X.—En los casos particulares que ocurran sobre inteligencia de lo ya establecido ó que nuevamente se estableciese, ó defecto de prevención en cualquier estatuto que la Junta diese, resolverá ella, por sí sola, las dudas, sin las consultas de que hablan los dos artículos precedentes. Las personas de los vocales de esta Junta son inviolables, y están exentas de toda autoridad.

Art. XI.—En esta virtud, sus causas deberán ser juzgadas por una Comisión que con este objeto nombrará, en su caso, la misma Junta.

Art. XII.—Los individuos vocales de la actual, cesarán de serlo, á los seis meses contados desde el día de su recepción del cargo, con arreglo á lo dispuesto por la Junta Electoral; pero los que en lo sucesivo se nombrase, subsistirán todo el tiempo que el gobernante que entonces hubiese ó nuevamente se nombrase, siendo ésta para siempre la regla de su duración.

Art. XIII.—En las Juntas Electorales, para el nombramiento de vocales de ésta, se nombrarán, en lo sucesivo, cinco suplentes, para que por el orden de sus nombramientos, entren á ejercer el cargo en las ausencias ó enfermedades ó cualquier otro justo impedimento de los propietarios. Los vocales de esta Junta no gozarán de sueldo ó emolumento en razón de su cargo.

Art. XIV.—Tampoco podrán serlo los que no sean simples ciudadanos, é independientes por empleo ó cargo del Gobierno. .

CAPÍTULO FINAL

Providencias generales

Primera.—El Reglamento de Policía espedido en 22 de Diciembre de 1812 para esta ciudad y su campaña, subsistirá, por ahora, con las reformas siguientes: Las funciones privativas del Intendente de Policía, se reunirán al Gobernador de la Provincia, quedando suprimido el empleo de aquel. Los tres Comisarios subsistirán, por ahora, conservando las facultades y distribuciones del ramo, que les están señaladas, bajo la inspección del Gobernador de Provincia, y no habrá, entre ellos, más preferencia que la antigüedad de sus despachos, ó de la posesión de sus empleos: se revocan los artículos 3º y 4º que establecen un

asesor y Escribano del ramo, debiendo desempeñar estas funciones los del Gobierno y el 5º, en la parte que establece portero. El 8º, 10 y 14, solo subsistirán en cuanto sean compatibles con la seguridad individual, libertad de imprenta y demás derechos del hombre que van declarados: en cuanto al 25, se agrega que ha de darse destino á los huérfanos, prefiriendo, precisamente, el que sea de su inclinación, sin violentarlos á tomar otro, cuando buenamente se les proporcione uno justo; el artículo 41, de la instrucción circular de Alcaldes de barrio, solo tendrá observancia en la parte que sea conciliable con los establecidos en el Capítulo sobre la libertad de imprenta.

Segunda.—Queda abolido el Concejo de Estado.

Tercera.—Se restituye, con arreglo á las leyes, el otorgamiento de fianzas que deben dar los administradores de rentas del Estado y funcionarios públicos de cualquiera clase, que antes de ahora estaban obligados á prestarlas, en la cantidad y forma de su peculiar destino. En su virtud, todos los que en la actualidad se hallen ejerciendo empleos que, por su naturaleza, estén gravados con dichas fianzas, las entregarán dentro del término perentorio de dos meses desde la fecha de este Reglamento, con la calidad (que servirá de regla para todos en lo sucesivo) de darse sobre cuatro individuos por cuartas partes.

Cuarto.—El Reglamento de 30 de Junio de 1814, para el ramo de pertenencias extrañas, se observará, sin embargo de cualquiera otras órdenes contrarias, que después de su publicación se hubiesen dado.

Quinta.—Quedan sin efecto las leyes y decretos que hizo la última Asamblea sobre profesiones religiosas.

Sexta.—Todo individuo del ejército que en lo sucesivo sea promovido á nuevo grado ó ascenso, no podrá poseerle de él sin hacer constar, por certificado de su respectivo jefe, haber prestado juramento sobre la observancia del artículo 10, capítulo 3º de la Sección Sexta.

Séptima.—Las contribuciones que, por las necesidades y urgencias del Estado, y con las formalidades prevenidas en este Reglamento, se impusiesen á una Provincia, en beneficio particular de ella, no serán trascendentales á otras.

Octava.—Queda revocado el decreto de 9 de Octubre de 1813, que desautoriza á los maestros de enseñanza y educación pública para la corrección de sus discípulos, debiendo en caso de esceso ó inmoralidad acudir los padres ó los que tengan á su cargo niños, á los Regidores Diputados de escuelas, para que refrenen y castiguen á dichos maestros, cuando fueren culpables.

Nona.—Todas las Provincias pueden, sin necesidad de licencia y con sólo aviso al Director, hacer todos los establecimientos que crean serles útiles y promuevan su industria, artes y ciencias, con los fondos que ellos arbitren, sin perjuicio de los del Estado.

Décima.—El anterior Reglamento Provisorio será jurado en esta Capital en el día que determine el Director, por todas las autoridades, jefes y cuerpos militares y de las demás oficinas.

Undécima.—En las Provincias interiores se ejecutará lo mismo, luego que haya sido sancionado dicho Reglamento. Las Municipalidades señalarán el día.

Duodécima.—Este Reglamento y demás providencias que le subsiguen, recibirán su sanción fuera de las Provincias de Buenos Aires, en todas las demás que lo admitan libremente.

Décima tercera.—Su publicación se hará por medio de la imprenta, circulando el Exmo. Cabildo de esta ciudad á costo de sus fondos, seis ejemplares á cada Cabildo de las ciudades y villas de dichas provincias, y tres á todos los Curas de esta Diócesis, leyéndose por cuatro Domingos consecutivos en la Iglesia de cada cabeza de parroquia, después de la misa Mayor, y archivándose en todas las ofinas públicas del Estado.

Décima cuarta.—La Junta de Observación se reserva espedir, en adelante, las demás determinaciones que tengan por objeto la felicidad y utilidad común, con arreglo al bando de 18 de Abril de anterior, estableciendo Reglamentos y Providencias Provisionales, por el orden y con las calidades que se prescriben en el suyo particular.—Buenos Aires, 5 de Mayo de 1815.—*Doctor Agustín Gascón—Doctor Pedro Medrano—Doctor Antonio Sáenz—Doctor José Mariano Serrano—Tomás Manuel de Anchorena.*—

Advertencia.—Hecha la moción correspondiente, para que se sancionase si se había de imponer pena de muerte á los desertores,—el vocal Doctor D. Antonio Sáenz representó: que por la lenidad que le obliga á profesar su estado y ministerio, suplicaba se le permitiese retirarse, y se determinase la discusión sin su asistencia.—La junta condescendió llanamente, y fueron sancionados los artículos III y IV, cp. II, sección sexta, sin que hubiese tenido parte alguna este vocal en su establecimiento.—*Gascón—Medrano—Serrano—Anchorena.*—

(Registro Oficial de la República Argentina -- Tomo I, páginas 311 á 323—Publicación Oficial—Imp. La República—1879.)

60

**Disposiciones para el enrolamiento y penas
para sus infractores**

BANDO

El Director Provisional del Estado.—Por cuanto es llegado el momento, ciudadanos, de probar la constancia en defensa de la libertad, de satisfacer los votos de los pueblos y de sellar para siempre con nuevos sacrificios nuestro feliz destino, sin que los males de la guerra retraigan nuestra firmeza, ni disminuyan un punto la heroica resolución de sepultarnos, antes, en las ruinas de nuestros hogares, que recibir la ley ignominiosa de los españoles, resueltos á renovar el bárbaro sistema colonial, á encadenar la América, y á llevar adelante la devastación de estos países: por tanto, siendo natural, justo y necesario, repeler con la fuerza la próxima agresión con que amenazan la vida de la patria y poner á cubierto la existencia de este virtuoso pueblo, he venido en mandar se cumplan los artículos siguientes:—

Art. 1º—Todo habitante del Estado, nacido en América, todo extranjero con domicilio de mas de cuatro años, todo Español europeo con carta de ciudadano, todo Africano y pardo libre y todo individuo americano sin distinción de clases, condición ó estado, deberá alistarse, precisa é indispensablemente, desde la edad de quince á sesenta años en los cuerpos de infantería cívica á que correspondan, viviendo en los cuarteles del 1º hasta el 19 inclusive; y desde el 20 inclusive, hasta el 32 en los de caballería, exceptuándose solamente los que en la actualidad se hayan incorporado en las tropas de línea y armada.

Art. 2º—Todo individuo que á los seis días de publicado el presente Bando, no esté alistado en alguno de los cuerpos alistados, sufrirá la multa de doscientos pesos, aplicables á los fondos públicos, si tuviese bienes, y sino, será condenado al servicio de las armas por dos años.

Art. 3º—Los Capitanes de las compañías darán un billete impreso, por el que conste hallarse alistado el individuo que lo lleve. Este documento será revisado por los comandantes de los tercios respectivos.

Art. 4°—Pasado el término de los seis días se faculta á la Policía, Alcaldes de barrio y patrullas militares, para que puedan exigir de cada vecino el comprobante de hallarse alistado, y en caso de no estarlo, será conducido en el acto á uno de los cuarteles, donde por el Gobernador de la Provincia se le exigirá la multa.

Art. 5°—Los pudientes, la pagarán á las cuatro horas de hallarse presos, y en caso de no satisfacerla en este término, serán condenados á las armas, sea cual fuese su condición ó clase.

Art. 6° Cualquiera vecino que delate al Gobernador que otro no se halla alistado, siendo así, los doscientos pesos de multa serían para el delator.

Art. 7°—Los capitanes de los cuerpos estarán en sus casas desde las siete de la mañana hasta las diez, para alistar á los vecinos que se presenten.

Art. 8°—El alistamiento general es comprensivo á toda la campaña de la jurisdicción de esta Provincia, y al efecto se circulará por el Gobernador de ella, á todas las justicias y cabos militares, arreglando el modo que deba efectuarse con toda brevedad en los regimientos de milicias de caballería.

Art. 9°—El Martes próximo 6 del entrante se reunirán los que estuviesen alistados en el lugar que designen sus respectivos comandantes, desde las siete de la mañana hasta las nueve, continuándose diariamente los ejercicios doctrinales en esa misma hora.

Art. 10. -- Durante dichos ejercicios, permanecerán cerrados todos los talleres y tiendas de abasto y mercaderías, bajo la multa de cincuenta pesos al contraventor; y para los efectos prevenidos, sobre cuyo cumplimiento celará escrupulosamente el Gobierno, se publicará por Bando Nacional, se fijará en los lugares de estilo y se imprimirá para su circulación.—Buenos Aires, 30 de Mayo de 1815.—IGNACIO ALVAREZ.—Por ausencia del Señor Secretario, *Tomás Guido*.

Buenos Aires, Mayo 30 de 1815.—Publíques á las cuatro de esta tarde, por Bando con la mayor solemnidad, y circúlese en la Provincia, pasándose copia al Exmo. Ayuntamiento, para la impresión que se ordena.—*Oliden*.—*Velez*, Secretario.

En dicho día, mes y año, con mi asistencia y la de la tropa que en semejantes casos se acostumbra, se publicó y fijó el Bando antecedente, de que certifico.—*Basavilbaso*.

(Registro Oficial de la República Argentina, tomo 1, página 328. Publicación Oficial.—Imp. —La República.—Año 1879.)

61

Nombrando al señor D. Francisco Antonio de Escalada Director interino del Estado, en reemplazo del señor D. Ignacio Alvarez, y anunciando una nueva convocatoria del pueblo.

BANDO

La Honorable Junta de Observación y el Exmo. Ayuntamiento, Brigadier nato de la Milicia cívica, etc.—Por cuanto el ex-Director interino del Estado ofició ayer al Exmo. Ayuntamiento, con inclusión del Bando publicado en el mismo día, por modo y formas que han hecho entender miras perniciosas hacia la felicidad pública y autoridades constituídas bajo el Estatuto Provisional Gubernativo, desconociendo el acuerdo, armonía y dependencia de las mismas sobre asuntos de importancia, que apenas los ha indicado, con decidida resistencia á manifestarlos, y obstinado empeño para sostenerla á toda costa, ya que no debe ni puede reservarse del conocimiento del generoso pueblo de Buenos Aires una conducta semejante, han resuelto, la Honorable Junta de Observación y el Exmo. Ayuntamiento, publicarlas en resumen por el presente Bando, pues la premura del tiempo que se le ha calculado, tan importante medida no ha podido presentar el pormenor de la misma, de que se presentará documentada, completa y oficial instrucción en el Cabildo abierto que ha de celebrarse. Esperando ambas corporaciones que, en tanto se toman, en obsequio de la felicidad pública, de la seguridad del Estado y de su prosperidad, otras medidas, que precisan de tiempo para escucharse, por medio de convenientes actos la expresión libre del pueblo, observarán inviolablemente las prevenciones contenidas en los artículos siguientes:

Art. 1º El Coronel Mayor del Ejército D. Ignacio Alvarez ha cesado ya en las funciones de Director interino del Estado, por habérselo intimado así en dos diferentes ocasiones la Honorable Junta de Observación y el Exmo. Ayuntamiento, en conformidad de los artículos 3º, capítulo I, de la Sección Tercera, y del 10º, Capítulo III, Sección Sexta, del citado Reglamento, quedando sujeto á las resultas del correspondiente juicio.

Art. 2º Se reconocerá, por el Señor Director Interino del Estado, al señor D. Francisco Antonio de Escalada, que obtenía el empleo de Alcalde de primer voto, por haber recaído en su persona la elección que han verificado el Exmo. Cabildo y Honorable Junta de Observación, en virtud de las facultades que le están conferidas en el Estatuto, para el pronto remedio de semejantes ocurrencias.

Art. 3º En la reunión prevenida para esta mañana, se manifestarán al pueblo, por la Honorable Junta de Observación y Exmo. Ayuntamiento, los documentos originales que han nivelado la conducta en la presente deliberación, quedando por ahora reducida la concurrencia á este solo efecto. Deseando ambas corporaciones precaver la anarquía á que podría aventurarse la sorprendente convocatoria del pueblo del día de ayer, al mismo tiempo que oír su sincera voluntad por ministerio de sinceras actas correspondientes á la soberana dignidad del mismo y circunspección en asuntos de tanta importancia, protestan tomar en consideración la nota que se indica en el citado Bando, y de que no han podido ser instruidos, á pesar de los esfuerzos con que oportunamente la exigieron del ex-Director del Estado, sin recabar de él mismo más que inesperada obstinación, sujetándola desde ahora al discernimiento y deliberación del voto uniforme del gran pueblo de Buenos Aires, que será convocado de acuerdo á la ley, sobre que aseguran las mismas no dejarán de tomar medida alguna de cuantas se presenten bajo de sus alcances, para consultar la expresión libre del mismo, sin hacer el menor lugar á los recursos de la rastrera política con que desgraciadamente la facción y el partido han hecho ventajosa presa sobre la sinceridad, buena fé y bellas intenciones de este generoso pueblo en anteriores reuniones; y para que llegue á conocimiento de todos, publíquese por bando y fíjense ejemplares en los lugares acostumbrados.—Dado en la Sala Capitular de Buenos Aires, á 12 de Febrero de 1816.—*Juan Javier Rodríguez de Vida — Antonio José de Escalada — Pedro Fabián Pérez — Pedro Isidro Pelliza — Juan Ramos Mejía — Esteban Romero — Ulpiano Barreda — José Gabino Anchois — Zenón Videla — Mariano Joaquín de Maza — Manuel de Lezica*—Por mandato de S. E., *José Manuel Godoy*.

(Tomado de una copia existente en la colección de la *Gazeta*, propiedad de la Universidad.)

62

El Gobierno de las Provincias Unidas protesta contra el edicto del General Lecor, de 15 de Febrero de 1817, y adopta las medidas que considera necesarias en tal emergencia.

El Supremo Director de las Provincias Unidas de Sud América.—El día consagrado por la piedad y el reconocimiento públicos para dar gracias al Eterno Protector del Pueblo Americano por las brillantes glorias que ha concedido á las armas de la patria en el Reino de Chile, lo es, también, para desplegar ante las Provincias los principios de mi conducta relativa á la Corte del Brasil, y su ejército agresor de la Banda Meridional del Río de la Plata. Mi tolerancia aparente respecto de una medida verdaderamente hostil, no ha tenido otro fundamento que las esperanzas que se me habían inspirado de que aquélla era dirigida á la dicha y engrandecimiento del Estado. Todos mis anhelos habían sido ineficaces para penetrar ese misterio á que se vinculaban nuestra fortuna y nuestra gloria. La necesidad de contemporizar con el espíritu público, alarmado con injuriosas sospechas contra la integridad de mis sentimientos por instigaciones sediciosas, me obligó á dar pasos menos seguros para la consecución de tan importante descubrimiento; sin embargo, aunque en medio de bastante obscuridad, llegué á comprender que los altos destinos de la Corte vecina no eran compatibles con los de que se habían hecho dignos los Pueblos Argentinos, por su constancia, su valor y heroicos sacrificios. Para poner término á tantas incertidumbres se hallaba en vísperas de partir un Enviado Extraordinario á Río Janeiro, con proposiciones y bases determinadas, cuya repulsa ó admisión debía decidir la buena fe de aquel Ministerio y de la resolución última que nos convendría adoptar. En estas circunstancias, recibo, en la noche de ayer, un edicto publicado el 15 de Febrero próximo pasado por el General Lecor, cuyo contenido causará espanto á todas las naciones civilizadas y es del tenor siguiente; « Art. 1.º. — Toda partida enemiga, que robe ó maltrate á algún vecino ó vecinos tranquilos é indefensos, en « sus casas ó en su vecindario, serán tratados sus indivi-

« duos, no como prisioneros de guerra, sino como saltea-
« dores de caminos y perturbadores del orden y sosiego
« público.—Art. 2º. Cuando las partidas, después de haber
« cometido algún atentado contra los vecinos tranquilos é
« indefensos de las poblaciones que se hallan bajo la pro-
« tección de las armas portuguesas, no pudieren ser apre-
« hendidas, se hará la más severa represalia en las familias
« y bienes de los Jefes é individuos de dichas partidas dis-
« persas, á cuyo fin saldrán fuertes destacamentos del ejér-
« cito portugués á quemar sus estancias y conducir sus fa-
« milias á bordo de la escuadra.—Art. 3º. Un número sufi-
« ciente de personas de toda confianza será empleado en
« velar sobre la seguridad y tranquilidad de los habitantes,
« y dar una noticia individual á los Comandantes más pró-
« ximos y éstos al Cuartel General, de todos los excesos
« que cometan las partidas enemigas contra los vecinos pa-
« cíficos, y de las personas de que aquellas se componen,
« para tomar, en consecuencia, las providencias oportunas.—
« Art. 4º. El presente edicto se comunicará y publicará en
« todas las poblaciones que están bajo la protección de las
« armas portuguesas.» La impresión que causó en mi áni-
mo la lectura de este documento, me habría conducido á
los últimos extremos, si la dignidad del puesto que ocupó
no me hubiese aconsejado otros medios de hacer entender
al General portugués cuanta equivocación ha padecido cre-
yendo capaz al Gobierno Supremo de estas Provincias de
resignarse á los insultos hechos al nombre americano. Mis
medidas consecuentes á este principio, se han limitado, por
ahora y hasta la resolución del Soberano Congreso, á las
que voy á espresar.—Primeramente un oficio dirigido al Ge-
neral Lecor, que saldrá á su título inmediatamente, conce-
bido en los términos siguientes:—« Exmo. é Ilmo. Señor
« General: - Acaba de llegar á mis manos un edicto impre-
« so de V. E., datado á 15 de Febrero último, en su cuar-
« tel general de Montevideo. Su extraordinario contenido ha
« puesto fin á mis esperanzas de conservar ningún género
« de armonía con V. E. y el ejército de su mando. V. E.
« pretende tener derecho á ese territorio, por la protección
« que dice dispensarle, y sobre esta base cuenta con el con-
« sentimiento de los puntos subyugados. Los bravos orien-
« tales se han propuesto acreditar que las fuerzas de V. E.
« no son capaces de dispensar semejante protección, y á es-
« te efecto han emprendido sus hostilidades sobre esos mis-
« mos pueblos que V. E. confiesa mantener en indefensión
« al paso que pretende someterlos á su yugo. Para cubrir

« este vacío de poder, apela V. E. al extraño arbitrio de
 « una mal entendida represalia, y al mucho más extraño
 « aún declarar salteadores de caminos á los defensores de
 « su libertad. Por lo que hace á lo primero, no se compo-
 « nen bien las promesas magnificadas de protección con las
 « violencias que cometa V. E. sobre las familias inocentes
 « de sus enemigos. Tales violencias carecen de objeto, y so-
 « lo contribuirán á hacer la guerra más sangrienta y ruinosa
 « á la humanidad. Las familias que V. E. transporte á su
 « escuadra le aumentarán gastos, peligros y las dificultades
 « de proveerse de subsistencia, al paso que deja más libres
 « de esta atención á los orientales fieles, que esponiendo sus
 « vidas por la libertad de su patria, no les arredra el sacri-
 « ficio de sus familias. Las estancias taladas é incendiadas
 « por V. E. harán un mal efectivo al país á quien V. E.
 « dispensa su protección, pero sobre nadie gravitará más
 « sensiblemente que sobre su ejército, cuyas provisiones no
 « han de venir de campos quemados y destruidos.—Por
 « lo que hace á lo segundo, ¿con qué derecho puede V.
 « E. declarar salteadores de caminos á los habitantes de un
 « país que ponen medios generalmente admitidos por las
 « naciones para defenderse de sus injustos agresores? Los
 « franceses, cuando ocuparon la España, hicieron todo gé-
 « nero de violencias en los pueblos indefensos que encon-
 « traron, y lo que es más, la hacían los mismos españoles
 « con sus mismos paisanos, ¿y fueron declarados los fran-
 « ceses salteadores de caminos? El edicto, pues, de V. E.,
 « prueba que se halla en disposición de tratar á los Ame-
 « ricanos del mismo modo que los españoles, y que se quie-
 « re escluir á estos países del asilo que, en medio de las
 « desgracias de la guerra, concede el derecho de gentes á
 « las naciones beligerantes. Aunque los orientales no fueran,
 « como son, hermanos nuestros, la sola razón de vecinos
 « autorizaría á este gobierno para interesar todo su poder
 « en favor de ellos, por la infracción de un derecho que
 « corresponde vindicar á todos los Estados civilizados in-
 « distintamente. Pero ya he repetido á V. E. que el territo-
 « rio oriental, sustrayéndose á la dependencia de determi-
 « nados Gobiernos, no ha pretendido disolver los vínculos
 « de unidad moral con los demás pueblos sus hermanos,
 « con quienes protesta querer estrechar cada vez más sus
 « relaciones, y que la demarcación de límites señalados en
 « el tratado de 1812, fué celebrado con todas las Provincias,
 « y por lo mismo he reclamado constantemente su notoria
 « violación. Los orientales sostienen su causa y la de los

« pueblos occidentales, á un mismo tiempo; así es que han sido y serán constantemente auxiliados de esta Capital, « hasta que V. E. desaloje el territorio de que se ha apoderado con violencia. Mientras V. E. haga la guerra con « dignidad y con sujeción al derecho de gentes, habrá, por « nuestra parte, la misma correspondencia; más si V. E. lleva á efecto las amenazas que contiene el edicto mencionado, protesto á V. E. que por mi parte ejerceré una más « rigurosa represalia, verificando en cada tres vasallos de S. « M. F. residentes en estas Provincias, los mismos tratamientos que V. E. verificare en uno solo de los orientales. A « este efecto he dispuesto que sean internados todos los individuos portugueses á la Guardia de Luján; siéndome « harto doloroso causarles esta mortificación en que, después del edicto de V. E., se interesa tanto la seguridad del « Estado. Consecuente á estas disposiciones, he despachado « su pasaporte al oficial comisario de V. E., para que se « restituya á la plaza de su procedencia, con el buque de « guerra que le condujo. En V. E. consiste que desaparezcan los síntomas de una guerra desastrosa que ya preparan el orden de los sucesos y la conducta inesperada de « V. E. Próximo estaba á salir un Enviado Extraordinario á la Corte del Brasil, para entablar negociaciones, que « siendo del interés de S. M. F. lo fuesen también de estas Provincias, y compatibles con el espíritu público de sus « moradores; el edicto de V. E. lo ha cambiado todo en un « momento. Yo espero, pues, que V. E. trate de reparar este mal que ha causado, disponiendo el ánimo de su augusto Príncipe á desistir de una empresa que debe perjudicar mucho su reputación y la felicidad de sus vasallos, « sean cuales fuesen los resultados favorables ó adversos á « estas Provincias. Sobre todo, recomiendo á V. E. la revocación de su citado edicto, para ahorrar á la humanidad « tantos desastres y al orbe todo tanto escándalo. Dios guarde á V. E. etc.» *Segundo.* La misión extraordinaria á la Corte de Río Janeiro queda suspensa hasta tanto que de un modo inequívoco se manifiesten ventajosas á estas Provincias las negociaciones que pudieran entablar, teniendo por base la independencia nacional, la evacuación del territorio oriental y la conformidad absoluta al espíritu público de los pueblos. — *Tercero.* Todos los vasallos de S. M. F. residentes en esta Capital, saldrán dentro de tres días á la Guardia de Luján, estando seguros de que serán bien tratados, siempre que por parte del General Lecor no se realicen las amenazas que contiene el edicto de 15 de Febrero, y de

que sus intereses serán respetados, conforme al derecho de gentes.—*Cuarto*. Los oficiales procedentes del ejército portugués y el buque de guerra, existentes en este puerto, recibirán inmediatamente su pasaporte para restituirse á la plaza de su procedencia.—*Quinto*. No siendo justo ni político, después del concepto que he formado sobre las pretensiones del Gabinete del Brasil, que mientras por su parte se conservan tropas armadas en el territorio del Estado, no se opongan, por la nuestra, otras que contengan sus operaciones hostiles, y que nos pongan en aptitud de obrar de un modo más activo en caso necesario; he determinado que, además de los auxilios enviados últimamente á varios puntos del territorio oriental, se remitan otros nuevos de todo género, que ya se tiene advertido que se haría, al General Lecor, en contestación á una reclamación suya sobre la materia. A estas medidas y otras reservadas, se añadirán cuantas fuesen ocurriendo á los fines indicados, y yo cuento con que el ardor y patriotismo de los buenos ciudadanos, se dispondrán á todos los sacrificios que demandaren las atenciones de un desgraciado rompimiento que protesto es mi intención evitar, por cuantos medios estuvieren á mis alcances, y del modo que lo permita el curso de los sucesos y la gloria de la patria. Publíquese.—Buenos Aires, Marzo 2 de 1817.—*Juan M. de Pueyrredón*.—*Juan Florencio Terrada*, Secretario interino.

(*Hoja suelta.*)

Mandando grabar una lámina conmemorativa de las batallas de Chacabuco y Maypo y declarando heroicos defensores de la Nación á los que tomaron parte en ellas.

Soberano Congreso. El Soberano Congreso, en sesiones de 2 y 4 del corriente, ha sancionado el decreto y artículos siguientes: «El Congreso de las Provincias Unidas de Sud América, penetrado altamente de las ventajas que ha reportado la Nación en las célebres victorias de Chacabuco y Maypo, obtenidas en el territorio de Chile en los años pasado y presente, por el Ejército Unido de los Andes á las órdenes del General en Jefe Don José de San Martín, sobre los Ejércitos Españoles destinados inmediatamente á la subyugación de aquel Estado, y á ulteriores planes de hostilidad sobre éste; y deseando manifestar á nombre de la nación que representa el justo reconocimiento que es debido al genio y á la virtud, ha venido en decretar y decreta lo siguiente:— Artículo 1º Con el objeto de establecer un monumento que perpetúe la gloria nacional adquirida en las espresadas victorias, se abrirá una lámina en cuyo centro resaltará el retrato del General San Martín teniendo á cada lado un genio. El de la libertad ocupará el lado derecho y el de la victoria el izquierdo, ambos con sus respectivos atributos en una de las manos y sosteniendo con la otra una corona de laurel algo levantada sobre el retrato. Al pie de éste se pondrán las tropas militares correspondientes, dominadas por las banderas nacionales de Chile y de este Estado, y á su contorno se pondrá la inscripción siguiente:— *La gratitud nacional al General en Jefe y Ejército vencedor de Chacabuco y Maypo.* La vista de estas batallas y la de los Andes ocupará la parte más visible y restante de la lámina.— Artículo 2º Se distribuirá un cuadro de esta clase á cada una de las capitales y ciudades subalternas del Estado que deberán colocarse solemnemente en sus respectivas salas capitulares.— Artículo 3º La brillante conducta militar del Ejército de los Andes ha escitado en el ánimo del Congreso los sentimientos más vivos de gratitud y complacencia; por tanto declara á sus Jefes, oficialidad y tropa:— *Heroicos de-*

fensores de la Nación, ordenando que sus nombres se inscriban en un registro cívico de honor que se conservará en el archivo del Cuerpo Representativo, y en el de cada una de las municipalidades del territorio del Estado. Se comisiona al Diputado de este Gobierno residente en Chile para que, á nombre de la Nación, les dé las gracias más espre-sivas: siendo del resorte del Supremo Poder Ejecutivo distribuir á los de este Estado los premios militares á que se hayan hecho acreedores.—Artículo 4º Se comunicará este decreto al Supremo Director del Estado encargándole su publicación y cumplimiento en la forma que más estime conveniente.» — Lo participo á V. E. de orden Soberana para su inteligencia.—Sala del Congreso, Mayo 8 de 1818.—MATÍAS PATRÓN, Presidente.—*Dr. José Eugenio de Elías*, Secretario.—*Al Exmo. Supremo Director del Estado*.

(*Gaceta de Buenos Aires*, núm. 70 y *Redactor del Congreso*, números 32 y 33.)

64

Reglamento Provisorio sancionado por el Soberano Congreso de las Provincias Unidas de Sud-América, para la dirección y administración del Estado, mandado observar entretanto se publica la Constitución.

SECCIÓN PRIMERA

DEL HOMBRE EN SOCIEDAD

CAPÍTULO I

De los derechos que competen á todos los habitantes del Estado

Artículo I. Los derechos de los habitantes del Estado son: la vida, la honra, la libertad, la igualdad, la propiedad y la seguridad.

Art. II. El primero tiene un concepto tan uniforme entre todos que no necesita de más explicación. El segundo resulta de la buena opinión que cada uno se labra para con los demás, por la integridad y rectitud de sus procedimientos. El tercero, es la facultad de obrar cada uno á su arbitrio, siempre que no viole las leyes, ni dañe los derechos de otro. El cuarto consiste en que la ley, bien sea preceptiva, penal ó tuitiva, es igual para todos, y favorece igualmente al poderoso que al miserable, para la conservación de sus derechos. El quinto es el derecho de gozar de sus bienes, rentas y productos. El sexto es la garantía que concede el Estado á cada uno, para que no se viole la posesión de sus derechos, sin que primero se verifiquen aquellas condiciones que estén señaladas por la ley para perderla.

Art. III. Todo habitante del Estado, sea americano ó extranjero, sea ciudadano ó no, tendrá el goce de estos derechos.

CAPÍTULO II

De la religión del Estado

Artículo I. La religión católica apostólica romana, es la religión del Estado.

Art. II. Todo hombre debe respetar el culto público y la religión santa del Estado: la infracción de este artículo será mirada como una violación de las leyes fundamentales del país.

CAPÍTULO III *De la ciudadanía*

Artículo I. Todas las municipalidades de las Provincias formarán inmediatamente un registro público de dos libros; en uno de los cuales se inscribirán indispensablemente todos los ciudadanos con espresión de su edad y origen; y en el otro los que hayan perdido el derecho de ciudadanía, ó se hallen suspensos de ella.

Art. II. Cada ciudadano deberá obtener una boleta firmada por el Alcalde Ordinario de primer voto, autorizada por el escribano de la Municipalidad, que acredite su inscripción en el registro cívico, sin cuya manifestación no podrá sufragar en los actos públicos de que en adelante se tratará.

Art. III. Todo hombre libre, siempre que haya nacido y resida en el territorio del Estado, es ciudadano; pero no entrará en el ejercicio de este derecho hasta que haya cumplido veinte y cinco años de edad, ó sea emancipado.

Art. IV. Todo extranjero de la misma edad, que se haya establecido en el país con ánimo de fijar en él su domicilio, y, habiendo permanecido por espacio de cuatro años, se haya hecho propietario de algún fundo al menos de cuatro mil pesos, ó en su defecto ejerza arte ú oficio útil al país, gozará de sufragio activo en las asambleas cívicas, con tal que sepa leer y escribir.

Art. V. A los diez años de residencia tendrá voto pasivo, y podrá ser elegido para los empleos de república, más no para los de Gobierno: para gozar de ambos sufragios debe renunciar antes toda otra ciudadanía.

Art. VI. Ningún español europeo podrá disfrutar del sufragio activo ó pasivo, mientras la independencia de estas Provincias no sea reconocida por el Gobierno de España.

Art. VII. Los españoles de esta clase, decididos por la libertad del Estado, y que hayan hecho servicios distinguidos á la causa del país, gozarán de la ciudadanía, obteniendo antes la correspondiente carta.

Art. VIII. Los nacidos en el país que sean originarios, por cualquiera línea, de Africa, cuyos mayores hayan sido esclavos en este continente, tendrán sufragio activo, siendo

hijos de padres ingenuos; y pasivo los que estén ya fuera del cuarto grado, respecto de dichos sus mayores.

Art. IX. Los españoles y demás extranjeros que soliciten ser ciudadanos acreditarán su buena comportamiento pública.

Art. X. Unos y otros prestarán juramento de defender, sacrificando sus bienes y vidas, la independencia de las Provincias Unidas de Sud-América del Rey de España, sus sucesores y metrópoli, y de toda otra potencia extranjera, pudiendo comisionar el Supremo Director la recepción de este juramento.

Art. XI. No se concederá carta de ciudadanía al que no haya residido cuatro años en el territorio del Estado, á menos que un mérito relevante, servicios distinguidos, ó la utilidad de la Nación exijan dispensar este término: cuyo discernimiento queda por ahora al prudente juicio del Supremo Director.

Art. XII. Las informaciones de adhesión á la sagrada causa de la independencia nacional, y demás requisitos expresados, se formarán precisamente ante los Gobernadores de Provincia, ó Tenientes, en cuyo territorio residan los pretendientes, con audiencia formal del Síndico Procurador, informe del Cuerpo Municipal y del mismo Jefe; y en su defecto se desecharán. Las cartas que se concedieren se publicarán en la «Gaceta Ministerial».

CAPÍTULO IV

Prerrogativas del ciudadano

Artículo I. Cada ciudadano es miembro de la Soberanía de la Nación.

Art. II. En esta virtud tiene voto activo y pasivo en los casos y forma que designa este Reglamento Provisional.

CAPÍTULO V

De los modos de perderse y suspenderse la ciudadanía

Artículo I. La ciudadanía se pierde: — por la naturalización en país extranjero; por aceptar empleos, pensiones, ó distinciones de nobleza de otra nación; por la imposición legal de pena aflictiva ó infamante, y por el estado de deudor, dolosamente fallido, si no obtiene nueva habilitación después de purgada la nota.

Art. II. La ciudadanía se suspende: — por ser deudor á la Hacienda del Estado, estando ejecutado; por ser acusado de delito, siempre que éste tenga cuerpo justificado y por

su naturaleza merezca pena corporal, afflictiva ó infamante; por ser doméstico asalariado; por no tener propiedad ú oficio lucrativo y útil al país; por el estado de furor ó demencia.

Art. III. Fuera de estos casos, cualquiera autoridad ó magistrado que prive á un ciudadano de sus derechos cívicos, incurre en la pena del Tali6n.

Art. IV. Los jueces que omitan pasar á las respectivas Municipalidades nota de los que deben ser borrados de los registros cívicos, por haber sido condenados en forma legal, serán privados de voto activo y pasivo en dos actos consecutivos.

CAPÍTULO VI

Deberes de todo hombre en el Estado

Artículo I. Todo hombre en el Estado debe primero sumisi6n completa á la ley, haciendo el bien que ella prescribe y huyendo del mal que prohíbe.

Art. II. Obediencia, honor y respeto á los magistrados y funcionarios públicos, como ministros de la ley y primeros ciudadanos.

Art. III. Sobrellevar gustoso cuantos sacrificios demande la patria, en sus necesidades y peligros, sin que se exceptúe el de la vida, si no es que sea extranjero.

Art. IV. Contribuir por su parte al sostén y conservaci6n de los derechos de los ciudadanos y á la felicidad pública del Estado.

Art. V. Merecer el grato y honroso título de hombre de bien, siendo buen padre de familia, buen hijo, buen hermano y buen amigo.

CAPÍTULO VII

Deberes del cuerpo social

Artículo I. El cuerpo social debe garantir y afianzar el goce de los derechos del hombre.

Art. II. Aliviar la miseria y desgracia de los ciudadanos, proporcionándoles los medios de prosperar é instruirse.

Art. III. Toda disposici6n ó estatuto contrario á los principios establecidos en los artículos anteriores, será de ningún efecto.

SECCIÓN SEGUNDA
DEL PODER LEGISLATIVO

CAPÍTULO I

Artículo I. El Poder Legislativo reside originariamente en la Nación: su ejercicio permanente, modo y términos, lo fijará la Constitución del Estado; el que en el entretanto se gobernará por las reglas del presente Reglamento, que no se reformará, interpretará, ni adicionará sino por el Soberano Congreso, cuando causas ó circunstancias muy graves así lo exijan, á juicio del mismo, por un voto sobre las dos terceras partes.

Art. II. Hasta que la Constitución determine lo conveniente, subsistirán todos los códigos legislativos, cédulas, reglamentos y demás disposiciones generales y particulares del antiguo Gobierno Español, que no estén en oposición directa ó indirecta con la libertad é independencia de estas Provincias, ni con este Reglamento y demás disposiciones que no sean contrarias á él, libradas desde el veinte y cinco de Mayo de mil ochocientos diez.

Art. III. El Director Supremo del Estado, tribunales, jueces y funcionarios públicos de cualquiera clase y denominación, podrán representar y consultar al Congreso las dudas que les ocurran en la inteligencia y aplicación de las espresadas leyes, reglamentos ó disposiciones, en casos generales ó particulares, siempre que las consideren en conflicto con los derechos esplicados y sistema actual del Estado; y sus resoluciones se avisarán al Poder Ejecutivo.

SECCIÓN TERCERA
DEL PODER EJECUTIVO

CAPÍTULO I

De la dirección y facultades del Director del Estado

Artículo I. El Supremo Poder Ejecutivo reside originariamente en la Nación y será ejercido por un Director del Estado.

Art. II. Entretanto se sanciona la Constitución, el Congreso nombrará privativamente de entre todos los habitantes de las Provincias al que fuere más digno y de las calidades necesarias para tan alto encargo.

Art. III. En los casos de ausencia del Director, en defensa del Estado, ú otro legítimo impedimento que embarace su ejercicio, el Congreso proveerá lo conveniente.

Art. IV. Los ciudadanos nativos del país, con residencia dentro de él, al menos de cinco años inmediatos á su elección, y treinta y cinco cumplidos de edad, pueden únicamente ser elevados á la Dirección Suprema.

Art. V. El Director del Estado será compensado por sus servicios con doce mil pesos anuales sobre el fondo nacional, sin que pueda percibir ningún otro emolumento.

Art. VI. La duración en el mando del ya nombrado será hasta la sanción de la Constitución del Estado, ó antes si el Congreso lo juzgase conveniente.

Art. VII. Su tratamiento será el de *Esclencia*: su guardia y honores los de Capitán General de Ejército, con sujeción á la ordenanza.

Art. VIII. Al ingreso en el ejercicio de su cargo prestará juramento ante el Congreso ó autoridad que éste comisionare, con asistencia de todas las corporaciones del lugar, en la forma siguiente:

« Yo, N., juro por Dios Nuestro Señor y estos Santos
 « Evangelios, que desempeñaré fiel y legalmente el cargo
 « de Director Supremo del Estado, para el que he sido
 « nombrado: que observaré el Reglamento Provisional dado
 « por el Soberano Congreso en 3 de Diciembre de 1817.
 « Que protegeré la Religión Católica, Apostólica, Romana,
 « celando su respeto y observancia. Que defenderé el territorio de las Provincias de la Unión y sus derechos contra toda agresión enemiga, adoptando cuantas medidas crea convenientes para conservarlas en toda su integridad, libertad é independencia; y cesaré en el mando, luego que me sea ordenado por el Soberano Congreso. Si así lo hubiere Dios me ayude, y si no, Él y la patria me manden.»

Art. IX. Será de su resorte vigilar sobre el cumplimiento de las leyes y la recta administración de justicia, mediante iniciativas á los funcionarios de ella, y la ejecución de las disposiciones del Congreso, dando á este último fin los reglamentos que sean necesarios.

Art. X. Elevará á la consideración y examen de la Representación Nacional los proyectos, reformas y planos que, no siendo de su resorte, gradúe convenientes á la felicidad del territorio.

Art. XI. Será Comandante en Jefe nato de todas las fuerzas del Estado; y tendrá bajo sus órdenes la armada, ejér-

cito de línea, milicias nacionales y cívicas, para la protección de la libertad civil de los ciudadanos, defensa, seguridad, tranquilidad y buen orden de todo el territorio de la Unión.

Art. XII. Será el órgano y tendrá la representación de las Provincias Unidas para tratar con las potencias extranjeras.

Art. XIII. Cuando crea inevitable el rompimiento con alguna potencia, elevará a la consideración del Congreso un informe instruido de las causas que lo impulsen.

Art. XIV. Si el Congreso, en vista de ellas, ó por otros principios, decreta la guerra, el Supremo Director procederá a su solemne declaración, quedando autorizado para levantar ejércitos de mar y tierra, darles impulso y dirección, y adoptar todas las medidas concernientes á la defensa común y daño del enemigo, teniendo presente el artículo IV, capítulo I, sección VI, *del Ejército y Armada*.

Art. XV. Podrá iniciar, concluir y firmar tratados de paz, alianza, comercio y otras relaciones exteriores, con calidad de aprobarse por el Congreso dentro del término estipulado para su ratificación, pasándole al efecto en este estado íntegros los documentos originales de la negociación girada.

Art. XVI. En los casos en que el secreto no se gradúe de primera importancia para el feliz resultado de las negociaciones, manifestará el Congreso el objeto, curso y el estado de ellas, para procurarse reglas que disuelvan las dificultades y aseguren el acierto.

Art. XVII. Recibirá los embajadores, enviados y cónsules de las naciones, y nombrará por sí solo los que convenga destinar cerca de las cortes extranjeras.

Art. XVIII. Proveerá todos los empleos y cargos militares, generales de los ejércitos y fuerzas navales, con sujeción á la ordenanza de ejército y marina que existe, en lo que esta última sea adaptable á las circunstancias.

Art. XIX. Podrá premiar á los oficiales beneméritos con los grados establecidos y escudos que designe, sin gratificación separada del sueldo que les corresponda.

Art. XX. Tendrá la superintendencia general en todos los ramos de hacienda del Estado, casas de moneda, bancos, minerías, azogues, correos, postas y caminos.

Art. XXI. Proveerá todos los empleos políticos, civiles, de Hacienda y otros cualesquiera, por el método y en la forma prescrita en este Reglamento.

Art. XXII. Presentará, por ahora, para las plazas eclesiásticas vacantes de las catedrales de las Provincias Unidas y demás beneficios eclesiásticos de patronato.

Art. XXIII. Podrá suspender á los magistrados y funcionarios públicos, con justa causa, dando después cuenta, por ahora, al Congreso.

Art. XXIV. Si las causas que han motivado la suspensión fueren solo de política, el Soberano Congreso las tomará en consideración por sí mismo.

Art. XXV. Si fueren de justicia, el Soberano Congreso nombrará una Comisión de fuera, ante quien acusará ó denunciará el agente de la Cámara al empleado suspenso, y con audiencia de éste, declarará si hay ó no mérito para su remoción.

Art. XXVI. También podrá trasladarlos á otros destinos, y en caso de inferirles graves perjuicios, podrán deducirlo ante el Congreso para que provea.

Art. XXVII. Nombrará los tres Secretarios de Gobierno, Hacienda y Guerra, y sus respectivos oficiales, siendo responsable de la mala elección de los primeros.

Art. XXVIII. Concederá los pasaportes para fuera de las Provincias del Estado, por mar y tierra, y las licencias para la carga, descarga, entrada y salida de las embarcaciones.

Art. XXIX. Cuidará con particularidad de mantener el crédito de los fondos del Estado, consultando eficazmente su recaudación y el que se paguen con fidelidad las deudas en cuanto lo permitan la existencia de caudales y atenciones públicas.

Art. XXX. Podrá disponer libremente por sí solo de dichos fondos para los gastos ejecutivos de la defensa del Estado, durante la presente guerra de la independencia, con previo informe por escrito de los Secretarios de Hacienda y Guerra.

Art. XXXI. Confirmará ó revocará con arreglo á ordenanza, y dictamen de su asesor, que será el Auditor General de Guerra, las sentencias dadas contra los individuos del fuero militar por los tribunales de esta clase establecidos en la capital y en los ejércitos, ó por los Consejos de Guerra ordinarios en los demás pueblos del distrito.

Art. XXXII. Tendrá facultad de suspender las ejecuciones y sentencias capitales, conceder perdón ó conmutación en el día del aniversario de la libertad del Estado, ó con ocasión de algún insigne acontecimiento que añada nuevas glorias, oyendo antes el informe del tribunal del reo.

Art. XXXIII. Sin mandato especial del Director no podrá ser ejecutada ninguna sentencia que se dé contra los fondos del Estado; y podrá suspender los libramientos girados contra éstos, siempre que el pago sea incompatible con las urgencias de aquél.

Art. XXXIV. Remitirá cada año á la Representación Nacional una razón exacta de las entradas de todas las cajas del Estado y Municipalidades de los pueblos, en numera-rio, especies y créditos activos, como también de las inver-siones, existencias y deudas, impartiendo las órdenes opor-tunas á quien deban formarlas.

Art. XXXV. Las órdenes del Director Supremo del Es-tado serán exactamente obedecidas en toda la estensión de las Provincias Unidas.

Art. XXXVI. Expedirá los títulos de ciudadanía, por ahora y hasta tanto se forme la Constitución del Estado.

CAPÍTULO II

Límites del Poder Ejecutivo

Artículo I. No podrá mandar expediciones por agua ó tierra contra alguna de las Provincias Unidas en Congreso, ú otras de este continente que sostengan la Independencia, para obrar hostilmente, ó restablecer el orden en ellas, sin previo acuerdo del Congreso.

Art. II. En los casos, no obstante, cuya naturaleza y cir-cunstanciae exijan proceder pronta y ejecutivamente, obrará así, dando después cuenta instruída.

Art. III. No podrá en ningún caso tener el mando de un Regimiento particular.

Art. IV. No ejercerá jurisdicción alguna civil, ó criminal, de oficio ni á petición de parte: no alterará el sistema de administración de justicia según leyes.

Art. V. No compulsará, avocará, ni suspenderá las causas pendientes, sentenciadas ó ejecutoriadas en los tribunales de justicia.

Art. VI. Cuando la urgencia del caso lo obligue á arres-tar á algún ciudadano, deberá ponerlo dentro de tercero día á disposición de los respectivos magistrados de Justicia con todos los antecedentes y motivos para su juzgamiento.

Art. VII. Se exceptúa el caso en que la causa del arresto sea de tal naturaleza, que por ella se halle comprometida la seguridad del país, ó el orden y tranquilidad pública, en cuyo evento tendrá al reo ó reos, de acuerdo con su Asesor y Fiscal de la Cámara, que serán responsables mancomunadamente por todo el tiempo necesario á tomar las medidas de seguridad haciendo después la remisión á las justicias.

Art. VIII. No podrá imponer pechos, contribuciones, em-préstito ni aumentos de derechos de ningún género, directa ni indirectamente, sin previa resolución del Congreso.

Art. IX. No espedirá orden ni comunicación alguna sin que sea suscrita por el Secretario del Departamento á que corresponda el negocio, no debiendo tener efecto las que carezcan de esta calidad.

Art. X. No podrá conceder á persona alguna del Estado, excepciones ó privilegios esclusivos, escepto á los individuos de arte, ó establecimientos de pública utilidad, con aprobación del Congreso.

Art. XI. La correspondencia epistolar de los ciudadanos, es un sagrado que el Director no podrá violar, ni interceptar bajo de responsabilidad.

Art. XII. En los casos, sin embargo, de un fundado temor de traición al país, ó subversión del orden público á juicio del Director, de su Secretario de Estado en el Departamento de Gobierno, y del Síndico Procurador del común, que tendrán voto con obligación del secreto, y bajo igual responsabilidad, podrá proceder, asociado con los expresados, á la apertura y examen de la correspondencia. Igual operación y bajo la misma responsabilidad, podrá hacerse por los Gobernadores y Tenientes de los respectivos pueblos, con el Secretario y Síndico Procurador, cuyo defecto deberá suplirse por los dos primeros Capitulares.

Art. XIII. Los que en los puntos mencionados de traición, ó subversión del orden público, resultaren delinquentes por la correspondencia, podrán ser procesados y asegurados, según la mayor ó menor inminencia del peligro.

Art. XIV. A escepción de los casos de que habla el art. XXX del capítulo anterior, no podrá por sí solo disponer de los fondos del Estado para gastos estraordinarios, sin previo acuerdo de los tres Secretarios, Asesor General y Fiscal de la Cámara, todos con voto, haciéndose constar en espediente ante el Escribano de Hacienda la necesidad y utilidad del gasto.

Art. XV. No podrá usar de la prerrogativa que le concede el artículo XXXII del capítulo anterior, en favor de los delinquentes de traición á la patria y demás delitos esceptuados.

Art. XVI. No podrá proveer empleo alguno civil ó militar, en sus parientes hasta el tercer grado de cosanguinidad inclusive, y primero de afinidad, sin noticia y aprobación del Congreso.

Art. XVII. Se esceptúan los que estando ya en carrera ó servicio, fueren propuestos por sus respectivos jefes por escala de antigüedad, según sus méritos.

Art. XVIII. No conferirá grado de Brigadier, ni de Coronel Mayor, sin noticia y aprobación del Congreso.

Art. XIX. Se exceptúa el caso en que, por alguna brillante acción de guerra, ú otro servicio extraordinario de armas, convenga premiar incontinenti el mérito de algún jefe, que se halle próximo á dichos grados.

CAPÍTULO III

De los Secretarios de Estado

Artículo I. Los Secretarios de Estado entenderán respectivamente en todos los negocios que se hallan deslindados en el último reglamento de sus oficios, el que subsistirá en todo lo que no estuviere en oposición con estos artículos; y el de Guerra lo será también de Marina.

Art. II. No podrán por sí solos en ningún caso, negocio, ni circunstancia, tomar deliberaciones sin previo mandato y anuencia del Director.

Art. III. Podrán comunicar por sí las órdenes de menor importancia acordadas por el Gobierno, y bajo la obligación de escribirlas en el libro de asiento, como está dispuesto.

Art. IV. No podrán autorizar decreto ni providencia contrarios á este Reglamento, sin que les sirva de excepción la súplica ó mandato del Director; y en el caso de fuerza, cumplirán con hacer las debidas protestas, poniéndolo inmediatamente en noticia del Congreso.

Art. V. Serán amovibles á voluntad del Director, igualmente que los oficiales de las Secretarías.

Art. VI. Cuando la remoción proceda de ineptitud, falta de instrucción competente ú otros defectos compatibles con la integridad, inocencia y buena comportación, podrán ser indemnizados con otros destinos análogos á sus circunstancias y mérito, sin que por la separación se les infiera nota.

Art. VII. Todas las causas criminales de los Secretarios de Estado, promovidas de oficio ó á instancia de parte, serán elevadas al conocimiento del Congreso.

Art. VIII. El Supremo Director podrá de oficio ó por acusación, sumarar á los Secretarios, dando cuenta con autos al Congreso.

Art. IX. Una Comisión de dentro ó fuera de su seno será nombrada por este último ó por el cuerpo que le subrogue para el juzgamiento de dichas causas.

Art. X. La sentencia absolutoria pronunciada por la Comisión no causará el efecto de precisa restitución al cargo.

Art. XI. Los Secretarios podrán recusar con causa probada á los Jueces en Comisión, y apelar de su sentencia pa-

ra ante tres individuos que escogerán entre nueve, que en el caso nombrará segunda vez el Congreso.

Art. XII. El sueldo de dichos Secretarios será de tres mil pesos anuales, y su tratamiento oficial de *Señoría*.

SECCIÓN CUARTA.
DEL PODER JUDICIAL.

CAPÍTULO I

Art. I. El poder Judicial reside originariamente en la Nación: su ejercicio por ahora y hasta que se sancione la Constitución del Estado, en el Tribunal de recursos de segunda suplicación, nulidad é injusticia notoria, que se establece en el artículo XIV del capítulo siguiente; en las Cámaras de Apelación y en los demás juzgados. Para los casos que no tengan tribunal señalado por la ley, proveerá el Congreso.

Art. II. No tendrá dependencia alguna del Poder Ejecutivo Supremo, y en sus principios forma y extensión de funciones, estará sujeto á las leyes de su instituto.

CAPÍTULO II

De los Tribunales de Justicia

Artículo I. Las Cámaras de Apelaciones conservarán el distrito que hasta ahora han tenido: se compondrán de cinco individuos y un Fiscal: su tratamiento en cuerpo unido será de *Esclencia*, y en particular, de *usted* llano: su sueldo, de dos mil y quinientos pesos, libres de media-annata y descuentos.

Art. II. La presidencia de las Cámaras en lo interior y actos públicos turnará por los cinco miembros cada cuatro meses, empezando por el orden de su posesión: el Presidente llevará la voz, cuidará de la policía y despacho, ejerciendo todas las funciones de los antiguos regentes, en lo adaptable según su reglamento, y tendrá el tratamiento de *Señoría* en materias de oficio.

Art. III. Ninguno podrá ser nombrado en adelante, ni aun interinamente, para los empleos de las Cámaras de Apelaciones, si no es mayor de veinticinco años y letrado recibido, con seis al menos de ejercicio público.

Art. IV. Los nombramientos de los individuos de las Cámaras, en vacante de los que hayan obtenido anteriormente

despachos del Gobierno Supremo de estas Provincias, se harán por el Director del Estado en propuesta de cuatro letrados, que pasarán los mismos tribunales por juicio comparativo de la mayor aptitud y servicios de los abogados del distrito.

Art. VI. La duración de estos empleados será la de su buena comportamiento; pero podrán ser trasladados de una Cámara á otra, y estarán sujetos á residencia cada cinco años, ó antes si lo exigiese la justicia.

Art. VII. Tendrán las Cámaras dos relatores provistos por oposición segun ley, dotados á mil quinientos pesos cada uno, sobre los fondos del Estado, sin derechos ni emolumentos de ningún género. Dos Agentes auxiliares, uno de lo civil, otro de lo criminal, repartiéndose entre ellos los negocios de Hacienda, á discreción del Fiscal: ambos con la dotación de mil doscientos pesos, sin los antiguos derechos de *vistas*. Dos porteros con quinientos pesos cada uno que desempeñarán alternativamente por semanas, el oficio de Alguacil. Seis procuradores, cuya intervención se estenderá, cuando las partes quieran nombrarlos, á los Juzgados subalternos de primera instancia, excepto el Consulado, Juzgado de Alzadas y Diputaciones de Comercio; y dos Escribanos que percibirán solo los derechos de actuación, según arancel, sin los llamados de *tiras*, que quedan proscriptos.

Art. VIII. Conocerán no solo de todas las causas y negocios, de que según leyes y demás disposiciones posteriores conocían las Audiencias estinguidas, sino también de las que este Reglamento les designa.

Art. IX. Los recursos de nulidad é injusticia notoria de las sentencias del Tribunal de Alzada de Comercio, se decidirán en las Cámaras de Apelaciones.

Art. X. El Juzgado de Alzada turnará anualmente entre los individuos de la Cámara del territorio donde ocurriere la alzada.

Art. XI. Las competencias entre la jurisdicción ordinaria y mercantil se decidirán por el Camarista Presidente, con arreglo á la cédula ereccional del Consulado.

Art. XII. Conocerán por ahora en grado de apelación y primera súplica de los pleitos sobre contrabando y demás ramos y negocios de Hacienda, quedando la primera Instancia á los Intendentes de Provincia, excepto en los aprehendimientos y detenciones de buques por los bajeles de guerra del Estado, ó por corsarios particulares, para cuyo conocimiento continuará el juicio de presas en los tribunals que se hallan establecidos.

Art. XIII. En los recursos de segunda suplicación, nulidad é injusticia notoria, las Cámaras, terminada la sustanciación del grado, darán cuenta con autos al Director del Estado.

Art. XIV. Este, con consulta de su Asesor General, nombrará inmediatamente una Comisión de cinco letrados que la determinen, la cual, concluido su acto, quedará disuelta, y durante el ejercicio de sus funciones tendrá el tratamiento de Escelencia.

Art. XV. Será nombrado por el Director del Estado en cada capital de Provincia, á propuesta en terna de la respectiva Cámara, un letrado, que ejerza sus funciones de Juez de Alzada en toda ella.

Art. XVI. Su dotación será de mil ochocientos pesos anuales sobre los fondos del Estado, libres de media-annata y descuentos.

CAPÍTULO III

De la administración de justicia

Artículo I. La administración de justicia seguirá los mismos principios, orden y método que hasta ahora se han observado, según las leyes y las siguientes disposiciones.

Art. II. El juez de alzada de Provincia, conocerá de las apelaciones de los Alcaldes ordinarios y demás ministros de justicia, en todos los pleitos y negocios civiles entre partes que fueren apelados.

Art. III. Queda á los interesados libre el recurso gradual á las Cámaras, excepto en los pleitos de cuantía de mil pesos ó menor, que quedarán concluidos con dos sentencias conformes.

Art. IV. Conocerán también de las apelaciones en causas criminales de cualquier género, pasando á las Cámaras las que según su naturaleza y circunstancias requieren por las leyes su aprobación ó consulta.

Art. V. Queda á las partes en dichas causas la libertad de ocurrir directamente á las Cámaras, omiso el Juzgado de Provincia.

Art. VI. Queda abolido en todas sus partes el reglamento de la Comisión de Justicia de 20 de Abril de 1812, y restablecido el orden de derecho para la prosecución de las causas criminales.

Art. VII. Se permite en ésta á los reos nombrar un padrino que presencie su confesión y declaraciones de los testigos, sin perjuicio del abogado y procurador establecidos por la ley y práctica de los tribunales.

Art. VIII. Cuidará el padrino que la confesión y declaraciones se sienten por el escribano ó Juez de la causa, clara y distintamente en los términos en que hayan sido expresadas, sin modificaciones ni alteraciones, ayudando al reo en todo aquello en que, por el temor, pocos talentos ú otra causa, no pueda por sí mismo expresarse.

Art. IX. Las causas criminales de todas clases que hasta la actualidad se hallen pendientes sin este nuevo método de defensa, seguirán en sus posteriores actuaciones el común de derecho.

Art. X. Queda restituido el juramento en todos los casos y causas que le requieren las leyes, sin innovación alguna, excepto en la confesión del reo sobre hecho ó delito propio, en que no se le exigirá.

Art. XI. Queda prohibida toda licencia para ejecutarse las sentencias de presidio, azotes ó destierro, sin consultarse antes con las Cámaras, bajo la pena de dos mil pesos é inhabilitación perpetua al juez que se excediere en este gravísimo punto.

Art. XII. Se exceptúa el extremo caso en que por conmoción popular ú otro inminente peligro de la salud pública, no pueda deferirse la ejecución de lo sentenciado, dándose siempre cuenta con autos á las Cámaras.

Art. XIII. Toda sentencia en causas criminales, para que se reputé válida, debe ser pronunciada por el testo espreso de la ley, y la infracción de ésta es un crimen en el magistrado, que será corregido con el pago de costas, daños y perjuicios causados.

Art. XIV. No se entienden por esto derogadas las leyes que permiten la imposición de las penas al arbitrio prudente de los jueces, según la naturaleza y circunstancias de los delitos; ni restablecida la observancia de aquellas otras, que por atroces é inhumanas ha proscripto ó moderado la práctica de los Tribunales Superiores.

Art. XV. Ningun individuo podrá ser arrestado sin prueba á lo menos semiplena, ó indicios vehementes de crimen que se harán constar en previo proceso sumario.

Art. XVI. En el término de tercero día se hará saber al reo la causa de su prisión: y no siendo el juez aprehensor el que deba seguirla, lo remitirá con los antecedentes al que fuese nato y deba conocer.

Art. XVII. Ningun reo estará incomunicado después de su confesión, y nunca podrá dilatarse ésta por más de diez días, sin justo motivo, del que se pondrá constancia en el proceso, haciéndose saber el embarazo al reo, y sucesivamente de tres en tres días, si éste continuase.

Art. XVIII. Siendo las cárceles para la seguridad, y no para castigo de los reos, toda medida que, á pretesto de precaución, solo sirva para mortificarlos maliciosamente, será corregida por los Tribunales Superiores, indemnizando á los agraviados por el orden de justicia.

Art. XIX. Para decretarse prisión, embargo de bienes y pesquisa de papeles contra cualquier habitante del Estado, se individualizará en el decreto su nombre ó señales que distingan su persona, con el objeto de la diligencia.

Art. XX. En el acto del embargo se formará prolijo inventario á presencia del reo, quien deberá firmarlo, dándosele copia autorizada para su resguardo, puestos los bienes en seguridad con fe del escribano de la causa, ó en su defecto del mismo juez y dos testigos.

Art. XXI. Cuando al tiempo del embargo no se pudiese por algún incidente formar inventario, se asegurarán los bienes á que se estienda dicho embargo, bajo de dos llaves, una de las cuales tomará el juez y la otra el reo: y no siendo esto practicable, se cerrarán y sellarán á presencia suya las arcas y puertas de la casa ó habitaciones, y en primera oportunidad se abrirán á su presencia y practicará el inventario.

Art. XXII. Cuando hubiese de hacerse el embargo en ausencia del reo, fuera del lugar, nombrará el juez un ciudadano honrado de bienes conocidos, que haga sus veces en este acto, al que se le abonará la comisión que se considere proporcionada á su trabajo; pero si la no asistencia del reo procediese de enfermedad, él mismo nombrará personero de su satisfacción.

Art. XXIII. El juez ó comisionado que prenda ó arreste á cualquier ciudadano (no siendo en flagrante delito) sin guardar el orden que prescribe el artículo XV de este capítulo, será removido: el que faltase á lo que se previene para los embargos en los anteriores, será responsable al interesado de los bienes que justificare faltarle.

Art. XXIV. Hallándose abolido el Tribunal de Concordia, los jueces de primera instancia, antes de entrar á conocer judicialmente, invitarán á las partes á la transacción y conciliación por todos los medios posibles.

Art. XXV. Los escribanos harán personalmente las notificaciones á las partes, subscribiéndolas éstas. En caso de resistir á ello ó no saber firmar, suplirá por el notificado un testigo, con espresión del defecto.

Art. XXVI. Si el escribano no encontrase á la parte para la notificación en su casa, lo solicitará hasta por tercera vez:

si aun entonces no la hallare, le dejará un cedulón firmado de su mano, que contenga el auto ó decreto que va á notificarle, y haciendo constar en el proceso las diligencias de haberlo así ejecutado, con la atestación de los dos testigos surtirá los mismos efectos, que si se hubiere hecho la notificación en persona.

Art. XXVII. Cualquiera omisión de los escribanos en punto tan interesante, será castigada por el juez de la causa, según la gravedad y circunstancia del caso.

CAPÍTULO IV

De los Gobernadores de Provincia

Artículo I. Los Gobernadores Intendentes y Tenientes Gobernadores, quedan exonerados del ejercicio de jurisdicción ordinaria, civil y criminal entre partes y de oficio, conservando todas las facultades respectivas á Gobierno, Policía, Hacienda y Guerra.

Art. II. Se observará por ellos y demás á quienes toque, el Código de Intendencias, salvo lo relativo á la Junta Superior de Hacienda, que queda suprimida, y todo lo que sea contrario á este Reglamento.

Art. III. No podrán los Gobernadores Intendentes ni Tenientes Gobernadores usar de la facultad que concede el artículo 15 de dicho Código, para la confirmación de los Cabildos y suspensión de ellos.

Art. IV. En los casos, no obstante, en que tema prudentemente la subversión del orden público en razón de ejecutarse dichos acuerdos, podrán suspenderlos bajo de responsabilidad, si ante el Director Supremo no acreditan la legalidad de su procedimiento.

Art. V. Todo cuanto en el Capítulo II, Sección III, se haya prohibido al Director Supremo del Estado, se entenderá también con los Gobernadores y Tenientes Gobernadores, en cuanto sea adaptable respectivamente á sus oficios y empleos.

Art. VI. Queda suprimido el empleo de Teniente Asesor de las Intendencias establecido en el Código de ellas. Los que en la actualidad obtengan estos empleos serán atendidos por las Cámaras en las propuestas de otros destinos.

Art. VII. Para el despacho nombrarán los Intendentes en su tiempo un Secretario de su satisfacción, con la precisa calidad de letrado, que le asesore también en los negocios y ramos de que trata el artículo I de este capítulo, pasando el nombramiento al Director para que le libre el correspondiente título.

Art. VIII. Su doptación, por ahora, será de mil doscientos pesos anuales sobre los fondos del Estado (incluso en ellos los seiscientos que señala dicho Código para los gastos de secretaría) libres de media-annata y descuentos.

Art. IX. Ningún funcionario público de los comprendidos en los capítulos de esta Sección percibirá derechos ó emolumento alguno, á excepción de las actuaciones que suplan por sí mismos en defecto de escribano, las que cobrarán según arancel.

SECCIÓN QUINTA

DE LAS ELECCIONES DE OFICIOS Y EMPLEOS PÚBLICOS,
Y FORMA DE LAS PROVISIONES

CAPÍTULO I

Elección de Gobernadores Intendentes, Tenientes Gobernadores y Subdelegados de Partido.

Art. I. Las elecciones de Gobernadores Intendentes, Tenientes Gobernadores y Subdelegados de Partido, se harán á arbitrio del Supremo Director del Estado, de las listas de personas elegibles de dentro ó fuera de la Provincia, que todos los Cabildos en el primer mes de su elección formarán y le remitirán.

Art. II. Estas listas que deben publicarse por la prensa, no excederán de ocho individuos, ni bajarán de cuatro para cada cargo.

Art. III. De los comprendidos en una lista no podrán ser electos más de dos, á no ser que un tercero se halle inscripto en la lista de otra Provincia.

Art. IV. Los nombramientos de Subdelegados de Partido con numerosa población, que no tienen Ayuntamiento, se harán con la calidad de interinos, entretanto se erigen y establecen en ellos Municipalidades.

Art. V. La duración de estos empleos será por el término de tres años, y concluidos, quedarán sujetos á residencia.

Art. VI. El sueldo de los Gobernadores de Provincia en el territorio actualmente libre, será el de tres mil pesos, y el de los Tenientes Gobernadores, dos mil doscientos.

Art. VII. Cualquier individuo que por maquinación, intriga, cohecho ú otro reprobado medio, tuviese parte ó influjo en la propuesta de su persona, para los indicados destinos, será repelido de las listas por el Director del Estado, y declarado inhábil para obtener empleo alguno con suficiente constancia de su culpabilidad.

Art. VIII. En la misma pena incurrirán los Capitulares, que delinquieren en la formación de las listas de elegibles por cualquiera de los vicios expresados en el artículo anterior.

CAPÍTULO II

Elecciones de Cabildo

Art. I. Las elecciones de empleos concejiles, se harán popularmente en las ciudades y villas donde se hallen establecidos Cabildos, sin esceder la convocación fuera del recinto de ellas.

Art. II. Sin embargo, los ciudadanos de las inmediaciones y campaña, con ejercicio de ciudadanía, podrán concurrir, si quisieren, á dichas elecciones.

Art. III. La ciudad ó villa se dividirá en cuatro secciones, y en cada una de ellas votarán todos los ciudadanos allí comprendidos, por tantos electores cuantos correspondan al número de habitantes en dicha sección, á razón de cinco mil almas por cada elector.

Art. IV. En las ciudades y villas cuya población no sea suficiente para el nombramiento de cinco electores, sea cual fuere el número menor, se nombrarán precisamente dichos cinco electores, votando cada sufragante en su respectivo cuartel, por otros tantos individuos de su satisfacción.

Art. V. Este acto será presidido por un capitular asociado de dos alcaldes de barrio y un escribano, si lo hubiere, ó en su defecto de dos vecinos en calidad de testigos, y se practicará el día 15 de Noviembre.

Art. VI. Concluida la votación en las secciones, se reunirán todos los votos de ellas en la Sala Capitular, y hecho allí, por los mismos Regidores que la han presidido, y el Alcalde de primer voto, públicamente, el escrutinio general, serán electores los que resulten con mayor número de sufragios.

Art. VII. Estos se juntarán en la misma Sala Capitular, á hacer la elección para el año entrante, el día 15 de Diciembre, y concluida se notificará inmediatamente á los electos, á fin de que estén prontos para su recepción el día primero de Enero, en que serán posesionados por el Cabildo saliente, dándose aviso al Jefe Gobernador y Director del Estado.

Art. VIII. El entrante, al segundo día de su posesión, elegirá los Alcaldes de barrio Hermandad y Pedáneos, que sean necesarios para mantener el orden y administrar justicia, según sus facultades y empleo en los Curatos y Departa-

mentos de la campaña en toda la comprensión de su respectivo territorio.

Art. IX. Formará libro para dichas elecciones, que harán recaer en personas de la mejor calidad y nota, vecinos del lugar, que sepan leer y escribir; y pasarán razón de los electos al Gobernador de la Provincia, ó Teniente Gobernador para su conocimiento.

Art. X. Nombrará el Cabildo entrante, al menos un Asesor letrado, que lo sea de la corporación, y de los juzgados de los Alcaldes ordinarios.

Art. XI. Señalará el Cabildo la doptación del Asesor sobre los fondos municipales, sino estuviese anteriormente asignada; y cuando aquéllos no alcancen, lo representará al Director del Estado, para que provea lo conveniente.

Art. XII. Los Gobernadores Intendentes, Tenientes Gobernadores, y Cabildos ya establecidos, bajo la más alta responsabilidad, informarán al Congreso, de los pueblos donde, por su vecindario y competentes proporciones, convenga establecer nuevos Ayuntamientos con el título de ciudades ó villas.

CAPÍTULO III

Forma de la provisión de empleos

Art. I. Los funcionarios públicos, que deban tener la calidad de letrados, excepto los Asesores de Cabildo y Secretarios Asesores de Intendencias, serán nombrados por el Director del Estado, á propuesta que harán en terna las Cámaras de Apelaciones por su respectivo distrito. El orden numeral no dará preferencia para la provisión de los respectivos jefes por escala de antigüedad, en igualdad de aptitud y buenos servicios.

Art. II. Las propuestas militares de cualquier grado y calidades se harán estrictamente por el orden, conducto y escalas que previene la ordenanza general del ejército.

Art. III. Las de Hacienda, Policía, Maestranza, Fábricas, Capitanías de Puertos y de otros cualesquier ramos y denominaciones, se harán por el Director del Estado, á propuesta de los respectivos jefes por escala de antigüedad, en igualdad de aptitud y buenos servicios.

Art. IV. La propuesta se publicará por el jefe proponente en la oficina ó Departamento donde ocurriere la vacante, ocho días antes de elevarla al Director, para que quede espedido á los que en ella fueren agraviados, el recurso que crean convenirles.

Art. V. Cuando tuvieren causa justa para él, lo interpondrán ante el Director, que conocerá sumariamente, declarando justa la propuesta, si la encontrase tal, y procediendo á espedir el nombramiento, ó devolviéndola al jefe proponente para que la reforme.

Art. VI. En los despachos se espesará siempre la calidad de la propuesta, sin la cual ni se tomará razón en el Tribunal de Cuentas y oficinas á que correspondan, ni se acudir con el sueldo al que de otro modo fuere provisto.

Art. VII. La provisión de empleos de jefes en cualquier ramo ú oficina, la hará por sí solo el Director del Estado, guardando la opción que corresponda á los inmediatos (previos los necesarios informes) en cuanto lo crea compatible con el mejor servicio público y del Estado, siendo responsable de las malas elecciones de dichos jefes.

Art. VIII. La de cualesquiera otras plazas en servicio del Estado, no sujetas á ramo, oficina ó escala determinada, serán libres al Director Supremo para colocar á cualquiera de los ciudadanos que crea más á propósito por su aptitud y calidades que lo recomienden.

Art. IX. La duración de todo empleado será la de su buena y arreglada comportación.

CAPÍTULO IV

De las elecciones de Diputados de las Provincias para el Congreso General y forma de ellas. Asambleas primarias

Artículo I. Para las Asambleas primarias, que han de celebrarse para la elección de Diputados de Provincias, se formará antes indispensablemente un censo puntual de todos los habitantes de su distrito, si no estuviese ya formado por lo menos de ocho años á esta parte con la respectiva separación de ciudades, villas y pueblos.

Art. II. Las Asambleas primarias en las ciudades y villas donde hubiese Municipalidades, se harán en cuatro secciones, y cada una será presidida por un miembro de la Municipalidad y dos Jueces de barrio de la mayor probidad, auxiliados de un escribano, si hubiese número competente de estos oficiales, ó en su defecto dos testigos.

Art. III. En cada sección darán su voto los sufragantes por tanto número de electores cuantos correspondan al total de la población; de suerte que resulte un elector por cada cinco mil almas; pero si la ciudad ó villa no sufre las cuatro secciones, se hará la votación en un solo lugar.

Art. IV. En la campaña guardará la misma proporción cada elección; pero el método de las secciones será diverso.

Art. V. En cada Asamblea primaria habrá secciones de proporción, y cada ciudadano votará en ella por un elector.

Art. VI. El Juez principal del curato, y el Cura con tres vecinos de probidad, nombrados por la Municipalidad del distrito, se juntarán en casa del primero, y recibirán los sufragios, según fueren llegando, los cuales depositarán inmediatamente en una arca pequeña de tres llaves, que se distribuirán entre el Juez, el Cura y uno de los vecinos asociados.

Art. VII. El sufragio podrá darse de palabra ó por escrito, abierto ó cerrado, según fuere del agrado del sufragante, y en él se nombrará la persona que ha de concurrir á la Asamblea electoral con la investidura de elector.

Art. VIII. Después de entregado el sufragio, ó escrito en una cédula el que se diere de palabra, se retirará el sufragante, cuidando de esto los Jueces, para evitar confusión y altercados.

Art. IX. Si alguno dedujese en aquel acto ó después, queja sobre cohecho ó soborno, deberá hacerse, sin pérdida de instantes, justificación verbal del hecho ante los cinco Jueces de aquella sección, reunidos al efecto el acusador y acusados; y siendo cierto, serán privados de voz activa y pasiva perpetuamente el sobornante y el sobornado. Los calumniadores sufrirán la misma pena por aquella ocasión, y de este juicio no habrá más recurso.

Art. X. Concluido el término perentorio de dos días, que durará la recepción de votos, quedarán cerrados los actos de aquella sección, y al siguiente día, el Alcalde, con dos de los tres vecinos asociados, conducirán la arca cerrada á la sección del número, entregando entonces el Cura su llave al que corresponda.

Art. XI. El distrito de curatos reunidos, que comprenda en su territorio cinco mil almas, es la sección de número.

Art. XII. Cuando no hubiere alguna villa en el distrito de la sección de número, la Municipalidad inmediata de aquel territorio señalará el curato que ha de ser cabeza de la sección, prefiriendo siempre el de vecindario más numeroso y decidiendo las dudas que en ello ocurran.

Art. XIII. A la cabeza de la sección de número deberán conducirse las arcas de las secciones de proporción, las que recibirán el Juez, el Cura y tres asociados de los de mayor probidad é instrucción, y abriéndolas, contarán los sufragios y calificarán la pluralidad, practicando este acto

públicamente y á presencia de todos los que quieran concurrir á él.

Art. XIV. Al que resultare con mayor número de votos para elector, se le notificará que se traslade inmediatamente al lugar donde ha de celebrarse la Asamblea electoral.

CAPÍTULO V

De las Asambleas electorales

Artículo I. Las Asambleas electorales se congregarán en la Casa Consistorial de la ciudad ó villa, que tengan Municipalidad, donde deberán reunirse los electores el día que se señale, según las distancias y circunstancias, sin demoras.

Art. II. El Gobernador Intendente, Teniente Gobernador ó Subdelegado, que fuese cabeza de Municipalidad, presidirá el primer acto de los electores, que será nombrar un Presidente de entre ellos para guardar el orden; y nombrado á pluralidad de votos, le cederá el lugar, retirándose inmediatamente.

Art. III. La Asamblea electoral estenderá sus actas con el Escribano de la Municipalidad, y podrá acordar previamente tan solo aquellas cosas, que son precisas para establecer el buen orden y validez de su elección, sin ocuparse en estos actos más tiempo que el preciso de veinticuatro horas.

Art. IV. Procederá inmediatamente á la elección de Diputado ó Diputados para el Congreso, á lo que han sido reunidos los electores, y la elección por ahora resultará de la simple pluralidad de votos.

Art. V. Si el caso fuese tal que por la dispersión de sufragios y la adhesión de cada sufragante al suyo, después de repetida hasta tres veces la votación, no resultase ni simple pluralidad, entonces los que tuviesen igualdad de votos entrarán en suerte, y ésta decidirá.

Art. VI. Ninguno de los electores puede darse el voto á sí mismo, y dentro de tercero día debe quedar indispensablemente concluida y publicada la elección, la que el Presidente de la Asamblea electoral comunicará al electo inmediatamente, con testimonio de la acta autorizada por el Escribano.

Art. VII. Como el censo de que habla el artículo 1°, capítulo IV, ha de ser el fundamento para el número de los Representantes ó Diputados, que han de asistir al Congreso General, se arreglará de modo que por cada quince mil almas se nombre uno.

Art. VIII. Si al formarse este arreglo se hallasen algunas fracciones, se observarán las reglas siguientes:—*Primera.* Si en la sección de número, que se arregla para elegir, hubiere alguna fracción, que no esceda de dos mil quinientas almas, solo se votará por un elector; pero si la fracción pasa de este número en la sección, se votará por dos electores. *Segunda.* Si en el distrito de las quince mil almas, que debe representar cada Diputado, hubiese alguna fracción que escediese de siete mil y quinientas, se nombrará por ellas, en la Asamblea electoral, un Diputado, como si llegase al número señalado; pero si la fracción fuese menor no tendrá más Representante, y quedará comprendida en la representación que hacen los Diputados por la Provincia.

Art. IX. Podrá minorar el número de sus Representantes para el Congreso, confiriendo los poderes é instrucciones necesarias al que considere bastante y proporcionado, si la falta de fondos para las espensas de aquéllos, distancia ú otros motivos de justicia le impidiesen nombrar el número total adecuado á su población, con la precisa calidad de espresar en los poderes las causales de dicha minoración.

Art. X. Ningún Representante Nacional admitirá cargo, empleo ó comisión, mientras dure el ejercicio de su representación; si lo admitiera, perderá ésta, á menos que su pueblo lo reelija para ella, en cuyo caso servirá el empleo por sustituto.

SECCIÓN SEXTA

DEL EJÉRCITO Y ARMADA

CAPÍTULO I

De la marina y tropas veteranas

Artículo I. En todo lo respectivo á las fuerzas de mar, se observará la última ordenanza de marina, en todo lo adaptable á las actuales circunstancias del Estado.

Art. II. Residiendo en el Director Supremo toda la autoridad militar, con plenitud de facultades en la marina, ejércitos y milicias, cuyas fuerzas debe mandar, nombrará un Comandante de aquélla, subsistiendo para éstos, por ahora, el Estado Mayor General, que servirá también para todas las milicias de cualquiera clase y condición.

Art. III. Lo dispuesto en el artículo III de *límites del Poder Ejecutivo*, se entenderá igualmente con el Jefe del Estado Mayor General, y Generales de los ejércitos.

Art. IV. No se crearán nuevos Regimientos de línea, mientras no se halle completa la fuerza total de los que actualmente tiene el Estado.

Art. V. De los oficiales sobrantes de todas clases, que en diferentes épocas del Gobierno han sido separados, con motivo ó sin él, esclarecido y juzgado que sea en unos y otros, si se declarasen espeditos para el servicio, se formará de todos ellos una escala por clases para su colocación en las vacantes de los regimientos, en que no resulte daño á los de actual servicio en ellos, ú otras análogas á las circunstancias del individuo.

Art. VI. Si los comprendidos en el artículo anterior, disfrutasen actualmente sueldo entero, medio ó tercio, pedirá el Director del Estado á los Ministros de Hacienda de todo el territorio, una razón general de ellos, y de las órdenes que hayan recaído para su abono, reformándolas según lo que resulte de lo que dispone el artículo antecedente.

Art. VII. Hasta el completo arreglo de este punto, no se proveerá empleo de sueldo, excepto los de escala natural en los cuerpos á propuesta de sus jefes, según ordenanza, y por el preciso conducto del Estado Mayor General, al que se le pasará la escala de que trata el artículo V, para que se tengan presentes en colocación ó retiro.

Art. VIII. Por ahora, y hasta el arreglo general de la milicia, que debe presentarse, según se previene en este Reglamento, queda en lugar de la antigua comisión el Tribunal Militar, que se halla establecido bajo el reglamento por que actualmente se gobierna, con la calidad de que el defensor de los reos deba asistir á la confesión personalmente.

Art. IX. Hallándose abolido el artículo del referido reglamento, que impone al desertor la pena de muerte por primera desertión, y calidad agregada de no valerle la escepción de inasistencia del pré, regirá en adelante la ordenanza militar y penas que ella establece para los casos de desertión.

Art. X. Se cumplirá en todo el territorio del Estado la orden de 30 de Enero de 1814, sobre reemplazos de desertores.

Art. XI. Será uno de los primeros cargos de residencia, para la imposición del condigno castigo á los Gobernadores Intendentes, Tenientes Gobernadores y Subdelegados, el no velar incesante y vigorosamente sobre la aprehensión de desertores.

Art. XII. Si fuese comprobada su negligencia en este punto antes de concluido el periodo de su mando, serán removidos por el Director del Estado, sin disimulo ni tolerancia.

Art. XIII. Los Alcaldes de Hermandad y Pedáneos de los curatos y campaña, en igual caso, incurrirán por la primera vez en cien pesos de multa, aplicados para gastos de reclutas, y si continuaran negligentes, serán removidos.

Art. XIV. Al soldado que delatare un desertor, siendo aprehendido, se le gratificará inmediatamente con diez pesos, cargados luego al haber que éste devengare, y se le abonarán en su filiación dos años para el vencimiento de su empeño ó premios de constancia.

Art. XV. Se leerán á los soldados con frecuencia por los oficiales subalternos de sus respectivas compañías, entre las leyes penales de ordenanza, los artículos XXVI, hasta el XLIII inclusive, del Tit. X, Trat. VII.

Art. XVI. Estando éste en la mayor parte reformado por diferentes órdenes posteriores, se metodizará á la mayor brevedad por otro que forme una comisión militar de tres individuos nombrados por el Director del Estado, asociados del Asesor General de Guerra, y concluido, lo pasará al Congreso para la sanción.

Art. XVII. Nombrará asimismo el Director otra comisión de cinco militares de la mejor instrucción y conocimiento, para que trabajen un plan general y uniforme del sistema militar del Estado, que abrace las fuerzas veteranas, las milicias nacionales y las cívicas.

Art. XVIII. Nombrará otra del número de individuos que juzgue conveniente para formar un plan general de arreglo de la marina, según sus ramos; formación de ordenanzas de corso; habilitación de puertos, escuelas de náutica y matemáticas, pasándolo á su conclusión al Congreso.

Art. XIX. Establecerá en la capital una Academia permanente, nombrando el maestro de ella, para instrucción de los cadetes de los regimientos de infantería y caballería sobre un plan, que deberá dar el Estado Mayor General, previa la aprobación del Director Supremo.

CAPÍTULO II

De las milicias nacionales

Artículo I. Todo individuo del Estado, nacido en América; todo extranjero que goce de sufragio activo en las Asambleas Cívicas; todo español europeo con carta de ciudadano, y todo africano y pardo libres, habitantes de las ciudades, villas, pueblos y campañas, desde la edad de quince años hasta la de sesenta, si tuviesen robustez, son soldados del Estado, obligados á sostener la libertad é independencia que se halla declarada.

Art. II. Del conjunto de todos estos habitantes, se formará inmediatamente á la posible brevedad, en todas las Provincias, por los respectivos Gobernadores Intendentes, Tenientes Gobernadores y Subdelegados, un cuerpo de milicia nacional reglada de infantería ó caballería, según las proporciones de la Provincia y sobre el pie de fuerza que determinará el Director del Estado, por regimiento, batallones, escuadrones ó compañías sueltas, con sujeción al Reglamento de 14 de Enero de 1801, dado para las milicias provinciales, informando el Estado Mayor General, sobre las variaciones y adiciones que crea necesarias.

Art. III. El Gobernador Intendente, Teniente Gobernador ó Subdelegado, será el Comandante nato en su respectivo Departamento, durante el tiempo de su gobierno, de la milicia nacional reglada, y hará todas las propuestas de oficiales al Director del Estado, por conducto del Estado Mayor General. En el Departamento de Buenos Aires será igualmente el Gobernador, Comandante de la milicia nacional, siempre que sea militar, y cuando no, lo será el que fuese Comandante General de las armas.

Art. IV. En ellas deberán ser colocados todos los individuos que se hallasen con despachos de milicia provincial desde la fecha del citado Reglamento, siendo americanos ó españoles europeos con carta de ciudadanía.

Art. V. Será una de las primeras obligaciones de los Gobernadores Intendentes, Tenientes Gobernadores ó Subdelegados, mantener el cuerpo de milicia nacional reglada de su cargo en disciplina, arreglo y buen orden.

Art. VI. El objeto principal de esta milicia será acudir á la defensa del Estado y al auxilio y reposición de los ejércitos de línea, cuando la necesidad lo exija.

Art. VII. En el caso preciso de sacar una parte de esta milicia para la reposición de los ejércitos, cuidarán los indicados jefes de hacerlo con individuos espeditos sin embarazos justos que los exencionen, reponiendo inmediatamente la falta que resulte, para mantener íntegra la fuerza nacional de su cargo.

CAPÍTULO III

De las milicias cívicas

Artículo I. De los habitantes de dentro del recinto de las ciudades, villas ó pueblos, se formará el cuerpo de milicia cívica, por regimientos, batallones ó compañías sueltas.

Art. II. Esta milicia se compondrá únicamente de los ve

cinos que cuenten con una finca ó propiedad, cuando menos del valor de mil pesos, como igualmente de los dueños de tienda abierta, ó de cualquiera que ejerza algún arte ú oficio público.

Art. III. En el Departamento de Buenos Aires, la milicia cívica queda sujeta al Cabildo, con subordinación al Director del Estado, conforme al art. XI., sec. III y II del cap. I, sec. VI.

Art. IV. En el resto de los demás pueblos, los Cabildos tendrán el mando de las que puedan organizar, sin perjuicio del que corresponde á los respectivos Gobernadores Intendentes, Tenientes Gobernadores y Subdelegados, por razón de sus empleos.

Art. V. Los nombramientos de oficiales hasta capitán inclusive, se harán por el Director del Estado, á propuesta de los respectivos jefes de los tercios, que elevará el Cabildo por conducto del Estado Mayor General, haciendo el Ayuntamiento por sí la propuesta de la Plana Mayor.

Art. VI. Para que no quede sin ejercicio la jurisdicción ordinaria, ni se recargue indebidamente la militar, solo disfrutarán el fuero los individuos veteranos que sean incorporados en ella como jefes ó como sargentos y cabos para la enseñanza.

Art. VII. El instituto principal de esta milicia cívica, será mantener el orden y tranquilidad de los pueblos, auxiliar la administración de justicia y defender la patria.

Art. VIII. Ningún soldado veterano, nacional ó cívico á quien se confía la arma blanca ó de fuego para defender la patria y sostener el orden público, podrá hacer uso de ella fuera de facción contra ningún habitante del Estado.

Art. IX. El que de este modo usare de ella contra cualquier habitante del Estado, será juzgado y castigado dentro de tercero día por el respectivo Juez, para satisfacción de la vindicta pública altamente interesada en la seguridad individual.

SECCIÓN SÉPTIMA

SEGURIDAD INDIVIDUAL Y LIBERTAD DE IMPRENTA

CAPÍTULO I

De la seguridad individual

Artículo I. Las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofenden el orden público ni perjudican á un

tercero, están solo reservadas á Dios y exentas de la autoridad de los magistrados.

Art. II. Ningún habitante del Estado estará obligado á hacer lo que no manda la ley clara y espresamente, ni privado de lo que ella del mismo modo no prohíbe.

Art. III. El crimen es solo la infracción de la ley que está en entera observancia y vigor, pues sin este requisito debe reputarse sin fuerza.

Art. IV. Ningún habitante del Estado puede ser penado ni confinado, sin que preceda forma de proceso y sentencia legal.

Art. V. Todos los mandamientos ó providencias que, en uso legítimo de su autoridad, espidan todos los magistrados, para el buen orden de los pueblos y dirección de los negocios de su instituto, deberán ser por escrito.

Art. VI. Se exceptúan las órdenes relativas al ejército y sus individuos, en asuntos del servicio, en que se observará la Ordenanza de las Provincias de la Unión.

Art. VII. Todo ciudadano podrá tener en su casa, pólvora, armas blancas y de fuego, para la defensa de su persona y propiedades, en casos urgentes en que no puedan reclamar la autoridad y protección de los Magistrados.

Art. VIII. El Gobierno no podrá exigírselas, sino por su justo precio, cuando sean necesarias para la defensa del Estado.

Art. IX. La casa de un ciudadano es un sagrado que no puede violarse sin crimen, y solo en el caso de resistirse á la convocación del Juez, podrá allanarse.

Art. X. Esta diligencia se hará con la moderación debida, personalmente por el mismo Juez, y en el caso que algún urgente motivo se lo impida, dará al delegado orden por escrito con las especificaciones convenientes, dejando copia de ella al individuo que fuere aprehendido, y al dueño de la casa, si la pidiere.

Art. XI. Ningún ciudadano podrá resistir la prisión de su persona ó embargo de sus bienes decretados por Juez competente; pero tendrá derecho de reclamar las disposiciones de este Reglamento, referentes á la seguridad individual, espresadas en el cap. III, sec. IV, y repetir contra el Juez ó comisionado que las quebrantase, según la responsabilidad que les resulte.

Art. XII. Todo hombre tiene libertad para permanecer en el territorio del Estado, ó retirarse siempre que por esto no se esponga la seguridad del país, ó sean perjudicados sus intereses públicos.

Art. XIII. Las anteriores disposiciones relativas á la seguridad individual, jamás podrán suspenderse.

Art. XIV. Cuando por un muy remoto y estraordinario acontecimiento que comprometa la tranquilidad pública, ó la seguridad de la patria, no pueda observarse cuanto en él se previene, las autoridades que se viesen en esta fatal necesidad, darán razón de su conducta al Congreso, quien examinará los motivos de la medida y el tiempo de su duración.

CAPÍTULO II

De la libertad de la imprenta

Artículo I. Se observará el decreto de la libertad de imprenta, espedido en 26 de Octubre de 1811, que se agregará al fin de estos artículos como parte de este capítulo.

Art. II. Para facilitar el uso de esta libertad se declara que todo individuo natural del país ó extranjero puede poner libremente imprentas públicas en cualquiera ciudad ó villa del Estado con solo la calidad de previo aviso al Gobernador de la Provincia, Teniente Gobernador y Cabildos respectivos, y que los impresos lleven el nombre del impresor y lugar donde exista la imprenta.

Art. III. Los intendentes de Policía cuidarán con particular celo que en los periódicos y papeles públicos se hable con la mayor moderación y decoro posible, sin faltar al respecto debido á los magistrados, al público y á los individuos en particular.

Art. IV. En el caso que alguno de los periodistas infrinja estos precisos deberes, dichos Intendentes, sin perjuicio del derecho del ofendido, lo manifestarán al Tribunal de la libertad de imprenta, que deberá obrar en el examen del hecho con toda escrupulosidad conforme á su instituto.

Decreto de la libertad de imprenta de 26 de Octubre de 1811

Artículo 1. Todo hombre puede publicar sus ideas libremente, y sin previa censura. Las disposiciones contrarias á esta libertad, quedan sin efecto.

Art. II. El abuso de esta libertad es un crimen: su acusación corresponde á los interesados, si ofende derechos particulares; y á todos los ciudadanos, si compromete la tranquilidad pública, la conservación de la Religión Cristiana ó la Constitución del Estado. Las autoridades respectivas impondrán el castigo, según las leyes.

Art. III. Para evitar los efectos de la arbitrariedad en la calificación y graduación de estos delitos, se creará una Junta de nueve individuos con el título de *Protectora de la libertad de imprenta*. Para su formación presentará el Cabildo una lista de ciudadanos honrados, que no estén empleados en la administración del Gobierno: se hará de ellos la elección á pluralidad de votos. Serán electores natos el Prelado Eclesiástico, Alcalde de primer voto, Síndico Procurador, Prior del Consulado ⁽¹⁾, Fiscal de la Cámara y dos vecinos de consideración nombrados por el Ayuntamiento. El Escribano del pueblo autorizará el acto y los respectivos títulos que se librarán á los electos sin pérdida de instantes.

Art. IV. Las atribuciones de esta Autoridad Protectora, se limitan á declarar de hecho si hay ó no crimen en el papel, que da mérito á la reclamación. El castigo del delito después de la declaración corresponde á la Justicia. El ejercicio de sus funciones cesará al año de su nombramiento, en que se hará una nueva elección.

Art. V. La tercera parte de los votos en favor del acusado, hace sentencia.

Art. VI. Apelando algunos de los interesados, la Junta Protectora sorteará nueve individuos de los cuarenta restantes de la lista de presentación: se reverá el asunto, y sus resoluciones con la misma calidad en favor del acusado, serán irrevocables. En caso de justa recusación se sustituirán los recusados por el mismo arbitrio.

Art. VII. Se observará igual método en las capitales de Provincia, sustituyendo, al Prior del Consulado el Diputado del Comercio, y al fiscal de la Cámara, el Promotor Fiscal.

Art. VIII. Las obras que tratan de Religión, no pueden imprimirse sin previa censura del Eclesiástico. En caso de reclamación se reverá la obra por el mismo Diocesano, asociado de cuatro individuos de la Junta Protectora, y la pluralidad de votos hará sentencia irrevocable.

Art. IX. Los autores son responsables de sus obras, ó los impresores, no haciendo constar á quién pertenecen.

Art. X. Subsistirá la observancia de este decreto, hasta la nueva determinación del Congreso.

⁽¹⁾ En la edición oficial del Reglamento Provisorio de 1817, fué omitido el Prior del Consulado, el que ha sido enumerado aquí porque lo fué en el decreto primitivo, como puede verse en los Estatutos de 1811 y 1815.

CAPÍTULO FINAL

Providencias generales

Primera.—El Reglamento de Policía, expedido en 22 de Diciembre de 1812 para la capital de Buenos Aires y su campaña, subsistirá por ahora con las limitaciones siguientes: Las funciones del Intendente de Policía quedan reunidas como están al Gobierno Intendencia de esta Provincia. —Permanecerán por ahora los tres Comisarios con las facultades y distribuciones del ramo, que les están señaladas en él, bajo la inspección del Intendente, y no habrá entre ellos más preferencia que la de posesión de sus empleos. Fuera del sueldo que disfrutaban les será prohibido llevar emolumentos, ni gages algunos por cualquiera especie de pensión que tengan en calidad de tales comisarios. El Intendente no podrá emprender obra que demande gasto al ramo, sin haber pedido antes informe del Cabildo, y de los tres Comisarios, y obteniendo después aprobación del Director Supremo. Todo pago que se mande fuera del orden establecido en dicho Reglamento, no será satisfecho en la Tesorería, si no fuere aprobado por el Supremo Director; y el Tesorero será responsable á la reintegración de lo que entregare con infracción de este artículo. Quedan revocados los artículos 3°, 4° y 5° que establecen un asesor, portero y escribano del ramo, debiendo servir este último cargo el que fuere de Gobierno. El 8°, 10 y 14, sólo tendrán efecto en cuanto sean compatibles con la seguridad individual, libertad de imprenta y demás derechos del hombre, que quedan declarados. El 41 de la instrucción circular de Alcaldes de barrio, solo tendrá observancia en la parte que sea conciliable con los establecidos en el capítulo sobre la libertad de imprenta. Todas las mudanzas y alteraciones que se hubiesen hecho en contravención con el citado Reglamento de Policía, y á lo que dispuso el Estatuto Provisional de 5 de Mayo de 1815, en el Artículo I, Capítulo final de *Providencias Generales*, serán reformadas inmediatamente, quedando suprimida la plaza de cuarto comisario establecida últimamente.

Segunda.— Los Ayuntamientos de las demás ciudades y villas del Estado, nombrarán una Comisión compuesta de vecinos de los mejores conocimientos y celo por el bien público, que teniendo presente el citado Reglamento de la capital ú otros, forme uno adaptable á las circunstancias particulares del lugar, y se remita al Congreso para su aprobación.

Tercera.—Queda restituído con arreglo á las leyes, el otorgamiento de fianzas que deben dar los Administradores de Rentas del Estado y funcionarios públicos de cualquiera clase, que antes de ahora estaban obligados á prestarlas, en la cantidad y forma de su peculiar destino. En su virtud todos los que en la actualidad se hallen ejerciendo empleos, que por su naturaleza estén gravados con fianzas, las otorgarán dentro del término perentorio de dos meses desde la fecha de este Reglamento, cuidando de ello el Director Supremo y los Intendentes, con la calidad de darse con cuatro individuos por cuartas partes.

Cuarta.—Queda restituída á los Ministros de Hacienda y Administradores de Aduana, la jurisdicción coactiva para el cobro y recaudación de las deudas ciertas y líquidas á favor del Estado.

Quinta.—Quedan sin efecto las leyes y decretos que hizo la última Asamblea sobre profesiones religiosas.

Sexta.—Las contribuciones que se impusiesen en una Provincia en beneficio particular de ella, no serán trascendentales á otra.

Séptima.—Todas las Provincias de la Unión, ciudades y villas con Ayuntamiento, pueden, sin necesidad de licencia, y con solo aviso instruído al Director, hacer todos los establecimientos que crean serles útiles y promuevan su industria, prosperidad, artes y ciencias, sin perjudicar los fondos del Estado.

Octava.—Todos los que se hallen con carta de ciudadanía que no haya sido espedida inmediatamente por la anterior Asamblea General Constituyente, por el presente Congreso, ó actual Supremo Director, en virtud del decreto de 29 de Agosto, las presentarán á éste para su ratificación si la mereciesen, y sin esta calidad no deberán tener efecto.

Novena.—Todo funcionario público de Gobierno, incluso el Supremo Director del Estado y sus Secretarios, estará sujeto á juicio de residencia, concluido que sea el término de su oficio. El Director y sus Secretarios ante el Congreso, y los demás empleados ante Jueces que aquél nombrase, teniendo los residenciados abierto el juicio por el término de cuatro meses, pasado el cual quedarán libres de él.

Décima.—El presente Reglamento empezará á observarse en todo el territorio del Estado desde su publicación, que dispondrá el Supremo Director se haga en la forma conveniente, quedando abolidos los artículos del Estatuto Provisorio, formado por la Junta de Observación, que no es-

tán comprendidos en éste; y sin efecto los Reglamentos, leyes y decretos anteriores en lo que se opongan á lo dispuesto por el presente.—Sancionado por el Soberano Congreso, sellado con el sello provisional, firmado por el Presidente en turno, y refrendado por su Secretario en Buenos Aires, á tres de Diciembre de mil ochocientos diez y siete.—PEDRO LEÓN GALLO, Presidente.—*Doctor José Eugenio de Elías*, Secretario.

Armisticio con las tropas de Santa Fe

(Oficio del Capitan General D. Manuel Belgrano al Director Supremo del Estado.) -- Exmo. Señor:—Paso á manos de V. E. la continuación del convenio de armisticio celebrado el cinco del corriente entre el Jefe de los ejércitos combinados y el General del Ejército de Observación, que he aprobado; pues que así se afianzan las bases de la amistad y fraternidad sobre que se elevará el tratado de concordia y paz, tan deseadas para la seguridad y prosperidad de la Nación.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Rosario, 12 de Abril de 1819.—Exmo. Señor: — *Manuel Belgrano.*—Exmo. Sr. Don Juan Martín de Pueyrredón, Director Supremo de las Provincias Unidas de Sud América.

NEGOCIACIONES.—Reunidos en San Lorenzo los comisionados de los ejércitos combinados que firmaron el armisticio del 5 corriente al frente del Rosario, conforme al artículo 5º, presentó el de las Provincias Unidas la aprobación que por su parte hace el Exmo. Sr. Capitán General y General en Jefe del Auxiliar del Perú, D. Manuel Belgrano, y en seguida acordaron los artículos siguientes:—1º Continúa el armisticio con la misma buena fe y mutua correspondencia que hasta ahora se ha observado por ambas partes, y para afirmarlo más y más, los ejércitos y escuadras de las Provincias Unidas saldrán del territorio de Santa Fe, y todas las fuerzas auxiliares de ésta se colocarán al otro lado del Salado, debiendo ponerse respectivamente en marcha el 16 del corriente. — 2º Con el grande objeto de un avenimiento general, que ha de sellar para siempre la concordia entre pueblos hermanos, se solicitarán Diputados ampliamente autorizados por los gobiernos de Santa Fe, y demás que se hallen al otro lado del Paraná, avisándose de su resultado en este colegio el ocho del próximo Mayo, en cuyo día se acordará la concurrencia de ellos, y de los que por su parte nombrase el Gobierno de las Provincias Unidas.—3º Las tropas de las Provincias Unidas que operan en el Entre Rios se retirarán sin demora, á cuyo efecto irá un oficial con pliegos, y acordarán con el jefe de la

Provincia el lugar de su embarco, facilitándoles los buques y viveres necesarios para transportarse hasta San Nicolás.— 4° La franca comunicación entre los ejércitos de las Provincias Unidas, se hallará espedita por el territorio de Santa Fe, mas no podrán pasarse tropas en número que escedan de veinte y cinco hombres, toda vez que fuere necesario mandar algún convoy escoltado, y pagarán los auxilios que se les franqueasen.— 5° Para que el giro se halle en todas direcciones espedito, se habilitarán las postas que por las circunstancias se encuentran despobladas, y todas las vías del comercio y comunicación con Santa Fe, y otros puntos del Entre Ríos, y costas arriba del Paraná, quedarán completamente libres, y sin ningún género de trabas, y con igual franqueza todos los puntos sugetos al Gobierno de las Provincias Unidas.— 6° En ambos territorios se perseguirán á los ladrones que puedan perturbar la seguridad de los caminos, y la pacífica posesión de los habitantes en los hogares, requiriéndose, si fueren precisos, mutuamente los auxilios necesarios para el caso, y sin que por este ú otro motivo se introduzca fuerza alguna.— 7° Durante el presente armisticio, cualquiera dificultad que pueda ocurrir se transará por medios amistosos y políticos, sin recurrirse á las armas antes de haberse hecho las reclamaciones ordinarias; y con lo cual quedó concluido este nuevo convenio que firmaron dos de un tenor los comisionados para la ratificación de los respectivos Generales.— En el Colegio de San Lorenzo, á doce de Abril de mil ochocientos diez y nueve. — *Ignacio Alvarez. - Agustín Urtubey. — Pedro Gómez.*— Rosario, 12 de Abril de 1819.— Apruebo los siete artículos que anteceden, y forman la continuación del convenio de armisticio celebrado el 5 del corriente.— *Belgrano.*— Cuartel general al norte de Carcarañal, doce de Abril de mil ochocientos diez y nueve. — Apruebo la continuación de este armisticio.— *Estanislao López.*— Es copia. — *Belgrano.*

(Gaceta extraordinaria, de 17 de Abril de 1819.)

Nombrando los Comisionados de que habla el armisticio de 12 de Abril de 1819

Departamento de Gobierno.—Consecuente á lo estipulado en el artículo 2° de la continuación del armisticio sancionado el 12 de Abril último en el Colegio de San Lorenzo.

entre el Ejército de Observación y el de Santa Fe, de que se instruyó en «Gaceta extraordinaria» de 17 del mismo mes, ha nombrado el Exmo. Director Supremo por Comisarios autorizados plenamente para ajustar y concluir los tratados pendientes sobre el restablecimiento de la concordia, al Coronel Mayor y Ayudante General del Estado Mayor General Don Ignacio Alvarez y Thomas y al oficial mayor primero de la Secretaría de Estado en el Departamento de Gobierno D. Julián Alvarez, que ha salido ya á incorporarse con su socio de comisi3n, que se hallaba de antemano por aquellos destinos.—Buenos Aires, Mayo 3 de 1819. — *Tagle*.

(*Gazeta de Buenos Aires, número 120.*)

66

Creación de la Universidad de Buenos Aires

Soberano señor:—Por real orden de 22 de Marzo de 1778, mandó el rey que se fundase en esta capital una Universidad y Colegio en que se abriesen estudios generales, y confiriesen grados, como en las demás de América, y habiendo aprobado la aplicación que hizo para ambos objetos la Junta de Temporalidades de las casas y colegios que fueron de los jesuitas, encargó al Consejo de Indias que procediese á la ejecución de ésta y erección de la Universidad.—Posteriormente repitió este encargo al Virrey en cédula de 31 de Diciembre de 1779, añadiendo que se le remitiese una razón de las dotaciones de cátedras y gastos que fuese preciso hacer, para su aprobación.—Pero como en aquellos tiempos desgraciados no era interés de los virreyes el fomento de las ciencias en América, se contentaron con fundar el colegio de San Carlos, y lo demás quedó sepultado en el olvido.—Los estudiantes que empezaron entonces á formarse, escitaron más los anhelos de estos habitantes por la erección de un establecimiento, que no se ponía por pura omisión criminal, y movidos de ellos representaron al rey los cabildos secular y eclesiástico los perjuicios que resultaban por falta de Universidad, y la desgracia á que se veían condenados los padres de familia, reducidos á deplorar, los unos la disipación de sus hijos en las más remotas distancias, donde iban á graduarse, y á lamentar los otros la falta de Facultades para los grandes costos que eran necesarios.—Estos clamores fueron contestados con la orden de 20 de Noviembre de 1798 dirigida al Virrey y marqués de Avilés, en que se le reconviene por no haberse acusado recibo de las tres referidas disposiciones, ni aun contestado después de haberlas sobre cartado en 16 de Enero de 1784 y 22 de Mayo de 1786, y haciendo demostración de extrañar semejante conducta y abandono, se le ordenó seriamente cumpliese sin dilación con lo que había mandado, estrechando á los ministros y oficinas para que le auxiliasen, á fin de que cuanto antes se verificasen (son expresiones literales) los paternales deseos del rey hacia estos

vasallos. Estas vehementes iniciativas no fueron más eficaces que las primeras; el asunto quedó punto menos que al principio, y volvió luego á cubrirse de polvo en las mismas oficinas. Sensible yo á los votos con que tan fervorosamente ha clamado la Capital por un establecimiento que no se le puede dilatar por más tiempo sin agravio y escandalosa injusticia, he creído que ha llegado la ocasión de realizarlo, y aun he dudado algún tanto si estando ya dispuesto y ordenado tantas veces, debía de plano proceder á erigirlo; pero deseando siempre lo mejor y más seguro, he creído conveniente recurrir á Vuestra Soberanía y escitar su beneficencia, para que se digne mandar de nuevo que se funde, prestándome su consentimiento á efecto de que obre con toda la plenitud de facultades necesarias para remover todos los embarazos que puedan retardarlo. Al paso que todo puede realizarse sin gravar en nada los fondos del erario nacional, me apresuro á rogar á Vuestra Soberanía que sea pronto su despacho, para dejarle á la Capital, en los últimos días de mi mando, este respetable monumento del celo que me anima por su esplendor y felicidad. Al modo que se ha practicado muchas veces, se ocurrirá á la corte de Roma por la confirmación en tiempo oportuno, y dando por ahora las formas provisionales, pues son dilatadas y prolijas, las remitiré para su aprobación á la primera legislatura.—Dios guarde á Vuestra Soberanía muchos años.—Buenos Aires, Mayo 18 de 1819.—Soberano Señor:—JUAN MARTÍN DE PUEYRREDÓN.—*Soberano Congreso Nacional.*

CONTESTACIÓN.—Exmo. Señor:—El Soberano Congreso, habiendo examinado detenidamente la propuesta elevada por V. E. en su nota de 18 del corriente para la erección de una Universidad en esta Capital, ha espedido en la sesión del 21 la resolución siguiente:—«Conformándose el Congreso Soberano con la propuesta que hace el Director Supremo de fundar Universidad en esta ciudad, lo autoriza con las facultades que pide, siempre que las formas que se den provisionalmente al establecimiento se remitan á la primera legislatura para su aprobación.». —Cuya resolución transcribo á V. E. para su conocimiento.—Sala del Congreso, Mayo 22 de 1819. —LUIS JOSÉ CHORROARIN, Presidente. *Ignacio Núñez*, Prosecretario.—*Al Exmo. Supremo Director del Estado.*—Buenos Aires, Junio 22 de 1819.—Avísele el recibo y hágase notorio al público insertándose en la *Gaceta*.—*Tagle.*

(*Gaceta de Buenos Aires, número 129 y Redactor del Congreso número 46.*)

67

Constitución de las Provincias Unidas de Sud-América, sancionada y mandada publicar por el Soberano Congreso General Constituyente.

MANIFIESTO DEL SOBERANO CONGRESO GENERAL CONSTITUYENTE DE LAS PROVINCIAS UNIDAS DE SUD-AMÉRICA, AL DAR LA CONSTITUCIÓN.—Cuando presente la historia á las edades venideras el cuadro de nuestra revolución, no podrán excusarse de confesar que hemos andado esta carrera con esa majestuosa simplicidad con que da sus pasos la naturaleza. Borrascas, tempestades, erupciones volcánicas: nada perturba el orden de sus leyes, ni impide el término á que debe llegar. No menos que en el orden físico, hay en el orden moral otros sacudimientos políticos, que nacen del choque violento de los intereses y las pasiones. Estos son los que sufrimos por espacio de nueve años, y los que han concurrido á separarnos de nuestros altos destinos. Con todo, inmóviles en nuestro propósito, no han podido destruir ese interés que inspira el amor al bien y á la causa de la libertad. Acordaos, ciudadanos, del memorable 25 de Mayo, que nos abrió la vasta y trabajosa carrera de la virtud. Degradados por el largo período de trescientos años, nos veíamos bajo un Gobierno que, por su debilidad y sus desastres, ya no podía ser el agente tutelar de nuestra tímida existencia. Su plaza parecía estar vacante en medio del edificio social, y todo conspiraba á una completa disolución. Fué entonces, pues, que obligados á asegurar el orden público y la defensa del Estado, dimos el primer paso de la revolución, reconcentrando en nosotros mismos un Gobierno sin más límites de su beneficencia que los de su poder. Esta resolución heroica causó una alarma general entre los déspotas subalternos, tanto más terribles en su opresión cuanto más vecinos á los oprimidos. Una larga servidumbre, dice un sabio, forma un deber de resignación y bajeza; besando entonces el hombre con respeto sus cadenas, tiembla al examinar sus propias leyes. Esto sucedió á muchos de nuestros compatriotas (con dolor lo decimos) y de ellos compusieron los tiranos su mayor fuerza. Para oponer á su ímpetu una

obstinada resistencia, todo ciudadano se hizo soldado; el coraje se inflama, las espadas se afilan, y el incendio se hace general. Pero todos creímos que la obra caducaría en su misma cuna sin un Congreso General, que fuese el centro de la unidad, diese el tono á las Provincias Unidas, y avivase esas semillas de justicia primitiva, que la España había procurado sofocar. Pero ¡ay! qué de escollos vimos levantarse sobre nuestros pasos desde que la discordia hizo resonar su trompeta entre nosotros mismos, y vino en auxilio de nuestros enemigos. Nada disimulemos. Desde este fatal momento quedaron confundidos el derecho con el interés, el deber con la pasión, y la buena causa con la mala. Los Gobiernos se suceden tumultuariamente, como las olas de una mar agitada: se instala una Asamblea General que desaparece como el humo; sopla España entre nosotros el fuego de la disensión, amontona sobre nuestra opinión las calumnias más groseras: manda ejércitos esterminadores: y los sucesos de la guerra son ya prósperos, ya adversos. Tanto como era más fatal nuestra situación, se hacía más apetecible ese Congreso Nacional que destruyese el germen diseminado de la discordia, y concertase los medios de poner la patria en seguridad. Un gran designio es siempre independiente de los sucesos momentáneos, y sobrepuja á toda la indisciplina de las pasiones. A despecho de tantos embarazos, de tantas trabas, de tantas contradicciones, aparece reunida en la ciudad del Tucumán, casi en los seis años de nuestro primer aliento, la misma Representación Nacional que hoy os dirige, ciudadanos, la palabra. Ved aquí el segundo paso con que imitamos á la sencilla naturaleza. Todo fué preciso, sin duda, para que se mostrase vuestra obra, con esa dignidad que comunican las distancias y los escollos á los grandes acontecimientos. Las consecuencias de esa nube que de grado en grado había oscurecido el horizonte, nos daban por entonces lúgubres presagios de una ruina próxima. ¡En qué estado tan deplorable se hallaba la República, cuando se instaló el Congreso Nacional! Los ejércitos enemigos, extendiendo la desolación y los crímenes: los nuestros dispersos y sin subsistencia, una lucha escandalosa entre el Gobierno Supremo y muchos pueblos de los de su obediencia: el espíritu de partido ocupado en combatir una facción con otra: una potencia extranjera que nos observa, próxima á sacar partido de nuestras discordias: ciudadanos inquietos, siempre prontos á sembrar la desconfianza comprimiendo el corazón de los incautos: el erario público agotado: el Estado sin agricultura, sin comercio y sin in-

dustria: la secta de europeos españoles conspirando por la vuelta de la tiranía: en fin, todo el Estado caminando de error en error, de calamidad en calamidad, á su disolución política: ved aquí, ciudadanos, las llagas de la patria que consternaron nuestras almas y nos pusieron arduo empeño de curarlas. Abatir el estandarte sacrilego de la anarquía y la desobediencia, fué lo primero á que el Congreso dirigió sus esfuerzos. Por un cálculo estraviado, en que las santas máximas de la libertad servían de escudo á los desórdenes, se hallaban desunidas de la capital varias Provincias. Este ejemplo contagioso tuvo también otros imitadores en algunos pueblos. A fin de calmar estas inquietudes y hacerles ver la demencia de sacrificar la libertad de muchos siglos á la independencia de un momento, tomó el Congreso todas las medidas que pudo dictarle la prudencia. La fuerza armada pone límites á la licencia en unas partes: un Diputado del cuerpo, con el carácter de enviado, atraviesa el Paraná llevando por destino realizar una conciliación, cuyas bases fuesen la buena fe, la beneficencia recíproca, y la más estrecha cordialidad. Para que á la luz de una reflexión fría y serena pudiesen desvanecerse los prestigios, y convencerse de que los resultados espantosos de la discordia llegaban más allá de lo que alcanza la imaginación, dirigió también el Soberano Congreso un manifiesto lleno de vigor, en el lenguaje de la verdad, de la razón y el sentimiento, capaz de convencer al más indócil, y de endulzar al más feroz. Fácil era reconocer en cada línea las almas de unos ciudadanos que sufriríamos las emociones dolorosas de una patria desgraciada. Exigía la justicia, el bien de la patria y aun el interés individual, que renunciando una ambición consejera de crímenes y usurpaciones, inclinase la balanza el peso de los males presentes y futuros al lado de la causa apoyada sobre el buen juicio. Si no sucedió así, á lo menos el Soberano Congreso tuvo la sólida satisfacción de manifestar que sus pensamientos todos eran á favor de la patria: que estaba libre de ese espíritu de partido que ciega y degrada: que no había profanado el santuario de la sabiduría, traicionando sus altos deberes: y que hablando á los disidentes de sus obligaciones, les hizo ver la preferencia que merece una virtud sumisa y modesta, al arrojo de los que compran la celebridad por una muerte inútil á la patria. El Congreso Nacional había previsto de lejos, que en un tiempo en que se hallaba perturbada toda la rotación de la máquina política, no era posible restituirla á la armonía de su antiguo curso, sin la fuerza motriz de un Gobierno que, según la

espresión de un sabio, es en el sistema político, lo que ese poder misterioso que en el hombre reúne la acción á la voluntad. Con esta razón general concurrían otras de suma importancia producidas por las circunstancias del momento. La marcha obscura de la intriga y los manejos atrevidos de la ambición, habían puesto á la capital en un estado de crisis peligrosa. Por todos se deseaba un nuevo Director, que con su autoridad activa y vigilante, asegurase el imperio de las leyes, protegiese el orden y volviese al Estado su tranquilidad. Á más de esto, no sin fundamento se esperaba que un Director Supremo, á nombramiento de toda la Representación Nacional, fuese mirado por las Provincias con el agrado á que inclinan las propias obras, y no con esa desconfianza oculta que en las de este género merecen las ajenas. Penetrado de estos sentimientos el Soberano Congreso, puso sus miras en un hombre distinguido por sus servicios, recomendable por sus talentos, y en su juicio, capaz por su política de cerrar la puerta á los abismos. Fué éste el Señor Brigadier General don Juan Martín Pueyrredón, que felizmente tiene en sus manos las riendas del Estado. Vosotros lo sabeis, ciudadanos, con qué pulso y acuerdo ha sabido fijar la suerte vacilante de la patria. Á su presencia, las pasiones agitadas sólo nos dieron aquel susurro que dejan en las aguas por algún tiempo las grandes tempestades. Los facciosos fueron dispersados llevando consigo la confusión y sus remordimientos. El Soberano Congreso echó de ver que una magistratura suprema, sin una regla propia que le sirviese de guía, no podía gozar de sólida existencia. Por desgracia, el Estatuto Provisorio que regía al Estado, lisonjeando demasiado las aspiraciones de unos pueblos sin experiencia, aflojó algún tanto los nudos sociales. El Soberano Congreso creyó de su deber la formación de otro que provisoriamente llenase el vacío de la Constitución. Aunque sin la recomendación que da la idea de una obra permanente, él debía conformarse á los principios del pacto social, al genio de la nación, á su espíritu religioso, á su morada, á sus virtudes, y á todas las necesidades del Estado. Vednos aquí, ciudadanos, empeñados en dar á la máquina política una acción sin abusos, y un movimiento sin destrucción. No daremos un análisis de su organización, porque reservándonos hacerlo en breve de la Constitución, que tomó de él muchos artículos, esperamos esta ocasión para que juzgueis del mérito de nuestro trabajo. Diremos, sin embargo, que á virtud de este reglamento, aunque el Poder Ejecutivo quedó en la feliz impotencia de

ser un déspota, con todo recuperó la autoridad de que se hallaba despojado. Su nombre no fué ya un título vano con que se decoraba la nulidad, sino una expresión que acompañada del vigor, debía suscitar el respeto y obrar sobre los pueblos con un ascendiente desconocido. Temible al mismo tiempo, podría romper esos muros impenetrables, que parecía poner al vicio á cubierto de todos los esfuerzos del poder. No menos en centinela para que el abuso de la autoridad no pasase á tiranía, lo estuvimos también para que la libertad del pueblo no dejenerase en licencia. Huyendo de esas juntas tumultuarias, para las elecciones de jefes de los pueblos, reformamos las formas recibidas, y no dimos lugar á esos principios subversivos de todo el orden social. Tuvimos muy presente aquella sabia máxima: que es necesario trabajar todos para el pueblo y nada por el pueblo: por lo mismo limitamos el círculo de su acción á la propuesta de elegibles. Fué así como se consiguió la tranquilidad; y que no abandonando los ciudadanos sus trabajos útiles por entregarse al discernimiento de materias erizadas de abrojos, dejasen de correr como al principio todos los períodos del desorden. A merced de estas justas medidas, y de otras que omitimos, la patria empezó á presentar su frente con otra dignidad, y tenía en su mano los elementos propios de su fuerza. Seis años iban ya corridos en que por parte de la España sosteníamos una guerra injusta, insensata y ruinosa: sólo porque rehusábamos ser sus esclavos. No sin razón creíamos que la vuelta de Fernando VII al trono de sus padres, pondría fin á estas calamidades; y que entregándose á los movimientos de una alma virtuosa, cuyas desgracias habían forzado á la fortuna á avergonzarse de su inconstancia, reconocería nuestros derechos á la emancipación. Todos los pueblos de la tierra, unidos de interés por la humanidad, tenían fijada su vista sobre este acontecimiento memorable: ó para coronar su nombre de gloria, ó para cubrirlo de infamia eterna. Siempre rey por autoridad, y siempre padre por ternura, pudo haber hecho la real autoridad amable y cara á los pueblos. Más ¿qué hizo? ¿Escuchó con agrado la voz elocuente de la razón? ¿Tuvo acogida en su ánimo la voz de la dulce persuasión á favor nuestro? Los lamentables gritos de las víctimas que se sacrificaban á su nombre, ¿conmovieron sus entrañas? No: ciudadanos, no: en su alma tenía su trono el imperio de la ferocidad. De ella sale una voz que dice, como se dijo en otro tiempo contra los Norte Americanos:—con pueblos rebelados, la clemencia es debilidad; el estandarte de la rebelión fué levantado

por la fuerza; caiga sobre las manos que lo desplegaron y sobre todos sus secuaces la cruel hacha de la justicia: no demos tiempo á esos amotinados para que se acostumbren á sus crímenes, á los jefes para que afirmen su poder, ni á los pueblos para que aprendan á venerar sus nuevos amos. A ellos se les dan las pasiones como las armas. Despléguese á su vista la majestad del trono español: ellos se precipitarán á nuestros pies, pasando luego del terror á los remordimientos, y de los remordimientos al yugo. La piedad en la guerra civil es la más funesta de las virtudes: la espada una vez desenvainada, no debe volver á su lugar, sino por la sumisión: perezcan todos si es preciso, y á los que escapen de la muerte, solo les quede en su alivio, ojos para llorar». Los hechos de este rey inhumano van todos al unisono de estas palabras. Traed, ciudadanos, á la memoria el torrente de males que os espusimos en otro manifiesto patético, si acaso no bastan los que sufrís, para acreditar su crueldad.—Ignoraba sin duda que la paciencia tiene un término, al que sucede la desesperación; que el terror indigna más que lo que acobarda á un pueblo armado por su libertad; y en fin, que la naturaleza se venga de todo aquel que se atreve á ultrajarla. Para conocer todo el fondo de imprudencia que caracteriza los hechos de este rey, echemos la vista sobre los españoles de la Península, que irresolutos balancean entre si perseveran bajo el yugo, ó se proclaman independientes de Fernando. ¡Cómo! ¿será burlándose de sus vidas que se les inclinará á la obediencia? ¿No servirá más bien esta crueldad para endurecer sus corazones? Sí; nosotros lo sostenemos: en esa escuela de sangre, que ha abierto ante sus ojos, es donde ellos aprenderán á no ser siervos. Si llegan á sublevarse, en ella es donde sus almas vacilantes se habrán fortificado contra sus dudas. Ellos vivían perplejos sobre abandonar á su rey; la voz del respeto paternal les gritaba: deteneos; es vuestro soberano... Y tú, legislador imprudente, tú habrás fijado su voz trémula, tú, habrás apagado en ellos la dulce ternura del amor filial; tú los habrás precipitado á la insurrección. Con respecto á nosotros, los efectos aún fueron más justificados: sus escesos en uno y otro hemisferio acabaron de borrar toda disposición á favor de su vasallaje. Perseguidos á todo ultraje por su fiera, el mismo nos hizo conocer que solo la independencia era la tabla saludable para llegar á una isla afortunada. Dimos por fin el tercer paso, que nos indicaba la naturaleza, y nos declaramos independientes. Gracias al odio irreconciliable que nos produjo tanto bien, ciudada-

nos, vednos aquí desde esta época en un siglo enteramente nuevo: ya no pertenecemos á la España, sino á nosotros mismos. Enemigos de un rey ingrato, encontraremos en adelante nuestros proyectos y nuestras fuerzas en el plan único de nuestra felicidad. Las almas tímidas, que solo juzgan de la suerte del Estado por las menguadas dimensiones de su fortuna, creyeron que nuestra existencia exigía estar siempre unida á la de España. Se engañaron. Verá el mundo que podemos ser autores de esta nueva creación. En efecto, ¿de qué aliento vigoroso no se sintieron esforzados vuestros brazos al pronunciar estas palabras: *¡somos ya independientes! ¡somos libres!*? Entonces fué que los corazones se asociaron para sostener con gloria los empeños de esta feliz metamórfosis. Entonces fué, que los himnos consagrados á la libertad llegaron á componer una parte del culto. Entonces, en fin, que las llamas del regocijo sucedieron en muchos á los incendios de la discordia. Ciudadanos, no sin la más tierna emoción observa el Soberano Congreso, que un enviado extranjero ⁽¹⁾ cerca de nuestro Gobierno, penetrado de los sentimientos que os inspiró la independencia, informa al suyo por estas cláusulas: «Esta fué una medida de la más alta importancia, y ha sido productiva de una unanimidad y decisión antes desconocida... la saludable influencia de este intrépido y decisivo paso fué sentida á un tiempo en todo el territorio, y dió nuevo vigor y fuerza á la causa de la patria y estabilidad al Gobierno.» No era poco habernos desembarazado de enemigos domésticos, y roto las coyundas de un yugo aborrecido; pero mucho más pedía de nosotros nuestro propio instituto. Entablar relaciones amigables con las potencias extranjeras, de quienes podíamos temer que se reuniesen á nuestro común enemigo, y conseguir el reconocimiento de nuestra independencia: ved aquí, ciudadanos, los grandes objetos que han ocupado las más serias y profundas meditaciones del Congreso. Nadie hay que ignore, que para no descarrarse en el laberinto de esta carrera, es necesario seguir un orden de consejos, reflexiones y pensamientos, que salen de la esfera de los comunes. Nada menos se necesitaba, que un conocimiento exacto de los intereses que unen y desunen á las naciones de los objetos que las lisonjean ó las irritan, de las fuerzas que disfrutaban ó de las que care-

(1) Mr. Rodney, primer enviado de la comisión que diputó el Presidente de los Estados Unidos de Norte América.

cen; una agilidad de espíritu, que reflejándose sin cesar sobre sus propios proyectos, para extenderlos ó reprimirlos, suspenderlos ó precipitarlos, se acomoda al tiempo, se presta á los acontecimientos y toma la forma de las circunstancias, pero sin dependencia de ellas; un espíritu de precaución contra la astuta política, que asegura sus negociaciones con las desconfianzas, las dirige con desvíos aparentes, las adelanta con lentitudes estudiosas, y nunca está más cerca de su término que cuando afecta más distancia: en fin, un golpe de ojo distinto y rápido que une los objetos á pesar de sus distancias, los distingue á pesar de su semejanza, y los concilia á pesar de su contrariedad. No creais, ciudadanos, que esta sea una pura teoría con que procuramos entretener vuestra imaginación. Es, sí, el sumario de nuestros pasos en la difícil carrera de la delicada diplomacia. Puesto en nuestras manos un Estado naciente, inconstituido, ¡qué de difíciles combinaciones no han sido necesarias para introducir la razón, armada de toda su fuerza, en el fondo de los gabinetes: ó indiferentes sobre su suerte, ó desconfiados de su justicia, ó prevenidos contra su causa, ó en contradicción con sus intereses, ó detenidos, en fin, por el influjo de una política circumspecta! ¡Qué de actividad, qué de diligencias para frustrar en las Cortes las sugerencias emponzoñadas de la vengativa España, y dejar sin frutos sus eternos resentimientos! ¡Qué de prudencia y delicadeza para ajustar negociaciones, sin comprometer al Estado, con una potencia vecina que nos observa! En fin, ¡qué de precaución, qué de paciencia para contener el genio del mal, apoderado de algunos pueblos, formando en el seno del Estado otro Estado aparte, sin más política que la de las pasiones, siempre reprimidas por la autoridad, y siempre en lucha con ella misma! Por el mismo interés de nuestra causa, ciudadanos, no nos es permitido correr el velo á los misterios que nos han ocupado con las demás naciones. Ellos son de tal naturaleza, que deben obrar en silencio y madurar por progresos insensibles y lentos. La justicia y la utilidad común con que se recomienda nuestra causa, son del género sublime, y de un orden superior á los obstáculos que suscita la intriga. Así ellas minarán sordamente las opiniones; ellas filtrarán como las aguas mansas, y dejando un depósito fecundo, fructificará el bien con abundancia. Entre tanto, contentémonos con disfrutar de las potencias europeas esa neutralidad tácita, fundada sobre el derecho de igualdad entre nación y nación, como otras tantas personas libres que viven en el estado de naturaleza. Es sobre este

principio incontestable, que no creyéndose ninguna de ellas con acción á mezclarse en los asuntos domésticos de cada Estado, retiran su cooperación activa y dejan á las partes contendoras de la presente lucha en su pleno derecho para obrar según sus intereses. El comercio, la paz, la beneficencia recíproca, que reclama la sociedad universal entre todas las naciones del globo, son los sólidos bienes que en su tribunal merecerán la preferencia sobre las pretensiones injustas y acaloradas de la España. Los cuidados de la guerra y el deseo de tomar un conocimiento más exacto de todas las relaciones que unen los diversos intereses del Estado, ejecutaban al Soberano Congreso para trasladarse á la Capital, donde más en contacto con el Poder Ejecutivo, podría darse á la causa otra celeridad, otro acierto. No fué sino después de haber calmado las agitaciones de varios anarquistas, siempre empeñados en disputarse las ruinas de la patria, que verificó el Congreso su traslación. Si la naturaleza de un manifiesto, breve y sucinto, admitiese el detalle de nuestras serias ocupaciones desde esta época, por él deberíais medir, ciudadanos, la extensión de nuestros cuidados. Reparar los males del Estado, al mismo tiempo que trabajábamos en formarle la Constitución más ventajosa: ved aquí lo que exigía de nosotros un instituto laborioso. La escasa población del Estado pedía de justicia que nos acercásemos al origen de un mal que nos daba por resultado nuestra común debilidad. Este no era otro que el despotismo del antiguo régimen, cuyos estragos son siempre la esterilidad, la incultura y el desierto de los campos. Autorizando el Congreso al Supremo Director del Estado para adjudicar tierras baldías á nuevos pobladores, quienes cultivasen este árbol de la vida, dió la señal de que se regia por los sentimientos de un espíritu reparador. Las calamidades de una guerra larga y dispendiosa, tenían agotados los fondos públicos, y gravado el Estado con una deuda enorme. No podía ignorar el Congreso que el dinero es para el cuerpo político lo que la sangre para el humano. Aumentar la masa de estos fondos y mejorar su situación deplorable, fué lo que fijó su solicitud y sus cuidados. A este efecto sancionó el decreto de amortización espedido por el Poder Ejecutivo; dictó un Reglamento que sirviese de guía á la comisión encargada del cobro de deudas relativas á la Aduana; aprobó la rebaja de su arancel; el establecimiento de la Caja Nacional de fondos de Sud América; dió su existencia á un Banco de rescate para el fomento del rico mineral de Famatina; mandó establecer una callana de fundición;

tuvo su aprobación el proyecto de una casa de moneda, y trata de hacerla extensiva á los metales de cobre. No es por movimientos rápidos que se pueden restablecer las rentas agotadas de un Estado. El tiempo y la prudencia son los que darán este resultado feliz. La ignorancia es la causa de esa inmoralidad, que apaga todas las virtudes y produce todos los crímenes que afligen las sociedades. El Congreso, con el mayor interés, escuchó y aprobó la solicitud de varias ciudades en orden á recargar sus propios haberes para establecer escuelas de primeras letras y fomentar otras benéficas instituciones. No hay cosa más consoladora, que ver propagado el cultivo de la educación pública. Los trabajos consagrados por el Supremo Director del Estado, al progreso de las letras en los estudios de esta capital, y los que se emplearán en las demás Provincias, servirán con el tiempo para formar hombres y ciudadanos. Sensible el Congreso á sus laudables conatos, aplicó la parte del erario en las herencias transversales, á la dotación de los profesores. Persuadido también de que la instrucción en el ameno y delicioso ramo de la historia natural, influye con ventajas considerables en el progreso de los conocimientos humanos, ha protegido las ideas benéficas de un naturalista recomendable por su saber. Las recompensas nacionales, son un homenaje que la patria ofrece á la virtud, un culto público tributado al mérito, y un estímulo de grandes acciones. Con monumentos y signos de honor mandó atestiguar su reconocimiento á los guerreros que han señalado su valor en defensa de la patria, y con algunos privilegios exclusivos á favor de los inventores ó introductores de las artes, ha procurado domiciliar las producciones de la industria. Crímenes de revoluciones intestinas contra el Gobierno, tenían atemorizada la patria por la tenebrosa meditación de los complicados y sus frecuentes animosidades. Ninguna seguridad en el Estado, ningún lugar de asilo, ningún funcionario público sin peligro. El dolor con que el Congreso advertía que nuestros Códigos legales no eran suficientes para contener la audacia de unos hombres profundamente corrompidos, le hizo concebir que era preciso crear un nuevo tribunal de vigilancia, que con un Reglamento acomodado á las circunstancias, pudiese detener el curso de estos instrumentos de venganza y proscripción. Una comisión militar fué creada, y ella se emplea en purgar la patria de malvados. Nunca ha sido el ánimo del Congreso, ciudadanos, llamar vuestra atención al por menor de los asuntos que vuestras pretensiones particulares han elevado á

su conocimiento. No es porque no redunde en su satisfacción el que advirtiéseis la marcha silenciosa y paciente que ha llevado en un camino escabroso y lleno de aridez. Pero, ¿quién podría seguir el hilo en este inmenso cúmulo de operaciones? Con un ardor infatigable trabajamos en la Constitución, que había de consolidar vuestra felicidad; mas este pesado despacho, paralizando nuestros afanes, fué preciso que fiando los menos arduos al juicio de una comisión, quedasen desembarazadas las atenciones del Congreso para emplearlas en el principal objeto de su misión. Cuando nos diputásteis, ciudadanos, á la formación de este Congreso Soberano, bien penetrados estábais que sin una Constitución permanente no podía entrar el Estado en la lista de las naciones, ni llamarse libre y feliz. En efecto, ¿qué otra cosa es la Constitución política de un Estado, sino ese solemne pacto social que determina la forma de su Gobierno, asegura la libertad del ciudadano, y abre los ciimientos del reposo público? Desde luego no habríamos desempeñado los sagrados deberes de vuestro encargo, si en la que al presente os alargamos no viéseis en acción ese derecho incontestable de los pueblos para elegirse la mejor. En un asunto en que empeñaron todo su saber los Licurgos, los Solones, los Platones y Aristóteles, creyeron vuestros representantes que sin el socorro de la historia, de la política y del cotejo de las mejores Constituciones, iban espuestos á traicionar toda vuestra confianza. Así es que para evitarlo, acercándose á estas fuentes puras, han sacado los principios que rigen las sociedades políticas, y los han acomodado al pacto social que vais á jurar. Seguramente podemos decir con igual derecho lo que decía una sabia pluma en su caso, que la presente Constitución no es: ni la democracia fogosa de Atenas, ni el régimen monacal de Esparta, ni la aristocracia patricia ó la efervescencia plebeya de Roma, ni el Gobierno absoluto de Rusia, ni el despotismo de la Turquía, ni la federación complicada de algunos Estados. Pero es, sí, un estatuto que se acerca á la perfección; un estado medio entre la convulsión democrática, la injusticia aristocrática y el abuso del poder ilimitado. Por esta idea anticipada ya, advertís, ciudadanos, que deseando el Congreso Soberano haceros gustar de todas las ventajas que los hombres pueden gozar sobre la tierra, ha formado la Constitución presente, organizando de un modo mixto los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Dividir estos poderes, y equilibrarlos de manera que en sus justas dimensiones estén como encerradas las semillas del

bien público: ved aquí la obra reputada en política por el último esfuerzo del espíritu humano: y ved aquí también con la que ha asegurado el Congreso vuestra prosperidad. Un análisis de sus bases principales os pondrán, ciudadanos, en estado de conocer que ella lleva el sello de la más profunda reflexión. Por la misma constitución del hombre, por la formación de las sociedades, y por una gran serie de monumentos históricos, descubrió el Congreso esta importante verdad: que no puede ser por mucho tiempo un pueblo libre y feliz, sin que sea su propio legislador. Pero cuando quedó convencido de su fuerza, lo estuvo en igual grado, que su concurso inmediato á la formación de la ley le comunicaría el carácter que llevan siempre las obras del error, del tumulto y las pasiones. Una Asamblea numerosa de hombres, por la mayor parte ignorantes, divididos por opiniones, por principios, por intereses, y agitados por todo lo que fermenta alrededor de sí, no puede producir leyes sabias.—Para hacer buenas leyes, dice un filósofo, se necesitan cabezas frías y corazones puros. Pero cuando esto fuese posible en pequeños pueblos, no lo sería en los vastos Estados. Estos principios concluyen la necesidad de ejercer los pueblos su potestad legislativa por otras manos distintas de las suyas, pero elegidas por ellos mismos; y la razón que ha tenido el Congreso Constituyente para formar otro compuesto de dos Cámaras, una de representantes y otra de senadores. El pueblo es el origen y el creador de todo poder; pero no pudiendo ejercer por sí mismo el legislativo, es este augusto Congreso el depositario de su confianza para este ministerio. En la amovilidad de los representantes y senadores, no ha procurado manifestar menos cordura este Congreso. No hay sentimiento más natural al hombre, que el de estender el poder de que está revestido. Pero un hombre transeunte en la carrera de los empleos, no puede ser tentado con el goce de una fortuna fugitiva. Fué, pues, por eso, que el Congreso Constituyente puso límites á estos cargos. Debe también reconocerse su previsión fijando á tiempos señalados las sesiones del Cuerpo Legislativo. Ha demostrado la experiencia, y parece estar en la flaqueza natural del hombre, que una Asamblea Legislativa siempre en fatiga buscando materia á sus perpetuas deliberaciones, nunca puede ser tan feliz que la encuentre tal cual ella conviene para sancionar leyes justas y proporcionadas á las públicas necesidades. En este caso la misma multiplicidad de leyes, que siempre se ha mirado como síntoma de corrupción, las desnuda de ese carácter sagrado

que comunica su importancia unida á su singularidad. Si-
guiendo el plan que se habia trazado el Congreso Consti-
tuyente, como encargado para levantar el edificio social,
precedió á la creación del Poder Ejecutivo. Todo cuanto
puede influir á cautivar el entendimiento le habia persua-
dido, que el hombre nunca puede gozar de libertad bajo
un Gobierno donde se hallen amalgamados sobre unas ma-
nos los dos poderes, Legislativo y Ejecutivo. En efecto: la
voluntad del que manda es entonces la suprema ley, tanto
mas rápida en su ejecución, cuanto es mas vivo su propio
interés. Obligado, pues, á dividirlo, revistió con este alto
poder á un solo Director Supremo. ¿Advertís aquí, ciuda-
danos, la sabiduría de esta medida? En la ejecución de las
leyes, un centro único de poder, siempre ha sido necesario
para que ellas sean superiores á todos los obstáculos. Li-
bre entonces el magistrado supremo de concurrentes, lle-
nos de las desconfianzas y los celos que inspira una odio-
sa rivalidad, él sabrá conducir al puerto el bajel del Estado
por entre borrascas y precipicios. La anarquía abre las
puertas á la tiranía, y la tiranía forja los hierros de la es-
clavitud. La unidad del poder previene estos inconvenientes.
A su presencia desaparecen las turbulencias; y el trono de
la ley se deja ver en todo su esplendor. Rodeando la Con-
stitución á este primer magistrado de una grande dignidad
y fuerza física, es como se ha propuesto imprimir en los
ánimos un respeto saludable, y ponerlo en aptitud de pro-
teger las instituciones en que está fundada la prosperidad
del Estado. Entre otras muchas atribuciones, él es el jefe su-
premo de todas las fuerzas de mar y tierra, inspector de to-
dos los fondos públicos, dispensador de todos los empleos;
tiene un influjo inmediato en los tratados con las naciones
extranjeras; publica la guerra; la dirige en todo su curso;
propone al Cuerpo Legislativo proyectos que estima con-
venientes á la felicidad de la patria; manda ejecutar todas
las leyes; examina las que de nuevo se meditan, y goza de
un veto moderado. Así es como esta suprema magistratu-
ra tiene en sus manos todos los resortes del Gobierno; y
así es también como se halla autorizada para reprimir la
audacia de los prevaricadores, que con el traje de las leyes
procuran ser autores de una política subversiva. Con so-
brado acuerdo no quiere la Constitución que el Supremo
Director del Estado tenga la iniciativa de las leyes, ni me-
nos un veto absoluto. Nada sería tan peligroso como el
revestirlo de estas prerrogativas. ¿Qué otra cosa produciría
esa iniciativa, sino tener siempre subordinado el ejercicio de

la Legislatura á los antojos del Ejecutivo? Y ese veto absoluto, ¿qué nos daría por resultado, sino abrir las puertas á la discordia, tentar al Gobierno para que invada en su totalidad lo que ya en parte le pertenecía, y corromper los miembros que puedan oponerse á su ambición? Ciertos es que el que tiene en sus manos las riendas del gobierno, y que como á un centro común llama todas las partes de la administración, debe conocer todas las necesidades del Estado, y promover los medios que influyen á su alivio; pero es en fuerza de estas mismas consideraciones, que la Constitución le autoriza para proponer proyectos conformes á su carácter, á sus costumbres, á su presente situación, y aun á producir un *veto* moderado, que no pasando de una simple censura, es mas análogo á la naturaleza de su poder. A las dos instituciones sociales de que hasta aquí hemos hecho mención, añadió el Congreso Constituyente una Corte Suprema de Justicia, con la investidura del Poder Judicial.—Razones no menos poderosas que las pasadas, dieron nacimiento á esta separación. Un legislador y juez á un mismo tiempo, vendría á ser no pocas veces juez en su propia casa. No parece sino que en cierto modo venga el legislador su ofensa personal, cuando juzga del ultraje inferido á su misma ley: teniendo entonces que infligir penas contra el transgresor, se halla espuesto éste á ser víctima de su pasión. Otra es la disposición de un nuevo juez, cuyos sentimientos, menos agitados, porque no ve insultada ninguna de sus obras, escucha en silencio la voz de la razón. Por lo demás, las funciones de los que ejercen este poder se reducen á sostener con fuerza la verdad, en el templo de la justicia. A fin de que ellos sean órganos fieles de la ley, instruyéndose constantemente de su espíritu, dispone la Constitución que duren en sus plazas lo que dure su probidad de vida y buena opinión. Poderlo todo á favor de la justicia, y no poder nada á favor de sí mismos, es el estado en que la misma Constitución pone á estos Ministros. El texto de la ley claro y espreso, es todo lo que ellos pueden sobre el ciudadano. De este modo quedan sin efecto los consejos peligrosos de ese amor propio, que con interpretaciones arbitrarias aspira á capitular con la ley, y encontrar un medio aparente entre el vicio y la virtud. Nada habría hecho el Congreso Constituyente, si dividiendo los poderes, no los hubiese equilibrado, de manera que el ejercicio de cada uno se hallase contenido en sus justos límites. Mas ó menos autoridad de la que le correspondía, ó hubiese favorecido el desorden, ó provocado á la insurrec-

ción, ó consagrado la tiranía. Demos por ahora, ciudadanos, una ojeada rápida sobre la Constitución presente, y veremos alejados de ella estos escollos. La facultad de formar leyes, sería por lo común llevada á los últimos escesos, si pudiese perder de vista que su objeto es unir á los ciudadanos por un interés común. Los hombres, entonces, oprimidos ó oprimidos, sufrirían los mismos males que en estado de naturaleza. Advertid, ciudadanos, la desvelada atención del Congreso Constituyente, para contrabalancear esta facultad y prevenir todos su abusos. Pasemos en silencio las formalidades de la Constitución, para que tenga acceso un proyecto de ley; nada digamos en orden á la mayoría de sufragios requerida en su aprobación; y fijemos la vista así sobre el influjo de los dos cuerpos deliberantes, como sobre el que tiene el Ejecutivo en la formación de la ley. Persuadido el Congreso, que sin que ésta fuese pesada en distintas balanzas, jamás presentaría la imagen de la imparcialidad, fué que dividió en dos cuerpos de intereses distintos por algunos respectos, ese Poder Legislativo. Una Cámara de Representantes y un Senado son estos cuerpos, encomendados de esta augusta función. Leyes iniciadas en cualquiera de ellos, discutidas en ambos, pasadas por la prueba de la censura del Ejecutivo, revisadas nuevamente, y sancionadas por dos tercios de sufragios, jamás podrá dudarse que son el fruto de la reflexión profunda, del juicio severo, de la madurez del espíritu; y que equilibrando así los poderes, la Constitución purifica las leyes de todas las sugestiones del amor propio, y aun de las pequeñas faltas del descuido. No sería menos funesto á la libertad el Poder Ejecutivo, que el Legislativo sin equilibrio, si revisando el Congreso con la fuerza armada, no hubiese tomado la Constitución las medidas que dicta la prudencia para mantener la balanza en igualdad. Sabido es que las leyes enmudecen en vista de la fuerza. Un magistrado armado siempre es emprendedor; y de la violación de las leyes á la tiranía el camino es corto. Pero, ciudadanos, vivid seguros de esta usurpación. La fuerza física, que en la paz sirve de apoyo al Ejecutivo, se halla mitigada por la fuerza moral que sirve de baluarte al Legislativo. Esa confianza entera, ese amor sincero de los pueblos á unos representantes de su elección, depositarios fieles de su fortuna, de su libertad y aun de su existencia, y cuya causa personal se halla identificada con la suya: ved aquí, ciudadanos, en lo que ella consiste. Sería demasiada presunción de un magistrado supremo, persuadirse que en oposición

de esta fuerza moral, podía invadir impunemente los derechos sagrados de la Legislatura. En la escuela de todos los siglos deberían haber aprendido que esa fuerza moral, aun que fundadas sobre las fibras blandas del corazón y del cerebro, es incontestable; y que aspirar á destruirla, es destruir su poder mismo. En efecto: los pueblos no tardarían en armarse para vengar una ofensa que mirarían como propia, y aniquilar un temerario que intentaba construir su fortuna sobre las ruinas de la libertad. Sin duda que la guerra puede ser la ocasión más favorable de ese ambicioso, para poner en práctica el desdichado talento de no escuchar la razón, y procediendo por la vía de hecho, atacar vuestra libertad. Pero entrando el Congreso Constituyente en el corazón del hombre, y conociendo la marcha de las pasiones, previno las consecuencias de este paso resbaladizo. Con ese instinto de precaución que ha presidido sus deliberaciones, equilibró los pasos de la guerra. El Congreso Soberano la medita, la ajusta, y la declara: el Poder Ejecutivo la publica, levanta los ejércitos y los dirige. Pero aún hay más; sin los nuevos subsidios que ella exige, nada hará ese ambicioso sino vanos esfuerzos con que contentar su pasión. Su facultad se extiende al desnudo hecho de solicitarlos; la del Congreso á alargarle la mano con medida y hacerle siempre sentir su dependencia. Cuando el Congreso Constituyente autorizó al Poder Ejecutivo con la doble facultad de disponer de los fondos públicos, y distribuir honores y dignidades, bien sabía lo que ella puede en las manos de un ambicioso para ganarse aliados, corrompiendo la virtud misma, pero también sabía que la Constitución abría caminos para detenerlo en la carrera de sus empresas. — Contra ese principio desorganizador, que nace, crece y se fortifica en el seno de la corrupción, quiere la ley fundamental que el Poder Ejecutivo venga enfrenado por las reglas que establece el Legislativo en el manejo de los caudales; y que, si es de su resorte poner empleados en los puestos, sea también el de este último acusarlos por una Cámara y separarlos por la otra. Así se ve que las desviaciones del Gobierno Supremo, se hallan contenidas en esta parte por la Constitución, y reducido su influjo al puro bien social. Si analizamos más la Constitución, todo nos hará ver que está trazada en justas proporciones. El Ejecutivo celebra los tratados con las demás naciones; el Senado los aprueba ó rechaza según la forma constitucional. Nada más en el orden de los principios que deben regir á una nación sabia y celosa de su libertad. El objeto de estos tra-

tados es conservar la balanza política entre sus diversos intereses, y fuerza es combinarlo de tal modo que ninguna potencia pueda prevalecer sobre las otras, oprimirlas ó conquistarlas. La razón clama por que el primer magistrado de la República, cuyo destino es poner en movimiento todos los ramos de la administración, penetrar por sus embajadores los gabinetes de los príncipes, y arrebatarles sus secretos, tenga una parte muy activa en la celebración de estos convenios; pero se trata de la suerte del Estado, y en estos asuntos, su poder no es más que un anillo, que enlazado en el Legislativo, forma la cadena social. La concurrencia de ambos es la que comunica la chispa eléctrica, que da la vida á la sociedad. Acabando de hacer ver el equilibrio de esta ley constitucional, llamamos vuestra atención, ciudadanos, á la libertad de la prensa que os franquea con generosidad. Constituido el pueblo en Tribunal censorio, puede decirse que llegó á su perfección el equilibrio de los poderes y aseguró sus bases la libertad civil. Sin esto la verdad débil en tiempo de vuestros tiranos, no se atrevía á ver la luz, y temblando ante los mismos que debía intimidar, merecía la censura que debía ser. Pero ¡qué fuerza varonil, qué energía la de esa verdad, cuando con la libertad de la prensa recobra sus derechos! ¡Que aguijón para los buenos, qué freno para los hombres que abusan de su poder! Acordaos, le decía un filósofo á un príncipe, que cada día de su vida, es una hoja de vuestra historia. Ninguno hay tan inmoral y bajo, para que la estimación pública no sea en el fondo del alma un decidido objeto de su amor propio. Esta libertad bien empleada, os hará hablar con esa noble firmeza que el amor constante que la patria inspira á todo buen ciudadano, y hará que se avergüencen los malvados de parecer á la faz de vuestro Tribunal. Cuando el Congreso Constituyente, equilibrando los poderes, se propuso establecer la libertad sobre bases inmóviles, sabía muy bien, que en este choque perpetuo de los pesos daba algún alimento á las agitaciones moderadas. No creais, ciudadanos, que ellas puedan llevarnos al seno de la anarquía. Una libertad bien afirmada previene siempre ese desorden social. La balanza de los poderes está equilibrada, los derechos tienen garantías; y la licencia un freno. Temed, si, cuando nos vieséis (por servirnos de la expresión de un sabio) vetar en un reposo parecido al entorpecimiento de un paralítico. La ambición siempre se aprovecha del sueño de los demás, y ella nunca duerme. Para el final complemento de la Constitución, no ha omitido el Congreso Cons-

tituyente la declaración de esos vuestros derechos esenciales, de que, ó jamás pudisteis renunciar sino en parte, ó que había adulterado la corrupción. Fué preciso á vuestros tiranos, que cerrasen los archivos de vuestra naturaleza, para que no pudieseis encontrar los justos títulos de vuestra libertad, igualdad y propiedad. Ellos se os abren á vuestra vista. Ellos borrarán de vuestra memoria la brillante historia de vuestros antiguos ultrajes. Ellos desterrarán las preocupaciones de esos seres privilegiados, que insultaban con su fausto vuestra miseria. Ellos deben dar emulación á los talentos, aplicación al trabajo, respeto á las costumbres. Perpetuamente respirareis en adelante el amor al bien, á la patria, á la justicia. De intento no os hemos presentado hasta aquí la religión Católica, Apostólica, Romana, como la dominante entre nosotros y como la primera ley del Estado. Acreditar esta resolución entre pechos tan religiosos, acaso lo miraríais como ofensa, y creeríais que se aplaudían vuestros representantes de no haber cometido un delito. Dejemos ese cuidado principalmente para aquellos Estados, donde una criminal filosofía pretende sustituir sus miserables lecciones á las máximas consoladoras de un Evangelio acomodado á nuestra flaqueza. Por lo demás, el Congreso Constituyente ha creído, que no eran del fuero de la ley las opiniones particulares que no interesan al orden público y que el corazón humano es un santuario que debe venerar desde lejos. Al leer la historia de las antiguas naciones, os asombrareis, ciudadanos, de sus disturbios y disensiones, sin ribera. Después de mil debates terribles, era el último resultado abandonar los pueblos á la suerte siempre incierta de las armas. Mal combinados los poderes, sin una línea fija que los demarcase, sin equilibrio las fuerzas, nadie era tan superior á sus flaquezas, que no le hiciesen ilusión sus pasiones. Todo era efecto de que la política aún no había salido de su infancia. Las luces de los siglos posteriores, acabaron de perfeccionarla, y todas han venido en socorro de la Constitución que os presentamos. No ha cuidado tanto el Congreso Constituyente en acordarla al clima, á la índole y á la costumbre de los pueblos, en un Estado donde siendo tan diversos estos elementos, era imposible encontrar el punto de su conformidad; pero si á los principios generales de orden, de libertad y de justicia, que siendo de todos los lugares, de todos los tiempos, y no estando á merced de los acasos, debían hacerla firme é invariable. Después de nueve años de revolución, llegó por fin el momento, ciudadanos, que tuviésemos una Constitución. Ella

encierra los verdaderos principios del orden social, y está dispuesta de manera que, comunicando un solo espíritu, cree el genio de la nación. Las Legislaturas venideras la acercarán más y más á su perfección, y la pondrán en estado que pueda respetarla la mano del tiempo. Se dice comúnmente que todas las naciones corren los períodos de la vida hasta la decrepitud en que perecen. Nosotros desmentiremos esta máxima, si siempre en centinela de la Constitución, hacemos que renazca en ella la nación misma. Por lo que respecta á nosotros, no ambicionamos otra gloria que la de merecer vuestras bendiciones, y que al leerla la posteridad, diga llena de una dulce emoción: *Ved aquí la carta de nuestra libertad: estos son los nombres de las que la formaron, cuando no existíamos, y los que impidieron que antes de saber que éramos hombres, supiésemos que éramos esclavos.* Ciudadanos: ó renunciemos para siempre el derecho á la felicidad, ó demos al mundo el espectáculo de la unión, de la sabiduría y de las virtudes públicas. Mirad que el interés de que se trata encierra un largo porvenir. Un calendario nuevo está formado; el día que cuente en adelante, ha de ser, ó para nuestra ignominia ó nuestra gloria.—Dado en la Sala de las sesiones, en Buenos Aires, á 22 de Abril de 1819.—DR. GREGORIO FUNES, Presidente.— *Ignacio Núñez*, Pro-Secretario.

Constitución de las Provincias Unidas de Sud-América

SECCIÓN PRIMERA

RELIGIÓN DEL ESTADO

Artículo 1º La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la Religión del Estado. El Gobierno le debe la más eficaz y poderosa protección; y los habitantes del territorio todo respeto, cualesquiera que sean sus opiniones privadas.

Art. 2º La infracción del artículo anterior será mirada como una violación de las leyes fundamentales del país.

SECCIÓN SEGUNDA

PODER LEGISLATIVO

Art. 3º El Poder Legislativo se espedirá por un Congreso Nacional, compuesto de dos Cámaras, una de Representantes, y otra de Senadores.

CAPÍTULO I

Cámara de Representantes

Art. 4° La Cámara de Representantes se compondrá de Diputados elegidos en proporción de uno por cada veinte y cinco mil habitantes, ó una fracción que iguale el número de diez y seis mil.

Art. 5° Ninguno podrá ser elegido Representante sin que tenga las calidades de siete años de ciudadano antes de su nombramiento, veinte y seis de edad cumplidos, un fondo de cuatro mil pesos al menos, ó en su defecto arte, profesión ú oficio útil. Que sea del fuero común, y no esté en dependencia del Poder Ejecutivo por servicio á sueldo.

Art. 6° Durarán en su representación cuatro años, pero se renovarán por mitad al fin de cada bienio. Para verificarlo los primeros Representantes, luego que se reunan, sortearán los que deban salir en el primer bienio. El reemplazo de éstos se hará por los que con la anticipación conveniente, elijan los pueblos á quienes correspondan.

Art. 7° La Cámara de Representantes tiene exclusivamente la iniciativa en materia de contribuciones, tasas é impuestos, quedando al Senado la facultad de admitirlos, rehusarlos, ú objetar los reparos.

Art. 8° Ella tiene el derecho privativo de acusar de oficio, ó á instancia de cualquier ciudadano, á los miembros de los tres grandes poderes, á los Ministros de Estado, Enviados á las Cortes Extranjeras, Arzobispos ú Obispos, Generales de los ejércitos, Gobernadores y Jueces de las Provincias, y demás empleados de no inferior rango á los nombrados, por los delitos de traición, concusión, malversación de los fondos públicos, infracción de Constitución, ú otros que según las leyes merezcan pena de muerte ó infamia.

Art. 9° Los Representantes serán compensados por sus servicios con la cantidad y del fondo que señale la Legislatura, siendo su distribución del resorte exclusivo de dicha Cámara.

CAPÍTULO II

Senado

Art. 10. Formarán el Senado los Senadores de Provincia, cuyo número será igual al de las Provincias; tres Senadores militares, cuya graduación no baje de Coronel Mayor; un Obispo, y tres Eclesiásticos; un Senador por cada Univer-

sidad; y el Director del Estado, concluido el tiempo de su Gobierno.

Art. 11. Ninguno será nombrado Senador que no tenga la edad de treinta años cumplidos, nueve de ciudadano antes de su elección, un fondo de ocho mil pesos, una renta equivalente, ó una profesión que lo ponga en estado de ser ventajoso á la sociedad.

Art. 12. Durarán en el cargo por el tiempo de doce años, renovándose por terceras partes cada cuatro. La suerte decidirá quiénes deban salir en el primero y segundo cuatrienio.

Art. 13. El ex Director permanecerá en el Senado hasta que sea reemplazado por el que le sucediese en el mando.

Art. 14. Los Senadores de las Provincias se elegirán en la forma siguiente: Cada Municipalidad nombrará un capitular y un propietario, que tengan un fondo de diez mil pesos al menos, para electores. Reunidos éstos en un punto en el centro de la Provincia, que designará el Poder Ejecutivo, elegirán tres sugetos de la clase civil, de los que uno al menos sea de fuera de la Provincia. Esta terna se pasará al Senado (la primera vez al Congreso) con testimonio íntegro de la acta de elección. El Senado, recibidas todas las ternas y publicadas por la prensa, hará el escrutinio; y los que tuvieren el mayor número de sufragios, computados por Provincias, serán Senadores. Si no resultase pluralidad, la primera vez el Congreso, y en lo sucesivo el Senado, hará la elección de entre los propuestos.

Art. 15. Los Senadores militares serán nombrados por el Director del Estado.

Art. 16. Será Senador por la primera vez el Obispo de la Diócesis donde reside el Cuerpo Legislativo. En lo sucesivo se elegirá el Obispo Senador por los Obispos del territorio, remitiendo sus votos al Senado. Publicados por la prensa, se hará el escrutinio, y el que reuniese el mayor número, será Senador: no resultando pluralidad, decidirá la elección el Senado.

Art. 17. Los Cabildos eclesiásticos, reunidos con el prelado Diocesano, Curas Rectores del Sagrario de la Iglesia Catedral, y Redactores de los Colegios (cuando éstos sean eclesiásticos) elegirán tres individuos del mismo estado, de los cuales, uno al menos sea de otra Diócesis. Remitidas y publicadas las ternas con sus actas, los tres que reunan mayor número de sufragios computados por las iglesias, serán Senadores; en caso de igualdad el Congreso ó Senado decidirá la elección.

Art. 18. Al Senado corresponde juzgar en juicio público á los acusados por la sala de Representantes.

Art. 19. La concurrencia de dos terceras partes de sufragios harán sentencia contra el acusado, únicamente al efecto de separarlo del empleo, ó declararlo inhábil para obtener otro.

Art. 20. La parte convencida quedará no obstante sujeta á acusación, juicio y castigo conforme á la ley.

CAPÍTULO III

Atribuciones comunes á ambas Cámaras

Art. 21. Ambas Cámaras se reunirán por la primera vez en esta capital, y en lo sucesivo en el lugar que ellas mismas determinen; y tendrán sus sesiones en los meses de Marzo, Abril y Mayo, Septiembre, Octubre y Noviembre.

Art. 22. Cada Sala será privativamente el juez para calificar la elección de sus miembros, con mayoría de un voto sobre la mitad.

Art. 23. Nombrará su Presidente, Vice Presidente y oficiales; señalará el tiempo de la duración de unos y otros; y prescribirá el orden para los debates y para facilitar el despacho de sus deliberaciones.

Art. 24. Ninguna de las Salas podrá deliberar mientras no se hallen reunidas ambas respectivamente en el lugar de las sesiones, al menos en las dos terceras partes de sus miembros; pero un número menor podrá competir á los ausentes á la asistencia en los términos y bajo los apremios que cada Sala proveyese.

Art. 25. Cada Sala llevará un diario de sus procedimientos, que se publicará de tiempo en tiempo, esceptuando aquellas partes que á su juicio requieran secreto. Los votos de aprobación ó negación, de los miembros de una y otra sala, se apuntarán en el diario, si lo exigiese así una quinta parte de ellos.

Art. 26. Los Senadores y Representantes, no serán arrestados ni procesados durante su asistencia á la Legislatura, y mientras van y vuelven de ella: escepto el caso de ser sorprendidos *in fraganti* en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamia ú otra aflictiva, de lo que se dará cuenta á la Sala respectiva con la sumaria información del hecho.

Art. 27. Los Senadores y Representantes, por sus opiniones, discursos ó debates en una ú otra Sala, no podrán ser molestados en ningún lugar; pero cada Sala podrá castigar

á sus miembros por desorden de conducta, y con la concurrencia de las dos terceras partes, espeler á cualquiera de su seno.

Art. 28. En el caso que espresa el artículo 26, ó cuando se forme querella por escrito contra cualquier Senador ó Representante, por delitos que no sean del privativo conocimiento del Senado, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada Sala con dos tercios de votos separar al acusado de su seno, y ponerlo á disposición del Supremo Tribunal de Justicia, para su juzgamiento.

Art. 29. Ningún Senador ó Representante podrá ser empleado por el Poder Ejecutivo sin su consentimiento y el de la Cámara á que corresponda.

Art. 30. Cada una de las Cámaras podrá hacer comparecer en su sala á los Ministros del Poder Ejecutivo para recibir los informes que estime convenientes.

CAPÍTULO IV

Atribuciones del Congreso

Art. 31. Al Congreso corresponde privativamente formar las leyes que deben regir en el territorio de la Unión.

Art. 32. Decretar la guerra y la paz.

Art. 33. Establecer derechos; y, por un tiempo que no pase de dos años, imponer para las urgencias del Estado, contribuciones proporcionalmente iguales en todo el territorio.

Art. 34. Fijar á propuesta del Poder Ejecutivo la fuerza de línea de mar y tierra para el servicio del Estado en tiempo de paz; y determinar por sí el número de tropas que haya de existir en el lugar donde tenga sus sesiones.

Art. 35. Mandar construir y equipar una marina nacional.

Art. 36. Recibir empréstitos sobre los fondos del Estado.

Art. 37. Reglar la forma de todos los juicios, y establecer Tribunales inferiores á la Alta Corte de Justicia.

Art. 38. Crear y suprimir empleos de toda clase.

Art. 39. Reglar el comercio interior y exterior.

Art. 40. Demarcar el territorio del Estado, y fijar los límites de las Provincias.

Art. 41. Habilitar puertos nuevos en las costas del territorio, cuando lo crea conveniente, y elevar las poblaciones al rango de villas, ciudades ó Provincias.

Art. 42. Formar planes uniformes de educación pública, y proveer de medios para el sostén de los establecimientos de esta clase.

Art. 43. Recibir anualmente del Poder Ejecutivo la cuenta general de las rentas públicas, examinarlas y juzgarlas.

Art. 44. Asegurar á los autores ó inventores de establecimientos útiles, privilegios esclusivos por tiempo determinado.

Art. 45. Reglar la moneda, los pesos y medidas.

CAPÍTULO V

Formación y sanción de las leyes

Art. 46. Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las dos Cámaras que componen el Poder Legislativo.

Art. 47. Se exceptúan de esta regla las relativas á los objetos de que trata el artículo séptimo.

Art. 48. Todo proyecto de ley se leerá en tres sesiones distintas, mediando entre cada una de ellas tres días al menos: sin esto no se pasará á deliberar.

Art. 49. Los proyectos de ley y demás resoluciones del Cuerpo Legislativo para su aprobación, deberán obtener la mayoría de un voto al menos sobre la mitad de sufragios en cada una de las Cámaras constitucionalmente reunidas.

Art. 50. Aprobado el proyecto en la Cámara donde haya tenido principio, se pasará á la otra para que discutido en ella del mismo modo que en la primera, lo repare, apruebe ó deseché.

Art. 51. Ningún proyecto de ley desechado por una de las Cámaras, podrá repetirse en las sesiones de aquel año.

Art. 52. Los proyectos de ley constitucionalmente aprobados por ambas Cámaras, pasarán al Director de Estado.

Art. 53. Si él los subscribe, ó en el término de quince días no los devuelve objeccionados, tendrán fuerza de ley.

Art. 54. Si encuentra inconvenientes, los devolverá objeccionados á la Cámara donde tuvieron su origen.

Art. 55. Reconsiderados en ambas Cámaras, dos tercios de sufragios en cada una de ellas, harán su última sanción.

SECCIÓN TERCERA

PODER EJECUTIVO

CAPÍTULO I

Naturaleza y calidades de este poder

Art. 56. El Supremo Poder Ejecutivo de la Nación se espedirá por la persona en quien recaiga la elección de Director.

Art. 57. Ninguno podrá ser elegido Director del Estado que no tenga las calidades de ciudadano nacional del territorio de la Unión, con seis años de residencia en él, inmediatamente antes de la elección, y treinta y cinco de edad cuando menos.

Art. 58. Tampoco podrá ser elegido el que se halle empleado en el Senado ó en la Cámara de Representantes.

Art. 59. Antes de entrar al ejercicio del cargo, hará el Director electo en manos del Presidente del Senado, en presencia de las dos Cámaras reunidas, el juramento siguiente:

Yo N. juro por Dios Nuestro Señor y estos Santos Evangelios, que desempeñaré fielmente el cargo de Director que se me confía: que cumpliré y haré cumplir la Constitución del Estado: protegeré la Religión Católica; y conservaré la integridad é independencia del territorio de la Unión.

Art. 60. Durará en el cargo por el tiempo de cinco años.

Art. 61. En caso de enfermedad, acusación ó muerte del Director del Estado, administrará provisionalmente el Poder Ejecutivo el Presidente del Senado, quedando entretanto suspenso de las funciones de Senador.

CAPÍTULO II

Forma de la elección de Director del Estado

Art. 62. El Director del Estado será elegido por las dos Cámaras reunidas.

Art. 63. Presidirá la elección el Presidente del Senado, y hará en ella de Vice Presidente el Presidente de la Cámara de Representantes.

Art. 64. Los votos se entregarán escritos y firmados por los vocales, y se publicarán con sus nombres.

Art. 65. Una mayoría de un voto sobre la mitad de cada Cámara, hará la elección.

Art. 66. Si después de tres votaciones ninguno obtuviese la expresada mayoría, se publicarán los tres sujetos que hayan obtenido el mayor número, y por ellos solos se sufragará en las siguientes votaciones.

Art. 67. Si reiterada ésta hasta tres veces, ninguno de los tres propuestos reuniese la mayoría que exige el artículo 65, se escluirá el que tuviere menor número de votos: caso de igualdad entre los tres ó dos de ellos, decidirá la suerte el que haya de ser escluido, quedando solamente dos.

Art. 68. Por uno de estos se votará de nuevo.

Art. 69. Si repetida tres veces la votación, no resultase la

mayoría espresada, se sacará por suerte el Director de entre los dos.

Art. 70. Todo esto deberá verificarse acto continuo desde que se dé principio á la elección.

Art. 71. Se procederá á ella treinta días antes de cumplir su término el Director que concluye: en caso de muerte deberá hacerse la elección dentro de quince días.

Art. 72. Entretanto se posesiona del cargo el nuevamente nombrado, subsistirá en el Gobierno el que lo esté ejerciendo; pero al electo se le contarán los cinco años, desde el día en que aquél haya cumplido su término.

Art. 73. El Director del Estado solo podrá ser reelegido por una vez con un voto sobre las dos terceras partes de cada Cámara.

CAPÍTULO III

Atribuciones del Poder Ejecutivo

Art. 74. El Director del Estado, es Jefe Supremo de todas las fuerzas de mar y tierra.

Art. 75. Publica y hace ejecutar las leyes que han recibido sanción.

Art. 76. Hace la apertura de las sesiones del Cuerpo Legislativo en los períodos de renovación de la Cámara de Representantes en la Sala del Senado: informando en esta ocasión sobre el estado del Gobierno, mejoras ó reformas, y demás que considere digno de poner en su conocimiento: lo que se publicará por la prensa.

Art. 77. Convoca extraordinariamente el Cuerpo Legislativo, cuando así lo exija el interés del país, durante la interrupción de las sesiones.

Art. 78. Puede proponer por escrito al Cuerpo Legislativo en sus Cámaras los proyectos, medidas, mejoras ó reformas que estimare necesarias ó convenientes á la felicidad del Estado.

Art. 79. Publica la guerra y la paz: forma y da dirección á los ejércitos de mar y tierra para defensa del Estado y ofensa del enemigo.

Art. 80. Rechaza las invasiones de los enemigos exteriores: previene las conspiraciones y sofoca los tumultos populares.

Art. 81. Nombra por sí solo los Generales de los ejércitos de mar y tierra, los Embajadores, Enviados y Cónsules cerca de las naciones extranjeras, y los recibe de ellas.

Art. 82. Nombra y destituye á sus Ministros; la responsabilidad de éstos la determinará la Ley.

Art. 83. Puede comparecer y con consentimiento de dos terceras partes de Senadores presentes en número constitucional, celebrar y concluir tratados con las naciones extranjeras: salvo el caso de enajenación ó desmembración de alguna parte del territorio, en que deberá exigirse el consentimiento de dos tercios de la Cámara de Representantes.

Art. 84. Espide las cartas de ciudadanía con sujeción á las formas y calidades que la ley prescribe.

Art. 85. Nombra á todos los empleos que no se exceptúan especialmente en esta Constitución y las leyes.

Art. 86. Nombra á los Arzobispos y Obispos, á propuesta en terna del Senado.

Art. 87. Presenta á todas las dignidades, Canongías, Prebendas y beneficios de las Iglesias Catedrales, Colegiatas y Parroquiales, conforme á las leyes.

Art. 88. Todos los objetos y ramos de Hacienda y Policía, los establecimientos públicos nacionales, científicos y de otro género, formados ó sostenidos con fondos del Estado, las casas de moneda, bancos nacionales, correos, postas y caminos, son de la suprema inspección y resorte del Director del Estado, bajo las leyes ú ordenanzas que los rigen, ó que en adelante formare el Cuerpo Legislativo.

Art. 89. Puede indultar de la pena capital á un criminal ó conmutarla, previo informe del Tribunal de la causa, cuando poderosos y manifiestos motivos de equidad lo sugieran, ó algún grande acontecimiento feliz haga plausible la gracia, salvo los delitos que la ley exceptúe.

Art. 90. Confirma ó revoca con arreglo á ordenanza las sentencias de los reos militares pronunciadas en los Tribunales de su fuero.

Art. 91. Recibirá por sus servicios en tiempos determinados una compensación, que le señalará el Cuerpo Legislativo; la cual ni se aumentará ni disminuirá durante el tiempo de su mandato.

SECCIÓN CUARTA

PODER JUDICIAL

CAPÍTULO UNICO

Corte Suprema de Justicia

Art. 92. Una Alta Corte de Justicia, compuesta de siete Jueces y dos Fiscales, ejercerá el Supremo Poder Judicial del Estado.

Art. 93. Ninguno podrá ser miembro de ella sino fuese Letrado recibido, con ocho años de ejercicio público, y cuarenta de edad.

Art. 94. Los miembros de la Alta Corte de Justicia, serán nombrados por el Director del Estado, con noticia y consentimiento del Senado.

Art. 95. El Presidente será electo cada cinco años á pluralidad de sufragios, por los miembros de ella y sus fiscales.

Art. 96. La alta Corte de Justicia, nombrará los oficiales de ella, en el número y forma que prescribirá la ley.

Art. 97. Conocerá exclusivamente de todas las causas concernientes á los Enviados y Cónsules de las naciones extranjeras; de aquellas en que sea parte una Provincia, ó que se susciten entre Provincia y Provincia, ó pueblos de una misma Provincia, sobre límites ú otros derechos contenciosos; de las que tengan su origen de contratos entre el Gobierno Supremo y un particular; y últimamente de las de aquellos funcionarios públicos de que hablan los artículos 20 y 28.

Art. 98. Conocerá en último recurso de todos los casos que descenden de tratados hechos bajo la autoridad del Gobierno; de los crímenes cometidos contra el derecho público de las naciones, y de todos aquellos en que según las leyes haya lugar á los recursos de segunda suplicación, nulidad ó injusticia notoria.

Art. 99. Los juicios de la Alta Corte y demás Tribunales de Justicia serán públicos: produciéndose en la misma forma los votos de cada juez para las resoluciones ó sentencias, de cualquiera naturaleza que ellas sean.

Art. 100. Informará de tiempo en tiempo, al Cuerpo Legislativo, de todo lo conveniente para las mejoras de la administración de justicia, que seguirá gobernándose por las leyes que hasta el presente, en todo lo que no sea contrario á esta Constitución.

Art. 101. Cada seis meses recibirá de las Cámaras de Justicia una razón exacta de las causas y asuntos despachados en ellas, y de las que quedan pendientes, su estado, tiempo de su duración y motivos de demora, instruída con el diario del despacho que deben llevar los escribanos de Cámara, á fin de que, estando á la mira de que la justicia se administre con prontitud, provea lo conveniente á evitar retardaciones indebidas.

Art. 102. Los individuos de esta Corte ejercerán el cargo por el tiempo de su buena comportación: y no podrán ser empleados por el Poder Ejecutivo en otro destino sin su consentimiento y el de la misma Corte.

Art. 103. El Cuerpo Legislativo les designará una compensación por sus servicios, que no podrá ser disminuida mientras permanezcan en el oficio.

SECCIÓN QUINTA

DECLARACION DE DERECHOS

CAPÍTULO I

Derechos de la Nación

Art. 104. La Nación tiene derecho para reformar su Constitución, cuando así lo exija el interés común, guardando las formas constitucionales.

Art. 105. La Nación, en quien originariamente reside la Soberanía, delega el ejercicio de los Altos Poderes que la representan, á cargo de que se ejerzan en la forma que ordena la Constitución; de manera que ni el Legislativo puede avocarse el Ejecutivo ó Judicial, ni el Ejecutivo, perturbar ó mezclarse en éste ó el Legislativo; ni el Judicial tomar parte en los otros dos, contra lo dispuesto en esta Constitución.

Art. 106. Las Corporaciones y Magistrados investidos de la autoridad Legislativa, Ejecutiva ó Judicial, son apoderados de la Nación, y responsables á ella en los términos que la Constitución prescribe.

Art. 107. Ninguna autoridad del país es superior á la ley: ellas mandan, juzgan ó gobiernan por la ley; y es según ella que se les debe respeto y obediencia.

Art. 108. Al delegar el ejercicio de su soberanía constitucionalmente, la Nación se reserva la facultad de nombrar sus Representantes, y la de ejercer libremente el poder censorio por medio de la prensa.

CAPÍTULO II

Derechos particulares

Art. 109. Los miembros del Estado deben ser protegidos en el goce de los derechos de su vida, reputación, libertad, seguridad y propiedad. Nadie puede ser privado de alguno de ellos sino conforme á las leyes.

Art. 110. Los hombres son de tal manera iguales ante la ley, que ésta, bien sea penal, perceptiva ó tuitiva, debe ser una misma para todos, y favorecer igualmente al poderoso que al miserable para la conservación de sus derechos.

Art. 111. La libertad de publicar sus ideas por la prensa es un derecho tan apreciable al hombre como esencial para la conservación de la libertad civil en un Estado: se observarán á este respecto las reglas que el Congreso tiene aprobadas provisionalmente, hasta que la Legislatura las varie ó modifique.

Art. 112. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofenden el orden público, ni perjudican á un tercero, están solo reservadas á Dios, y exentas de la autoridad de los Magistrados.

Art. 113. Ningun habitante del Estado, será obligado á hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.

Art. 114. Es del interés y del derecho de todos los miembros del Estado, el ser juzgado por jueces los más libres, independientes é imparciales que sea dado á la condición de las cosas humanas. El Cuerpo Legislativo cuidará de preparar y poner en planta el establecimiento del juicio por *jurados*, en cuanto lo permitan las circunstancias.

Art. 115. Todo ciudadano debe estar seguro contra las requisiciones arbitrarias y apoderamiento injusto de sus papeles y correspondencias. La ley determinará en qué casos y con qué justificación pueda procederse á ocuparlos.

Art. 116. Ningún individuo podrá ser arrestado sin prueba, al menos semiplena, ó indicios vehementes de crimen, por el que merezca pena corporal: los que se harán constar en proceso informativo dentro de tres días perentorios, si no hubiese impedimento; pero habiéndolo, se pondrá constancia de él en el proceso.

Art. 117. Las cárceles solo deben servir para la seguridad y no para castigo de los reos. Toda medida que á pretexto de precaución conduzca á mortificarlos más allá de lo que aquélla exige, será corregida según las leyes.

Art. 118. Ningún habitante del Estado puede ser penado, ni confinado, sin que preceda forma de proceso y sentencia legal.

Art. 119. La casa de un ciudadano es un sagrado, que no puede violarse sin crimen; y solo podrá allanarse en caso de resistencia á la autoridad legítima.

Art. 120. Esta diligencia se hará con la moderación debida personalmente por el mismo juez. En caso que algún urgente motivo se lo impida, dará al delegado orden por escrito con las especificaciones convenientes, y se dejará copia de ella al individuo que fuere aprehendido, y al dueño de la casa si la pidiere.

Art. 121. Las anteriores disposiciones relativas á la seguridad individual no podrán suspenderse.

Art. 122. Cuando por un muy remoto y estraordinario acontecimiento, que comprometa la tranquilidad pública, ó la seguridad de la patria, no pueda observarse cuanto en ella se previene, las autoridades que se viesen en esta fatal necesidad, darán inmediatamente razón de su conducta al Cuerpo Legislativo, quien examinará los motivos de la medida y el tiempo de su duración.

Art. 123. Siendo la propiedad un derecho sagrado é inviolable, los miembros del Estado no pueden ser privados de ella, ni gravados en sus facultades sin el consentimiento del Cuerpo Legislativo, ó por un juicio conforme á las leyes.

Art. 124. Cuando el interés del Estado exija que la propiedad de algún pueblo ó individuo particular sea destinada á los usos públicos, el propietario recibirá por ella una justa compensación.

Art. 125. Ninguno será obligado á prestar auxilios de cualquiera clase para los ejércitos, ni á franquear su casa para alojamiento de un cuerpo ó individuo militar, sino de orden del magistrado civil según la ley. El perjuicio que en este caso se infiera al propietario, será indemnizado completamente por el Estado.

Art. 126. Todos los miembros del Estado tienen derecho para elevar sus quejas y ser oídos hasta de las primeras autoridades del país.

Art. 127. A ningún hombre ó corporación se concederán ventajas, distinciones ó privilegios exclusivos, sino los que sean debidos á la virtud ó los talentos: no siendo estos transmisibles á los descendientes, se prohíbe conceder nuevos títulos de nobleza hereditaria.

Art. 128. Siendo los indios iguales en dignidad y en derechos á los demás ciudadanos, gozarán de las mismas preeminencias y serán regidos por las mismas leyes. Queda estinguida toda tasa ó servicio personal, bajo cualquier pretexto ó denominación que sea. El Cuerpo Legislativo promoverá eficazmente el bien de los naturales por medio de leyes que mejoren su condición hasta ponerlos al nivel de las demás clases del Estado.

Art. 129. Queda también constitucionalmente abolido el tráfico de esclavos y prohibida para siempre su introducción en el territorio del Estado.

SECCIÓN SEXTA

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

Art. 130. En ninguna de las Cámaras del Poder Legislativo, será admitida una moción para la reforma de uno ó más artículos de la Constitución presente, sin que sea apoyada por la cuarta parte de los miembros concurrentes.

Art. 131. Siempre que la moción obtenga dicha calidad, discutida en la forma ordinaria, podrá sancionarse con dos tercias partes de votos en cada una de las salas: *que el artículo ó artículos en cuestión exigen reforma.*

Art. 132. Esta resolución se comunicará al Poder Ejecutivo para que con su opinión fundada la devuelva dentro de treinta días á la sala, donde tuvo su origen.

Art. 133. Si él disiente, reconsiderada la materia en ambas Cámaras, será necesaria la concurrencia de tres cuartas partes de cada una de ellas para sancionar la necesidad de la reforma y tanto en este caso, como en el de consentir el Poder Ejecutivo, se procederá inmediatamente á verifícala con el número de sufragios prescripto en el artículo 131.

Art. 134. Verificada la reforma pasará al Poder Ejecutivo para su publicación. En caso de devolverla con reparos, tres cuartas partes de sufragios en cada Sala, harán su última sanción.

CAPÍTULO FINAL

Art. 135. Continuarán observándose las leyes, estatutos y reglamentos que hasta ahora rigen en lo que no hayan sido alterados ni digan contradicción con la Constitución presente, hasta que reciban de la Legislatura las variaciones ó reformas que estime conveniente.

Art. 136. Esta Constitución será solemnemente jurada en todo el territorio del Estado.

Art. 137. Ningún empleado político, civil, militar ó eclesiástico podrá continuar en su destino sin prestar juramento de observar la Constitución y sostenerla. Los que de nuevo fuesen nombrados ó promovidos á cualquier empleo, ó á grados militares, ó literarios, ó se recibieren de algún cargo ú oficio público, otorgarán el mismo juramento.

Art. 138. Todo el que atentare ó prestare medios para atentar contra la presente Constitución, será reputado enemigo del Estado, y castigado con todo el rigor de las pe-

nas, hasta la muerte y espatriación, según la gravedad de su crimen.

Dada en la Sala de sesiones, firmada por nuestra mano, sellada con nuestro sello, y refrendada por nuestro secretario en Buenos Aires, á 22 de Abril de 1819, 4º de la Independencia.

DR. GREGORIO FUNES, Presidente, Diputado del Tucumán.
Dr. José Mariano Serrano, Vicepresidente, Diputado por Charcas.

Pedro León Gallo, Diputado por Santiago del Estero.

Tomás Godoy Cruz, Diputado por Mendoza.

Dr. Antonio Sáenz, Diputado por Buenos Aires.

Vicente López, Diputado de Buenos Aires.

Aljo Villegas, Diputado por Córdoba.

Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante, Diputado por la ciudad de Jujuy y su territorio.

Dr. José Severo Malabia, Diputado por Charcas.

Miguel de Azcuénaga, Diputado por Buenos Aires.

Licenciado Benito Lascano, Diputado por Córdoba.

Jaime Zudañes, Diputado por Charcas.

Dr. José Miguel Díaz Vélez, Diputado por Tucumán.

Juan José Paso, Diputado por Buenos Aires.

Matías Patrón, Diputado por Buenos Aires.

Dr. Domingo Guzmán, Diputado por San Luis.

Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros, Diputado por la Rioja.

Pedro Francisco Iriarte, Diputado por Santiago del Estero.

Juan José Viamonte, Diputado por Buenos Aires.

Dr. Pedro Carrasco, Diputado por Cochabamba.

Pedro Ignacio Rivera, Diputado por Mizque.

Dr. José Luis Chorroarin, Diputado por Buenos Aires.

Dr. José Andrés Pacheco de Melo, Diputado por Chilcas.

Dr. Manuel Antonio Acevedo, Diputado por Catamarca.

Dr. José Eugenio de Elías, Secretario.

APÉNDICE Á LA CONSTITUCIÓN

Art. 1º Mientras la Legislatura arregla el método por el que pueda verificarse cómodamente la elección de un Diputado por cada veinte y cinco mil habitantes, ó una fracción que iguale al número de diez y seis mil, se hará la que corresponda para la próxima Cámara, según la base y en la forma que previene el reglamento provisorio.

Art. 2° En caso que alguna Provincia tenga dentro de su dependencia menos de tres Cabildos, siendo dos elegirá cada uno de ellos para el nombramiento de Senadores, tres electores, de los que uno sea capitular y los dos vecinos con el capital que designa el artículo 14 de la Constitución. Si la Provincia tuviere dentro de su comprensión un solo Cabildo, elegirá éste seis electores, mitad capitulares y mitad vecinos con el capital indicado; quienes procederán á verificar la elección en la forma que espresa el citado artículo.

Art. 3° La Legislatura reglará desde qué parte del proceso y en qué forma debe verificarse la publicidad de los juicios de que trata el artículo 99.

Art. 4° Sin embargo de que el Congreso al formar la presente Constitución, ha procedido sobre principios de incontestable justicia, en uso del derecho que el país actualmente libre tiene para consolidar su libertad, establecer el orden, y procurarse las ventajas de una administración, que constitucionalmente reglada, debe lograr con mayor celeridad que cualquiera otra el allanamiento del territorio entero, y el goce de una sólida paz para todas las Provincias de la Unión; no queriendo declinar un punto de la liberalidad de sus principios de consideración á los derechos de las Provincias hermanas, que no han podido concurrir á la formación y sanción de ella; ha decretado se conceda á todos los pueblos del territorio del Estado, luego que concurran todos por medio de sus representantes, la facultad de promover y obtener en la primera legislatura reforma de los artículos de la Constitución en los mismos términos que se han establecido; de modo que puedan las mociones de dicha clase ser admitidas si se apoyan por dos miembros, y resolverse con un voto sobre dos terceras partes de cada Sala.

TRATAMIENTO

Art. 5° Los tres altos Poderes reunidos tendrán el tratamiento de *Soberanía y Soberano Señor*, por escrito y de palabra.

Art. 6° El Congreso Nacional compuesto de las dos Cámaras, que constituyen el Legislativo, tendrá el de *Alteza Serenísima y Serenísimo Señor*.

Art. 7° Cada una de las dos Cámaras del Legislativo, y los Supremos Poderes Ejecutivo y Judicial, separadamente, tendrán el de *Alteza* sólo por escrito y de palabra, y el de *Señor* al principio de las representaciones que se les dirijan.

CEREMONIAL DE ASIENTOS

Art. 8º En la apertura de las sesiones del Congreso que hace el Ejecutivo en cada renovación de la mitad de la Cámara de Representantes, á que deberá concurrir la Alta Corte de Justicia, presidirá la ceremonia el Director del Estado á la derecha del Presidente del Senado, que hará de Vicepresidente, ocupando ambos el centro de la testera: por los lados se sentarán, á la derecha el Presidente de la Cámara de Representantes, y á la izquierda el de la alta Corte.

Art. 9º Ocuparán la derecha de la Sala los Senadores, y los Representantes la izquierda. En seguida de aquellos se sentarán los miembros de la Alta Corte.

INSIGNIA

Art. 10. Los Senadores y Representantes, mientras ejerzan el cargo usarán de la insignia de un escudo de oro que en el centro tenga grabado este lema — *ley* — orlada con dos ramos de oliva y laurel.

Art. 11. Lo traerán pendiente del cuello los Senadores con un cordón de oro, y los Representantes con uno de plata; y podrán usar de él dentro y fuera de la Sala.

Art. 12. Los miembros de la Alta Corte vestirán la toga cuando se presenten en traje de ceremonia, y fuera de este caso podrán usar de un escudo de oro que en el centro tenga este lema — *Justicia* — orlado del mismo modo que el anterior, y pendiente del cuello con un cordón mezclado de oro y plata.

Sala del Congreso de Buenos Aires, Abril treinta de mil ochocientos diez y nueve.—DR. GREGORIO FUNES, Presidente. *José Eugenio de Elías*, Secretario.

68

Facultad al Poder Ejecutivo y suspensión de las sesiones del Congreso

Exmo. Señor:—El Congreso, habiendo tomado en consideración la esposición que en el día de hoy ha hecho V. E. en la Sala de las Sesiones con respecto á las circunstancias del país; y teniendo también á la vista la nota oficial del Supremo Director propietario del día de ayer, ha resuelto lo siguiente:—«Exigiendo el actual estado crítico «y peligroso del país, las más eficaces y estraordinarias «medidas, para salvarlo de los inminentes riesgos que lo «amenazan y hacer cesar la ominosa guerra con Santa Fe «y el Jefe de los Orientales, se autoriza plenamente al Director sustituto y al Supremo del Estado en sus casos, «para poner en un pie respetable de defensa á esta ciudad «y Provincia, proporcionándose ó sacando á este efecto el «dinero necesario por todos los medios que le dicte la suprema ley de la salvación de la patria, sin que por esto «se crea suspendida la seguridad individual. Se le recomienda especialmente proponga la inmediata suspensión «de las hostilidades, al sagrado fin de sellar la unión de «los pueblos con quienes desgraciadamente estamos en «guerra, sobre bases de eterna justicia é interés reciproco, «cesando el Congreso en sus sesiones mientras duran los «aprestos militares, á menos que el Director sustituto ó el «propietario, ó los señores Presidente y Vice-Presidente «juzguen conveniente reunirlos.»—De orden soberana se comunica á V. E. para su inteligencia, publicación y demás efectos consiguientes.—Sala del Congreso, en Buenos Aires, Febrero 3 de 1820.—**JOSÉ MIGUEL DÍAZ VÉLEZ**, Presidente.—*Ignacio Núñez*, Pro-Secretario.—*Al Exmo. Supremo Director sustituto*.—Buenos Aires, Febrero 3 de 1820.—Enterado: acútese recibo y publíquese.—(Rúbrica de S. E.)—*Echevarría*.

(*Gazeta Extraordinaria de 4 de Febrero de 1820.*)

69

Medidas de defensa para la capital

BANDO.—*El Director sustituto del Estado, á los habitantes de Buenos Aires.*—Compatriotas:—Un peligro inminente nos amenaza. Las fuerzas que comandaba en persona el Supremo Director propietario, inferiores en número á las de los disidentes, acaban de ser batidas por éstos. Conoceis su orgullo y aspiraciones y debéis estar ciertos que en breves días los tendreis á las inmediaciones de esta ciudad, objeto de sus venganzas, víctima decretada en los consejos de su irritación. Los pretendidos federales, no lo dudeis, lo que solicitan es humillaros. Ninguna otra gloria les satisface más que imponer su planta osada sobre vuestra noble cerviz. ¿Consentirán en este oprobio los hijos de Buenos Aires?... No, compatriotas. Es preciso hacer esfuerzos para conservar ileso nuestro honor. Muerte con gloria es preferible á vida con ignominia. El Gobierno está decidido á sostener vuestro buen nombre. Un enemigo fratricida quiere imponeros la dura ley que cree justificada en su arrogancia y sus triunfos. El Gobierno desea libertaros de sus furias. A vosotros toca secundar estas miras, dando puntual cumplimiento á lo que por mi conducto os exige la imperiosa necesidad, y vuestra propia conservación. En medio de esto el Gobierno no dista de celebrar una paz, pero para hacerla con honor, es preciso tomar una actitud imponente. Con estos objetos ordeno se cumpla rigurosamente lo contenido en los siguientes artículos:—1° Todas las tropas veteranas que se hallan en esta capital saldrán en el día á formar un campo volante bajo el mando del Brigadier General D. Miguel Soler y al cual se reunirán los cuerpos de milicia de campaña mandadas aprestar, con la gente útil de caballería que pueda montarse de los de infantería.—2° Para revistar, armar y ocurrir donde convenga, se reunirán á las cuatro de la tarde de hoy los tercios cívicos, á saber: el primero en la plaza de la Concepción, el segundo en la de la fábrica de fusiles y el regimiento de caballería nacional en su cuartel, incorporándose á sus respectivas armas los que antes formaban el

cuerpo directorial y los cazadores del comercio, como asimismo todos los hombres que por la ley son llamados á alistarse. — 3° Los batallones argentinos también lo verificarán á la propia hora en las plazas que les están destinadas para sus Asambleas. — 4° Los inválidos, oficiales retirados, licenciados y agregados á plaza, concurrirán á recibir órdenes delante de esta Fortaleza. — 5° Los carretilleros, carneros, carniceros y abastecedores á igual hora se presentarán en el bajo del río á la intermediación de la alameda, para ser revistados y tomar órdenes del Sr. Gobernador Intendente y Fiel Ejecutor. — 6° Los alcaldes de barrio tomarán en el día una razón circunstanciada de todos los caballos y monturas que existan en sus respectivos cuarteles, y la pasarán al mismo Gobernador Intendente con designación de sus dueños. — 7° El Exmo. Cabildo queda especialmente encargado de hacer los acopios necesarios de víveres, y dadas las órdenes para impedir la salida de carnes y granos de esta capital. — 8° Todo desertor ya sea de línea ó de milicias, queda indultado con tal de presentarse en el término de tercero día, en su respectivo cuerpo ó al jefe del Estado Mayor General. — 9° Mientras que los cuerpos cívicos se hallan reunidos ya sea para ejercicios, revistas, ó defensa de la capital, se cerrarán todas las tiendas, casas de comercio ó de trato, talleres, tribunales y demás que impida ó perjudique el servicio de los ciudadanos. — 10. Así como el Gobierno recompensará el celo de los buenos ciudadanos, será inflexible en castigar á los que en tan críticas circunstancias se mostraren tibios ó indiferentes. Publíquese por bando en la forma acostumbrada, fijándose los ejemplares competentes en los parajes de estilo. — Dado en la Fortaleza de Buenos Aires, á 3 de Febrero de 1820. — JUAN PEDRO AGUIRRE. — Por mandato de S. E., *José Ramón de Basavilbaso*.

(Hoja suelta.)

70

Disolución del Soberano Congreso Nacional

(Contestación del Soberano Congreso á la exposición que acerca de su cese le hizo la Comisión Municipal.)—Excelentísimo Señor: En vista de la esposición que en nombre de V. E., ha hecho la Comisión en la sala de sesiones, el Congreso ha resuelto que, sin embargo que los Representantes de los pueblos celebraron el pacto de unión con la representación legítima del gran pueblo de Buenos Aires, y por lo tanto desearían saber la voluntad de éste, manifestada del mismo modo, ceden á la intimación que se les hace por medio de S. E. sin que se entienda que en esto obran autoritativamente.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Sala de las sesiones en Buenos Aires, Febrero 11 de 1820.—JOSÉ MIGUEL DIAZ VELEZ, Presidente.—Ignacio Núñez, Pro-Secretario.—*Al Exmo. Cabildo de esta Capital.*

(Contestación del Exmo. Cabildo.)—La salud pública, cuyos peligros no es posible detallar en el momento, y de que se instruirá oportunamente á los demás pueblos, exige imperiosamente que cese el ejercicio de sus representaciones. La penetración y sabiduría de Vuestra Soberanía debe consultar aquel primer objeto de la República, y decidirse por tan interesantes miras, á evitar la responsabilidad de incalculables males que pudiesen suceder. El público está en expectación, y Vuestra Soberanía podrá prever lo que pueda ocasionar la tardanza á una cooperación de ideas con el Supremo Poder y voto del ejército exterior.—Dios guarde á Vuestra Soberanía muchos años.—Sala Capitular de Buenos Aires, Febrero 11 de 1820.—Soberano Señor:—*Estéban Romero—José Julián Arriola—Pedro José Echegaray—Francisco Delgado—Juan Angel Vega—Marcelino Rodríguez—Fermín Irigoyen—Juan Pablo Saenz Valiente—Baltasar Jimenez—Benito Lynch—Miguel de Belgrano* (*).

(*) En virtud de este oficio quedó efectivamente disuelto el Congreso Soberano.

(Contestación del Supremo Director al oficio del Exmo. Cabildo.) Excelentísimo Señor: Adhiriendo á la voluntad que me ha sido manifestada en este instante por el Exmo. Cabildo, deseoso de propender en cuanto esté de mi parte al bien de mis conciudadanos, deposito la Suprema Dirección del Estado, que he desempeñado hasta ahora, en manos de V. E. — Lo participo á V. E. para su conocimiento y fines que son subsiguientes. — Dios guarde á V. E. muchos años. — Buenos Aires, Febrero 11 de 1820 á las 7 de la mañana. — Exmo. Señor: — JOSÉ RONDEAU. — *Exmo. Cabildo, justicia y regimiento de la Ciudad de Buenos Aires.*

(Gazeta Extraordinaria de 15 de Junio de 1820.)

El Cabildo reasume el mando de la Provincia

BANDO

El Exmo. Cabildo, justicia y regimiento de esta muy noble y benemérita ciudad de Buenos Aires, á todos sus dignos habitantes, no menos que á los de la Provincia y campaña, hace saber:— Que habiendo, por un cúmulo de desgracias circunstancias ocasionadas por las intestinas desavenencias con la Provincia hermana limitrofe de la Banda Oriental y Santa Fe, llegado á entender que sus aspiraciones y deseos en orden al sistema general gubernativo con las demás, no estaban limitadas á solas aquéllas, sino que han sido trascendentales á las otras que hasta hoy han compuesto la Unión, manifestándose de un modo inequívoco por comunicaciones que ha recibido este Exmo. Ayuntamiento y por actos recientes que son bien públicos, á que ha coadyuvado el ejército de observación situado sobre el puente de Márquez, en la suya dirigida con fecha del día de ayer suscrita por todos los jefes que la componen, y habiendo tambien el Soberano Congreso y Supremo Director del Estado penetrándose de los deseos generales de las Provincias sobre las nuevas formas de asociación que apetecen, en las que ambas autoridades estan muy distantes de contradecir ó violentar la voluntad general libre de los pueblos, con cuyo objeto es que en este mismo día el Soberano Congreso por su parte ha cesado y el Supremo Director por la suya ha

dimitido en manos de este Exmo. Ayuntamiento el mando que le estaba cometido.

Por tanto: y mientras se esplora por unánime concurrencia de todas las Provincias la voluntad general con respecto al modo y forma de la Unión que deben conservar, y sin perjuicio de la diputación y medidas que tiene acordadas este Ayuntamiento para hacer cesar las hostilidades y guerra civil actual con la Provincia de Santa Fe;— ha venido en declarar reasumido el mando universal de esta Ciudad y su Provincia en esta Exma. Corporación, que por su parte y en correspondencia de la confianza que ha merecido á los ilustres y dignos habitantes, cuidará de mantener el orden en todos sus ramos y administración, espidiendo al efecto todas las órdenes que, según las delicadas circunstancias presentes, conduzcan al mayor bien, felicidad y tranquilidad de esta Provincia, interin que en unión con las demás se establecen las mejores bases de asociación conformes á sus decidida y manifestada intención; y para que llegue á noticia de todos, publíquese por bando solemne, fijándose en los lugares públicos acostumbrados y circulándose á todos á quienes corresponda.—Sala Capitular de Buenos Aires, Febrero 11 de 1820.—*Estéban Romero—José Julián Arriola—Pedro José Echegaray—Francisco Delgado—Juan Angel Vega—Marcelino Rodríguez—Fermín Irigoyen—Juan Pablo Sáenz Valiente—Baltasar Gimenez—Benito Lynch—Miguel de Belgrano.*—Por mandato de S. E., *Don José Ramón Basavilbaso.*

(Gazeta extraordinaria. — 15 de Febrero.)

Armisticio celebrado por el General D. Miguel Estanislao Soler con los Gobernadores de Santa Fe y Entre Ríos.

Los abajos firmados, Brigadier Comandante de las fuerzas de mar y tierra del territorio de Buenos Aires, D. Miguel Estanislao Soler, de la una parte, y de la otra los Gobernadores de las Provincias de Santa Fe y Entre Ríos, Generales del ejército federal combinado; habiéndose reunido en la Villa de Luján, de unánime consentimiento hemos acordado:— Que para cortar la guerra ominosa y desastrosa sostenida entre pueblos hermanos por el capricho y ambición de la precedente administración, que ha oprimido largo tiempo á los heroicos pueblos de la Unión, celebran un armisticio por el término de tres días, con objeto de concluir un convenio definitivo, que teniendo por base la paz y armonía permanente, aleje toda probabilidad de renovarse las escenas desastrosas que han afligido al patrio suelo en estos últimos tiempos. Han convenido así mismo las partes contratantes en que la condición que han exigido distintas ocasiones los pueblos libres de que no se deje en empleo ninguno individuos de la administración depuesta, que haya ayudado ó intentado sostenerla en sus proyectos de opresión, ó cooperado á la ejecución de sus crímenes, se considera como base esencial de la propuesta transacción. Los suscriptos al mismo tiempo empeñan recíprocamente su honor, el de las fuerzas que mandan y pueblos que representan, en cumplimiento del pacto que han celebrado. Fecho en la Villa de Luján á diez y siete de Febrero de mil ochocientos veinte. — *Miguel Soler.* — *Francisco Ramírez.* — *Estanislao López.* — Es copia, *Cosme Maciel*, Secretario. — *José María Echandía*, Secretario Militar.

(Hoja suelta.)

72

Convención entre las Provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos

Don Hilarión de la Quintana, Coronel Mayor de Ejército y Gobernador interino de esta Provincia.

Por cuanto: La Junta de Representantes Electores acaba de pasarme el tratado celebrado y ratificado entre los Gobiernos de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, cuyo tenor es como sigue:

«Convención hecha y concluída entre los Gobernadores Don Manuel de Sarratea, de la Provincia de Buenos Aires, de la de Santa Fe, Don Estanislao López y el de Entre Ríos Don Francisco Ramírez el día 23 de Febrero del año del Señor de 1820, con el fin de poner término á la guerra suscitada entre dichas Provincias, de proveer á la seguridad ulterior de ellas, y de concentrar sus fuerzas y recursos en un Gobierno Federal, á cuyo efecto se han convenido en los artículos siguientes: -- Artículo 1º Protestan las partes contratantes, que el voto de la Nación y muy en particular el de las Provincias de su mando, respecto al sistema de Gobierno que debe regirlas, se ha pronunciado en favor de la federación, que de hecho admiten. Pero que debiendo declararse por Diputados nombrados por la libre elección de los pueblos, se someten á sus deliberaciones. A este fin, elegido que sea por cada Provincia popularmente su respectivo representante, deberán los tres reunirse en el Convento de San Lorenzo de la Provincia de Santa Fe, á los sesenta días contados desde la ratificación de esta Convención. Como están persuadidos que todas las Provincias de la Nación aspiran á la organización de un Gobierno central, se compromete cada una de por sí de dichas partes contratantes á invitarlas y suplicarlas concurren con sus respectivos Diputados, para que acuerden cuanto puidere convenirles y convenga al bien general. — Art. 2º Allanados como han sido todos los obstáculos que entorpecían la amistad y buena armonía entre las Provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, en una guerra cruel y sangrienta, por la ambición y criminalidad de unos hombres

que habían usurpado el mando de la Nación, ó burlado las instrucciones de los pueblos que representaban en Congreso, cesarán las hostilidades desde hoy retirándose las divisiones beligerantes de Santa Fe y Entre Ríos á sus respectivas Provincias.— Art. 3° Los Gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos, por sí y á nombre de sus Provincias, recuerdan á la heroica Provincia de Buenos Aires, cuna de la libertad de la Nación, el estado difícil y peligroso á que se ven reducidos aquellos pueblos hermanos por la invasión con que los amenaza una potencia extranjera, que con respetables fuerzas oprime la Provincia aliada de la Banda Oriental. Dejan á la reflexión de unos ciudadanos tan interesados en la independencia y felicidad nacional, el calcular los sacrificios que costará á los de aquellas Provincias atacadas el resistir un ejército imponente, careciendo de recursos, y aguardan de su generosidad y patriotismo, auxilios proporcionados á lo arduo de la empresa, ciertos de alcanzar cuanto quepa en la esfera de lo posible.— Art. 4° En los Ríos Uruguay y Paraná navegarán únicamente los buques de las Provincias amigas cuyas costas sean bañadas por dichos ríos. El comercio continuará en los términos que hasta aquí, reservándose á la decisión de los Diputados en Congreso cualesquiera reformas que sobre el particular solicitasen las partes contratantes.— Art. 5° Podrán volver á sus respectivas Provincias aquellos individuos que por diferencia de opiniones políticas hayan pasado á la de Buenos Aires ó de ésta á aquella, aun cuando hayan tomado armas y peleado en contra de sus compatriotas, serán puestos al goce de sus propiedades en el estado que se encontraren y se echará un velo á todo lo pasado.— Art. 6° El deslinde del territorio entre las Provincias, se remitirá en caso de deudas á la resolución del Congreso general de Diputados.— Art. 7° La deposición de la antecedente administración ha sido obra de la voluntad general por la repetición de crímenes con que comprometía la libertad de la Nación, con otros escesos de una manigntud enorme; ella debe responder en juicio público ante el Tribunal que al efecto se nombre: esta medida es muy particularmente del interés de los jefes del ejército federal que quieren justificarse de los motivos poderosos que les impelieron á declarar la guerra contra Buenos Aires en Noviembre del año próximo pasado y conseguir con la libertad de la Provincia de Buenos Aires, la garantía más segura de las demás unidas.— Art. 8° Será libre el comercio de armas y municiones de guerra de todas clases en las Provincias fede-

radas. — Art. 9º Los prisioneros de guerra de una y otra parte serán puestos en libertad después de ratificada esta Convención, para que se restituyan á sus respectivos ejércitos ó Provincias. — Art. 10. Aunque las partes contratantes están convencidas de que todos los artículos arriba espresados son conformes con los sentimientos y deseos del Exmo. Sr. Capitán General de la Banda Oriental Don José Artigas; según lo ha espuesto el Sr. Gobernador de Entre Ríos, que dice hallarse con instrucciones privadas de dicho Sr. Exmo. para este caso, no teniendo suficientes poderes en forma, se ha acordado remitirle copia de esta acta, para que siendo de su agrado entable desde luego las relaciones que puedan convenir á los intereses de la Provincia de su mando, cuya incorporación á las demás federadas se miraría como un dichoso acontecimiento. — Art. 11. A las 48 horas de ratificados estos tratados por la Junta de electores, dará principio su retirada el ejército federal hasta pasar el Arroyo del Medio; pero atendiendo al estado de devastación á que ha quedado reducida la Provincia de Buenos Aires por el continuo paso de diferentes tropas, verificará dicha retirada por divisiones de 200 hombres, para que así sean mejor atendidas de víveres y cabalgaduras, y para que los vecinos esperimenten menos gravámenes. Queriendo que los Sres Generales no encuentren inconvenientes ni escaseces en su tránsito, para sí ó para sus tropas, el Gobernador de Buenos Aires nombrará un individuo que con este objeto les acompañe hasta la línea divisoria. — Art. 12. En el término de dos días, ó antes si fuere posible, será ratificada esta Convención por la muy Honorable Junta de Representantes. — Fecho en la Capilla del Pilar, á 23 de Febrero de 1820. — *Francisco Ramírez.* — *Estanislao López.*

**Circulares á los Cabildos, transcriptas á los Gobernadores
Intendentes y sus Tenientes**

Primera.—Con esta fecha dice el Gobierno al Muy Ilustre Cabildo de esa ciudad lo que sigue:—La última horrosa rebelión que sobrevino en esta ciudad posteriormente á la remisión que hice á V. S. del tratado de paz concluido entre este Gobierno y los de Santa Fe y Entre Ríos, interrumpió las providencias que debían tomarse para su cumplimiento.—Hoy que se halla restablecida la tranquilidad pública por uno de los pasos más enérgicos de este pueblo, contra los malvados liberticidas que querían conducirlo á su ruina, y se halla este Gobierno entendiendo en ellas del modo más activo que le permiten las circunstancias, como será V. S. informado por los papeles públicos:—Los habitantes todos de las tres Provincias contratantes han manifestado esta vez de un modo inequívoco, que la obra de la perfidia y los desastres comunes en que se nos había empeñado, no tenían el menor apoyo en sus sanos sentimientos que eran unísonos por la libertad y la paz interior, sino en la alevosía de los mandatarios, que por el espanto y la corrupción habían logrado seducir á algunos pocos miserables para consumir los planes que su bajeza había formado. Ellas han desaparecido y la libertad patria vuelve á renacer poco menos que de un montón de cenizas á que la tenían reducida.—Para cimentarlos, pues, debidamente, es, entre otras cosas, de la primera importancia, la reunión indicada para el convento de San Lorenzo de los Diputados que los pueblos destinen por una libre y escogida elección de los que merezcan su confianza para tan delicado encargo; y á cuyas solemnes declaraciones ha quedado sujeto el resultado final de esta grande obra por el artículo 1º, terminando allí junto con la ruina y confusión de los enemigos interiores, toda sucesiva aspiración de la ambición extranjera. — V. S. está ya impuesto que ellos deben reunirse á los sesenta días de aquella fecha; y yo debo hacerle presente, que interin no se realice, la federación está acéfala, y que obrando cada Provincia en diverso

sentido, y sin un centro de unión federal que dé impulso á los negocios comunes, dirija la guerra, nombre enviados, reciba á los que vengan, y en una palabra, con quien deban entenderse todas las providencias del alto y Supremo Gobierno Central de los Estados federados, presentamos un cuadro muy melancólico á las naciones que nos observan y la patria se mantiene á una línea de distancia de un trastorno que inutilice todas las sanas intenciones de los libres. Sobre este concepto, á que me parece inútil llamar con largas demostraciones la ilustrada penetración de los que se hallan al frente de los Gobiernos, y en que se manifiestan de acuerdo los ánimos de todos los habitantes, es de esperar que concurren con su sufragio á la solemne ratificación de lo hecho, y demás urgentes medidas que deben afianzarlo.—V. S. sabrá anunciarlo así á los pueblos de esa Provincia del modo que juzgue más propio para inspirarles este grande interés, y despertar el espíritu público atacado de intento por cuatro años consecutivos á los fines que se están viendo, no menos que para disipar todas las odiosas prevenciones que había podido hacer concebir contra este pueblo la espantosa tiranía de un puñado de hombres que ya no existen.—Y yo espero, que proporcionando una elección popular la más libre y bien dirigida que sea conforme á los deseos de esa Provincia, y al interés general, tendremos la satisfacción de que se reuna por primera vez una samblea de hombres libres de la entera confianza de los pueblos y con las más cumplidas y específicas instrucciones que alejen toda duda sobre su voluntad, y fijen de un modo indestructible la libertad y felicidad general de todos.—Tales son los deseos de los Gobiernos contratantes: y al comunicarlo á V. S., por mi parte, en cumplimiento de lo acordado, me lisonjeo anticipadamente de todo el buen éxito que ellos deben tener por lo respectivo á este territorio.—V. S., con efecto, con todo el interés y celo que ha manifestado tantas veces por sus adelantamientos y prosperidad, cooperará á que se logre y se apresurará á aprovechar las buenas disposiciones que por todas partes se notan para lo mismo, concurriendo con su Diputado en los términos propuestos, y á los fines que se indican por el tratado que nuevamente incluyo á V. S. por si se hubiese extraviado en la anterior comunicación.—Dios guarde, etc.

Segunda—En cumplimiento del artículo 7º, del tratado de paz y alianza de 23 de Febrero último, ha procedido desde luego este Gobierno á la aprehensión y seguridad

de los mandatarios que existían en esta ciudad, y ha abierto el juicio público prevenido del modo que V. S. se impondrá por las primeras diligencias que se le incluyen impresas. Todo se deja al final juicio y decisión de los pueblos agraviados, y árbitros de adoptar cualquiera de los medios que se indican para el juzgamiento por el artículo especial del auto cabeza de proceso. Espera este Gobierno que V. S. se servirá consultar en esta parte la voluntad de la Provincia por los medios que crea más propios, instruyéndome de su resolución para los efectos consiguientes: y que en el caso que haya de venir el Juez que se propone por el primer arbitrio, tomará por su parte todas las providencias que le dicte su celo para que se realice la elección en una persona de conocimientos, de concepto patriótico, y de una absoluta confianza de los pueblos, y que ella sea tan breve que pueda presentarse en esta ciudad á la fecha indicada. —Dios guarde, etc.

Y deseando el Gobierno que V. S. con su celo y el merecido influjo que le presentan sus servicios y sus virtudes conocidas, coopere por su parte al más completo logro de unas medidas en que se interesa el bien general: se lo transcribe para su conocimiento, acompañándole los impresos relativos.—Dios guarde á V. S. muchos años. —Buenos Aires, Marzo 18 de 1820.

(Hoja suelta. — Colección del Señor D. Mardoqueo Navarro.)

74

**Erección en Provincia federal del territorio de
Santiago del Estero.⁽¹⁾**

Acta de la Asamblea electoral. -- Cuando una porción de una nación civilizada, ó una colonia, se separa del tronco nacional y sacude el yugo de la antigua soberanía para elevarse al rango de una nación nueva é independiente, se considera como un deber sagrado el publicar á la faz de las otras naciones, los agravios y motivos que causan esta innovación en el orden político, á fin de justificarse á los ojos de los hombres civilizados. Por consideración á nuestros conciudadanos y á los extranjeros que frecuentan nuestro territorio, queremos hacer lo mismo, al momento que nos separamos de la autoridad é identidad civil y gubernativa de la Provincia actual de San Miguel del Tucumán; la cual no era ella misma, antes de nuestra separación de la España, sino una fracción de la antigua y demasíado dilatada Provincia del Tucuman, cuya capital era Salta, cuando sucedió nuestra revolución. -- No entremos en el pormenor de los agravios y vejaciones que esta jurisdicción de Santiago del Estero esperimentó desde el principio de nuestra revolución de parte del Gobierno provincial establecido en la ciudad de San Miguel; las llagas aún están vertiendo sangre en el seno de muchas familias. No retrocederemos á causas más remotas que el mes de Enero de este año. El 12 de Noviembre del año pasado, en consecuencia de un movimiento militar, el Coronel Mayor D. Bernabé Aroz fué elevado al Gobierno del Tucumán por la votación de cinco capitulares de la Municipalidad de San Vicente, habiéndose ausentado los siete restantes por causa de este movimiento. Como se ha acostumbrado hasta ahora en nuestros países considerar como legítimo todo lo que se hace en las capitales, el Señor Don Bernabé Aroz fué

(¹) Este documento corresponde al mes de Abril de 1820, habiendo sido publicado sin fecha en la página 531 y siguientes del tomo XIX de la "Revista de Buenos Aires". El Sr. D. Antonio Zimny, en su *Bibliografía Histórica*, tomo II, página 317, dice que la primera publicación se hizo sin fecha.

reconocido y obedecido en esta jurisdicción, aunque jamás concurrimos con nuestros votos á su elección. A fines de Diciembre del año pasado se hizo en Santiago del Estero una elección de Capitulares por los medios más fraudulentos y capciosos. Habiendo la parte sana de los electores protestado de nulidad, el Gobierno de este pueblo, ordenó una nueva elección. El resultado fué que los nuevos electores formaron su cabildo.—Un número corto de vecinos de un espíritu dominador, coaligados con cuatro ó cinco partidarios incorregibles de la España y con otros emisarios del sistema federal, se opusieron á la elección de este Cabildo, y lo asaltaron con toda especie de calumnias en el espíritu del Señor Gobernador Araoz. Los medios más eficaces de seducción fueron empleados con las personas que influyen con dicho Señor Gobernador. A mediados de Enero fué mandado de San Miguel á Santiago un cuerpo de tropas con el pretexto de escoltar al General Belgrano; apenas llegaron estas tropas, que los oponentes de la Municipalidad se levantaron y con su ayuda la depusieron y establecieron otra con la fuerza extranjera. Pidieron justicia al Gobierno del Tucumán los ciudadanos agraviados, y no fueron escuchados. Poco tiempo después de este oficio, el Señor Gobernador Araoz pasó uno al Cabildo usurpador, á quién también estaban anexas las funciones del Teniente Gobernador, á fin de que se nombrase en esta ciudad y en las parroquias de campo, electores para elegir Diputados, que debían ir á San Miguel del Tucumán para concurrir á la organización provincial. Sería demasiado largo y fastidioso relatar los fraudes y la violencia abierta empleada en casi todas las comunidades del campo por los emisarios del Cabildo usurpador, para apoderarse de las elecciones; pero la escena más escandalosa fué la que pasó en el mismo pueblo el 20 de Marzo. Instigado por este Cabildo el Capitán Echaure, puso sobre las armas á la tropa que mandaba dos horas antes de la elección. Les hizo cargar sus fusiles y ponerlos en pabellón al frente de la sala electoral, y el día antes dicho comandante de armas había amenazado á los electores que eran contrarios al partido al cual él se había vendido.—Cartas de ciudadanía fueron mandadas á una muchedumbre de peones para que votasen en esta elección; y muchas de estas cartas fueron escritas de la mano propia de españoles y de otros enemigos de nuestra revolución. A varios electores que no querían votar por el partido usurpador, fué rehusada la entrada de la sala de elecciones. A vista de un tal desorden, los ciudadanos más

respetables no quisieron, ó no se atrevieron á presentarse para votar, y protestaron contra la nulidad de esta elección. Todo esto lo supo el Señor de Araoz, y lejos de reprimir un tal desorden, continuó protegiendo á los opresores del pueblo de Santiago.— En vista de lo que llevamos espuesto, es evidente que no nos ha quedado sino el último recurso que resta á los pueblos oprimidos, cuando ven que los que los gobiernan se hacen sordos á sus representaciones y á sus gemidos. Hemos llamado en nuestra ayuda á nuestro paisano D. Felipe Ibarra, Comandante General de las fronteras. El llegó aquí el Viernes Santo por la mañana al frente de una tropa de ciudadanos del campo, á los cuales se reunió una porción de nuestros beneméritos hermanos santafecinos. Echaure fué á su encuentro y lo atacó en las calles, esponiendo así á los ciudadanos á un saqueo, pero él fugó al ruido de los primeros balazos. La sangre ha corrido en nuestra ciudad, y hasta en la iglesia de Santo Domingo, por causa del tirano. . . . ¡El mismo día que el Salvador de los hombres derramó la suya para libertarnos de la tiranía de nuestras pasiones! La prudencia y la humanidad del Comandante Ibarra preservaron á este pueblo de los horrores consiguientes en tales circunstancias, y este triunfo de los principios federales no fué seguido de reacción ni de venganza alguna. A las once del mismo día los ciudadanos fueron convidados por la antigua Municipalidad á reunirse para nombrar un Teniente Gobernador y una nueva Municipalidad. — Por unanimidad de los votos recayó sobre D. Felipe Ibarra el empleo de Teniente Gobernador; y una Municipalidad fué electa, compuesta en parte de los particulares del 1º de Enero. Tan ciertos estaban nuestros oponentes de nuestra moderación, que muchos de ellos se presentaron en la sala Capitular para votar como se les antojó. No obstante tantos agravios y ultrajes, no habíamos pensado en separarnos de la Provincia del Tucumán hasta que apareció un manifiesto publicado en la capital de aquella Provincia el 10 del corriente. Se nos trata en dicho manifiesto con una soberbia, un desprecio, un desden, tales como nunca lo hicieron los españoles en los mayores excesos de su arbitrariedad y altanería. Que lo lean las almas libres y generosas y que se indignen. Antes de la publicación de este manifiesto, el Gobierno del Tucumán había declarado aquella Provincia libre é independiente, sin dignarse de consultar con nuestros hermanos de Catamarca, ni con nosotros, considerándonos como vasallos de la capital en que él manda.— Hasta aquí habíamos obedecido á las

órdenes del Gobernador del Tucumán, no porque consideráramos su autoridad como constitucional, pues no habíamos contribuido con nuestros votos á su elección, sino porque pensábamos que no se debía hacer divisiones de Provincia en un momento en que pueblos hermanos eran agitados por convulsiones políticas, pero pues que además de los agravios precitados, la benemérita Municipalidad de Santiago y nuestro Teniente Gobernador no han recibido, después de un mes, contestación á varios oficios pasados al Gobierno existente en la ciudad de San Miguel, pues nuestra tranquilidad y seguridad están diariamente amenazadas por algunos sujetos desnaturalizados que intrigan en San Miguel, para obtener con la fuerza ajena lo que no han podido lograr por su manejo y sus amenazas, con sus conciudadanos; convencidos de la urgente necesidad de restablecer la tranquilidad de los espíritus por una medida digna de una población de sesenta mil almas libres, cuyo voto inequívoco es formar de esta jurisdicción uno de los territorios ó co-estados de la República federal del Río de la Plata, ciertos de que no hay un argumento empleado por el Gobierno de San Miguel del Tucumán para sustraerse al Gobierno Directorial de Buenos Aires, que con más fuerte razón no podamos emplearlo nosotros para sustraernos á la autoridad del Gobierno del Tucumán: por todas estas causas, bien y maduramente consideradas:

Nos, los Representantes de todas las comunidades de este territorio de Santiago del Estero, convencidos del principio sagrado que entre hombres libres no hay autoridad legítima sino la que dimana de los votos libres de los ciudadanos; tomamos al Ser Supremo por testigo y juez de la pureza de nuestras intenciones en la declaración solemne que vamos á hacer:—Artículo 1º. Declaramos por la presente acta nuestra jurisdicción de Santiago del Estero uno de los territorios unidos de la Confederación del Río de la Plata.—Art. 2º No reconocemos otra soberanía ni superioridad sino la del Congreso de nuestros co-estados que va á reunirse para organizar nuestra federación.—Art. 3º Ordenamos que se nombre una junta constitucional para formar la Constitución provisoria y organizar la economía interior de nuestro territorio, segun el sistema provincial de los Estados Unidos de la América del Norte en tanto como lo permitan nuestras localidades.—Art. 4º Declaramos traidores á la patria y castigaremos como á tales, á todo vecino ó extranjero que por palabras ó por escritos, y con más fuerte razón, á los que con actos violentos conspiraren con-

tra este acto libre y espontáneo de la soberanía del pueblo de Santiago.—Art. 5º Ofrecemos nuestra amistad á nuestros respetables hermanos y conciudadanos del Tucumán, y el olvido de lo pasado á los que nos han ofendido; inmolado todo resentimiento sobre las aras de la religión y de la patria.—Y lo firmamos por ante nuestro Secretario, que de ello da fe.—*Manuel Frías*, Presidente.—*Lic. Fernando Bravo*.—*Manuel Alcorta*.—*Pablo Gorostiaga*.—*Pedro Rueda*.—*Manuel Gregorio Caballero*. *Martín de Herrera*. *José Miguel Maldonado*. *Mariano Santillán*. *José Antonio Salvatierra*.—*Dionisio Maguna*.—*Juan José Dauxion Lavaisse*, Secretario.—Es copia, *Dauxion Lavaisse*.

Tratado de paz entre Santa Fe y Buenos Aires

BANDO. — *Don Marcos Balcarce, Coronel Mayor de los Ejércitos de la patria, y Gobernador sustituto de esta Provincia.* -- Por cuanto con fecha de ayer 27 del corriente se ha servido la Honorable Junta de Representantes de la Provincia dirigirme la nota oficial, acompañando copia de los tratados celebrados por sus Diputados con los del Gobierno de Santa Fe, del tenor siguiente: -- Ratificados por esta Honorable Junta los tratados celebrados por sus Diputados con los del Gobierno y ciudad de Santa Fe, se adjunta á V. S. una copia certificada de ellos para su publicación y efectos consiguientes. — Dios guarde á V. S. muchos años. Sala de las sesiones de Buenos Aires, y Noviembre 27 de 1820. — ILDEFONSO RAMOS MEJÍA, Presidente. — Dr. Esteban Agustín Gascón, Vocal Secretario. — *Señor Gobernador de la Provincia Coronel Mayor Marcos Balcarce.*

TRATADO SOLEMNE DEFINITIVO Y PERFECTO DE PAZ, ENTRE SANTA FE Y BUENOS AIRES.

Deseosos de transar las desavenencias desgraciadamente suscitadas, poniendo término á una guerra destructora entre pueblos hermanos, los infrascriptos ciudadanos, de una parte los Dres. D. Mariano Andrade y D. Matías Patrón, Diputados por Buenos Aires y de la otra el Dr. D. Juan Francisco Seguí y D. Pedro Tomás de Larrachea, Diputados por Santa Fe, han acordado y convenido en los artículos que subsiguieren, canjeados previamente los respectivos poderes. — 1º Habrá paz, armonía y buena correspondencia entre Buenos Aires, Santa Fe y sus Gobiernos, quedando aquéllos y éstos en el estado en que actualmente se hallan sus respectivas reclamaciones y derechos salvos ante el próximo Congreso Nacional. — 2º Los mismos promoverán eficazmente la reunión del Congreso dentro de dos meses, remitiendo sus Diputados á la ciudad de Córdoba por ahora, hasta que en unidad elijan el lugar de su residencia futura. 3º Será libre el comercio de armas, municiones y todo artículo de

guerra entre las partes contratantes. — 4° Se pondrán en plena libertad todos los prisioneros que existiesen recíprocamente pertenecientes á los respectivos territorios con los vecinos hacendados estraídos de ellos. — 5° Son obligados los gobiernos á remover, cada uno en su territorio, todos los obstáculos que pudieran hacer infructuosa la paz celebrada, cumpliendo exactamente las medidas de precaución, con que deben estrecharse los vínculos de su conciliación y eterna amistad. 6° El presente tratado obtendrá la aprobación de los Señores Gobernadores en el día y dentro de ocho siguientes será ratificado por las respectivas Honorables Juntas Representativas. — 7° Queda garante de su cumplimiento la Provincia mediadora de Córdoba, cuya calidad ha sido aceptada, y en su virtud suscriben los Señores que la representan, que tanto han contribuido con su oportuno influjo á realizarlo. — Hecho y sancionado en la estancia del finado D. Tiburcio Benegas, á las márgenes del Arroyo del Medio, el día 24 de Noviembre del año del Señor de 1820, undécimo de la libertad de Sud-América. — *Mariano Andrade.* — *Matías Patrón.* — *Juan Francisco de Seguí.* — *Pedro Larrechea.* — *Dr. José Saturnino de Allende.* — *Lorenzo Villegas.* — Cuartel General en Ramallo, Noviembre 24 de 1820. — Aprobado: y dirijase á la Honorable Junta Representativa de la Provincia para su ratificación. — MARTÍN RODRÍGUEZ. — *Eliás Galván*, Secretario Militar. — Ratificado en los siete artículos que comprende. — Sala de sesiones de la Junta Provincial de Buenos Aires, á 27 de Noviembre de 1820. — ILDEFONSO RAMOS MEJÍA, Presidente. — *Pedro Sebastiani*, Vice-Presidente. — *Félix Alzaga.* — *Antonio Millán.* — *Francisco Delgado.* — *Santiago Rivadavia.* — *Francisco Antonio de Escalada.* — *Juan José Paso.* — *Eulogio del Pardo.* — *Rudécindo Linares.* — *Mariano de la Fuente.* — *Salvador Aguirre.* — *Ignacio Correa.* — *Severino Piñero.* — *Victorio García de Zúñiga.* — *Esteban Romero.* — *Dr. Esteban Agustín Gascón.* — Vocal Secretario. — Es copia, *Dr. Gascón.*

Por tanto, y para que tenga su debido cumplimiento y llegue á noticia de todos, publíquese por bando solemne, imprímase, fijese en los parajes públicos acostumbrados y circúlese á quienes corresponda. — MARCOS BALCARCE. — *Manuel Obligado*, Secretario. — Es copia, *D. José Ramón de Basavilbaso.*

(Hoja suelta y Gazeta de Buenos Aires, núm. 31.)

76

Sobre reunión del Congreso General

La Honorable Junta ha acordado en sesión de ayer se publiquen por la prensa las comunicaciones adjuntas. Al efecto, y para que V. E. se sirva dar las órdenes convenientes con este objeto, lo aviso de orden de la misma. — Dios guarde á V. E. muchos años. — Sala de sesiones en Buenos Aires, y Abril 11 de 1821. — MANUEL DE LUZURIAGA, Presidente. — *Pedro Medrano*, Vocal Secretario.

Departamento de Gobierno. — Buenos Aires, Abril 12 de 1821. — Publíquese como lo ordena la muy Honorable Junta de Representantes. — (Rúbrica de S. E.) — *Luca*.

COMUNICACIÓN DE LOS DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Á LA HONORABLE JUNTA DE REPRESENTANTES. — *Honorable Junta de Representantes:* Luego que llegamos á este destino, nos propusimos dar los pasos más conducentes para realizar la apertura del Congreso General, y nos hallamos desde luego con el grave entorpecimiento de de no haber enviado sus Diputados Salta, Tucumán, Santiago y Catamarca. En consecuencia, hemos acordado con los demás existentes aquí, incitar á los Gobernadores y Municipalidades de aquellos pueblos á la pronta remisión, exhortándolos, á que termine la guerra en que persisten, é interponiendo la mediación que, por comisión particular de ese Gobierno, se nos encargó. Incluimos las copias números 1º y 2º que instruyen de la numeración tomada, que tenemos el honor de poner en conocimiento de V. E., y cuyo resultado esperamos. — Dios guarde á V. H. muchos años. — Córdoba, Abril 5 de 1821. — *Matías Patrón* — *Doctor Teodoro Sánchez de Bustamante* — *Licenciado Justo García y Valdez* — *Juan Cruz Varela.* — *Honorable Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires.*

(OFICIOS DE LOS DIPUTADOS REUNIDOS EN CÓRDOBA, Á LOS GOBIERNOS Y MUNICIPALIDADES DE SALTA, TUCUMÁN, SANTIAGO Y CATAMARCA.)

Primero. — Las amigables insinuaciones de la cordialidad

y del buen deseo de restituir la paz, la tranquilidad, y el orden á unos pueblos entre quienes la desgracia, en lucha con la naturaleza, ha ocasionado desastres incalculables, producen á veces mejor efecto que los mandatos de la misma autoridad, cuando pretende remediar aquellos males. Los que tenemos el honor de suscribir esta nota, sin abrogarnos atribuciones que aun no nos competen, hemos creído un deber interponer la mediación de las Provincias y pueblos que representamos, y la nuestra propia, á fin de allanar los obstáculos que están retardando la felicidad general del país, y la particular de cada pueblo. Nombrados Diputados para el próximo Congreso General, nos hallamos reunidos en el punto convencionado, animados de las intenciones más puras, aprovechando las lecciones de la amarga experiencia pasada, precaviendo en lo posible las desgracias ulteriores, anhelando por dar á la patria nuevos días de gloria y de paz. Conocemos y debemos decir con dolor, que la guerra sangrienta en que se ven empeñados esos pueblos es el obstáculo fatal que les impide enviar los Diputados que deben integrar la representación general, para, en unión con los que nos hallamos en este destino, empezar las augustas funciones de Representantes del pueblo.— V. S. sabe muy bien que es un principio incontestable en política, que sin un centro de operaciones, sin una autoridad emanada de la voluntad general, bien pronto se convierten los Estados en un caos de desorden, de disolución y anarquía. Es muy triste para recordada la lección que hemos recibido en todo el año anterior por habernos separado de aquel principio invariable. Hemos vistos despedazadas (por decirlo así) las entrañas de la patria: rotos todos los vínculos sociales: en un choque sangriento los recíprocos intereses de los pueblos: agotados nuestros fondos: obstruidos nuestros recursos: los brazos útiles del Estado empleados en empuñar la espada para la guerra intestina: nuestros enemigos más vecinos sacando partido de nuestros desaciertos: desacreditada y olvidada la sagrada causa de nuestra independencia; y cubriéndonos de vilipendio y oprobio para con las naciones á cuyo reconocimiento aspiramos. Por fin, parece que ha llegado el tiempo de poner un dique á este torrente de males. Algunos de nosotros representamos á unos pueblos que han sostenido años enteros una guerra ominosa: pero han hecho cesar sus efectos terribles desde que sus Gobiernos oyeron la voz de la patria, que los llamaba á la concordia y á la unión. Buenos Aires y Santa Fe depusieron las armas desde el momento mismo en que se

pensó de buena fe en la reunión de un Congreso; nombraron sus Diputados en el seno de la paz; los demás pueblos dieron igual paso con igual empeño; y cuando esperábamos que ya no fueran la sangre, la odiosidad, y los rencores los que entorpecieran las marchas de los pocos Diputados que faltaban, observamos con dolor que una nueva guerra se ha entronizado en esos pueblos, y está causando cabalmente los mismos desastres que se pretende con antelación evitar. Nosotros nos atrevemos á esperar que V. S., por su parte, desista de las diferencias que se están hoy ventilando por la vía de las armas. El Congreso General, cuando pese con madurez los destinos de la patria, reglará también las pretensiones, prerrogativas y derechos de los pueblos. Entretanto, es preciso que cada uno de éstos ceda una parte de aquéllos, para obrar de acuerdo á la felicidad general. Con esta misma fecha dirigimos igual comunicación á los señores Gobernadores y Municipalidades de Salta, Tucumán, Santiago y Catamarca, y esperamos que surta los efectos consiguientes á la pureza de nuestras intenciones, á la justicia con que reclamamos, y á la salvación de los intereses comunes. Basta de sangre y de desolación: unámonos de buena fe, y hagamos dichoso un país tan digno de serlo. Sirvase V. S. cooperar y activar en lo posible la más pronta remisión de Diputados para el próximo Congreso. Esta medida ya no admite espera: ella es tan justa como necesaria. Nosotros no tememos asegurar á V. S. que esta es la voz general, el objeto de todos los votos públicos y el sagrado clamor de la patria. Dios guarde á V. S. muchos años.—Córdoba, 28 de Marzo de 1821.—*Dr. José Dámaso Xigena*, Diputado por Córdoba.—*Juan Cruz Varela*, Diputado por Buenos Aires.—*Licenciado Justo García y Valdez*, Diputado por Buenos Aires.—*Pedro Larrechea*, Diputado por Santa Fe.—*Matías Patrón*, Diputado por Buenos Aires.—*José Posidio Rojo*, Diputado por San Juan.—*Francisco Delgado*, Diputado por Mendoza.—*Marcelino Poblet*, Diputado por San Luis.—*Felipe Antonio de Iriarte*, Diputado por Jujuy.—*Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante*, Diputado por Buenos Aires.—Es copia, *Varela*.—*Patrón*.—*Bustamante*.—*García y Valdez*.

Segundo.—Nombrados Diputados para el próximo Congreso General, nada anhelamos tanto los que suscribimos como el que se realice cuanto antes la reunión de un cuerpo que pueda volver la vida á la patria agonizante. V. S. conoce muy bien esta necesidad; y nosotros interponemos todo nuestro influjo á que V. S. coopere del modo más

activo y eficaz á integrar por parte de ese pueblo la representación general. Con esta misma fecha nos dirigimos á los señores Gobernadores y Municipalidades de Salta, Tucumán, Santiago y Catamarca, interponiendo la mediación de nuestras Provincias y pueblos, y la nuestra propia, á fin de que, desistiendo de la guerra en que se ven empeñados aquéllos, remitan también sus Diputados á la brevedad posible. Cuando nos hemos determinado á dar estos pasos, nada no es tan lisonjero como la esperanza de que surtan el efecto que deseamos. Nosotros protestamos á V. S. la pureza de nuestras intenciones, y que solo aspiramos á la pronta salvación del país.—Dios guarde á V. S. muchos. —Córdoba, Marzo 28 de 1821.—*Dámaso Xigena*, Diputado por Córdoba. *Juan Cruz Varela*, Diputado por Buenos Aires.—*Licenciado Justo García y Valdez*, Diputado por Buenos Aires.—*Pedro Larrechea*, Diputado por Salta.—*José Matías Patrón*, Diputado por Buenos Aires.—*José Posidio Rojo*, Diputado por San Juan.—*Francisco Delgado*, Diputado por Mendoza.—*Marcelino Poblet*, Diputado por San Luis.—*Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante*, Diputado por Buenos Aires.—Es copia, *Varela*.—*Patrón*.—*Bustamante*.—*García y Valdez*.

(*Gazeta de Buenos Aires*, núm. 51.)

Los miembros del Congreso General reunidos en Córdoba solicitan el pronto envío de Diputados por parte de las Provincias que aun no los han mandado.

Exmo. Señor: -- Cuando la imperiosa voz de la salud pública nos llama con urgencia al cumplimiento de nuestros primeros deberes, ni podemos desentendernos de escucharla, ni debemos mirar con indiferencia que se dilate más tiempo la reorganización del país. En 28 de Mayo y con fecha posterior de Abril, dirigimos á ese Gobierno y municipalidad una larga comunicación, mediando á nombre de nuestras Provincias y pueblos para que cesara en esos la guerra intestina que los devoraba, y pensarán cuanto antes sus Gobiernos en remitir Diputados que integrasen la Representación Nacional. No omitimos dar igual paso con las demás autoridades de los pueblos que aun no habían enviado sus Representantes. Ni de V. E. ni de ese Cabildo hemos merecido la menor contestación, á pesar que ya ha transcurrido mucho más tiempo del que bastaba para tenerla. Nosotros, prescindiendo y olvidando absolutamente este desaire no merecido, no podemos dejar de recordar de nuevo á V. E. que la Provincia de Tucumán está, como todas, ligada á ciertos deberes que es indispensable llenar, y cuyo cumplimiento están reclamando altamente los intereses del país. A consecuencia de la disolución del Estado, y del trastorno general que le ha subseguido, han sufrido todas las Provincias en el largo período del año anterior y el actual, todos los horrores de la guerra civil, todas las vejaciones de la anarquía, y todos los males consiguientes á una situación tan deplorable. Si no propendemos de acuerdo y buena fe á evitar las desgracias ulteriores, y la ruina total de la patria, ésta se consumará bien pronto; y los sacrificios de 11 años por la libertad serán tan infructuosos, como criminales los que ni hayan sabido apreciarlos, ni hayan querido que el país reporte las ventajas que aquéllos le proporcionaban. Ya hemos dicho otra vez á V. E. que, sin un centro de operaciones, sin una autoridad emanada de la voluntad general, los Estados se convierten al momento en

un caos de desorden, de disolución y anarquía. Hemos puesto ante los ojos de V. E. la terrible lección que nos ha dado la experiencia pasada; y hemos concluido por solicitar á nombre de nuestras Provincias la pronta remisión de Diputados por esa para el Congreso General. Este es el único medio de volver á estrechar los vínculos disueltos, de conciliar los intereses recíprocos de los pueblos, de salvar los compromisos de todos y de volver la vida á la patria agonizante. ¿Qué motivo puede haber ya que retarde por parte de V. E. la pronta reunión de este cuerpo? La guerra que sostenía V. E. contra Güemes y Santiago ha terminado ya felizmente. Nosotros, felicitando á V. E. por este acaecimiento, no podemos dejar de asegurarle que aunque en nuestra opinión la existencia de aquella guerra no debía impedir á los pueblos beligerantes la remisión de sus Diputados, ella sin embargo era un pretexto especioso con que podía cubrirse esta omisión, y que no tiene en el día absolutamente lugar. Creemos que jamás se desentenderá V. E. de las razones de patriotismo y conveniencia pública que reclaman la pronta instalación del Congreso: nosotros no hacemos más que recordarlas, añadiendo que en V. E. hay una obligación más que llenar. En los tratados de paz, celebrados entre ese Gobierno y el de Santiago, se ha convenido por artículo espreso, en la remisión de Diputados por ambos pueblos en el término preciso de un mes. Es verdad que nosotros no estamos autorizados por el Gobierno con quien V. E. trató para reclamar el cumplimiento de sus compromisos: pero estando ya en ésta el Diputado de Santiago, y siendo el mencionado artículo de aquel tratado tan análogo al objeto de esta comunicación, no estrañará V. E. que se lo recordemos en ella. Va ya para cinco meses que reunidos en ésta, esperamos el día de la instalación del Congreso y de las esperanzas de la patria. Nuestras Provincias tienen derecho á exigirnos la actividad en este negocio, y nosotros, al protestar á V. E. la pureza de nuestras intenciones, y el buen deseo que nos anima, no podemos menos que hacerlo responsable á nombre de los pueblos que representamos de los males que pueda traer la demora ó negación de Diputados. Dígnese V. E. contestarnos categóricamente: bien entendido que con esta misma fecha dirigimos iguales reclamaciones á los Sres. Gobernadores y Municipalidades de los pueblos que aun no han integrado la representación. - Dios guarde á V. E. muchos años. Córdoba, Julio 23 de 1821. — *Pedro Larrechea*, Diputado por Santa Fe. *Juan C. Varela*, Diputado por Bue-

nos Aires.—*Marcelino Poblet*, Diputado por San Luis.—*Justo García y Valdez*, Diputado por Buenos Aires.—*Francisco Delgado*, Diputado por Mendoza.—*José Posidio Rojo*, Diputado por San Juan. - *Mateo Saravia y Jáuregui*, Diputado por Santiago.—*Matías Patrón*, Diputado por Buenos Aires.—*Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante*, Diputado por la Provincia de Buenos Aires.—*Dr. José Dámaso Gigena*, Diputado por Córdoba.—*Exmo. Sr. Presidente Supremo de la Provincia del Tucumán*.—Es copia, *Varela*.—*Dr. Patrón*.—*Dr. Bustamante*.—*Licenciado García y Valdez*.

(*Gazeta de Buenos Aires*, núm. 67.)

78

**Arreglo de las desavenencias entre Tucumán
y Santiago del Estero**

Los Diputados de las Provincias de San Miguel del Tucumán y Santiago del Estero, elegidos para transar las desavenencias y disensiones que han dado mérito á la presente guerra, y firmar los tratados de paz y unión eterna; reunidos en este paraje de Vinará después de reconocidos bastanteamente los poderes respectivos, convinieron en los artículos siguientes: — Art. 1º Cesación cabal de la guerra entre las Provincias beligerantes, y establecida la hermanable unión entre ellas bajo la garantía de la benemérita Provincia de Córdoba. — Art. 2º Los prisioneros que de una y otra parte se hubiesen hecho durante la guerra, serán devueltos recíprocamente desde el momento de ratificarse los presentes tratados. — Art. 3º Los vecinos y habitantes de las Provincias beligerantes, que hubiesen sido detenidos ó emigrados por diversidad de opiniones, volverán inmediatamente á sus casas, hogares, y uso libre de sus propiedades, sin que por sus disensiones anteriores se les siga perjuicio alguno. — Art. 4º Siempre que la Provincia de Santiago sea invadida por el enemigo infiel, la Provincia hermana del Tucumán se obliga á auxiliar con el armamento, militares y pertrechos que sean necesarios, quedando en recíproca obligada la Provincia de Santiago á auxiliar á la del Tucumán en los casos en que se halle igualmente invadida, ó por los mismos enemigos, ó por el común. Art. 5º Las quejas ó reclamaciones de perjuicios irrogados mutuamente entre las Provincias contratantes y reposición de derechos que se consid:ren recíprocos de parte á parte defieren su decisión á la deliberación del Congreso Nacional. — Art. 6º En el término de un mes que deberá contarse desde la ratificación de estos tratados, pondrán las Provincias beligerantes sus Diputados con poderes amplios en la Provincia de Córdoba para la instalación del Congreso General, sin que por pretexto alguno se pueda retardar el legal cumplimiento de este artículo. — Art. 7º Los pechos impuestos por el Gobierno de Santiago al tráfico de carretas, subsistirán

hasta la deliberación del Congreso Nacional, quedando á la inspección de los Diputados de las Provincias el deber de promover su resolución en las primeras sesiones. — Art. 8° Queda libre y espedito el tránsito y comercio por el territorio de las Provincias beligerantes, y restablecido el primer orden y giro en los términos que antes se observaba. — Art. 9° Los Gobiernos contratantes celarán con la mayor vigilancia, y prescribirán bajo de severísimas penas á sus respectivos ciudadanos y habitantes, para que no invadan las propiedades de uno y otro territorio y respeten la seguridad individual de sus vecinos. — Art. 10. Queda igualmente firmada la unión hermanable de las Provincias de Salta, Tucumán y Santiago, y de sus respectivos Gobiernos, y verdaderamente aliados con la mayor fe y sinceridad para operar activamente contra el enemigo común y auxiliar en cuanto le sea posible á la Provincia de Salta, para la defensa de irrupciones como la que la amenaza, sea con armamentos, aprestos militares, ú otras especies que conceptúen necesarias. — Art. 11. Queda al cargo de los Gobiernos de Santiago y Tucumán pasar estos tratados al Gobierno de Salta, para que siéndole adaptables igualmente los firme y ratifique; y en caso desgraciado (que no se espera) no se avenga, no será éste un motivo para que los anteriores tratados no tengan su debido efecto entre los Gobiernos de Santiago y Tucumán; para lo que desde ahora lo firmamos y ratificamos por nuestra parte los Diputados nombrados al efecto; remitiéndolos á las autoridades, de que emana nuestra comisión para la última sanción que deberá realizarse en el término de tres días contados desde el día de mañana. Pinará, y Junio 5 de 1821. — *Doctor Pedro Miguel Araoz*, Diputado de Tucumán. — *Doctor Pedro León Gallo*, Diputado de Santiago. — *Doctor José Andrés Pacheco*, Diputado mediador de Córdoba. — Es copia. — *Dionisio Centeno*, Pro-Secretario.

(Gaceta de Buenos Aires, núm. 62.)

Armisticio firmado por los Jefes de Salta y del Ejército realista

Las fuerzas del mando del Señor Comandante General que actualmente ocupan esta ciudad, la dejarán libre igualmente que todo el territorio del cabildo de Salta, realizando su retirada de ella hasta un punto situado en la campaña de Jujuy, á elección de dicho Señor, con tal que sea más allá de la referida ciudad, y que en ella se le proporcione para alojamiento de enfermos, permitiéndosele á más comprar de ella los artículos necesarios para su subsistencia.— Art. 2° El tránsito de las tropas del Señor Comandante General de vanguardia será enteramente libre de toda hostilidad, incursión ú otra cualquiera tentativa de guerra por parte de las fuerzas de la Provincia.— Art. 3° El mencionado Señor Comandante General garantiza por la presente la completa libertad á todos los jefes políticos, militares y demás ciudadanos y habitantes, tanto de esta ciudad como de la de Jujuy y sus respectivas campañas en el ejercicio de sus funciones y deberes, especialmente en el acto de nombrar un Gobierno propietario de esta ciudad por el tiempo que creyesen conveniente, según las reglas é instituciones que hasta el presente han obrado en tales casos.— Art. 4° Dicha elección deberá realizarse en el término de 15 días ó algo más si fuese necesario, contados desde que se hubiese firmado el presente tratado.— Art. 5° Inmediatamente después de posesionado del cargo el Señor Gobernador electo, se reunirán en la ciudad de Jujuy con la brevedad posible Diputados por éste, el pueblo de Jujuy y los que otras Provincias determinasen, con los que Su Señoría el Señor Comandante General tuviese á bien nombrar por su parte para que discutiendo unidos y completamente garantidos por el presente de toda libertad, seguridad y ninguna responsabilidad por sus votos y opiniones al sagrado objeto que se tiene indicado, se adopten por un tratado los que pareciesen opuestos.— Art. 6° Para que la elección de Gobernador propietario de esta ciudad lleve el sello de libre, espontánea y sin átomo de violencia, el actual Señor Gobernador interino. y

el comandante general de igual clase con las fuerzas de su mando, se retirarán de los puntos que actualmente ocupan hasta el pueblo de Chicuana, ó lugar que á su inmediación creyesen conveniente no siendo de la parte acá; librando todas las órdenes necesarias á la libre y tranquila ejecución de lo propuesto. — Art. 7º Sin embargo de lo prevenido en el artículo anterior, los jefes de la Provincia ya mencionados podrán destinar una tropa arreglada y en el número que creyesen competente para que en el momento de retirarse las que actualmente ocupan esta ciudad, cuiden en ella bajo las órdenes y dirección del ayuntamiento, de la seguridad, orden, tranquilidad y alejamiento de todo trastorno, turbación ú otra tentativa de los espíritus inquietos é insubordinados. — Art. 8 Hasta la realización del tratado indicado, y tiempo que debe durar el armisticio presente, podrá el Señor Comandante General de vanguardia del ejército del Perú proporcionarse por contratas con los propietarios de ganados y demás víveres, por sus justos precios los que legítimamente fuesen necesarios para el sustento de sus tropas por el tiempo referido. — Art. 9º Todos los prisioneros, jefes, oficiales y soldados que constan de las listas que se acompañan serán cangeados y entregados respectivamente por cada parte en el término de ocho días, contados desde la fecha, los que estuviesen fuera de ella, según las distancias en que existiesen. — Art. 10. Ningún individuo de cualquier clase ó calidad que sea podrá ser removido, perseguido, ni molestado de manera alguna por los sentimientos ó opiniones que hubiese manifestado ó practicado durante la retirada de las fuerzas del ejército del Perú en esta ciudad por los partidos contratantes, ni en el tiempo presente mientras dure el armisticio, y por el contrario ambas partes les garantizan una completa seguridad en cuanto á ello. — Art. 11. El armisticio presente no podrá cesar, ni se dará principio á las hostilidades sino al término de tres días contados desde que hubiese sido entregada la notificación á cada una de las partes. — Art. 12. Durante el armisticio no se impondrá contribución, pecho ni donativo forzoso sobre alguno de los pueblos á que se extiende el presente tratado. — Art. 13. Dentro del tiempo referido no podrá el jefe de Jujuy extender sus órdenes más allá de la quebrada de Parmamarca esclusiva, ni el Señor Comandante Olañeta tomar providencia ofensiva á los habitantes de la quebrada de Humahuaca y sus valles. — Art. 14. Las partidas del territorio de la Provincia no podrán estorbar el libre tránsito de la correspondencia para los pueblos del interior, durante los

días del presente armisticio.— Art. 15. Dentro de un día contado desde esta fecha será ratificado el presente por Su Señoría el Comandante General y por los jefes interinos de la Provincia, y para su cumplimiento lo firmamos en esta ciudad de Salta, á 14 de Julio de 1821.— *Carlos Chaves.* — *Doctor Facundo Zuviria.* — *Agustin Dávila.* — *Antonio Pallarés.* — Salta, 15 de Julio de 1821.— Ratificado en todas sus partes.— *Pedro Antonio Olañeta.* — *Antonio Fernández Cornejo.* — *Saturnino Saravia.*

(*El Argos*, núm. 21, pág. 127.—1821.)

80

Reconocimiento por la Junta, á indicación del Gobierno de

S. M. F., del principio de que es subversivo de todo derecho, el intento de destruir las constituciones y gobiernos no emanados de la voluntad espontánea de aquellos que, por privilegios, se juzgan exclusivamente autorizados para hacer ó dejar de hacer justicia á los pueblos; y autorización al Gobierno de las Provincias Unidas para aliarse al de Portugal á los efectos del sostén de dicho principio.

AUTORIZACIÓN AL GOBIERNO PARA PROCEDER Á LA PUBLICACIÓN DE LA LEY SANCIONADA EN LA SESIÓN SECRETA DE 10 DE MAYO DE 1822.—La Honorable Junta, usando de la soberanía ordinaria y extraordinaria que reviste, ha sancionado y decreta lo siguiente: — *Artículo único.*—Queda autorizado el Gobierno para publicar la ley sancionada en sesión secreta del día 10 de Mayo de 1822.—Lo que se comunica á V. E. para su cumplimiento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Sala de Sesiones en Buenos Aires á 5 de Julio de 1823.—MANUEL DE ARROYO Y PINEDO, Presidente.—*José Severo Malabia*—Secretario.—*Exmo. Gobierno de la Provincia.*

Departamento de Relaciones Exteriores.—Buenos Aires, Julio 7 de 1823—Acúsesse recibo y publíquese á continuación en el Registro Oficial la ley á que se refiere el precedente acuerdo de la Sala de Representantes.—*Rivadavia.*

LEY.—Habiendo recibido la Honorable Junta por el Ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores la carta confidencial del primer Ministro de Estado de S. M. F. fecha en Lisboa á tres de Noviembre, dirigida al de Hacienda de este Gobierno, que le fué trasmitida por el Barón de la Laguna con otra de remisión del 15 del próximo pasado; ha conferido en sesiones de 8 y 10 sobre los particulares que contiene con la detención que de sí demanda, y en su virtud ha acordado y decreta los artículos siguientes. — Art. 1º Queda reconocido de que es subversivo de todo derecho el intento de destruir las constituciones y Gobierno que no emanen de la voluntad espontánea de aquellos que por privilegios se juzgan exclusivamente autorizados para hacer ó dejar de hacer justicia á los pueblos. — Art. 2º Queda

autorizado el Gobierno para negociar en sostén de este principio la alianza defensiva que indica el primer Ministro de Estado de S. M. F. en su comunicación confidencial de 3 de Noviembre del año próximo pasado, al Ministro de Hacienda.—Art. 3º El Gobierno, arregladas las preliminares (entre las que estará, precisamente, la desocupación de la Banda Oriental) dará cuenta á la representación, para obtener el lleno de autoridad que demande la celebración y ratificación del tratado definitivo.—Lo que de orden de la misma Junta se comunica á V. E., para su inteligencia.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Sala de Sesiones en Buenos Aires, 10 de Mayo de 1822.—*Juan José Paso*.—Presidente.—*José Severo Malabia*, Secretario.—*Exmo. Gobierno de la Provincia*.

(*Registro Oficial de la República Argentina*,—tomo 2º—(1822-1852)
pag. 40—*Publicación Oficial*—Imp. *La República*—1879.)

**Convención preliminar de paz entre los Gobiernos
de S. M. C. y de las Provincias Unidas**

CONVENCIÓN. — Habiendo el Gobierno de Buenos Aires reconocido y hecho reconocer, en virtud de credenciales presentadas y legalizadas en competente forma por comisionados del Gobierno de S. M. C., á los señores D. Antonio Luis Pereyra y D. Luis de la Robla: y habiéndose propuesto á dichos señores, por el Ministerio de Relaciones Exteriores de dicho Estado de Buenos Aires, el arreglo de una convención preliminar al tratado definitivo de paz y amistad que ha de celebrarse entre el Gobierno de S. M. C. y el de las Provincias Unidas sobre las bases establecidas en la ley de 19 de Junio del presente año; conferenciado y espuestas recíprocamente cuanto consideraron deber conducir al mejor arreglo de las relaciones de los Estados espresados, usando de la representación que revisten y de los poderes que los autorizan, ha ajustado la dicha convención preliminar en los términos que expresan los artículos siguientes: —

Art. 1º A los sesenta días contados desde la ratificación de esta convención, por los Gobiernos á quienes incumbe, cesarán las hostilidades por mar y por tierra entre ellos y la Nación Española. — Art. 2º En consecuencia, el General de las fuerzas de S. M. C. existente en el Perú, guardará las posiciones que ocupe al tiempo que le sea notoria esta convención, salvo las estipulaciones particulares que por recíproca conveniencia quieran proponerle ó aceptar los Gobiernos limítrofes al objeto de mejorar la línea respectiva de ocupación durante la suspensión de hostilidades. — Art. 3º Las relaciones de comercio con la escepción única de artículos de contrabando de guerra, serán plenamente restablecidas por el tiempo de dicha suspensión entre las Provincias de la Monarquía Española, las que ocupen en el Perú las armas de S. M. C. y los Estados que ratifiquen esta convención. — Art. 4º En consecuencia, los pabellones de unos y otros Estados serán recíprocamente respetados y admitidos en sus puertos. — Art. 5º Las relaciones del comercio marítimo con la Nación Española y los Estados que ratifiquen esta con-

vención serán reglados por convención especial en cuyo ajuste se entrará en seguida de la presente. — Art. 6° Ni las autoridades que administren las Provincias del Perú á nombre de S. M. C. ni los Estados limítrofes, impondrán al comercio de unos y otros más contribuciones que las axistentes al tiempo de la ratificación de esta convención. — Art. 7° La suspensión de las hostilidades subsistirá por el término de diez y ocho meses. — Art. 8° Dentro de este término el Gobierno del Estado de Buenos Aires, negociará por medio de un plenipotenciario de las Provincias Unidas del Río de la Plata y conforme á la ley de 19 de Junio, la celebración del tratado definitivo de paz y amistad entre S. M. C. y los Estados del Continente Americano, á que la dicha ley se refiere. — Art. 9° En el caso de renovarse las hostilidades, éstas no tendrán lugar, ni cesarán las relaciones de comercio, sino cuatro meses después de la intimación. — Art. 10. La ley vigente en la monarquía española, así como en el Estado de Buenos Aires, acerca de la inviolabilidad de las propiedades, aunque sean de enemigos, tendrá pleno efecto, en el caso del artículo anterior, en los territorios de los Gobiernos que ratifiquen esta convención y reciprocamente. — Art. 11. Luego que el Gobierno de Buenos Aires sea autorizado por la Sala de Representantes de su Estado para ratificar esta convención, negociará con los Gobiernos de Chile, del Perú y demás de las Provincias Unidas del Río de la Plata la accesión á ella, y los comisionados de S. M. C. tomarán al mismo tiempo todas las disposiciones conducentes á que por parte de las autoridades de S. M. C. obtenga el más pronto y cumplido efecto. — Art. 12. Para el debido efecto y validación de esta convención se firman los ejemplares necesarios, sellados por partes de los comisionados de S. M. C. con su sello y por el Gobierno de Buenos Aires con el de Relaciones Exteriores. — Buenos Aires, 4 de Julio de 1823. — *Bernardino Rivadavia*. Sello de Relaciones Exteriores. — *Antonio Luis Pereyra*. — *Luis de la Robla*.

LEY AUTORIZANDO LA RATIFICACIÓN. — La Honorable Junta de Representantes de la Provincia, usando de la soberanía ordinaria y estraordinaria que reviste, en sesión del 17 del corriente ha sancionado y decreta con valor y fuerza de ley el siguiente: — *Artículo único*. — Queda autorizado el Gobierno para ratificar la convención preliminar de 4 del presente mes celebrada entre el Gobierno de Buenos Aires y

los comisionados de S. M. C. cerca de él, también para negociar la adhesión á ella de los Estados y Gobiernos que se mencionan en el artículo undécimo de la citada convención. — Lo que se transcribe á V. E. para su inteligencia y efectos consiguientes. — Dios guarde á V. E. muchos años. — Sala de Sesiones, Buenos Aires, Julio 21 de 1823. — MANUEL DE ARROYO Y PINEDO, Presidente. — *José Severo Malavia*, Secretario. — *Exmo. Gobierno de la Provincia*.

Buenos Aires, Julio 23 de 1823. — Acúsese recibo, insértese en el Registro Oficial y ratificándose procédase según lo acordado. — *Rivadavia*.

—

RATIFICACIÓN. — *Departamento de Relaciones Exteriores*. — Buenos Aires, Julio 23 de 1823. — En virtud de la ley de 17 del corriente que autoriza al Gobierno, queda ratificada la presente convención. — *Bernardino Rivadavia*.

(*Registro Oficial de la República Argentina, tomo 2º, pág. 41, Publicación Oficial. - Imp. La República. - 1897.*)

82

Facultando al Gobierno para invitar á los pueblos de la Unión á proceder á la elección de los representantes al Congreso Nacional, y disposiciones relativas á dicha elección.

La Honorable Junta de Representantes de la Provincia, usando de la soberanía ordinaria y extraordinaria que reviste, ha acordado y decreta con todo valor y fuerza de ley lo siguiente:—Art. 1º Queda el Gobierno plenamente facultado para invitar á los pueblos de la Unión, á fin de reunir lo más pronto posible la Representación Nacional, y para tomar todas las medidas que conduzcan á la realización de tan importante acto.—Art. 2º La base de la Representación será la establecida por el Congreso Nacional en el reglamento provisorio de 3 de Diciembre de 1817.—Art. 3º La elección será directa.—Art. 4º Las elecciones se harán con arreglo á la ley de 14 de Agosto de 1821, y tanto en las secciones de campaña como en las de la ciudad, se votará simultáneamente por todo el número de Representantes.—Art. 5º Ningún extranjero que no tenga carta de ciudadano podrá votar en las elecciones.—Art. 6º Los escrutadores de todas las mesas centrales de campaña, concurrirán con los de la mesa de la capital al escrutinio y acta que debe celebrarse con arreglo á los artículos 19, 20 y 21 de la ley citada.—Art. 7º El lugar de la Representación Nacional será el que designe la mayoría de los pueblos, expresada por sus respectivos Gobiernos, con el lleno de autoridad correspondiente.—Art. 8º Queda autorizado el Gobierno para designarlo por esta Provincia.—Y se transcribe á V. E. para su inteligencia y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Sala de Sesiones, Buenos Aires, Febrero 27 de 1824.—MANUEL DE ARROYO Y PINEDO, Presidente.—*Matias Oliden*, Secretario.—*Exmo Gobierno de la Provincia*.

Buenos Aires, Marzo 5 de 1824.—Acúsese recibo, insértese en el Registro Oficial, y en lo demás procédase según lo acordado.—*Bernardino Rivadavia*.

(Registro Oficial de la República Argentina, tomo 2º pág. 51.)

83

**Voto de cada una de las Provincias Unidas para la designación
del punto de reunión del Congreso Nacional**

Buenos Aires Octubre 21 de 1824.—Para llenar todos los objetos que motivaron la circular de 7 de Febrero del presente año, dirigida á los Gobiernos independientes del territorio de las Provincias Unidas, el Gobierno ha acordado y decreta: — Art. 1° Por el Ministerio de Relaciones Exteriores se formará una razón que comprenda el voto dado por cada Gobierno y la data en que se ha comunicado, sobre el lugar donde debe instalarse el Cuerpo Nacional.— Art. 2° Esta razón se insertará en el Registro Oficial en seguida del presente decreto, circulándose una y otro á dichos Gobiernos.—HERAS.—*Manuel José García*

VOTACION Á QUE SE REFIERE EL DECRETO ANTERIOR

<i>Gobiernos</i>	<i>Fecha de su comunicación</i>	<i>Votos</i>
Paraná	26 de Febrero de 1824	Buenos Aires
San Juan	28 " " " "	" "
Mendoza	29 " " " "	" "
Salta	2 Marzo " "	" "
San Luis	4 " " " "	Tucumán
Rioja	31 " " " "	Buenos Aires
Buenos Aires	26 " Abril " "	" "
Misiones	27 " " " "	" "
Corrientes	7 " Mayo " "	" "
Tucumán	17 " " " "	" "
Santiago del Estero	20 " " " "	" "
Catamarca	21 " Junio " "	" "
Córdoba	20 " Septiembre " "	" "
Santa Fe	—	—

Manuel José García.

(Registro Oficial de la República Argentina, tomo II, página 67.)

84

Condición política de la Provincia de Buenos Aires, hasta tanto que no se promulgue la Constitución Nacional, y derecho de la misma para aceptar ó rechazar esta última.

La Honorable Junta de Representantes de la Provincia, usando de la soberanía ordinaria y estraordinaria que reviste, ha sancionado con valor y fuerza de ley fundamental lo siguiente: — Art. 1º La Provincia de Buenos Aires se regirá del mismo modo y bajo las mismas formas que actualmente se rige, hasta la promulgación de la Constitución que dé el Congreso Nacional. — Art. 2º La Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho de aceptar ó desechar por su parte la Constitución, que presente el Congreso Nacional. — Art. 3º La aceptación se hará por la Junta de Representantes de la Provincia, renovada íntegramente, siendo elegidos sus Representantes con este objeto especial, fuera de los de sus atribuciones ordinarias. — Lo que de orden de la misma Honorable Corporación se comunica á V. E. á los efectos consiguientes. — Dios guarde á V. E. muchos años. — Sala de sesiones, Buenos Aires, Noviembre 13 de 1824. — MANUEL PINTO, Presidente. — *José Severo Malavia*, Secretario. — *Exmo. Sr. Gobernador y Capitán General de la Provincia.*

Buenos Aires, Noviembre 15 de 1824. — Acúsese recibo, insértese en el Registro Oficial y procédase según lo acordado. — HERAS. — *Manuel José García.*

(*Registro Oficial de la República Argentina, tomo II, pág. 69.*)

85

Ratificación por el Congreso del pacto con que se ligaron las Provincias Unidas, al sacudir el yugo de la dominación española. — Medidas preliminares de reorganización nacional.

Departamento de Gobierno.—Buenos Aires, Enero 24 de 1825.—El Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, tiene el honor de comunicar al Excelentísimo Gobierno de Buenos Aires, que reunidas ellas en Congreso, han reproducido con fecha de ayer, por medio de sus Diputados y del modo más solemne, el pacto con que se ligaron desde el momento en que, sacudiendo el yugo de la antigua dominación española, se constituyeron en Nación independiente. Las bases de este pacto son las que se contienen en la ley adjunta. El Presidente, al comunicarla, según en ella misma se dispone, al Exmo. Gobierno de Buenos Aires, tiene la satisfacción de repetir á S. E. las consideraciones de respecto que le merece.—MANUEL ANTONIO DE CASTRO, Presidente. — *Alejo Villegas*, Secretario. — *Exmo. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.*

LEY

Buenos Aires, Enero 23 de 1825.—El Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ha acordado y decreta lo siguiente:—Artículo 1º Las Provincias del Río de la Plata reunidas en Congreso, reproducen por medio de sus Diputados y del modo más solemne el pacto con que se ligaron desde el momento en que, sacudiendo el yugo de la antigua dominación Española, se constituyeron en Nación independiente y protestan de nuevo emplear todas sus fuerzas y todos sus recursos para afianzar su independencia Nacional y cuanto pueda contribuir á la felicidad general.—Artículo 2º El Congreso General de las Provincias Unidas del Río de la Plata, es y se declara *Constituyente*. Artículo 3º Por ahora, y hasta la promulgación de la Constitución que ha de reorganizar el Estado, las Provincias se regirán interiormente por sus propias institu-

ciones.—Artículo 4° Cuanto concierne á los objetos de la independencia, integridad, seguridad, defensa y prosperidad nacional, es del resorte privativo del Congreso General.—Artículo 5° El Congreso espedirá progresivamente las disposiciones que se hicieren indispensables sobre los objetos mencionados en el artículo anterior.—Artículo 6° La Constitución que sancionare el Congreso será ofrecida á la consideración de las Provincias y no será promulgada, ni establecida en ellas, hasta que haya sido aceptada. —Artículo 7° Por ahora y hasta la elección del Poder Ejecutivo Nacional, queda éste provisoriamente encomendado al Gobierno de Buenos Aires, con las facultades siguientes:—*Primera.*—Desempeñar todo lo concerniente á Negocios Extranjeros; nombramiento y recepción de Ministros y autorización de los nombrados.—*Segunda.*—Celebrar tratados, los que no podrá ratificar sin obtener previamente autorización del Congreso.—*Tercera.*—Ejecutar y comunicar á los demás Gobiernos todas las resoluciones que el Congreso expida en orden á los objetos mencionados en el artículo cuarto.—*Cuarta.*—Elevar á la consideración del Congreso las medidas que conceptúe conveniente para la mejor expedición de los negocios del Estado.—Artículo 8° Esta ley se comunicará á los Gobiernos de las Provincias Unidas por el Presidente del Congreso.—MANUEL ANTONIO DE CASTRO, Presidente.—*Alejo Villegas*, Secretario.

(Registro Oficial de la República Argentina — tomo II — página 71.
— Publicación Oficial — Imprenta : La República , 1879.)

NOTA

Los demás documentos que se citan en la obra, no se incluyen en este volumen por su larga extensión, y ser de fecha posterior á los aquí reunidos; y, por tanto, fácilmente pueden encontrarse y consultarse por las referencias que de ellos hacemos en las notas respectivas.

